

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD**



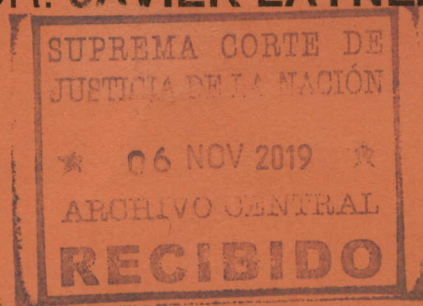
**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
56/2019**

PROMOVENTE: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

AUTORIDADES EMISORA Y PROMULGADORA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS: PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE BAJA CALIFORNIA

NORMAS IMPUGNADAS: "(...) en contra del CONGRESO DEL ESTADO, por emitir; y del EJECUTIVO DEL ESTADO, por promulgar, ambos de BAJA CALIFORNIA, el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL EJERCICIO DE LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS."

MINISTRO INSTRUCTOR: JAVIER LAYNEZ POTISEK



REGISTRO: 022045
STCCyAI Ext. 2309
Edith Hernández Cano
EAM/EDBG



SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Folio: 00103070

Expediente:

A.I. 56/2019

Firma:

[Handwritten signature]

ORIGINAL

1

ASUNTO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

**MÁS DEL 33% DE LOS INTEGRANTES DE LA
DIPUTADOS DE LA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

VS

**CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

**NORMA IMPUGNADA: ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO
112, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE
EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL
EJERCICIO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS.**

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

PRESENTE:

**DIPUTADOS HÉCTOR IRENEO MARES COSSÍO (SUPLENTE), VICTORIA
BENTLEY DUARTE, BERNARDO PADILLA MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO CASAS
DEL REAL (SUPLENTE), JOB MONTOYA GAXIOLA, CATALINO ZAVALA
MÁRQUEZ, ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE, CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ,
ALEJANDRO ARREGUI IBARRA, MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS
CACHO, BLANCA PATRICIA RÍOS LÓPEZ, por nuestro propio derecho y en
nuestra calidad de Diputados del Congreso del Estado de Baja California, de un total
de veinticinco que lo integran, por lo que representamos más del 33% del mismo;
personalidad que acreditamos con la copia certificada del documento en el que
oficialmente se nos reconoce tal carácter; señalando como domicilio para oír y
recibir toda clase de notificaciones y documentos el despacho ubicado en calle
Atenor Sala, número 77, interior 4, colonia Atenor Sala, Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P. 03010; autorizando para tales efectos a los Licenciados en
Derecho Enrique Ramírez Bravo, Lydia Guadalupe Esquivel Solís, así como a los
pasantes en Derecho Araceli Ventura González y Zalma Yareth Reyna Galicia; ante
ustedes con el debido respeto comparezco para exponer:**

**Que con fundamento en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; venimos a promover
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, en contra del CONGRESO DEL
ESTADO, por emitir; y del EJECUTIVO DEL ESTADO, por promulgar, ambos de
BAJA CALIFORNIA, el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 112,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIECISIETE DE
OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE
EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL EJERCICIO DE LA
GUBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS.**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GE
REGIÓN DE TRÁMIT
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU

OPORTUNIDAD DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si bien es cierto el artículo 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: *"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma"*; también lo es, que en el caso que nos ocupa, nos encontramos en un caso de excepción, toda vez que los que suscribimos la presente, ignorábamos que tres de los cinco Ayuntamientos del Estado de Baja California, concretamente **Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada**, no fueron legalmente notificados del Proyecto de Reformas a la Constitución Local, para que estuvieran en aptitud de discutirlo en sesión de Cabildo y dentro de los treinta días siguientes a la legal notificación de dicho Proyecto, hicieran llegar al Congreso del Estado, su opinión sobre la aprobación o rechazo de las reformas o adiciones a dicha Constitución; y no obstante ello, el Congreso, de manera ilegal presumió que estaban de acuerdo y tuvo por aprobadas tales reformas, las cuales fueron oficialmente publicadas en el Decreto 112, el día **diecisiete de octubre de dos mil catorce**, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.



En efecto, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, manifestamos que fue hasta el día **siete de mayo de dos mil diecinueve**, cuando nos enteramos de los referidos vicios que contenía el Decreto de reformas en comento, lo cual inclusive no pudimos corroborar hasta el día **ocho del mismo mes y año**, en que tuvimos acceso a las copias certificadas de los Juicios de Amparo que promovieron los **Ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada**, y de la lectura de la demanda de amparo y sus anexos, advertimos que ninguno de ellos fue legalmente notificado a través del funcionario que la Ley faculta expresamente para ello, llegando al grado que el primero de esos Ayuntamientos fue notificada a través de la intendente; es decir, la persona que hace el aseo; y por lo mismo, nunca fue discutido el Proyecto de Reformas a la Constitución Local, por parte de los Cabildos dichos Ayuntamientos; por no pudieron notificarle al Congreso del Estado su oposición o rechazo a tales reformas. Por lo cual, para todos los efectos legales a que haya lugar, deberá de tenérsenos por plena y completamente enterados de los vicios del proceso legislativo del referido Decreto que aquí se impugna, el OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Así es, el día **siete de mayo de dos mil diecinueve**, a través de la transmisión en vivo que hace de sus sesiones el **TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, en las redes sociales, por internet, fue que escuchamos la exposición que hizo el Magistrado Ponente de su

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONAL
INCOSTIT

proyecto de resolución del **Recurso de Inconformidad RI-63/2019**, interpuesto por el candidato a la Gubernatura del Estado, Jaime Bonilla Valdez, en el cual destacó que el procedimiento de reformas a la Constitución Local, entre las que se incluía el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, que limitaba el ejercicio de la gubernatura en las elecciones de 2019, a solo dos años, **se encontraba viciado**, por los motivos expuestos en el párrafo que antecede; y en dicha sesión se aprobó por mayoría dicho Proyecto de Resolución, determinando inaplicar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución local en materia político-electoral, modificó el acuerdo impugnado emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California y ordenó una adenda a la convocatoria de la gubernatura en la que se estableciera que su periodo de gestión se incrementaría a seis años.

Por tal motivo, al día siguiente **OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE**, nos dimos a la tarea de obtener copias de las demandas de amparo y sus anexos, promovidas por los **Ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada**, así como de la sentencia dictada el día anterior, en el **Recurso de Inconformidad RI-63/2019**, advirtiendo de su lectura que efectivamente tales Ayuntamientos no fueron legalmente notificados del Proyecto de Reformas a la Constitución Local; y debido a ello, nunca lo sesionaron en sus respectivos Cabildos, ni manifestaron su rechazo u oposición al Congreso del Estado, lo que motivó que éste fictamente los tuviera por conformes con las mismas, en términos del artículo 112 de la Constitución del Estado de Baja California, que establece lo siguiente:

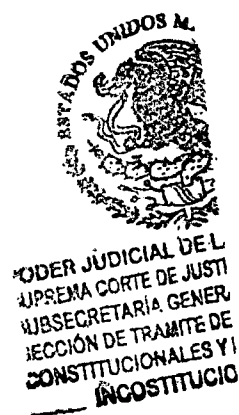
“ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por

SIN TEXTO



el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite."

Consecuentemente, si los que suscribimos la presente, en la fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto que reformó la Constitución Local de Baja California (**diecisiete de octubre de dos mil catorce**), no teníamos conocimiento de los vicios que contenía dicho Decreto, en cuanto a la falta de notificación del Proyecto de Reformas que dio lugar al mismo, a tres de los cinco Ayuntamientos del Estado, obviamente que no estábamos en aptitud de ejercer la Acción de Inconstitucionalidad dentro de los treinta días naturales a partir de su publicación, como lo establece el segundo párrafo, de la fracción II, del numeral 105 de la Constitución Federal; pues nadie está obligado a lo imposible.

Por lo tanto, si como se dijo **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, de tales vicios nos enteramos "**total y completamente**" de los vicios del Decreto que aquí se impugna, hasta el **ocho de mayo de dos mil diecinueve**; entonces, los treinta días a que se refiere el citado precepto constitucional, deben computarse a partir del **nueve del mismo mes y año, feneciendo el ocho de junio del año en curso**. Por lo cual, nos encontramos en tiempo para ejercer la **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD** que aquí se hace valer.

A FEDER
CUA DE LA
AL DE A
CONTR
DE ACCIO
NALIDAD

Establecido lo anterior, se procede a formular los hechos en que se funda la Acción de Inconstitucionalidad que se hace valer.

HECHOS

1.- Reforma a la Constitución de Baja California. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución de Baja California, dentro de las cuales, en el transitorio octavo se estableció que el Gobernador electo en el proceso electoral 2018-2019, iniciaría funciones el primero de noviembre de dos mil diecinueve y concluiría el treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno; es decir, solo dos años.

2.- Cabe aclarar que en la fecha de tal publicación los que suscribimos la presente ignorábamos los vicios del procedimiento de reformas que dió lugar a dicho Decreto, mismos que ya se precisaron con anterioridad.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL DI
JE REHA CORTE DE JU
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
— INCOSTITUC

3.- Bajo Protesta de Decir Verdad, manifestamos que fue hasta el siete de mayo de dos mil diecinueve, cuando nos enteramos en la forma precisada con anterioridad, de que tres de los cinco Ayuntamientos del Estado de Baja California, no fueron legalmente notificados del Proyecto de Reformas para que tuvieran oportunidad de discutirlo a través de sus Cabildos y notificaran oportunamente al Congreso del Estado su conformidad o su oposición o rechazo a las mismas; por lo que los treinta días a que se refiere el artículo 105, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Federal, para ejercer la Acción de Inconstitucionalidad, debe computarse a partir de que nos enteramos de tales vicios; por lo que nos encontramos en tiempo para hacerlo. Lo que se verifica a través de los siguientes:

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

PRIMERO.- El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 112, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución de Baja California, dentro de las cuales, en el transitorio octavo se estableció que el Gobernador electo en el proceso electoral 2018-2019, iniciaría funciones el primero de noviembre de dos mil diecinueve y concluiría el treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno; es decir, solo dos años.

EL LA FERIA...
STICIA DE...
ERAL DE...
DE CONT...
Y LE...
IO...

Se sostiene que dicho precepto es inconstitucional porque deriva de un procedimiento legislativo viciado.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 112 de la Constitución Política para el Estado de Baja California, es del tenor literal siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitiesen al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL C
PREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEI
SECCIÓN DE TRÁMIT
CONSTITUCIONALE
— INCOSTITU

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite."

Como se observa, del texto que se acaba de transcribir, la Constitución Política para el Estado de Baja California, solo puede adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos:

1.- Que la iniciativa de Adición o Reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados;

2.- Que el Dictamen o Proyecto de Adición o Reforma con copia de las Actas de los Debates que hubiere provocado, se envíe por el Congreso del Estado de Baja California a **TODOS** los Ayuntamientos que lo conforman, concretamente a los de Tijuana, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, mediante notificación personal al funcionario que la Ley expresamente faculta para ello, quien desde luego, deberá firmar de recibido como constancia; y,

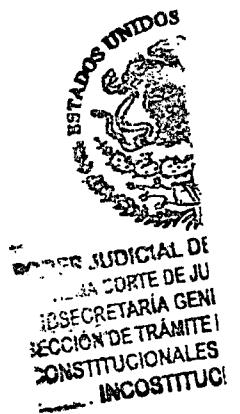
EL LA FEDERACION
JUSTICIA DE LA
FEDERAL DE AL
DE OCUPACION
BY DE ACCIONES DE
CIONALES

3.- Si transcurriere un mes después de que se compruebe que los Ayuntamientos han recibido el proyecto de que se trata, sin que remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

4.- Si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de la Constitución.

En el caso que nos ocupa, no se cumplió con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3; es decir, el Dictamen o Proyecto de Adición o Reformas a la Constitución Local con copia de las Actas de los Debates que hubiere provocado, no fue correctamente enviado y notificado conforme a derecho por el Congreso del Estado de Baja California a **TODOS** los Ayuntamientos que lo conforman, concretamente a los de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada; toda vez que respecto de estos tres Ayuntamientos, no se practicó con las formalidades

SIN TEXTO



exigidas por la Ley, la notificación personal al funcionario que expresamente faculta para ello, quien desde luego, deberá firmar de recibido como constancia.

En efecto, ninguno de esos tres Ayuntamientos fue notificado de tal Dictamen o Proyecto de Adición o Reformas a la Constitución Local, tal como se desprende del contenido de las demandas de amparo que cada uno de sus Ayuntamientos presentó ante los Juzgados de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana y Ensenada, en las cuales se precisan detalladamente los vicios contenidos en las notificaciones respectivas, lo cual les impidió a los Cabildos respectivos manifestar dentro del término de un mes su conformidad u oposición o rechazo a tales Reformas y Adiciones.

A efecto, de dejar perfectamente claro en que consistieron tales vicios, se transcriben textualmente la autoridad responsable, los actos reclamados en dichas demandas de amparo, así como las partes conducentes de los conceptos de violación que se expresaron en cada una de ellas, las cuales además se corroboraron con los documentos que se acompañaron a las mismas.

DEMANDA DE AMPARO DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE

“ III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso del Estado de Baja California, con domicilio conocido en la ciudad de Mexicali.”

LA FEDERACIÓN
ESTADAL
DE COMERCIO
Y DE ASESORES DE
JURISCONSULTA

IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la referida autoridad responsable, se reclaman los siguientes:

- 1) La ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE** Baja California, respecto del oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones. Por lo que deberá concederse el amparo para que se deje insubsistente dicha notificación y todo lo actuado con posterioridad.
- 2) El Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; por derivar de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Presidentes Municipales de **TECATE**, Playas de Rosarito y Tecate, el

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS M.

PODER JUDICIAL DE L
REMA CÔRTE DE JUST
SECRETARIA GENER
CIÓN DE TRÁMITE DE
INSTITUCIONALES Y
- INCOSTTUCIO

Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que deberá concederse el Amparo solicitado para el efecto de que se dejen insubsistentes las reformas y adiciones hechas a la Constitución en comento, derivadas del Decreto aludido.

Este Decreto deriva de un proceso legislativo que no cumplió con las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que está precedido de actuaciones viciadas, **al no haberse notificado legalmente a los Ayuntamientos correspondientes a los municipios de TECATE, Playas de Rosarito y Ensenada, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado**, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que solicitamos se conceda al Ayuntamiento quejoso el Amparo solicitado, para el efecto de que se dejen insubsistentes las Reformas y Adiciones hechas a la Constitución en comento derivadas del Decreto aludido, incluyendo los artículos transitorios."

"VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

PRIMERO. – El acto reclamado consistente en la ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, entonces Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE** Baja, California, respecto del oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; resulta violatorio en mi perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 1º, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen:

"Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado

SIN TEXTO



deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

{...}

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...”

En estos tres preceptos constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, **propiedades o posesiones**, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En efecto, la serie de etapas que se siguen a fin de elaborar o modificar algún precepto de la Constitución de Baja California, conocido como Proceso Legislativo debe desarrollarse conforme a las etapas contenidas en ese mismo ordenamiento.

Ese Proceso Legislativo para modificar la Constitución Local, se constituye por una serie de actos con unidad indisoluble con la norma general emanada del mismo, desde las etapas que deben seguirse dentro del mismo órgano legislativo hasta en los Ayuntamientos que integran la división territorial de Baja California.

En la especie, el Proceso Legislativo llevado a cabo para modificar los preceptos de la Constitución de Baja California, así como las normas instrumentales de ésta, a través del Decreto 112 a que se ha hecho referencia, infringe las garantías del debido proceso, audiencia y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a grado tal que justifica la procedencia del presente Juicio de Amparo para que se dejen sin efectos tales reformas y adiciones.

La razón es que la ilegalidad del proceso legislativo en comento está centrada en que no fue sometida de forma debida para su discusión y aprobación por parte



PODER JUDICIAL DE
PRIMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
— INCOSTITUCI

del Cabildo de Tecate -como se expondrá más adelante, incluyen también de los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada-, lo que impacta en un desequilibrio entre la función legislativa con la interpretación y aplicación de las normas, tanto de las constitucionales como de las transitorias, que resultan en una clara irregularidad procedimental que impacta directamente en la validez, constitucionalidad y legalidad de esas normas.

En el caso que nos ocupa, se han violado los anteriores preceptos constitucionales, toda vez que la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio de la parte quejosa, las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en tales preceptos constitucionales, toda vez que se abstuvo de notificar "**legalmente**" al Presidente Municipal de **TECATE**, Baja California, a través del **Secretario Fedatario** en funciones, en el mes de agosto de 2014, el oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

En efecto, del análisis que se realiza a la copia del oficio en comento, se advierte que éste contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL**" y escrito a mano el nombre de la persona que recibió "**CUQUITA**"; es decir, se presume fue presentado ante la Secretaria Particular del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal. Sin embargo, estos carecen de facultades para recibir documentos de esa naturaleza e importancia, sobre todo porque se cuenta con el término de un mes para informar al Congreso del Estado sobre el resultado de la votación que debe llevarse a cabo por el Cabildo del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, en relación con el Dictamen de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California; y por lo mismo, no puede ser entregado el oficio y documentación relacionada con ese Dictamen a cualquier persona que nos sea la expresamente facultada por la Ley para tal efecto.

Así es, en el artículo 31, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de **TECATE**, Baja California, se establecen con precisión las únicas facultades que tiene la Secretaria Particular, mismas que para mayor claridad se reproducen a continuación:

"ARTÍCULO 31.- A la Secretaria Particular corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Coadyuvar a la organización de actividades, eventos y giras del Presidente Municipal;

II.- Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Presidente Municipal y conservar un archivo de las sesiones y acuerdos;

III.- **Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno;**

IV.- **Recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía;**

V.- Coordinar las audiencias con los funcionarios para el despacho de los asuntos de su competencia;

VI.- Turnar a quien corresponda, las representaciones oficiales cuando así lo determine el Presidente;

VII.- Realizar acciones administrativas que le correspondan a la Presidencia Municipal; y

SIN TEXTO



TER JUDICIAL DE L
ERA CORTE DE JUSTI
ECRETARIA GENER/
IÓN DE TRÁMITE DE
TITUCIONALES Y I
INCOSTTUCIOI

VIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función."

Como se observa, en dichas facultades no se contiene la de **recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste**, a que se refiere el artículo 44 fracción X, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California; sino solo las de **recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno y recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía**; a que se refieren las fracciones III y IV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de **TECATE**, Baja California.

Efectivamente, nótese que solo se le faculta a la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal de **TECATE**, Baja California, el recibir y dar seguimiento a peticiones o solicitudes de audiencia de la ciudadanía; jamás para recibir y dar seguimiento a peticiones formuladas por alguna autoridad u órgano de Gobierno, como lo es el Congreso del Estado, facultad esta última que se encuentra limitada en exclusiva al Secretario Fedatario al que se refiere el artículo 66 fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California.

Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados **FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ**, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones, no fue recibido por el **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, a pesar de ser el único legitimado para recibir tal documentación, revisarla y darle el seguimiento correspondiente, ello provocó que ni el Presidente Municipal ni el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de la misma; y por ende, jamás celebraron sesión de Cabildo alguna en la cual se discutiera y votara el Dictamen que supuestamente les fue remitido para su estudio por parte del Congreso del Estado; y por consiguiente, se vieron legalmente impedidos para comunicar su opinión a este dentro del término de un mes a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local de Baja California; lo que trae como consecuencia la inobservancia del principio constitucional de garantía de audiencia y finalmente, que el Decreto 112 mediante el cual se reformó y adicionó dicha Constitución, se encuentra viciado.

Así es, además de que del propio sello de recibido que aparece en el oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, se desprende que este no fue presentado ante el Lic. Fernando Iván Esparza Murúa, en su carácter de Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para que a su vez lo turnara al Presidente Municipal y este lo hiciera del conocimiento del Cabildo para que fuera estudiado, sesionado y votado; se cuenta con el testimonio de las personas que presenciaron que en esa fecha, fueron legalmente interpelados o requeridos el Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla y el Fernando Iván Esparza Murúa, en su carácter de Presidente y Secretario Fedatario, respectivamente, ambos del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio en comento así como de la documentación a que se hace referencia en el mismo, consistente en copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
PRIMA CORTE DE JU
SECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRÁMITE
STITUCIONALES
INCOSTITUC

de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; ambos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca recibieron tal oficio y documentación, desconociendo su existencia, no obstante que se les puso a la vista las copias simples de las mismas que fueron obtenidas directamente del Congreso del Estado; refiriendo ambos que nunca llevaron a cabo una Sesión de Cabildo en la que se discutieran y votaran las reformas y adiciones propuestas en el Dictamen en comento, debido a que jamás se enteraron de su existencia; y que por los mismos motivos jamás le informaron al Congreso del Estado el resultado de la votación que debió haberse llevado a cabo.

A causa de lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, el solo hecho de que no se reciba en el Congreso del Estado el resultado de la votación después de transcurrido un mes de haberse hecho llegar a los Municipios o Ayuntamientos, el Dictamen con las reformas y adiciones a la Constitución Local, así como el Acta de los Debates de la sesión de fecha 10 de julio de 2014, se presumirá que están conformes con las mismas.

Si bien es cierto, que el procedimiento señalado en el artículo 112 de la Constitución Local indica que dicho Pacto solo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias (sic) partes del número total de diputados, para posteriormente, el Congreso, debía ceñirse total y absolutamente al procedimiento legislativo y así evitar deficiencias que obstaculizaran de forma relevante la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, así como el debido desarrollo y proteger el patrimonio de los Ayuntamientos que pudieran resultar afectados con las reformas y adiciones aprobadas.

Por lo tanto, al no existir una debida notificación, impidió al Ayuntamiento (y consecuentemente al Cabildo), estar en condiciones de ser oídos y vencidos en un procedimiento que cuenta con sus propias formalidades.

Es decir, el proceso constitucionalmente establecido debe ser idóneo para el ejercicio de las facultades de las personas públicas morales inmersas en éste; sin existir, un error procesal o de otra naturaleza de tal gravedad como la falta de garantía de audiencia por una indebida notificación; y que de ninguna manera puede entenderse subsanada, ni mucho menos tenerse como válida la afirmativa ficta a que alude el artículo 112 de la Constitución Local, toda vez que ésta solamente opera cuando el acto previo de notificación es válido, situación o condición que en el caso no acontece.

En efecto, en el caso que nos ocupa esa presunción no puede operar, toda vez que no se notificó legalmente al **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, el referido Dictamen y Acta de debates; y por lo mismo, no se enteró que contaba con un mes para remitir el resultado de la votación al respecto; motivo por el cual es procedente que se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se declare insubsistente dicha notación y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California.

Por lo tanto, el Proceso Legislativo para modificar las normas constitucionales y la implementación de las normas transitorias de esas reformas contiene un vicio insuperable que justifica la implementación de una medida precautoria y su posterior revocación o dejarse insubsistente con motivo de la concesión del Amparo y Protección de la Justicia Federal que se solicita, por vulnerar los principios de debido proceso, audiencia y de legalidad, al impedir y coartar el derecho de los Ayuntamientos para expresar y defender su opinión en el contexto de deliberación de dichas reformas, pero sobre todo, de sus reglas de implementación en las que

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

indebidamente son acortados los periodos de gestión de los funcionarios que ocuparan los cargos de Gobernador, Legisladores Locales y Presidentes Municipales y sus Ayuntamientos, lo que vulnera y pone en riesgo el patrimonio de estos últimos, así como de los recursos con que éstos contarán.

SEGUNDO.- De igual manera, se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que al analizar las notificaciones que se supuestamente se hicieron a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, también se puede advertir que las mismas resultan ilegales, por no haberse practicado a través de los funcionarios expresamente facultados para ello.

Así es, por lo que respecta al **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, se advierte que el oficio 002222, Dirigido al Lic. Silvano Abarca Macklis, de fecha 7 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 08 AGO 2014 PRESIDENCIA**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 67 fracción XIII Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

LA FEDERACIÓN
MICA
RAL DE A
ECONOMÍA
DE A
NAL

"ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

...

XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

Además, resulta importante subrayar que el referido reglamento excluye la posibilidad de que esa atribución de recibir y revisar la correspondencia que se dirija a los Ayuntamientos, pueda ser delegada aunado a que tampoco puede ejercerse en sustitución por algún otro funcionario, y menos por un intendente, por constituir una función del estudio y trámite de los asuntos contenidos en la documentación recibida de gran trascendencia para el patrimonio del Ayuntamiento.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA GE
CCIÓN DE TRÁMIT
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI

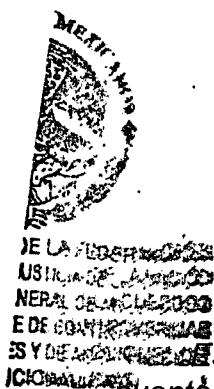
Lo mismo aconteció con el **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, pues al revisar el oficio 002223, dirigido al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tecate, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1, de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; se advierte que contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda: **"SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL AUG 08 2014 RECIBIDO"**.

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 44, fracción X, Reglamento Interior para el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

...

X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."



Esto es, la omisión de realizar la notificación con el funcionario que legalmente cuenta con la atribución para recibir la documentación por parte de los Ayuntamientos, trasciende de manera fundamental en las normas constitucionales modificadas, sus artículos transitorios y sobre todo en las normas de implementación, impidiendo con ello que éstos a través de sus respectivos Cabildos discutan y voten los dictámenes en los que se propongan reformas o adiciones a la Constitución Local.

Por lo tanto, el Procedimiento Legislativo en comento al contener un vicio de tal magnitud, como lo es una indebida notificación al Ayuntamiento de Tecate, Baja California, trasgrede el Principio Rector del Proceso Legislativo para reformar la Constitución del Estado de Baja California, con franca violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo que amerita la concesión del amparo solicitado.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Por lo tanto, al ser ilegal tales notificaciones supuestamente realizadas a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, Baja California, ello

2/A TEXTO

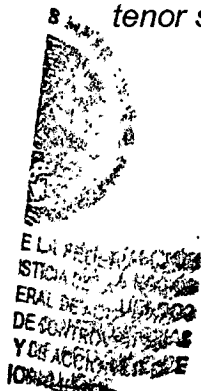


PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE JI
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
— INCOSTITUC

trascendió al Decreto 112 en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local, por lo que deberá concederse el Amparo, para que también se declare insubsistente el mismo.

TERCERO.- También se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con la expedición y publicación del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California; toda vez que deriva de un acto viciado como lo es la ilegal notificación a los Presidentes Municipales y Ayuntamientos de los Municipios de **TECATE**, Playas de Rosarito y Tecate, del Dictamen a que se ha hecho referencia en el concepto de violación identificado como "PRIMERO"; toda vez que al no haberseles notificado legalmente se vieron impedidos para estudiarlo, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo, así como para dar a conocer el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del término de treinta días siguientes al en que supuestamente recibieron tal notificación; toda vez que si esta se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento tuteladas por el artículo 14 Constitucional, como lo es el que fueran hechas por conducto del funcionario expresamente facultado para ello y no por conducto de diversa persona; obviamente no podrían transcurrir los referidos treinta días; y sin embargo fueron ilegalmente computados y presumiéndose que no había oposición por parte de dichos Municipios o Ayuntamientos a tales reformas y adiciones, sin darles la oportunidad de conocerlas previamente, discutir las, votarlas y notificarles el resultado de dicha votación. Por lo que es procedente se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto en comento.

CUARTO.- El Artículo 112 de la Constitución Local para Baja California, es del tenor siguiente:



"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, **demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

Conforme a dicho precepto de la Constitución Local, se requiere para ser reformada o adicionada, entre otros, que se demuestre que hubo mayoría en favor de la adición o reforma; por lo que si en el caso que nos ocupa ni siquiera se tomó la opinión de **tres de los cinco Municipios del Estado de Baja California,**

SIN TEXTO



concretamente de **TECATE**, Playas de Rosarito y Ensenada, dado que no se les notificó legalmente el Dictamen en el que se contenía el proyecto de los artículos que se pretendían reformar y adicionar, así como las actas de debates; impidiéndoles analizarlas, discutir las y votarlas en sesión de Cabildo; por lo que no pudieron notificar su opinión al respecto ante el Congreso del Estado; ello pone en evidencia que no se contó con la mayoría en favor de tales adiciones o reformas; lo que constituye un motivo adicional para que se conceda el Amparo a la parte quejosa para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que reformó y adicionó la Constitución Local de Baja California."

DEMANDA DE AMPARO DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

"III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso del Estado de Baja California, con domicilio conocido en la ciudad de Mexicali."

"IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la referida autoridad responsable, se reclaman los siguientes:

- 3) La ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Lic. Silvano Abarca Macklis, Presidente Municipal del H. VI Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO** Baja, California, respecto del oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones. Por lo que deberá concederse el amparo para que se deje insubsistente dicha notificación y todo lo actuado con posterioridad.
- 4) El Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; por derivar de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que deberá concederse el Amparo solicitado para el efecto de que se dejen insubsistentes las reformas y adiciones hechas a la Constitución en comento, derivadas del Decreto aludido.

Este Decreto deriva de un proceso legislativo que no cumplió con las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que está precedido de actuaciones viciadas, **al no haberse notificado**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G.
SECCION DE TRÁMI
CONSTITUCIONAL
— INCOSTITI

legalmente a los Ayuntamientos correspondientes a los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que solicitamos se conceda al Ayuntamiento quejoso el Amparo solicitado, para el efecto de que se dejen insubsistentes las Reformas y Adiciones hechas a la Constitución en comento derivadas del Decreto aludido, incluyendo los artículos transitorios."

"VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

PRIMERO. – El acto reclamado consistente en la ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Lic. Silvano Abarca Macklis, entonces Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO** Baja, California, respecto del oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; resulta violatorio en mi perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 1º, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen:

DE LA REPRESENTACIÓN
LISTA DE ASISTENTES
GENERAL DE LA JEFATURA
E DE LOS SECRETARIOS
ES Y DE ASISTENTES DE
VICERRECTORIA

"Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

{...}

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GENI
SECCIÓN DE TRÁMITE I
CONSTITUCIONALES
INCOSTTUCI

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...

En estos tres preceptos constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, **propiedades o posesiones**, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

LA FEDERACIÓN
TICIA
RAL DE ACU...
ECOM...
DE ACU...

En efecto, la serie de etapas que se siguen a fin de elaborar o modificar algún precepto de la Constitución de Baja California, conocido como Proceso Legislativo debe desarrollarse conforme a las etapas contenidas en ese mismo ordenamiento.

Ese Proceso Legislativo para modificar la Constitución Local, se constituye por una serie de actos con unidad indisoluble con la norma general emanada del mismo, desde las etapas que deben seguirse dentro del mismo órgano legislativo hasta en los Ayuntamientos que integran la división territorial de Baja California.

En la especie, el Proceso Legislativo llevado a cabo para modificar los preceptos de la Constitución de Baja California, así como las normas instrumentales de ésta, a través del Decreto 112 a que se ha hecho referencia, infringe las garantías del debido proceso, audiencia y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a grado tal que justifica la procedencia del presente Juicio de Amparo para que se dejen sin efectos tales reformas y adiciones.

La razón es que la ilegalidad del proceso legislativo en comento está centrada en que no fue sometida de forma debida para su discusión y aprobación por parte del Cabildo de Playas de Rosarito -como se expondrá más adelante, incluyen también de los municipios de Tecate y Ensenada-, lo que impacta en un desequilibrio entre la función legislativa con la interpretación y aplicación de las normas, tanto de las constitucionales como de las transitorias, que resultan en una clara irregularidad procedimental que impacta directamente en la validez, constitucionalidad y legalidad de esas normas.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI

En el caso que nos ocupa, se han violado los anteriores preceptos constitucionales, toda vez que la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio de la parte quejosa, las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en tales preceptos constitucionales, toda vez que se abstuvo de notificar "**legalmente**" al Presidente Municipal de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, a través del **Secretario Fedatario** en funciones, en el mes de agosto de 2014, el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

En efecto, del análisis que se realiza a la copia del oficio en comento, se advierte que éste contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PLAYAS DE ROSARITO B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL**"; es decir, se presume fue presentado ante la Secretaria Particular del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal. Sin embargo, estos carecen de facultades para recibir documentos de esa naturaleza e importancia, sobre todo porque se cuenta con el término de un mes para informar al Congreso del Estado sobre el resultado de la votación que debe llevarse a cabo por el Cabildo del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, en relación con el Dictamen de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California; y por lo mismo, no puede ser entregado el oficio y documentación relacionada con ese Dictamen a cualquier persona que nos sea la expresamente facultada por la Ley para tal efecto.

Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados **FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ**, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones, no fue recibido por el **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, a pesar de ser el único legitimado para recibir tal documentación, revisarla y darle el seguimiento correspondiente, ello provocó que ni el Presidente Municipal ni el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de la misma; y por ende, jamás celebraron sesión de Cabildo alguna en la cual se discutiera y votara el Dictamen que supuestamente les fue remitido para su estudio por parte del Congreso del Estado; y por consiguiente, se vieron legalmente impedidos para comunicar su opinión a este dentro del término de un mes a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local de Baja California; lo que trae como consecuencia la inobservancia del principio constitucional de garantía de audiencia y finalmente, que el Decreto 112 mediante el cual se reformó y adicionó dicha Constitución, se encuentra viciado.

Así es, además de que del propio sello de recibido que aparece en el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, se desprende que este no fue presentado ante Luis Fernando Serrano García, en su carácter de Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para que a su vez lo turnara al Presidente Municipal y este lo hiciera del conocimiento del Cabildo para que fuera estudiado, sesionado y votado; se

SIN TEXTO



DER JUDICIAL DE L
REMA CORTE DE JUSTI
SECRETARIA GENER
CION DE TRÁMITE DE
STITUCIONALES Y I
INCOSTITUCIO

cuenta con el testimonio de las personas que presenciaron que en esa fecha, fueron legalmente interpelados o requeridos el Lic. Silvano Abarca Macklis y Luis Fernando Serrano García, en su carácter de Presidente y Secretario Fedatario, respectivamente, ambos del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio en comento así como de la documentación a que se hace referencia en el mismo, consistente en copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; ambos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca recibieron tal oficio y documentación, desconociendo su existencia, no obstante que se les puso a la vista las copias simples de las mismas que fueron obtenidas directamente del Congreso del Estado; refiriendo ambos que nunca llevaron a cabo una Sesión de Cabildo en la que se discutieran y votaran las reformas y adiciones propuestas en el Dictamen en comento, debido a que jamás se enteraron de su existencia; y que por los mismos motivos jamás le informaron al Congreso del Estado el resultado de la votación que debió haberse llevado a cabo.

A causa de lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, el solo hecho de que no se reciba en el Congreso del Estado el resultado de la votación después de transcurrido un mes de haberse hecho llegar a los Municipios o Ayuntamientos, el Dictamen con las reformas y adiciones a la Constitución Local, así como el Acta de los Debates de la sesión de fecha 10 de julio de 2014, se presumirá que están conformes con las mismas.

Si bien es cierto, que el procedimiento señalado en el artículo 112 de la Constitución Local indica que dicho Pacto solo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias (sic) partes del número total de diputados, para posteriormente, el Congreso, debía ceñirse total y absolutamente al procedimiento legislativo y así evitar deficiencias que obstaculizaran de forma relevante la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, así como el debido desarrollo y proteger el patrimonio de los Ayuntamientos que pudieran resultar afectados con las reformas y adiciones aprobadas.

Por lo tanto, al no existir una debida notificación, impidió al Ayuntamiento (y consecuentemente al Cabildo), estar en condiciones de ser oídos y vencidos en un procedimiento que cuenta con sus propias formalidades.

Es decir, el proceso constitucionalmente establecido debe ser idóneo para el ejercicio de las facultades de las personas públicas morales inmersas en éste; sin existir, un error procesal o de otra naturaleza de tal gravedad como la falta de garantía de audiencia por una indebida notificación; y que de ninguna manera puede entenderse subsanada, ni mucho menos tenerse como válida la afirmativa ficta a que alude el artículo 112 de la Constitución Local, toda vez que ésta solamente opera cuando el acto previo de notificación es válido, situación o condición que en el caso no acontece.

En efecto, en el caso que nos ocupa esa presunción no puede operar, toda vez que no se notificó legalmente al **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, el referido Dictamen y Acta de debates; y por lo mismo, no se enteró que contaba con un mes para remitir el resultado de la votación al respecto; motivo por el cual es procedente que se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se declare insubsistente dicha notación y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014; en el

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
FEDERAL
CORTES DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE TRAMITE DI
TITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California.

Por lo tanto, el Proceso Legislativo para modificar las normas constitucionales y la implementación de las normas transitorias de esas reformas contiene un vicio insuperable que justifica la implementación de una medida precautoria y su posterior revocación o dejarse insubsistente con motivo de la concesión del Amparo y Protección de la Justicia Federal que se solicita, por vulnerar los principios de debido proceso, audiencia y de legalidad, al impedir y coartar el derecho de los Ayuntamientos para expresar y defender su opinión en el contexto de deliberación de dichas reformas, pero sobre todo, de sus reglas de implementación en las que indebidamente son acortados los periodos de gestión de los funcionarios que ocuparan los cargos de Gobernador, Legisladores Locales y Presidentes Municipales y sus Ayuntamientos, lo que vulnera y pone en riesgo el patrimonio de estos últimos, así como de los recursos con que éstos contarán.

SEGUNDO.- De igual manera, se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que al analizar las notificaciones que se supuestamente se hicieron a los Presidentes Municipales de Ensenada y Tecate, también se puede advertir que las mismas resultan ilegales, por no haberse practicado a través de los funcionarios expresamente facultados para ello.

Así es, por lo que respecta al **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, se advierte que el oficio 002223, Dirigido al Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, de fecha 7 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C. RECIBIDO 08 AGO 2014 PRESIDENCIA**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 66, fracción XII del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 66.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

...

XII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

Además, resulta importante subrayar que el referido reglamento excluye la posibilidad de que esa atribución de recibir y revisar la correspondencia que se dirija a los Ayuntamientos, pueda ser delegada aunado a que tampoco puede ejercerse en sustitución por algún otro funcionario, y menos por un intendente, por constituir



PODER JUDICIAL DEL
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SECRETARÍA GENERAL
CIÓN DE TRÁMITE DE
INSTITUCIONALES Y L
INCONSTITUCIO

una función del estudio y trámite de los asuntos contenidos en la documentación recibida de gran trascendencia para el patrimonio del Ayuntamiento.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Lo mismo aconteció con el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, pues al revisar el oficio 002224, dirigido al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tecate, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; se advierte que contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda: **"AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL"** y escrito a mano el nombre de la persona que recibió **"CUQUITA"**.

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 44, fracción X, Reglamento Interior para el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

...

X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

Esto es, la omisión de realizar la notificación con el funcionario que legalmente cuenta con la atribución para recibir la documentación por parte de los Ayuntamientos, trasciende de manera fundamental en las normas constitucionales modificadas, sus artículos transitorios y sobre todo en las normas de implementación, impidiendo con ello que éstos a través de sus respectivos Cabildos discutan y voten los dictámenes en los que se propongan reformas o adiciones a la Constitución Local.

Por lo tanto, el Procedimiento Legislativo en comento al contener un vicio de tal magnitud, como lo es una indebida notificación al Ayuntamiento de Tecate, Baja California, trasgrede el Principio Rector del Proceso Legislativo para reformar la

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMACORTES
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRABAJO
CONSTITUCIONAL
L. VIGORISTA

Constitución del Estado de Baja California, con franca violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo que amerita la concesión del amparo solicitado.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Por lo tanto, al ser ilegal tales notificaciones supuestamente realizadas a los Presidentes Municipales de Ensenada y Tecate, Baja California, ello trascendió al Decreto 112 en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local, por lo que deberá concederse el Amparo, para que también se declare insubsistente el mismo.

TERCERO.- También se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con la expedición y publicación del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California; toda vez que deriva de un acto viciado como lo es la ilegal notificación a los Presidentes Municipales y Ayuntamientos de los Municipios de Ensenada, **Playas de Rosarito** y Tecate, del Dictamen a que se ha hecho referencia en el concepto de violación identificado como "PRIMERO"; toda vez que al no habérseles notificado legalmente se vieron impedidos para estudiarlo, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo, así como para dar a conocer el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del término de treinta días siguientes al en que supuestamente recibieron tal notificación; toda vez que si esta se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento tuteladas por el artículo 14 Constitucional, como lo es el que fueran hechas por conducto del funcionario expresamente facultado para ello y no por conducto de diversa persona; obviamente no podrían transcurrir los referidos treinta días; y sin embargo fueron ilegalmente computados y presumiéndose que no había oposición por parte de dichos Municipios o Ayuntamientos a tales reformas y adiciones, sin darles la oportunidad de conocerlas previamente, discutir las, votarlas y notificarles el resultado de dicha votación. Por lo que es procedente se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto en comento.

CUARTO.- El Artículo 112 de la Constitución Local para Baja California, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, **demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

SIN TEXTO



Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

Conforme a dicho precepto de la Constitución Local, se requiere para ser reformada o adicionada, entre otros, que se demuestre que hubo mayoría en favor de la adición o reforma; por lo que si en el caso que nos ocupa ni siquiera se tomó la opinión de **tres de los cinco Municipios del Estado de Baja California**, concretamente de Tecate, **Playas de Rosarito** y Ensenada, dado que no se les notificó legalmente el Dictamen en el que se contenía el proyecto de los artículos que se pretendían reformar y adicionar, así como las actas de debates; impidiéndoles analizarlas, discutirlos y votarlas en sesión de Cabildo; por lo que no pudieron notificar su opinión al respecto ante el Congreso del Estado; ello pone en evidencia que no se contó con la mayoría en favor de tales adiciones o reformas; lo que constituye un motivo adicional para que se conceda el Amparo a la parte quejosa para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que reformó y adicionó la Constitución Local de Baja California."

DEMANDA DE AMPARO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA.

"III. **AUTORIDAD RESPONSABLE:** Congreso del Estado de Baja California, con domicilio conocido en la ciudad de Mexicali."

"IV.- **ACTOS RECLAMADOS:** De la referida autoridad responsable, se reclaman los siguientes:

LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE LA UNIÓN
DE LOS MUNICIPIOS
DE BAJA CALIFORNIA
CONTRAVENIENDO
LA LEY DE ASESORIA
DE LOS MUNICIPIOS
DE BAJA CALIFORNIA

- 5) La ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, entonces Presidente Municipal del H. XXI MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, Baja California, respecto del oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones. Por lo que deberá concederse el amparo para que se deje insubsistente dicha notificación y todo lo actuado con posterioridad.
- 6) El Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; por derivar de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Presidentes Municipales de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que deberá concederse el

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA C
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONA
INCOSTT

Amparo solicitado para el efecto de que se dejen insubsistentes las reformas y adiciones hechas a la Constitución en comento, derivadas del Decreto aludido.

Este Decreto deriva de un proceso legislativo que no cumplió con las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que está precedido de actuaciones viciadas, **al no haberse notificado legalmente a los Ayuntamientos correspondientes a los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado**, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que solicitamos se conceda al Ayuntamiento quejoso el Amparo solicitado, para el efecto de que se dejen insubsistentes las Reformas y Adiciones hechas a la Constitución en comento derivadas del Decreto aludido, incluyendo los artículos transitorios."

"VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

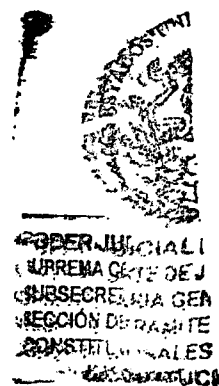
PRIMERO. – El acto reclamado consistente en la **ilegal notificación** que se hizo o se pretendió hacer al Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, entonces Presidente Municipal del H. XXI AYUNTAMIENTO DE ENSENADA Baja California, respecto del oficio **002223**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; resulta violatorio en perjuicio del Ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 1º., 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen:

"Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

SIN TEXTO



{...}

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...

En estos tres preceptos constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, **propiedades o posesiones**, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

LA FE

CHA

AL

E

x

En el caso que nos ocupa, se han violado los anteriores preceptos constitucionales, toda vez que la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio de la parte quejosa, las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en tales preceptos constitucionales, toda vez que se abstuvo de notificar **"legalmente"** al Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, a través del **Secretario Fedatario** en funciones, en el mes de agosto de 2014, el oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

En efecto, del análisis que se realiza a la copia del oficio en comento, se advierte que éste contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda **"SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL AUG 08 2014 RECIBIDO"**; es decir, se presume fue presentado ante la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal.

Sin embargo, esta carece de facultades para recibir documentos de esa naturaleza e importancia, sobre todo porque se cuenta con el término de un mes para informar al Congreso del Estado sobre el resultado de la votación que debe

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITE
INSTITUCIONAL
INCOSTITI

llevarse a cabo por el **CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, en relación con el Dictamen de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California; y por lo mismo, no puede ser entregado el oficio y documentación relacionada con ese Dictamen a cualquier persona que no sea la expresamente facultada por la Ley o por los Reglamentos Municipales para tal efecto.

Así es, en el artículo 31, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California, se establecen con precisión las únicas facultades que tiene la **Secretaría Particular**, mismas que para mayor claridad se reproducen a continuación:

"ARTÍCULO 31.- A la Secretaría Particular corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Coadyuvar a la organización de actividades, eventos y giras del Presidente Municipal;

II.- Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Presidente Municipal y conservar un archivo de las sesiones y acuerdos;

III.- Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno;

IV.- Recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía;

V.- Coordinar las audiencias con los funcionarios para el despacho de los asuntos de su competencia;

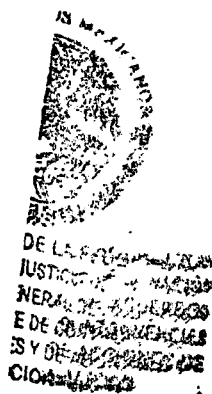
VI.- Turnar a quien corresponda, las representaciones oficiales cuando así lo determine el Presidente;

VII.- Realizar acciones administrativas que le correspondan a la Presidencia Municipal; y

VIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función."

Como se observa, en dichas facultades no se contiene la de **recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste**, a que se refiere el artículo 66 fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; sino solo las de **recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno y recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía**; a que se refieren las fracciones III y IV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California.

Efectivamente, nótese que solo se le faculta a la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, el recibir y dar seguimiento a peticiones o solicitudes de audiencia de la ciudadanía; jamás para recibir y dar seguimiento a peticiones formuladas por alguna autoridad u órgano de Gobierno, como lo es el Congreso del Estado, facultad esta última que se encuentra limitada en exclusiva al Secretario Fedatario al que se refiere el artículo 66 fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.





Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones, no fue recibido por el **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, a pesar de ser el único legitimado para recibir tal documentación, revisarla y darle el seguimiento correspondiente, ello provocó que ni el Presidente Municipal ni el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de la misma; y por ende, jamás celebraron sesión de Cabildo alguna en la cual se discutiera y votara el Dictamen que supuestamente les fue remitido para su estudio por parte del Congreso del Estado; y por consiguiente, se vieron legalmente impedidos para comunicar su opinión a este dentro del término de un mes a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local de Baja California; lo que trae como consecuencia que se encuentre viciado el Decreto 112 mediante el cual se reformó y adicionó esta.

Así es, además de que del propio sello de recibido que aparece en el oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, se desprende que este no fue presentado ante el Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para que a su vez lo turnara al Presidente Municipal y este lo hiciera del conocimiento del Cabildo para que fuera estudiado, sesionado y votado; se cuenta con la fe de hechos levantada ante Notario Público, en la cual se hace constar que fueron legalmente interpelados o requeridos los señores maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO e IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA, en su carácter de Presidente y Síndico Procurador, respectivamente, ambos del Ayuntamiento y Municipio de Ensenada, Baja California, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio en comento así como de la documentación a que se hace referencia en el mismo, consistente en copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; ambos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca recibieron tal oficio y documentación, desconociendo su existencia, no obstante que se les puso a la vista las copias simples de las mismas que fueron obtenidas directamente del Congreso del Estado; refiriendo ambos que nunca llevaron a cabo una Sesión de Cabildo en la que se discutieran y votaran las reformas y adiciones propuestas en el Dictamen en comento, debido a que jamás se enteraron de su existencia; y que por los mismos motivos jamás le informaron al Congreso del Estado el resultado de la votación que debió haberse llevado a cabo.

A causa de lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, el solo hecho de que no se reciba en el Congreso del Estado el resultado de la votación después de transcurrido un mes de haberse hecho llegar a los Municipios o Ayuntamientos, el Dictamen con las reformas y adiciones a la Constitución Local, así como el Acta de los Debates de la sesión de fecha 10 de julio de 2014, se presumirá que están conformes con las mismas.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa esa presunción no puede operar, toda vez que no se notificó legalmente al **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, el referido Dictamen y Acta de debates; y por lo mismo, no se enteró

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARÍA DE
JUSTICIA Y
FIDEJACIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
MEXICANA

que contaba con un mes para remitir el resultado de la votación al respecto; motivo por el cual es procedente que se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se declare insubsistente dicha notación y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California.

SEGUNDO.- De igual manera, se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que al analizar las notificaciones que se supuestamente se hicieron a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, también se puede advertir que las mismas resultan ilegales, por no haberse practicado a través de los funcionarios expresamente facultados para ello.

Así es, por lo que respecta al **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, se advierte que el oficio 002222, Dirigido al Lic. Silvano Abarca Macklis, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 08 AGO 2014 PRESIDENCIA**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 67 fracción XIII Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

... XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Lo mismo aconteció con el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, pues al revisar el oficio 002224, dirigido al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tecate, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la

SIN TEXTO



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; se advierte que contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda: **"AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. MEX. RECIBIDO AUG 08 2014 PRESIDENCIA MUNICIPAL"**.

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 44, fracción X, Reglamento Interior para el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

**...
X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."**

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Por lo tanto, al ser ilegal tales notificaciones supuestamente realizadas a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, Baja California, ello trascendió al Decreto 112 en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local, por lo que deberá concederse el Amparo, para que también se declare insubsistente el mismo.

TERCERO.- También se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con la expedición y publicación del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California; toda vez que deriva de un acto viciado como lo es la ilegal notificación a los Presidentes Municipales y Ayuntamientos de los Municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, del Dictamen a que se ha hecho referencia en el concepto de violación identificado como **"PRIMERO"**; toda vez que al no haberseles notificado legalmente se vieron impedidos para estudiarlo, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo, así como para dar a conocer el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del término de treinta días siguientes al en que supuestamente recibieron tal notificación; toda vez que si esta se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento tuteladas por el artículo 14 Constitucional, como lo es el que fueran hechas por conducto del funcionario expresamente facultado para ello y no por conducto de diversa persona; obviamente no podrían transcurrir los referidos treinta días; y sin embargo fueron ilegalmente computados y presumiéndose que no había oposición por parte de dichos Municipios o Ayuntamientos a tales reformas y adiciones, sin darles la oportunidad de conocerlas previamente, discutir las, votarlas y notificarles el resultado de dicha votación. Por lo que es procedente se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto en comento.

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GE
ECCIÓN DE TRÁMITE
ONSTITUCIONALES
INCOSTITUC

CUARTO.- El Artículo 112 de la Constitución Local para Baja California, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, **demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

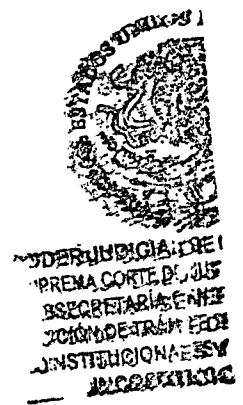
Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

Conforme a dicho precepto de la Constitución Local, se requiere para ser reformada o adicionada, entre otros, que se demuestre que hubo mayoría en favor de la adición o reforma; por lo que si en el caso que nos ocupa ni siquiera se tomó la opinión de **tres de los cinco Municipios del Estado de Baja California**, concretamente de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, dado que no se les notificó legalmente el Dictamen en el que se contenía el proyecto de los artículos que se pretendían reformar y adicionar, así como las actas de debates; impidiéndoles analizarlas, discutir las y votarlas en sesión de Cabildo; por lo que no pudieron notificar su opinión al respecto ante el Congreso del Estado; ello pone en evidencia que no se contó con la mayoría en favor de tales adiciones o reformas; lo que constituye un motivo adicional para que se conceda el Amparo a la parte quejosa para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que reformó y adicionó la Constitución Local de Baja California."

De las transcripciones que anteceden, se demuestra plenitud en que los **AYUNTAMIENTOS DE TECATE, PLAYAS DE ROSARITO Y ENSENADA**, no fueron legalmente notificados del Dictamen o Proyecto de Reformas y Adiciones a la Constitución Local, que dio origen al Decreto 112, mediante el cual se tuvieron por aprobadas las mismas, entre las que destaca el artículo octavo transitorio, en el que se establece que para las elecciones del 2019, el periodo de ejercicio del cargo a la Gubernatura del Estado de Baja California sería de tan solo dos años; siendo evidente que esos tres Ayuntamientos de los cinco que conforman el Estado, no tuvieron oportunidad de manifestar su oposición, rechazo o inconformidad con dicha Reforma, concretamente con dicho precepto; dado que no fueron legalmente notificados por conducto del Secretario Fedatario, que conforme a sus respectivas

SIN TEXTO



leyes y reglamentos, es el único facultado para recibir y darse por notificado de la recepción del referido dictamen, para que éste pudiera hacerlo llegar al Cabildo para su discusión, y estar en aptitud dentro de los treinta días siguientes de recibido, de comunicarle al Congreso del Estado el resultado de la misma.

Por lo que si el Congreso del Estado, de manera incorrecta tuvo por fictamente conformes a tales Ayuntamientos con el referido Dictamen o Proyecto de Reforma y Adiciones a la Constitución Local, por el solo hecho de haber transcurrido treinta días sin que hubiese recibido el resultado de su discusión; ello resulta totalmente ilegal, porque esa falta de respuesta se debió a que nunca se enteraron del referido Dictamen y jamás fue discutido en sus respectivos Cabildos; y por lo mismo, no podía presumirse que estaban de acuerdo con éste.

En ese orden de ideas, al ser evidente la violación al proceso legislativo que dio origen al Decreto 112 en comento, es procedente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare su inconstitucionalidad; y por ende, la inaplicación del artículo octavo transitorio de dicho Decreto; y consecuentemente, subsista en sus terminos el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en el que se establece que la duración del periodo de la Gubernatura siempre será de seis años.

LA DE CALIFICACIÓN
DE LOS JUICIOS
CONTROVERSIALES
E ACCIONES DE
JURISDICCION

No debe pasar desapercibido que el decreto que reduce el plazo de duración de la gubernatura en Baja California viola el principio de seguridad jurídica y continuidad en el cargo, previstos por el legislador, ya que al haber una renovación tan pronta e injustificada, se deja de lado la profesionalización y experiencia que exige el debido ejercicio del cargo, resultando insuficiente dicho lapso para que se lleven a cabo, se continúen y concluyan los proyectos y planes de desarrollo del mismo; lo que desde luego afectará gravemente la economía y continuidad de las políticas públicas.

Es decir, la *ratio essendi* de las normas que establecen una temporalidad específica en el encargo de una función pública, tiene inmerso el principio de "continuidad de los poderes públicos" o "continuidad administrativa", el cual consiste en una perspectiva que impide la paralización o falta de continuidad en la prestación del servicio público y el preservar la voluntad popular; con lo cual, resulta inadmisibile que, ante la existencia de un desfase cronológico entre los distintos procesos electorales locales y federal, se considere que el gobierno entrante *ipso facto* sea de menor duración.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRAMITACIÓN DE RECURSOS
CONSTITUCIONALES

Si bien, el principio aludido se refiere a la continuidad del órgano y al ejercicio de sus competencias (y no así al titular del cargo), las consecuencias de no contar con la referida continuidad van más allá de solamente ostentar el cargo público, toda vez que todas las políticas públicas y la economía del estado se ven comprometidos, tanto para los homólogos, como para la ciudadanía en general (personas físicas y morales que contribuyen al establecimiento de una estabilidad económica, social y política de dicha demarcación).

En atención a las consideraciones anteriores es que se afirma que el decreto en comento es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 116 de la misma, toda vez que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, lo que dio origen a un Decreto de Reformas aprobado que se encuentra viciado de origen; y por lo mismo, no se puede considerar debidamente fundado; máxime que también contraviene el ultimo precepto invocado en el que se establece que el plazo de ejercicio a la Gubernatura de los Estados debe de ser de seis años; lo que constituye un motivo adicional para que se declare la inconstitucionalidad de dicho Decreto.



SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

PRETENSIÓN

De lo anterior ha quedado acreditado que existió una indebida notificación a los Ayuntamientos respecto del Dictamen de reforma porque existió una vulneración al proceso legislativo y en consecuencia **debe decretarse la nulidad del Decreto 112, y específicamente la invalidez del artículo octavo transitorio para cesar en sus efectos, con la finalidad de dotar de regularidad constitucional el periodo del cargo de Gobernador y éste sea de seis años, acorde con lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Local.**

PRUEBAS

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en el copia certificada de la Constancia de Asignación de Diputados de Representación Proporcional para integrar la XXII Legislatura del Congreso de Baja California, para el periodo constitucional 2016-2019, otorgado en favor de cada uno de los Diputados que suscribimos la presente demanda de Acción de Inconstitucionalidad, con la cual

SIN TEXTO



acreditamos nuestra personalidad y legitimación para ejercerla; mismas que se exhiben como **ANEXOS EL 1 AL 11.**

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en la impresión de la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el **TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, en el **Recurso de Inconformidad RI-63/2019**, interpuesto por el candidato a la Gubernatura del Estado, Jaime Bonilla Valdez, en la cual destacó que el procedimiento de reformas a la Constitución Local, entre las que se incluía el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, que limitaba el ejercicio de la gubernatura en las elecciones de 2019, a solo dos años, **se encontraba viciado**, determinando inaplicar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución local en materia político-electoral, modificó el acuerdo impugnado emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California y ordenó una adenda a la convocatoria de la gubernatura en la que se estableciera que su periodo de gestión se incrementaría a seis años; misma que se exhibe como **ANEXO 12.**



LA FEDERACIÓN
TICIA DE BAJA CALIFORNIA
RAL DE BAJA CALIFORNIA
ECONOMÍA Y DESARROLLO
DE BAJA CALIFORNIA
ONAL

3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos, presentada por el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, mismo que fue registrado con el número 131/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en donde se aprecian las violaciones cometidas al procedimiento legislativo de Reformas a la Constitución Local, que dio origen al Decreto 112 a que se ha hecho referencia, misma que se exhibe como anexo número 1, aclarando bajo protesta de decir verdad, que apenas el día ocho de mayo de dos mil diecinueve me fueron entregadas las mismas por el abogado autorizado del referido Ayuntamiento quejoso; misma que se exhibe como **ANEXO 13.**

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos, presentada por el **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, mismo que fue registrado con el número 367/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California; en donde se aprecian las violaciones cometidas al procedimiento legislativo de Reformas a la Constitución Local, que dio origen al Decreto 112 a que se ha hecho referencia, misma que se exhibe como anexo número 1, aclarando bajo protesta de decir verdad, que apenas

SIN TEXTO

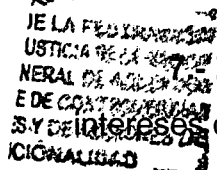


PODER JUDICIAL
PRIMA CORTE DE
SECRETARÍA GI
CIÓN DE TRÁMI
INSTITUCIONAL
INCOSTIT

el día ocho de mayo de dos mil diecinueve me fueron entregadas las mismas por el abogado autorizado del referido Ayuntamiento quejoso; misma que se exhibe como **ANEXO 14.**

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos, presentada por el **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, mismo que fue registrado con el número 114/2019, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California; en donde se aprecian las violaciones cometidas al procedimiento legislativo de Reformas a la Constitución Local, que dio origen al Decreto 112 a que se ha hecho referencia, misma que se exhibe como anexo número 1, aclarando bajo protesta de decir verdad, que apenas el día ocho de mayo de dos mil diecinueve me fueron entregadas las mismas por el abogado autorizado del referido Ayuntamiento quejoso; misma que se exhibe como **ANEXO 15.**

6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente juicio, en todo lo que beneficie al suscrito, misma que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y argumentos del presente escrito de comparecencia.



LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a los intereses del suscrito.

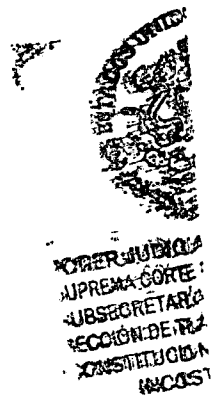
PETITORIOS

Por lo expuesto de manera fundada y motivada, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicitamos:

PRIMERO.- Tenernos por presentados por propio derecho y con la personalidad con que nos ostentamos como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, así como por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que se señalan para tales efectos.

SEGUNDO.- Admitir a tramite la Acción de Inconstitucionalidad que se hace valer, así como las pruebas ofrecidas para acreditarla, pidiendo los informes respectivos al **CONGRESO** y al **EJECUTIVO**, ambos del Estado de **BAJA CALIFORNIA.**

SIN TEXTO



TERCERO.- En su oportunidad dictar sentencia definitiva en la que declare la invalidez del Decreto 112 al haberse vulnerado el debido proceso legislativo; y concretamente, se declare la inaplicación del artículo octavo transitorio del mismo, para los efectos de que subsista en sus términos el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Baja California en el que se establece que la Gubernatura sea de seis años.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 30 DE MAYO 2019.
PROTESTAMOS LO NECESARIO

DIP. Héctor Irenzo Mares Cossío

DIP. Victoria Bentley Duarte

DIP. Bernardo Padilla Muñoz

DIP. José Antonio Casas del Real

DIP. José Montoya Gaxiola

DIP. Catalino Zaida Marquez Córdova

DIP. Rocío López Coronado

DIP. Carolina Aguilera Méndez

DIP. Alejandro Amegui Ibarra

DIP. Marco Antonio Corona Bolaños Caño

DIP. Blanca Patricia Ríos López



SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GENERAL DE ASUNTOS
INTERIORES Y DE PROTECCIÓN
CIVIL Y DE ACCIONES DE
TUTELA

022045

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2019 JUN 7 PM 3 00

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibi: de un enviado en (36) folios

con:

- Copia certificada de (4) constancias de delaya en una folia cada una segun sus certificaciones
- Copia certificada de (7) constancias de asignación en una folia cada una, segun sus certificaciones
- Un anexo en copia simple relativo al recurso inconformidad R1-63/2019 en (121) folios, segun su folio
- Copia certificada relativa al Juicio de amparo 131/2019-10 en (75) folios, segun su certificación
- Dos anexos en copias simples en un total de (84) y (25) folios
- Asi como dos copias de traslado

VICTOR JUAN RUIZ BÁCENAS

SECRETARÍA DE JUSTICIA
DER JUDICIAL
REMA CORTE DE
SECRETARÍA GE
CIÓN DE TRÁMIT
STITUCIONAL
INCOSTIT

SECRETARÍA DE JUSTICIA
DER JUDICIAL
REMA CORTE DE
SECRETARÍA GE
CIÓN DE TRÁMIT
STITUCIONAL
INCOSTIT

2019 JUN 7 PM 4 41

SECRETARÍA DE JUSTICIA
DER JUDICIAL
REMA CORTE DE
SECRETARÍA GE
CIÓN DE TRÁMIT
STITUCIONAL
INCOSTIT

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y en cumplimiento al Dictamen Número Veintisiete emitido por este Consejo General Electoral en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, expide al **PARTIDO POLÍTICO MORENA**, la presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado, Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a los ciudadanos siguientes:

PROPIETARIO: **C. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ**
SUPLENTE: **C. HÉCTOR IRENEO MARES COSSIO**

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE

C. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----**CERTIFICA**-----

que la presente es copia fiel y exacta tomada del expediente conformado con motivo de la emisión del Dictamen Número Veintisiete, cuya aprobación fuera efectuada por el Consejo General Electoral en su Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria y el cual consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Consejo General y que tuve a la vista para su correspondiente compulsa y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUDICIAL D
A CORTE DE J
RETARIA GE
DE TRÁMIT
ACIONALE
COSTITU



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

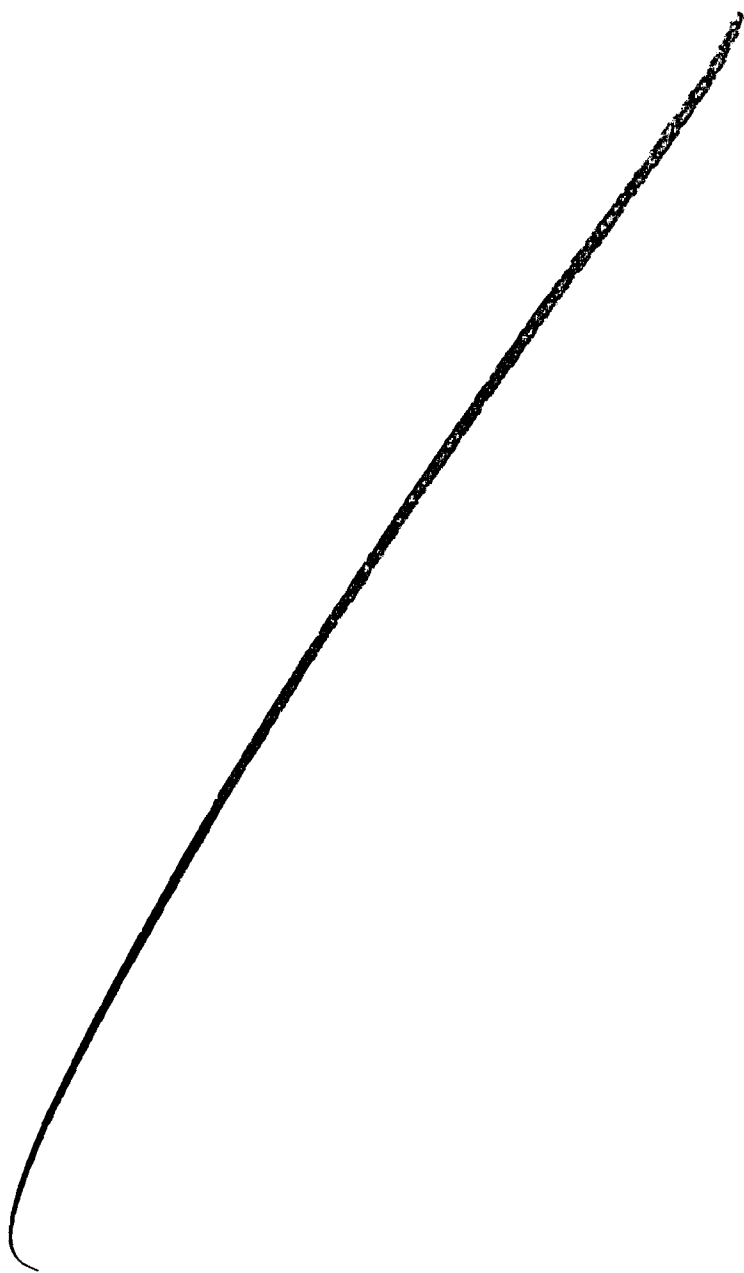
CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Asignación de Diputado de Representación Proporcional expedida al Diputado Víctor Manuel Morán Hernández**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----

DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



LA FEDERACIÓN
ESTADAL DE LA MESA
DE CONFERENCIAS
DE ACTORES DE
Baja California



PODER JUDICIAL DE
PRIMA CORTE DE JUST
SECRETARÍA GENE
CIÓN DE TRÁMITE DE
STITUCIONALES Y
INCOSTTUCIO



IEE
Instituto Estatal Electoral
Baja California

Instituto Estatal Electoral de Baja California

ANEXO 2
**REVISADO
COTEJADO
C.G.E.** 39

El Consejo Distrital Electoral del III Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los Artículos 73 fracción XII y 259 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, extiende la presente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA

A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA INTEGRADA POR

PROPIETARIO: VICTORIA BENTLEY DUARTE

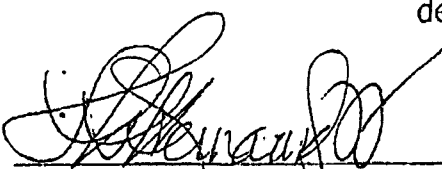
SUPLENTE: ROSA MARIA GERALDO GARCÍA

En virtud de haber obtenido el mayor número de votos en la Elección de Diputados del Proceso Electoral 2015-2016 para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar en la ciudad de Mexicali, Baja California a los nueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

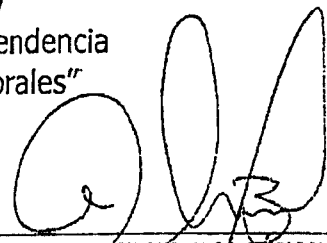
ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"


ARQ. LETIZIA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ
CONSEJERO PRESIDENTE
DEL III CONSEJO DISTRICTAL ELECTORAL



CONSEJO
DISTRICTAL ELECTORAL


LIC. ALEJANDRA BALCAZAR GREEN
SECRETARIO FEDATARIO
DEL III CONSEJO DISTRICTAL ELECTORAL

III DISTRITO

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55 fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----Certifica-----

Que la presente es copia fiel y exacta de la Constancia de Mayoría otorgada por el III Consejo Distrital Electoral a la fórmula de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, formulada por el Partido Acción Nacional, a las ciudadanas **VICTORIA BENTLEY DUARTE** como propietaria y **ROSA MARÍA GERALDO GARCÍA** como suplente, y que consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de esta Secretaria Ejecutiva y que tuve a la vista para su correspondiente compulsá y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE
PRIMERA CATEGORÍA DE JU
SECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRÁMITE
STITUCIONALES
INSTITUC


C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ



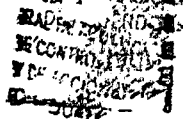
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California



CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Constancia de Mayoría expedida a la Diputada Victoria Bentley Duarte expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.** Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve. Doy fe. -----



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



ER JUDICIAL DE LA F
EJA CORTE DE JUSTICIA
ECRETARIA GENERAL
ON DE TRAMITE DE CC
TITUCIONALES Y DE
INCOSTTUCIONA



IEE
Instituto Estatal Electoral
Baja California

Instituto Estatal Electoral de Baja California

ANEXO 3

41

El Consejo Distrital Electoral del XVI Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 73, fracción XII y 259, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y en atención de haber obtenido la fórmula de candidatos a Diputados registrada por la Coalición integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza la mayoría de los votos en la elección de Diputados a la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, otorga la presente

CONSTANCIA DE MAYORÍA A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA INTEGRADA POR

PROPIETARIO: BERNARDO PADILLA MUÑOZ

**SUPLENTE: PEDRO ALBERTO CONTRERAS
MORENO**

Se extiende la presente para todos los efectos legales que haya lugar, en la ciudad de Tijuana, Baja California a los once días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

**"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"**

JOSÉ GONZÁLO MANRIQUE ÁVALOS

CONSEJERO PRESIDENTE

VÍCTOR MANUEL RUIZ SÁNCHEZ

SECRETARIO FEDATARIO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
XVI CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por un solo lado, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Constancia de Mayoría expedida al Diputado Bernardo Padilla Muñoz**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----


DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

ER JUDICIAL
LA CORTE DE
CRETARIA GE
ÓN DE TRÁMIT
TUCIONALE
NCOSTITI



El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y en cumplimiento al Dictamen Número Veintisiete emitido por este Consejo General Electoral en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, expide al **PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL**, la presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

- Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado, Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a los ciudadanos siguientes:

LA FEDERACIÓN
ESTADAL DE LA
PROPIETARIO
DE CONTRO
SUBLENTE

C. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

C. JOSÉ ANTONIO CASAS DEL REAL



Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SANCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



C. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

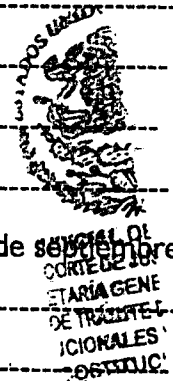
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

CERTIFICA

que la presente es copia fiel y exacta tomada del expediente conformado con motivo de la emisión del Dictamen Número Veintisiete, cuya aprobación fuera efectuada por el Consejo General Electoral en su Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria y el cual consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Consejo General y que tuve a la vista para su correspondiente compulsa y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----



[Handwritten signature]

C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California



CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Constancia de Mayoría** expedida al **Diputado Propietario Luis Moreno Hernández** y al **Diputado Suplente José Antonio Casas del Real** expedida por el **Instituto Estatal Electoral de Baja California**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve. -
Doy fe: -----



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



DER JUDICIAL DE L
REMA CORTE DE JUST
SECRETARÍA GENER
IÓN DE TRÁMITE DE
STITUCIONALES Y D
INCOSTTUCION



El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por fundamento en lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y en cumplimiento al Dictamen Número Veintisiete emitido por este Consejo General Electoral en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, expide al **PARTIDO POLITICO MOVIMIENTO CIUDADANO**, la presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado, Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a los ciudadanos siguientes:

PROPIETARIO: **C. JOB MONTOYA GAXIOLA**

SUPLENTE: **C. JORGE EDUARDO BARCELÓ CARRILLO**

Se expide la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

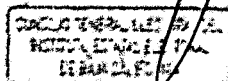
ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



C. DE DA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA



Nombre: C. Job Montoya Gaxiola
Fuese: CONGRES
Fecha: 26 SEP 16 Hora: 12:30
Firma: _____

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----**CERTIFICA**-----

que la presente es copia fiel y exacta tomada del expediente conformado con motivo de la emisión del Dictamen Número Veintisiete, cuya aprobación fuera efectuada por el Consejo General Electoral en su Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria y el cual consta de una foja útil, escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Consejo General y que tuve a la vista para su correspondiente compulsa y cotejó. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA


C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodriguez

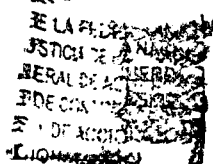
REGISTRADOS EN
Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Secretaría de Gobernación
Instituto Registral y Catastral



La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Constancia de Mayoría expedida al Diputado Job Montoya Gaxiola expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California.** Se expide en la Ciudad de Mexicali Baja California, a los 05 de junio del año dos mil diecinueve.- Doy fe



DIP. ROCIO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



ER JUDICIAL DE
LA CORTE DE JUL
CRETARIA GENE
N DE TRAMITE
TUCIONALES
COSTITUCI

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y en cumplimiento al Dictamen Número Veintisiete emitido por este Consejo General Electoral en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, expide al **PARTIDO POLÍTICO MORENA**, la presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado, Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a los ciudadanos siguientes:

PROPIETARIO: **C. CATALINO ZAVALA MARQUEZ**
SUPLENTE: **C. NIBARDO FLORES HEREDIA**

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de México, Baja California a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SANCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----**CERTIFICA**-----

que la presente es copia fiel y exacta tomada del expediente conformado con motivo de la emisión del Dictamen Número Veintisiete, cuya aprobación fuera efectuada por el Consejo General Electoral en su Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria y el cual consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Consejo General y que tuve a la vista para su correspondiente compulsu y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA



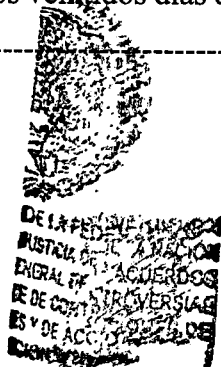
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Asignación de Diputado de Representación Proporcional expedida al Diputado Catalino Zavala Márquez**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los **veintidós** días del mes de abril del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



PODER JUDICIAL O
SUPREMACIA CORTE DE J
SECRETARIA GEN
CIÓN DE TRÁTE
ANSTITUCIONALES
— REGISTRO



El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y en cumplimiento al Dictamen Número Veintisiete emitido por este Consejo General Electoral en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, expide al **PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**, la presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado, Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a los ciudadanos siguientes:

PROPIETARIO: **C. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE**

SUPLENTE: **C. ANA MARÍA FUENTES DÍAZ**

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SÁNCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



C. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----**CERTIFICA**-----

que la presente es copia fiel y exacta tomada del expediente conformado con motivo de la emisión del Dictamen Número Veintisiete, cuya aprobación fuera efectuada por el Consejo General Electoral en su Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria y el cual consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Consejo General y que tuve a la vista para su correspondiente compulsa y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----

PREMIER
SECRETARÍA
ECCOM DE LA
CONSTITUCION
INCOST



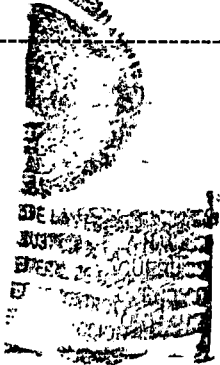
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

C.P. Deida Guadalupe Padilla Rodríguez

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Asignación de Diputado de Representación Proporcional expedida a la Diputada Rocío López Gorosave**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. Doy fe. -----



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA





PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITE Y
CONSTITUCIONALES



IEE
Instituto Estatal Electoral
Baja California

Instituto Estatal Electoral de Baja California

REVISADO
COTEJADO
C.G.E.

El Consejo Distrital Electoral del XIV Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 73, fracción XII y 259, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y en atención de haber obtenido la fórmula de candidatas a Diputados registrada por la **COALICIÓN conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza** la mayoría de los votos en la elección de Diputados a la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, otorga la presente

**CONSTANCIA DE MAYORÍA
A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA INTEGRADA POR**

PROPIETARIA: CLAUDIA JOSEFINA AGATON MUNIZ
SUPLENTE: TERESA PATRICIA VALERIANO PEREZ

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Ensenada, Baja California a los trece días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales

C. AYERIM GUADALUPE MACAYAHANNA ANDREA MORENO
GRANADOS GIL
CONSEJERA PRESIDENTE SECRETARIA FEDATARIA



La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55 fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----Certifica-----

Que la presente es copia fiel y exacta de la Constancia de Mayoría otorgada por el VII Consejo Distrital Electoral a la fórmula de Diputadas por el Principio de Mayoría Relativa, formulada por la Coalición de Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Nueva Alianza, a las ciudadanas **CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ** como propietaria y **TERESA PATRICIA VALERIANO PÉREZ** como suplente, y que consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de esta Secretaria Ejecutiva y que tuve a la vista para su correspondiente compulsa y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----


C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUPLENTE
SECRETARÍA DE TRABAJO
INSTITUCIÓN
INCOST



La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Constancia de Mayoría** expedida a la **Diputada Propietaria Claudia Josefina Agatón Muñiz** y a la **Diputada Suplente Teresa Patricia Valeriano Pérez** expedida por el **Instituto Estatal Electoral de Baja California**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días del mes de abril del año dos mil diecinueve. - Doy fe. -----



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE FAMILIA
GENERAL DE ACUERDOS
DE CONTROL INTERIOR
ES Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD

DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



[A large, dark, diagonal line, possibly a signature or a heavy pencil stroke, runs across the page from the bottom left towards the top right.]



ER JUDICIAL DE
MA CORTE DE JU
CRETARIA GENE
ON DE TRÁMITE D
TUCIONALES Y
NCOSTTUCI

El Consejo Distrital Electoral del XV Distrito de Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 73, fracción XII y 259, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, y en atención de haber obtenido la fórmula de candidatos a Diputados registrada por la **Coalición de los Partidos Políticos Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza**, la mayoría de los votos en la elección de Diputados a la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, otorga la presente

**CONSTANCIA DE MAYORIA
A LA FÓRMULA DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA INTEGRADA POR**

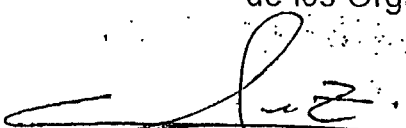
PROPIETARIO: ~~Alejandro Arcega Ibarra~~

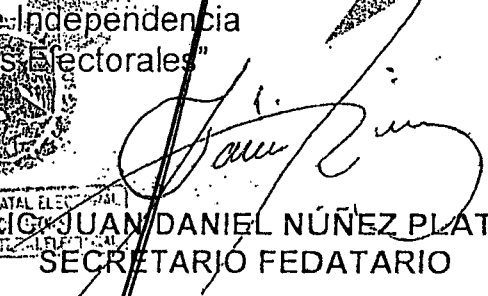
SUPLENTE: **Juan Eugenio Carpio Ascencio**

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Ensenada, Baja California a los once días de mes de junio del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"


LIC. RICARDO LANDA VERA
CONSEJERO PRESIDENTE


LIC. JUAN DANIEL NÚÑEZ PLATA
SECRETARIO FEDATARIO

Recibi Constancia
11 de Junio 2016

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55 fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----Certifica-----

Que la presente es copia fiel y exacta de la Constancia de Mayoría otorgada por el XV Consejo Distrital Electoral a la fórmula de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, formulada por la Coalición de Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Nueva Alianza, a los ciudadanos **ALEJANDRO ARREGUI IBARRA** como propietario y **JUAN EUGENIO CARPIO ASCENCIO** como suplente, y que consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de esta Secretaria Ejecutiva y que tuve a la vista para su correspondiente compulsu y cotejo. Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.-----

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU

C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ



CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Constancia de Mayoría expedida al Diputado Alejandro Arregui Ibarra expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California**. Se expide en la Ciudad de Mexicali Baja California, a los 08 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.- Doy fe.-----

DIP. ROCIO LOPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE ECONOMIA
SECRETARIA DE EDUCACION
SECRETARIA DE SALUD
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE FERIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y MINERIA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y DEFENSA
SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACION
SECRETARIA DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE FERIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y MINERIA
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y DEFENSA
SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACION





PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y D
INCOSTITUCION

IEEInstituto Estatal Electoral
Baja California

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; y en cumplimiento al Dictamen Número Veintisiete emitido por este Consejo General Electoral en la Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, expide al **PARTIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, la presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado, Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a los ciudadanos siguientes:

PROPIETARIO:
SUPLENTE:

C. MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS CACHO
C. JUAN SIQUEIROS RUIZ

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad de Mexicali, Baja California a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SANCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



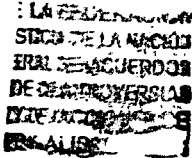
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

C. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRÍGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

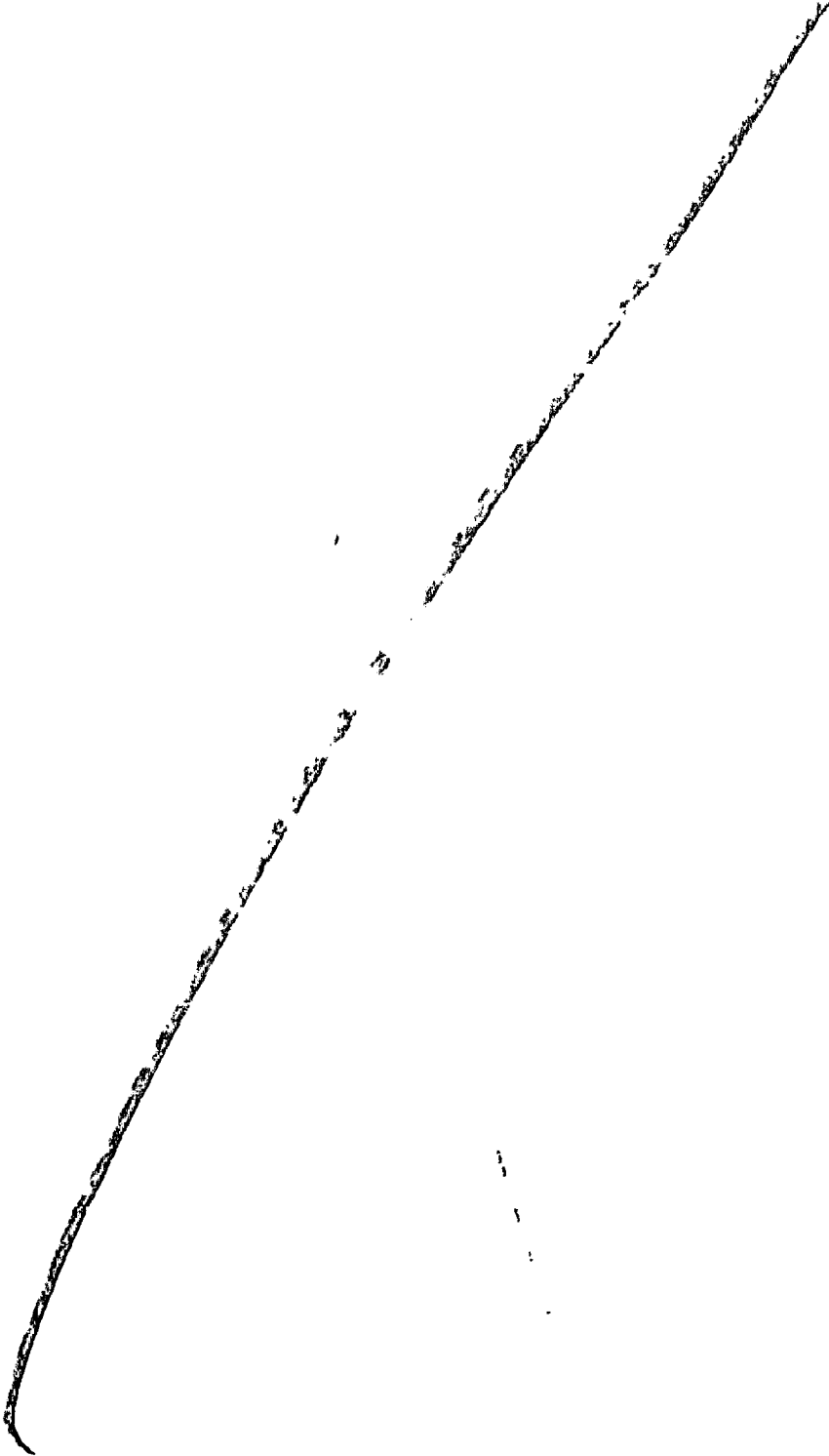
La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California

CERTIFICA

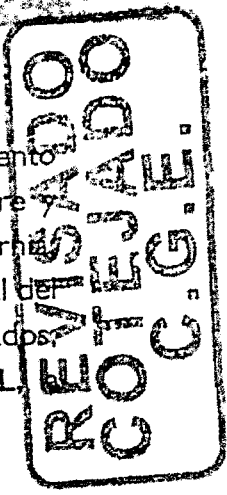
Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Asignación de Diputado de Representación Proporcional expedida al Diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho**. Se expide en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. - Doy fe. --



DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA



JUDICIAL D
ORTE DE JU
TARIA GENI
E TRAMITE
CIONALES
STITUCI



El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 20 y 270 de la Ley Electoral del Estado de Baja California y en cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los Expedientes SUP-REC-755/2016 y Acumulados, se expide al **PARTIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** presente

CONSTANCIA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Para integrar la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California para el periodo constitucional 2016-2019 a la fórmula integrada por las ciudadanas:

PROPIETARIO:
SUPLENTE:

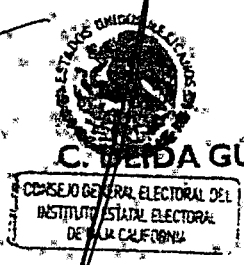
C. BLANCA PATRICIA RIOS LOPEZ
C. CARMEN LETICIA AVALOS VALENZUELA

Expedida durante la Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California celebrada el primero de octubre del año dos mil dieciséis, se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar en la ciudad de Mexicali, Baja California.

ATENTAMENTE

"Por la Autonomía e Independencia
de los Organismos Electorales"

C. JAVIER GARAY SANCHEZ
CONSEJERO PRESIDENTE



C. VERIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

La suscrita ciudadana Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en ejercicio de la atribución que me confiere, el artículo 49 fracción X, en relación con el artículo 55, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California.-----

-----**CERTIFICA**-----

que la presente es copia fiel y exacta tomada del expediente conformado con motivo del cumplimiento a la Sentencia emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-REC-755/2016 y acumulados, así como de la expedición de Constancia de asignación expedida por el Consejo General Electoral en su Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria y el cual consta de una foja útil escrita por un solo lado; misma que obra en los archivos de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, del Consejo General y que tuve a la vista para su correspondiente compulsa y cotejo.
Conste.-----

Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, al primer día del mes de octubre del año dos mil dieciséis.-----

JUDICIAL DE
CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
DE TRÁMITE DE
ELECTORALES Y
CONSTITUCIONALES



C. P. María Guadalupe Padilla Rodríguez

La suscrita **Diputada Rocío López Gorosave**, Prosecretaria del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la H. XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

CERTIFICA

Que el presente documento integrado por una (01) foja útil por ambos lados, es copia fiel y exacta del documento que obra en los archivos de esta Soberanía Estatal y corresponde a la **Certificación de Constancia de Mayoría expedida a la Diputada Blanca Patricia Ríos López expedida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California**. Se expide en la Ciudad de Mexicali Baja California, a los 03 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.- Doy fe.-----

FEDER
DE LA
DE ACU
CONTR
DE AS
DE AS
DE AS

DIP. ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE
PROSECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA





JUDICIAL DE L
ORTE DE JUSTIC
ARIA GENERA
TRAMITE DE C
IONALES Y DI
STITUCION



RECURSO DE INCONFORMIDAD:
RI-63/2019

PARTE ACTORA:
JAIME BONILLA VALDEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA Y OTRA

TERCERO INTERESADO:
PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
MOVIMIENTO CIUDADANO

MAGISTRADO PONENTE:
LEOBARDO LOAIZA CERVANTES

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
KARLA GIOVANNA CUEVAS ESCALANTE

Mexicali, Baja California, a siete de mayo de dos mil diecinueve.

Sentencia que por una parte **inaplica** el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 y por otra **modifica** el acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el que determinó otorgar el registro como candidato a la Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez postulado por la Coalición, y en vía de consecuencia la Convocatoria a Elecciones Ordinarias aprobada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, conforme a los razonamientos que se exponen en la presente sentencia.

GLOSARIO

Coalición	Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, conformada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Transformemos y Morena	Constitución local:	Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
Comisión Estatal:	Comisión Estatal de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California"	Convocatoria:	Convocatoria pública para celebración de elecciones ordinarias en el estado de Baja California, durante el proceso electoral local 2018-2019
Congreso:	Congreso del Estado de Baja California	Corte:	Suprema Corte de Justicia de la Nación
Consejo General:	Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California	Corte Interamericana:	Corte Interamericana de Derechos Humanos
Constitución federal:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Decreto 112:	Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución local en materia político-electoral y



TR JUDICIAL DE
LA CORTE DE JUSTI
CRETARIA GENE
N DE TRÁMITE DE
TUCIONALES Y
NCOSTTITUCIO

	su régimen transitorio.	PMC:	Partido Ciudadano	Movimiento
Instituto:	Instituto Estatal Electoral de Baja California	PRI:	Partido Institucional	Revolucionario
Ley Electoral:	Ley Electoral del Estado de Baja California	Sala Superior:	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	
Ley General:	Ley General de Partidos Políticos	Tribunal:	Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California	
Ley de Partidos:	Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California			
PAN:	Partido Acción Nacional			

1. ANTECEDENTES DEL CASO

De los hechos narrados por el recurrente en su escrito de demanda, así como de las diversas constancias de autos, se advierte en lo que interesa, lo siguiente:

1.1 Reformas en materia político-electoral. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución local en materia político-electoral y su régimen transitorio.

1.2 Proceso electoral local ordinario 2018-2019. El nueve de septiembre de dos mil dieciocho inició el proceso electoral local 2018-2019, mediante el cual se renovará la Gubernatura Constitucional, Diputaciones al Congreso y Municipales a los Ayuntamientos, del Estado de Baja California.

1.3 Aprobación y publicación de la Convocatoria. El veintiocho de diciembre siguiente el Consejo General aprobó el Dictamen Cinco relativo a la Convocatoria, misma que fue publicada en el periódico de circulación estatal "El Mexicano" el treinta y uno de diciembre de posterior.¹

1.4 Primeros recursos de inconformidad. En contra de la convocatoria, entre el veintidós de enero y seis de febrero Blanca Estela Fabela Dávalos y Jorge Alberto Larrieu Creel, interpusieron

¹ Visible a fojas 84 a 91 del expediente RI-18/2019 y 94 a 98 del expediente RI-21/2019.



DER JUDICIA.
RENA CORTE D.
SECRETARIA
CIÓN DE TRAJA
STITUCIONA
INGOST



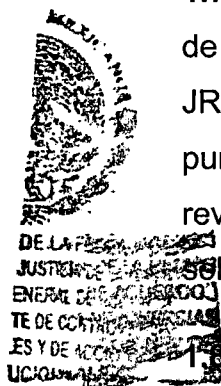
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

diversos recursos de inconformidad, los cuales fueron resueltos por este Tribunal en el sentido de desechar los radicados bajo números RI-21/2019 y RI-24/2019, así como ordenar al Consejo General, en el recurso de inconformidad RI-18/2019, emitir una adenda a la Base Sexta, inciso a) de la Convocatoria en la que se señalara que el periodo de gestión al cargo de Gubernatura sería de cinco años.

1.5 Impugnaciones federales. En contra de lo anterior se interpusieron diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de revisión constitucional.

1.6 Solicitud de registro. El veintisiete de marzo, el Presidente de la Comisión Estatal de la Coalición presentó la solicitud de registro de la candidatura a la Gubernatura del Estado.

1.7 Resolución de las impugnaciones federales. El veintisiete de marzo, la Sala Superior resolvió de manera acumulada al SUP-JRC-5/2019, los diversos medios de impugnación señalados en el punto 1.5 que precede, en la que se determinó, entre otras cosas, revocar la sentencia de este Tribunal y en plenitud de jurisdicción sobreseer la demanda de Blanca Estela Fabela Dávalos.



1.8 Acto impugnado. Acuerdo de registro. El treinta de marzo el Consejo General emitió el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019, en el que determinó otorgar el registro como candidato a la Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez postulado por la Coalición.

1.9 Recurso de Inconformidad. El tres de abril, en contra de lo anterior, Jaime Bonilla Valdez interpuso recurso de inconformidad por propio derecho, el cual fue turnado el ocho siguiente a la ponencia del Magistrado indicado al rubro, quien en su oportunidad dictó el acuerdo de admisión y cierre de instrucción correspondiente.

2. JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y REENCAUZAMIENTO

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en términos del artículo 5, apartado E, de la Constitución local y 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal, que lo facultan para resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de



PODER JUDICIAL
PRIMA CORTE DE
SECRETARÍA GE
CIÓN DE TRÁMIT
STITUCIONALE
INCOSTITU

los asuntos políticos del Estado, así como los derechos relacionados e inherentes a aquellos, a fin de garantizar su protección.

Lo anterior es así, porque de la demanda se advierte, que el actor se inconforma de una posible afectación al derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de ocupar el cargo de conformidad a la temporalidad establecida en el artículo 44 de la Constitución local – seis años–.

Ahora bien, considerando que la Ley Electoral no prevé expresamente una vía que permita resolver la controversia planteada, dado que el actor actúa en su calidad de ciudadano, en contra de autoridades electorales y Congreso del Estado de Baja California, este Tribunal debe implementar el medio idóneo para el conocimiento y resolución del presente asunto.

Se considera que este Tribunal es competente para analizar la solicitud de inconstitucionalidad que hace el recurrente, en virtud de contar con facultades para ejercer un control de carácter concreto de constitucionalidad, es decir, analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución federal, Constitución local y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en aras de restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia.²

Ello atendiendo que la Constitución federal prevé como competencia exclusiva de la Corte conocer y resolver de acciones de inconstitucionalidad, el cual es un medio de control de constitucionalidad cuyo objetivo es resolver sobre la contradicción entre una norma de carácter general que se haya impugnado y una de la propia Constitución federal, mediante un análisis abstracto – artículo 105, fracción II, de la Constitución federal –.

De igual forma, se establece la facultad de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución o a los derechos humanos reconocidos en los tratados

² Resulta orientador el criterio sostenido por la Sala Superior en la tesis IV/2014, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES ELECTORALES LOCALES. PUEDEN INAPLICAR NORMAS JURÍDICAS ESTATALES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A TRATADOS INTERNACIONALES" consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 53 y 54.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARIA GE
NACION DE TRAM
STITUCIONAL
INCOSTIT

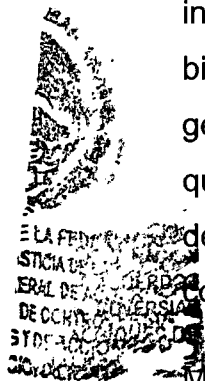


TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

internacionales en que México sea parte y que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad **se limitarán al caso concreto** sobre el que verse el juicio -artículo 99, párrafo Sexto, de la Constitución federal-.

De manera que, de la interpretación sistemática de los artículos 1º y 133 de la Constitución federal se concluye que todas las autoridades jurisdiccionales del país, pueden realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Así, de conformidad con los artículo 1º de la Constitución federal, este órgano jurisdiccional, en el ámbito de sus competencias, se encuentra obligado a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, sino también por los consagrados en los Tratados Internacionales, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, y si bien este tribunal no está facultado para hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, si está obligado a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.³



Máxime que, la Suprema Corte ha señalado que las normas electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos o que deban influir en ellos.⁴

Por ello, sin prejuzgar sobre la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa, se estima viable que se resuelva a través del **recurso de inconformidad** previsto en el artículo 283 de la Ley Electoral, dada la similitud que guarda el asunto en cuestión con los que son susceptibles de ser combatidos a través del mismo,

³ Tal criterio fue sostenido en la jurisprudencia P./J. 22/2012, de registro 2001871, de rubro: "CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS DEBE OBSERVAR EL MARCO PREVISTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Pág. 288.

⁴ tesis de jurisprudencia P./J. 25/99, con el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO." publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 255.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARÍA G.
CIÓN DE TRÁM.
INSTITUCIONAL
INCOSTIT

habida cuenta que éste puede interponerse por partidos políticos o **ciudadanía** para impugnar actos o resoluciones que emanen de autoridades electorales -distintas a los partidos políticos, a que se refiere el recurso de apelación-, y en el caso, tal connotación tienen las autoridades demandadas; considerando además que los actos reclamados tampoco se relacionan con resultados electorales, por lo que no procede su sustanciación a través del recurso de revisión.

Así, es irrelevante la falta de previsión expresa de medio de impugnación a interponerse cuando un ciudadano alegue violación a derechos político-electorales, distinta a la que emane por partidos políticos, al considerarse como vía para su resolución el recurso de inconformidad.⁵

Sostener lo opuesto, entrañaría una restricción injustificada del derecho de acceso a la jurisdicción que tiene todo ciudadano para reclamar los actos que considera afectan su esfera de derechos como lo es el derecho de votar y ser votado, con detrimento al derecho de tutela judicial efectiva amparada en el artículo 17 de la Constitución federal; acceso a la jurisdicción que igualmente demanda una interpretación extensiva y correctora, fundada en el principio pro persona previsto en el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución federal.

En consecuencia, para dar plena vigencia al derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en atención a lo dispuesto en los artículos 5, apartado E, primer párrafo y 68 de la Constitución local; 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal; 282, fracción I y 283, fracción I de la Ley Electoral, se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación identificado como **MI-63/2019**, a recurso de inconformidad, por lo que se deberá realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

⁵ Tal criterio encuentra asidero en la jurisprudencia 14/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO."



PODER JUDICIAL C
MA CORTE DE J
SECRETARIA GE
ON DE TRAMITI
TUCIONALE
NCOSTITU

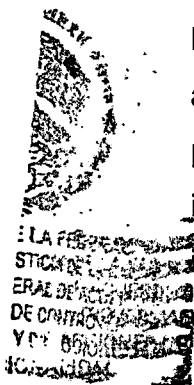


3. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

De la lectura del escrito de demanda se advierte que el accionante controvierte los actos correspondientes a las siguientes autoridades responsables:

- Del Consejo General del Instituto, la emisión del acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 del Instituto Estatal Electoral de Baja California, emitido el treinta de marzo en el que determinó otorgar el registro como candidato a la Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez postulado por la Coalición.
- Del Congreso, la omisión de notificar a los Ayuntamientos de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, el dictamen de adiciones y reforma a la Constitución local que derivó en el Decreto 112.

4. PROCEDENCIA



De la lectura de los informes circunstanciados rendidos por las autoridades responsables, así como de sendos escritos de los tres partidos que comparecen al presente recurso como terceros interesados, se advierte que hacen valer diversas causales de improcedencia, las cuales se analizarán en conjunto aquellas que coincidan, y los restantes en lo individual.

4.1. Procedencia respecto al Decreto 112

Por lo que hace al Decreto 112, las autoridades responsables, así como PMC y PAN que comparecen al presente recurso como terceros interesados hacen valer diversas causales de improcedencia, que en su totalidad giran en torno a que la presentación de la demanda deviene extemporánea y en consecuencia fue consentida por el recurrente y además se ha consumado de modo irreparable, puesto que aducen que el acto de aplicación concreto del Decreto 112 fue la convocatoria, cuestión que sostiene se trata de cosa juzgada por la Sala Superior al haberse resuelto en el juicio SUP-JRC-5/2019.

No pasa desapercibido que, además de lo anterior, el PAN alega que el acto combatido es de naturaleza distinta a la electoral por controvertir la omisión legislativa y la violación al procedimiento



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
DE TRAMITE D
INSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCI

legislativo y, por tanto, no corresponde a esta autoridad jurisdiccional un pronunciamiento de fondo al respecto.⁶

4.1.1. El acto controvertido es materia electoral

Es de destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal o requisito de procedibilidad para la validez de un acto –en sentido amplio– emitido por una autoridad, siendo su estudio una cuestión preferente y de orden público, por lo que, que se debe hacer oficiosamente, de ahí que el estudio de dichas alegaciones sean en primer término.

Cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución federal, todo acto de autoridad –incluyendo a las jurisdiccionales– debe emitirse dentro del margen de las facultades otorgadas en la misma o en alguna ley secundaria, por lo que las autoridades, previo a emitir un acto o resolución, tiene la obligación de verificar si tiene competencia para ello, conforme a las facultades que la normativa aplicable le confiere.

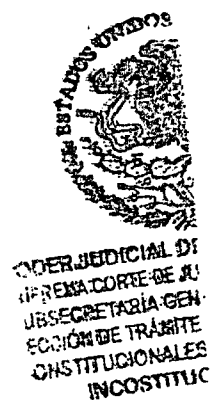
En ese sentido, la competencia es un presupuesto indispensable para establecer una relación jurídica procesal, de manera que, si el órgano jurisdiccional ante el que se ejerce una acción no es competente, estará impedido para conocer y resolver el asunto en cuestión.

Como se razonó en el capítulo de jurisdicción y competencia que antecede este Tribunal cuenta con la atribución de resolver los actos que, en su caso, pudiesen vulnerar los derechos políticos o los derechos inherentes a éstos –artículo 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal–.

Lo anterior, con independencia de que los actos sean emitidos o no por autoridades u órganos electorales, puesto que la condición para que pueda ser objeto de estudio los actos controvertidos es que **su contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos**, toda vez que en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional y en su caso convencional.

Así mismo, no es relevante que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, el acto o

⁶ Foja 19 del escrito de tercero interesado del PAN.



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION
SUBSECRETARIA GEN-
ERAL DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

resolución provenga de una autoridad formalmente electoral o lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda estén íntimamente relacionados con derechos políticos⁷.

Lo anterior, en virtud que los actos controvertidos son formalmente parlamentarios –perspectiva subjetiva-, por haber sido emitidos por el Congreso, es decir un órgano legislativo, sin embargo se consideran que revisten naturaleza materialmente electoral –perspectiva objetiva-.

La Sala Superior ha sostenido en múltiples ejecutorias que el derecho parlamentario es aquel que tiene por objeto regular el comportamiento, administración, funcionamiento y procedimientos que como parte de su tarea cotidiana deben llevar a cabo los Congresos.

Así, la propia Sala Superior ha esclarecido en aquellos casos en que se ha presentado el cuestionamiento si el acto del Congreso es o no materia electoral, y en los cuales ha determinado que se tratan de actos formal y materialmente parlamentarios, los siguientes:

- Conformación de Comisiones.⁸
- Conformación de grupos parlamentarios.⁹
- Lo relativo a la creación y aplicación de su reglamento interno o la Ley Orgánica.¹⁰
- La designación de funcionarios, así como su remoción, de cargos que no sean de elección popular.¹¹

De lo que se desprende que no todos los actos tienen una vinculación ni inciden directamente en el ejercicio de los derechos político-electorales.

Mientras que en diversa sentencia la Sala Superior¹² ha determinado que, se entenderán como materialmente electorales los actos cuya esencia u objeto sobre el cual recaigan sea:

⁷ Conforme a la tesis aislada P. LX/2008 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS".

⁸ SUP-JDC-4337/15 y SUP-JDC-327/2014.

⁹ SUP-JDC-2817/2014, SUP-REC-0095-2017, SUP-JDC-176/17 y SUP-JDC-184/17.

¹⁰ SUP-JDC-162/17 y SUP-REC-1405-2017.

¹¹ SUP-JDC-765/2015 y SUP-JDC-33/2017.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA
SECRETARÍA G.
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONAL
INCOSTIT

i. El régimen democrático en sus vertientes directa –tratándose de figuras como el plebiscito y el referéndum, entre otras- e indirecta, mediante la elección de representantes populares.

ii. Los derechos político-electorales del ciudadano, tales como el derecho al voto en ambas vertientes, el de asociación política (en materia electoral) y el de acceso y efectivo ejercicio del cargo, así como todos los derechos fundamentales que aun cuando su núcleo no sea estrictamente electoral, se encuentren vinculados con este campo del Derecho.

iii. Los principios y reglas que norman la organización y la celebración de cada una de las etapas y actos jurídicos que se desarrollan en los procesos electorales, a fin de garantizar que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas.

Lo anterior puesto que, de conformidad con los artículos 41, base VI y 99, párrafo 4 de la Constitución federal establecen que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene como finalidad –esencialmente– garantizar la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de votar, ser votado, de asociación o afiliación.

De manera que el juicio de la ciudadanía es la vía idónea para tutelar los derechos del voto, de asociación y de afiliación política, así como los demás derechos y prerrogativas directamente relacionados con éstos¹³.

En cuanto al ejercicio del derecho de ser votado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha precisado algunos de sus alcances, por ejemplo:

- **Derecho a ocupar y desempeñar el cargo**¹⁴;
- Remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular; y,
- Acoso laboral, como un impedimento a éste.

¹² Criterio sostenido en el juicio SUP-JDC-27/2017.

¹³ De conformidad a la jurisprudencia 36/2002 emitida por la Sala Superior de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN".

¹⁴ Conforme a la jurisprudencia 20/2010 de la Sala Superior de rubro: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO".



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

En ese sentido, la interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I y 116, párrafo primero, fracción I, de la Constitución federal lleva a establecer que el objeto del derecho político-electoral de ser votado, implica para el ciudadano, dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como candidato a un cargo público de elección popular, como ser proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que constituyen el bien protegido o tutelado jurídicamente por el ordenamiento.

Como se ha venido relatando, el actor se duele de la violación al derecho político de ser votado, en su vertiente de acceso al cargo por el periodo establecido en el artículo 44 de la Constitución local.

Al respecto la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 13/2015, ante la causal de improcedencia hecha valer en ese medio de control relativa a la naturaleza del acto controvertido, estableció que *"son de naturaleza electoral para los efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que se refieren a la duración de dos años en el cargo de Gobernador del Estado electo en dos mil dieciséis (artículo cuarto transitorio del Decreto 536 cuestionado) y, por ende, cuándo se llevarán a cabo los procesos electorales para elegirlo (dos mil dieciséis y dos mil dieciocho), así como a violaciones dentro del procedimiento legislativo que dio origen a dicho Decreto."*

En ese sentido, en dicha acción de inconstitucionalidad la Corte ya se pronunció respecto a la naturaleza de un decreto que establece la reducción del periodo de gestión, así como las violaciones hechas valer referentes al procedimiento legislativo son de carácter electoral.

Por lo que se concluye, que no obstante que el acto que ahora se impugna fue realizado por un órgano legislativo local, ello en modo alguno supone que la materia de la controversia sea propia del Derecho parlamentario, máxime que si bien los actos impugnados parten de las actuaciones u omisiones de un órgano legislativo, los efectos que estos generan impactan directamente en la materia electoral y concretamente en la esfera de derechos del actor como candidato al cargo de gobernador del Estado. De ahí que –como



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE JU
SUBSECRETARÍA GEN
RECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
— INCONSTITUCI

consecuencia natural– se considera que el conocimiento y resolución del presente asunto es competencia de este Tribunal.

En consecuencia, se considera que los actos atribuidos al Congreso **sí son de naturaleza electoral**, de ahí que deba **desestimarse** la causal de improcedencia hecha valer por el PAN.

4.1.2. No se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada

Este Tribunal **desestima** la actualización de la causa de improcedencia invocada, en atención a lo siguiente.

La Sala Superior adoptó el criterio visible en la jurisprudencia 12/2003 de rubro “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”¹⁵, en la que medularmente estableció los elementos indispensables para que opere la figura procesal de la cosa juzgada, señalando puede tener dos tipos de eficacia:

Eficacia directa existe cuando los sujetos, objeto y causa de la nueva controversia son los mismos en el segundo o ulterior juicio, en cuyo caso la materia del segundo o posterior asunto queda plenamente decidida con el fallo del primero.

Eficacia refleja se da cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos antes precisados, entre dos o más litigios, existe identidad en lo sustancial o dependencia jurídica entre ambos asuntos, por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo o posterior, de modo que las partes del nuevo juicio quedan vinculadas, de manera indubitable, con lo resuelto en la primera ejecutoria.

Tanto la Corte, como los tribunales colegiados se han pronunciado en forma similar, es decir, en el sentido de establecer a través de criterios jurisprudenciales, cuáles son los elementos que deben presentarse para tener por actualizada la institución de la cosa

¹⁵ Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11.



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION DE
MEXICO SECRETARIA GENERAL
RECORD DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES Y
RECONSTITUCION



juzgada, así como la distinción entre la eficacia directa y la eficacia refleja¹⁶.

Así, tal como se analizó en la sentencia recaída al SRE-PSC-4/2019, en dichos criterios se ha establecido que **dicha institución debe ser entendida bajo los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica**, guardando relación con la inmutabilidad de lo resuelto previamente y, en esa tesitura, conforme a las circunstancias particulares de cada caso, puede ser que se trate de una eficacia directa –al existir una identidad respecto a las partes, el objeto y la causa–, o bien, una eficacia indirecta o refleja –cuando no se cumple con dicha identidad tripartita–, y en virtud de un vínculo sustancial entre uno y otro procedimiento o juicio, es que el órgano resolutor debe asumir los razonamientos medulares de la sentencia previamente dictada, con la finalidad primordial de evitar fallos contradictorios.

En ese contexto, se ha establecido que deben concurrir los siguientes elementos: **a)** la existencia de un proceso resuelto previamente; **b)** la existencia de otro proceso en trámite; **c)** que los objetos de ambos procedimientos sean conexos, es decir, que se encuentran estrechamente vinculados o tienen una relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; **d)** que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; **e)** en ambos debe presentarse un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; **f)** que en la sentencia previa se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico; **g)** que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

Derivado de lo anterior, este Tribunal considera que en el caso concreto no se actualiza la figura procesal en comento, a partir de lo siguiente:

a. La existencia de un procedimiento previamente resuelto

¹⁶ Algunos de dichos criterios se contienen en la tesis I.6oT.28 K Tribunales Colegiados, de rubro "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE", así como en la tesis 2ª./J.198/2010 Segunda Sala, de rubro "COSA JUZGADA INDIRECTA O REFLEJA. SU EFICACIA DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO".



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE JUS
AUS SECRETARIA DE
SECCION DE FRENTE D
CONSTITUCIONALES
— INCOESTITUCI

La cadena impugnativa que concluyó en la sentencia al SUP-JRC-5/2019 y acumulados es la siguiente.

El veintidós de enero, Blanca Estela Fabela Dávalos presentó medio de impugnación para controvertir la convocatoria, alegando que la duración del cargo a gobernador establecida en el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, resultaba una restricción no idónea, desproporcionada, irracional e innecesaria que transgredía su derecho político-electoral a ser votada, ya que el mandato en la gubernatura debería de ser de seis años y no de dos.

Este Tribunal justificó la procedencia del recurso de inconformidad RI-18/2019 argumentando que la recurrente no tuvo una vía para impugnar la disposición transitoria controvertida, sino hasta el momento en que aplicó como aspirante a la gubernatura de Baja California y que la Comisión Estatal la aceptó como precandidata, siendo que, al analizar el fondo, se concluyó que la convocatoria se ajustaba al marco normativo, sin embargo, se ordenó al Consejo General emitir una adenda en la que ampliara la duración del mandato del gobernador electo de dos a cinco años, ello por no cumplir con los principios de progresividad y pro persona, al restringir el derecho de ser votado sin considerar la afectación de menor grado.

Inconformes con tal determinación, diversos partidos políticos y ciudadanos interpusieron juicios ciudadanos así como de revisión constitucional electoral, los cuales fueron resueltos por la Sala Superior el pasado veintisiete de marzo, en el índice SUP-JRC-5/2019 y acumulados, mediante el cual determinó revocar el recurso de inconformidad RI-18/2019 y acumulados, toda vez que este Tribunal debió sobreseer el medio de impugnación por ser notoriamente extemporáneo, al tomar como acto concreto de aplicación del Decreto 112, la Convocatoria del Instituto publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el cuatro de enero, razón por la que el plazo para controvertirla habría corrido del seis al diez de enero.

b. La existencia de otro procedimiento en trámite, a la fecha de emisión de la sentencia que le vincula



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACÍA DE LA
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITE D
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUCI



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El medio de impugnación que nos ocupa fue interpuesto el tres de abril por Jaime Bonilla Valdez, mediante el cual se controvertió, por un lado, el Acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 del Instituto, emitido el treinta de marzo del año en curso, el cual debe considerarse como el acto de aplicación concreto del Decreto 112, por causarle perjuicio real y directo a su esfera de derechos fundamentales, tal como su derecho político-electoral a ser votado para el periodo que constitucionalmente establece el artículo 44 de la Constitución local –seis años–.

Por otra parte, en el medio que aquí se resuelve se cuestiona la omisión del Congreso de notificar de manera fehaciente a los Ayuntamientos de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, el dictamen de adiciones y reforma a la Constitución local que derivó en el referido Decreto 112.

c. **Que los objetos entre ambos procedimientos sean conexos, es decir, que se pueda advertir una relación sustancial de interdependencia, de tal magnitud que, exista la posibilidad de fallos contradictorios**

AFERENTE A LA
ICA DE LA NAL
AL DE ACUERDOS
CONTRAVENCIONALES
DE ACCIONES DE

respecto, esta autoridad advierte que en ambos medios de impugnación se controvierte el periodo que durará el cargo de gobernador electo en 2019, es decir, que el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 trastoca lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución local; es decir, se denuncia la presunta vulneración al derecho político-electoral de ser electo, en su modalidad de desempeñar el cargo por un periodo de seis años.

Ahora, pese a que la Litis pareciera ser la misma, es importante resaltar que en la sentencia recaída al SUP-JRC-5/2019, la Sala Superior analizó la oportunidad con la que fue interpuesto el medio de impugnación primigenio, concluyendo que *“si se considerara que la convocatoria incide permanentemente en la esfera jurídica de la ciudadanía en general, y de la militancia que **no acredite alguna calidad específica como participante en el proceso**, se estaría posibilitando que los mismos controviertan continuamente directrices o procedimientos que sólo pudieran implicar alguna afectación real a los **participantes directos en la contienda**, lo cual en definitiva pudiera incidir en el debido desarrollo del propio proceso...”*.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
SECCION DE TRAMITACION
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

En el caso concreto, **Jaime Bonilla Valdez es candidato a gobernador del estado, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California**, es decir, es un participante directo en la contienda que controvierte la afectación real e inminente a un derecho político-electoral, como lo es el ocupar y desempeñar el cargo para el cual contiende.

d. Que las partes del segundo procedimiento, hayan quedado vinculadas con la sentencia del primero

Entre el juicio de revisión constitucional electoral 5/2019 y acumulados y el presente medio de impugnación no existe identidad en las partes involucradas, siendo promoventes Blanca Estela Fabela Dávalos y Jaime Bonilla Valdez, respectivamente.

Aunado a que, la determinación del procedimiento previo tuvo como finalidad revocar el pronunciamiento de fondo de este Tribunal en la sentencia recaída al RI-18/2019 y acumulados; por tanto, este último no quedó vinculado al quedar sin materia el recurso primigenio.

e. En ambos procedimientos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión

Es cierto que, se somete a consideración de este órgano jurisdiccional, la presunta vulneración al derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de ocupar y desempeñar el cargo para el cual contiende, en contravención al artículo 44 de la Constitución local, en los cuales, la causa de pedir guarda identidad en el sentido de que la infracción vulnerada es la misma en ambos medios.

A pesar de ello, la calidad con la que se ostenta cada una de las partes actoras es distinta y el acto de aplicación del Decreto 112 es diverso; es decir, en el SUP-JRC-5/2019 y acumulados (RI-18/2019) la actora se ostentó como precandidata al cargo de gobernadora de la entidad, considerando que el acto de aplicación fue la aceptación de su precandidatura por parte de la coalición. Mientras tanto, en el presente medio el actor se ostenta como candidato al cargo referido, considerando que el acto de aplicación fue el acuerdo mediante el



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
REGION DE TRAMITI
CONSTITUCIONALE
INCONSTITU



cual el Consejo General tuvo por válida la procedencia de su candidatura al referido cargo.

En ese sentido, si bien la publicación de la convocatoria incidió en la esfera jurídica de diversos sujetos, entre ellos, los militantes de los partidos políticos que estaban interesados en obtener una candidatura por la vía partidista¹⁷, también es cierto que en el caso que ahora se analiza sí se acredita una calidad específica como participante directo en el proceso; a saber, candidato al cargo de Gobernador del Estado de Baja California, en el proceso electoral en curso.

f. En la sentencia se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico.

Tal como se ha referido con antelación, debe aplicar *mutatis mutandi* el razonamiento de la Sala Superior plasmado en la foja 36 del SUP-JRC-5/2019 y acumulados, específicamente:

“(...)

Es decir, en principio, los militantes de los partidos políticos y demás personas que aduzcan algún interés en participar por algún cargo de elección popular, **sin que acrediten alguna calidad específica como participantes directos en el proceso**, deben controvertir las reglas de la convocatoria, desde que ésta entra en vigor...”

En ese sentido, al ser Jaime Bonilla Valdez candidato al cargo de gobernador, postulado por la Coalición, registrado ante la autoridad administrativa electoral de conformidad con la normativa electoral y, consecuentemente, tener acreditada la calidad específica como participante directo en el proceso, **la convocatoria no es el único acto de aplicación del Decreto 112 que le depara perjuicio en su esfera jurídica de derechos como contendiente al cargo.**

g. Para la solución del segundo procedimiento se requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado

¹⁷ Foja 33 del SUP-JRC-5/2019 y acumulados.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
SECRETARÍA DE
LEGISLACIÓN Y JUSTICIA
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
BUEENOS AIRES

En el caso concreto, este Tribunal determina que el medio de impugnación que se analiza es oportuno porque el actor sí ostenta la calidad específica de candidato, es decir, de un participante directo en el proceso **cuya afectación a su esfera jurídica de derechos puede actualizarse en distintos momentos**, diversos a la publicación de la convocatoria emitida por el Consejo General. De esta forma se deja evidenciado que el examen de los planteamientos del presente medio en ningún sentido variaría el criterio asumido en el SUP-JRC-5/2019 y acumulados -tal cuestión será objeto de análisis con mayor precisión en el estudio de la siguiente causal de improcedencia-.

Con base en los razonamientos anteriormente vertidos, se concluye que si bien existen hechos que concurren, no se acredita la existencia de los elementos necesarios para que opere válidamente la figura jurídica de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que, respecto a la procedencia, Jaime Bonilla Valdez sí es un participante directo en el proceso electoral en curso y, por lo que hace a las consideraciones de fondo, al ordenar la Sala Superior el sobreseimiento del expediente RI-18/2019 y acumulados, no hay impedimento lógico-jurídico que disuada el estudio respecto a los actos aquí combatidos. De ahí que, no se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada.

4.1.3. La presentación de la demanda es oportuna, por lo que no se tratan de actos consentidos

Los terceros interesados y el Congreso del Estado argumentan que el medio de impugnación no fue presentado con oportunidad porque el primer acto de aplicación del Decreto 112 fue la convocatoria a elecciones ordinarias para el periodo 2018-2019 emitida por el Consejo General y no la procedencia de su registro como candidato al cargo de gobernador, postulado por la Coalición.

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que debe **desestimarse** la causa de improcedencia invocada porque, contrario a lo que sostienen, el medio de impugnación sí fue presentado en tiempo, tal como se evidencia a continuación.

Derivado de la especialidad de la materia es que, si bien se comparte reglas comunes con otras, como lo es por ejemplo, los principios que rigen en el derecho penal y al derecho administrativo



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE JU:
SECRETARIA GEN:
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

sancionador son aplicados en los procedimientos sancionadores en materia electoral.

Igualmente cierto es que, tales reglas y principios deben ser aplicados cambiando lo que se deba de cambiar atendiendo a las particularidades propias del derecho electoral.

Así las cosas, se advierte que en materia común –amparo- la Corte ha sostenido que para controvertir de manera oportuna una norma se debe atender en primer término de si se trata de una norma de carácter autoaplicativa o heteroplicativa.

Se diferencian ambos tipos de norma, según la Corte a partir de la necesidad de una condición externa, es decir, si su aplicación está condicionada o no a un acto de aplicación para tener efectos, o bien, a partir del momento en que producen los efectos.¹⁸

Así, las primeras, se caracterizan por tener efectos que ocurran en forma incondicionada, esto es, que sin necesidad de un acto de aplicación impliquen una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos:

A FAVOR DE
ICIA DE
AL DE A
COMUN
DE AC

a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante;

b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o

c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante.

¹⁸ Criterio sostenido Tesis: 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), con número de registro: 2006964, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO" publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 149.



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE JI
SUBSECRETARÍA GEN
ECCION DE TRÁMITE
ONSTITUCIONALES
INCOSTITUC

Mientras que, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas.

De tal forma que, en el caso de las normas autoaplicativas, basta con su sola emisión para poderse controvertir, mientras que para las normas heteroaplicativas deben ser impugnadas conjuntamente con el primer acto de aplicación.

Así, la regla general es que una norma puede ser combatida por su sola emisión, o bien derivado del primer un acto de aplicación concreto que trasgreda la esfera jurídica del gobernado, la cual tiene origen en el artículo 73, fracción XII, párrafo segundo, de la abrogada Ley de Amparo.¹⁹

La excepción a dicha regla, es por ejemplo en materia penal, en que la procedencia del amparo contra leyes heteroaplicativas presenta determinadas peculiaridades, en virtud de que el cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma legal que establece un tipo penal, puede plantearse con motivo de su acto de aplicación, susceptible de ocurrir para efectos del amparo, al dictarse la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y la sentencia definitiva, resoluciones que ostentan características particulares que condicionan y restringen la libertad personal en distintas fases del procedimiento, lo que propicia que quien se ubique en tales supuestos, esté **en aptitud discrecional** de impugnar la

¹⁹ Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:

III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas;
(...)

VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio;

XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnante en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

(...)



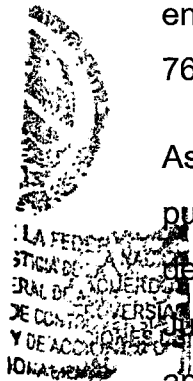
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J.
SUBSECRETARÍA GE
SECCIÓN DE TRÁMIT
CONSTITUCIONALE
INCOSTITU



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

inconstitucionalidad del precepto relativo en cualquiera de las mencionadas etapas, inclusive, con motivo del dictado de la sentencia definitiva, sin que en este último caso pueda estimarse consentida la aplicación de la ley, por tratarse de un segundo o ulterior acto de aplicación.

Lo anterior fue sostenido por la Segunda Sala de la Corte, bajo el razonamiento que en ese tipo de asuntos no rige para la presentación de la demanda de amparo contra leyes el término de quince días siguientes a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado, a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, o el diverso de treinta días contados desde que inicie la vigencia de la ley, a que alude el artículo 22, fracción I, de la propia ley, ya que su acto de aplicación involucra la libertad del agraviado y son atendibles los principios que en la materia recoge dicha ley, entre otros, en sus artículos 16, 17, 22, fracción II, 37, 73, fracción X, 76 bis, fracción II, 160 y 161.²⁰



Así, otra excepción a la referida regla general es la materia electoral, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución federal, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están facultadas para resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, lo cual se decanta en la atribución de este Tribunal de realizar el estudio respectivo, en cuyas sentencias los efectos se limitarán al caso concreto sometido al conocimiento y resolución de los citados órganos jurisdiccionales, lo que no permite los efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad.

En ese sentido, es conforme a Derecho considerar que las leyes electorales son susceptibles de control constitucional por las Salas del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, tantas veces como sean aplicadas; por tanto, la aludida facultad de las Salas se puede ejercer con motivo de cualquier acto de aplicación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, **pues no existe**

²⁰ Criterio sostenido en la Tesis 2a. CLIV/2001, con registro: 189055, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. NO PUEDE CONSIDERARSE CONSENTIDA SU APLICACIÓN AUNQUE SU INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNE CON MOTIVO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL."



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GEN:
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

disposición alguna que establezca que solamente procederá con motivo del primer acto de aplicación.

Ello, pues conforme al sistema integral de medios de impugnación en la materia, todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se deben sujetar a los principios de constitucionalidad y de legalidad.

Tal criterio fue sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 35/2013, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN", aprobada en sesión pública celebrada el doce de septiembre de dos mil trece, por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y en consecuencia se declaró formalmente obligatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 232, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que a la fecha la Sala Superior haya decretado su interrupción o pérdida de vigencia.

Cabe resaltar que de las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia citada²¹, se desprende que la Sala Superior, razonó:

De la interpretación literal, sistemática y funcional del artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte, que la facultad para inaplicar leyes en casos concretos, por considerar que son inconstitucionales, puede ejercerse con motivo de cualquier acto de aplicación, pues en la constitución no existe restricción al respecto.

El artículo 99, párrafo sexto, constitucional, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 constitucional, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución y que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esa facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio, debiendo en tal supuesto informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha disposición establece la facultad de control constitucional concreto, sin limitar el acto de aplicación respecto del cual procede, con lo cual se sigue que dicha facultad se estableció en forma amplia y no restrictiva.

A *contrario sensu*, en el precepto en estudio no se precisa que la facultad de control constitucional proceda solamente con motivo del primer acto de aplicación, ni

²¹ SUP-JRC-27/2009, SUP-JRC-10/2012 y SUP-REC-154/2012.



POWER JUDICIAL
SUPREMACY
SUBSECRETARY
SECTION



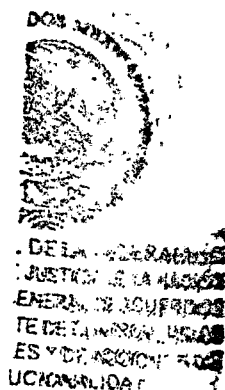
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

establece que será improcedente ejercer esa facultad en caso de que se impugnen actos ulteriores al primero en el que se aplique una norma tildada de inconstitucional, razón por la cual, se entiende que fue voluntad del constituyente permanente admitir el control constitucional concreto de leyes electorales con motivo de cualquier acto de aplicación, así sea el primigenio o uno posterior.

Una interpretación diferente a la anterior llevaría a sostener que el control constitucional concreto en materia electoral procede solamente contra el primer acto de aplicación de una ley tildada de inconstitucional, creando con ello una restricción no prevista por el constituyente ni por el legislador.

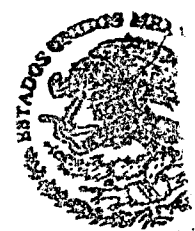
Es así que en la Constitución se establece la facultad en estudio, sin regulación o prescripción que restrinja su ejercicio únicamente en contra del primer acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional.

La posibilidad de controvertir la constitucionalidad de leyes en materia electoral con motivo de cualquier acto de aplicación, es acorde además, con el sistema integral de medios de impugnación electoral, los cuales, de conformidad con los artículos 41, apartado D, fracción VI, constitucional y 3, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten, invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, lo que significa que los actos legislativos son susceptibles de impugnarse tantas veces sean aplicados y se cuestione su constitucionalidad.



Así, del razonamiento transcrito, se colige que la posibilidad que sea controvertida una norma en materia electoral tantas veces sea aplicada, atiende a la finalidad del sistema de medios de impugnación de velar por la constitucionalidad y legalidad de todos los actos de autoridad, así como al acceso a la justicia previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución federal, así como los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que disponen que todas las autoridades de la Nación están obligadas a otorgar una vía para hacer valer los derechos político-electorales.

Interpretarlo en sentido contrario, es decir, limitar a la ciudadanía a que únicamente pueda controvertir el primer acto concreto de



DER JUDICIAL DE L
REMA CORTE DE JUSTI
SECRETARÍA GENER
CIÓN DE TRÁMITE DE
STITUCIONALES Y
INCOSTITUC

aplicación de una norma que se estima inconstitucional o incluso inconveniente sería violatorio de los derechos fundamentales, porque equivaldría a denegar el acceso a la justicia.

Al respecto, es dable considerar que la Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano a prever un medio de impugnación a través del cual se garantice de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido.²²

Máxime que en materia electoral no es aplicable la ley de amparo, pues como se observa del artículo 8 de la Ley Electoral local, a falta de disposición expresa en dicha Ley, son normas supletorias de la Constitución federal, la Constitución local, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los criterios obligatorios que dicte este Tribunal, la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los acuerdos del Instituto Nacional Electoral o del Consejo General dictados dentro del ámbito de sus competencias, y a los principios generales del derecho.

Tal criterio ha sido sostenido, por la Sala Superior, además de la jurisprudencia antes señalada, en el recurso de reconsideración SUP-REC-82/2018²³ que confirmó el diverso juicio SCM-JDC-75/2018, en el que se declaró la inaplicación de una disposición, derivado de un acto diverso al primero.

En dicho recurso la Sala Superior determinó que no le asistía la razón al entonces recurrente, en lo referente a que la Sala Regional soslayó que se emitió una convocatoria y lineamientos en materia de aspirantes a candidatos independientes -primer acto de aplicación de la disposición considerada como inconstitucional-, actos que fueron aceptados y consentidos en todas sus consecuencias por los aspirantes que se sometieron a las reglas establecidas, entre ellas, el porcentaje y el plazo cuestionados, siendo el acto controvertido uno posterior a éstos.

²² Caso Castañeda Gutman, sentencia de 6 de agosto de 2008 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 231, localizable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf.

²³ Magistrado Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, aprobado por unanimidad de votos.



PODER JUDIC
SUPREMA CORT
SUBSECRETAR
SECCIÓN DE T
CONSTITUCI
INC



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Lo anterior, bajo el razonamiento que la solicitud inicial fue motivada por cuestiones que no eran previsibles al momento de emitir la convocatoria, sino a situaciones generadas en la medida que transcurría el plazo para recabar el apoyo ciudadano, lo que, en concepto de la aspirante, se traducían en obstáculos para lograr el cumplimiento del requisito legal en cuestión, por lo que consideró que era necesario el ajuste del porcentaje de firmas y el plazo, a fin de hacer viable su registro como candidata independiente.

Es aplicable el precedente al caso concreto puesto que el conocimiento de las irregularidades fue posterior a la emisión de la convocatoria. Además que, a la fecha de la solicitud, el plazo de gestión de la Gubernatura era de cinco años, lo cual fue modificado en el acuerdo controvertido a dos años.

Por consiguiente, se concluye que la regla genérica establecida en la Ley de Amparo, no es aplicable en materia electoral, pues la inaplicación de una norma por ser inconstitucional sólo puede ser declarada al caso concreto, lo que implica que al no tener efectos generales, toda persona puede impugnar una ley en el momento en que le afecta, lo que puede suceder en el segundo, tercero u otro acto, sin que ello derive al consentimiento de la norma combatida.

En el presente caso, se trata de un acto administrativo, por lo que no es aplicable la regla genérica establecida en la Ley de Amparo, sino la regla específica que establece que la inaplicación de una norma por ser inconstitucional sólo puede ser declarada al caso concreto.

Sirve de sustento la tesis VI/98, de rubro "CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ANTERIORES APOYADOS EN LOS MISMOS FUNDAMENTOS QUE EL RECLAMADO", en la cual se indica que *"la circunstancia de que las autoridades electorales emitan los actos correspondientes a una elección determinada, con base en una incorrecta interpretación o aplicación de las disposiciones legales conducentes, sin que las personas afectadas los hayan combatido en su oportunidad, a través de los medios de impugnación previstos por las leyes, no constituye motivo legal para considerar consentidos los nuevos actos que se emitan..."*.

En ese sentido, es dable afirmar que el consentimiento de un acto específico sólo trae como consecuencia que ese acto en particular no se pueda impugnar, pero no provoca la inimpugnabilidad de los actos posteriores, como acontece en el caso concreto.



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE C
ONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCION

Además, la autoridad debe considerar que de todas las lecturas posibles de la expresión “acto de aplicación”, se debe seleccionar aquella que **maximice el ejercicio de derechos humanos, especialmente, el de acceso a la tutela judicial efectiva con relación al de sufragio efectivo**²⁴.

Aunado a lo anterior, tal como lo razonaron los Magistrados Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón en el voto concurrente conjunto de la sentencia SUP-JRC-5/2019 y acumulados, la pretensión de controvertir la aplicación de un artículo transitorio de un decreto de reforma constitucional, no era viable mediante un medio de control constitucional sino hasta el momento en que aplicó como aspirante a la Gubernatura y que la Comisión Estatal de la coalición aceptó la precandidatura. En el caso concreto, la controversia es viable desde que el recurrente aplicó como candidato a gobernador y el registro fue procedente ante el Consejo General.

En ese orden de ideas, toda vez que el acto que le causó afectación al actor fue la aprobación del acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019, mediante el cual el treinta de marzo de este año, el Consejo General resolvió la procedencia de la solicitud del registro de Jaime Bonilla Valdez como candidato a la Gubernatura del Estado, postulado por la Coalición.

Por tanto, el plazo para impugnarlo fue del treinta y uno de marzo al cuatro de abril del presente año, siendo que el medio de impugnación se interpuso el tres de abril, por lo que es evidente que fue interpuesto en el plazo establecido en el artículo 295 de la Ley Electoral.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que, de los escritos de terceros interesados se desprende el disenso específico contra la oportunidad del medio de impugnación, por ser hechos de los que pudo haber tenido conocimiento el candidato de manera previa.

En el caso concreto, debe tenerse en consideración que el recurrente Jaime Bonilla Valdez no tenía manera de conocer sobre la existencia de irregularidades en el procedimiento de modificación

²⁴ Criterio sostenido por la Sala Superior en la sentencia recaída al expediente SUP-REC-72/2015.



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE D.
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

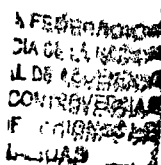


TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

de la Constitución local, toda vez que en dos mil catorce fungía como diputado por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión²⁵, por lo que todo lo atinente al proceso legislativo de mérito no fue de su dominio al no haber sido un hecho público ni notorio, como tampoco haber sido recogido por la comunicación social, por ejemplo.

Ni en los autos que obran en el expediente **existe una constancia que avale o que dote de certeza a este órgano colegiado**, acerca del conocimiento oportuno (previo) que pudo haber tenido el actor respecto de los vicios en el procedimiento legislativo, cuyo conocimiento existió a partir de las resoluciones de los amparos indirectos promovidos por los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, mismos que al ser emitidos por órganos de justicia federales, en ejercicio de sus facultades, jurisdicción y competencia, constituyen documentales públicas.

Lo anterior se corrobora precisamente de la afirmación que hace en su escrito de demanda, de lo que no es posible desprender algún conocimiento previo que se derive válidamente de las reglas de la lógica, la sana crítica o la razón.



Bajo esa tesitura no sería dable dotar al promovente de la carga de presentar una impugnación previa si no existe certidumbre respecto a si tuvo acceso a las documentales generadas durante el procedimiento legislativo o, en su caso, en la sustanciación y resolución de los amparos indirectos de mérito.

Sirve de sustento a *ratio essendi* de las sentencias SCM-JDC-285/2018 y SCM-JDC-286/2018, así como la jurisprudencia 8/2001 de rubro: "CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO", en las que se señala que cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo, en virtud de que ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento.

Por consiguiente, al no acreditarse mediante una constancia que avale o que dote de certeza a este Tribunal acerca del conocimiento

²⁵ Cargo que abarcó de dos mil doce a dos mil quince.



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

oportuno que pudo haber tenido la parte actora de los hechos que alega como irregulares, es que se tiene como fecha cierta a partir de su escrito de demanda.

4.1.4. Imposibilidad jurídica para modificar disposiciones constitucionales fundamentales

El PAN, en su carácter de tercero interesado aduce que existe imposibilidad jurídica para modificar el plazo de la gubernatura porque el artículo 105, fracción II de la Constitución federal prohíbe que se modifiquen disposiciones jurídicas constitucionales fundamentales de carácter electoral.

Dicha causa de improcedencia debe tenerse por **desestimada** en atención a que, suponiendo sin conceder, que la violación que aducen los terceros interesados en el supuesto de que se estime afectado algún derecho sustancial, ésta no podría considerarse como determinante.

En ese sentido, la determinación a la que se arrije respecto al presente medio de impugnación, **no conlleva la posibilidad de cambiar o alterar el desarrollo del proceso electoral** y mucho menos el resultado final de las elecciones, ni la creación de una situación concreta que vulnere algún derecho en beneficio del recurrente, al **no modificar regla alguna de cualquiera de las etapas del proceso electoral local ordinario en Baja California y**, consecuentemente, tampoco se vulnere el principio de certeza en el proceso en cita.

En ese entendido, para que pudiera cambiar el desarrollo del proceso electoral, tendría que haberse señalado en el acto impugnado o advertirse de sus efectos que uno de los contendientes obtenga una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral. Sin embargo, como se observa, ni la convocatoria, ni el artículo Octavo Transitorio, ni el acuerdo IEEBC-CG-PA37/2019 modifican o alteran etapa, regla o momento del proceso comicial local y, por tanto, tampoco atenta contra lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución federal.

Sirve de apoyo lo señalado en la Jurisprudencia 15/2002, del rubro: "VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN



CONSTITUCIONAL
SUPREMACÍA DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA DE CUBA
INSTITUCIONES
CONSTITUCIONALES



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO".

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia P/J.87/2007 del Pleno de la Corte de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES', CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" se estipula que del procedimiento de creación de dicha norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Corte y que ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el principio de certeza que debe observarse en la materia.



LA FECHA DE
TICIA A LA
RAL DE AS
E CONTRA
DE ACCI
SUBORD

Sin embargo, también señala que la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución federal **no puede considerarse como tajante**, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en materia electoral ya sea dentro del plazo de noventa días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse o una vez iniciado éste, **con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales fundamentales"**.

Con relación a dicha expresión, en la tesis P./J. 98/2006, de rubro "CERTeza EN MATERIA ELECTORAL.EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO", el Alto Tribunal indicó que el **principio de certeza** en materia electoral consiste en que al iniciar el proceso electoral los participantes deben conocer las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público.

Además, se refirió a las **modificaciones legales fundamentales** como aquellas que alteran sustancialmente disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral.



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
RECURSOS DE AMPARO Y
INCONSTITUCIONALIDAD

En este orden, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio o de **aplicación contingente**, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente.

Por tanto, una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso.

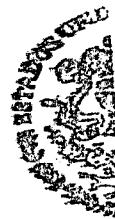
Por consiguiente, si las modificaciones tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado.

4.15. Expectativa de derecho

El PAN y PRI en sus escritos de comparecencia como terceros interesados argumentan que no se puede considerar que existe una **afectación** a la esfera de derechos del actor dado que con su registro como candidato a la gubernatura del estado de Baja California en el proceso electoral 2018-2019, sólo se genera una expectativa de derechos y no se está ante un derecho adquirido.

Ahora bien, para dar contestación a dicho argumento se debe considerar en primer lugar que la Sala Superior al resolver el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-29/2019 determinó que existían diversos momentos en los cuales un gobernado podía promover un medio de impugnación en contra de un acto que considerara que afectaba su esfera jurídica, por lo que, en ese contexto determinó que uno de los momentos en los cuales el actor podía controvertir el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización respecto de los gastos generados en la etapa de captación de apoyo ciudadano y precampañas, era al momento de la notificación de su registro como aspirante a candidato independiente.

Es decir, de dicho criterio se advierte que la Sala Superior considera que a partir de que se le otorga su registro como candidato independiente, se genera un acto de molestia pues se considera que es uno de los momentos en los cuales puede impugnar, por ser



PODER JUDICIAL
SUPLEN. CORTE D
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRA
CONSTITUCION
INCOST



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

aquél en el cual se actualiza un interés jurídico real sobre un acto que el candidato considera que afecta su esfera de derechos, por lo que, en el caso concreto, contrario a lo aducido por los actores y tomando como referencia lo resuelto por la máxima autoridad jurisdiccional electoral en el juicio antes referido, Jaime Bonilla Valdez se encuentra en un momento procesal oportuno, además de contar con interés jurídico real para impugnar la reducción del periodo previsto en el artículo 44 de la Constitución local, es decir, el de gobernador ya que es el cargo por el que se le otorgó el registro y por el cual contiende.

Bajo esa tesitura, este órgano jurisdiccional considera que bajo el principio *pro persona* y con el fin de respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia, es éste el momento para conocer y resolver la presente controversia relativa a la duración del cargo que deberá ejercer el candidato electo como gobernador del estado en el actual proceso electoral local ordinario.

DE LA
JUS
DE LA NAC
NERAL EL ACU
E DE CO
BY EL JU
CIONATIDAN

Ya que si bien, el actor señala en su escrito de demanda que conforme al criterio de la Sala Superior antes referido y otros, el último momento para impugnar el presente acto controvertido sería la declaratoria de validez y otorgamiento de constancia de mayoría al candidato electo, este órgano jurisdiccional estima que si se considerara ese momento como el oportuno para impugnar el periodo del cargo de gobernador electo, se atentaría contra uno de los principios fundamentales de la materia electoral, es decir, el de certeza jurídica.

Ello porque en el caso, los ciudadanos de Baja California al emitir su voto estarían ejerciendo dicho derecho con el conocimiento de estar votando a favor de un candidato a la gubernatura por dos años, por lo que si se considerara que el momento procesal oportuno para impugnar el presente acto controvertido fuese hasta la declaratoria de validez y constancia de mayoría, y en su caso se determinara que efectivamente el cargo debiera ser ejercido por mayor plazo, se vulneraría el principio de certeza de los electores quienes al ejercer su voto activo lo hicieron con el conocimiento del ejercicio del cargo por dos años y posteriormente se cambiara dicho periodo.

En consecuencia, por una parte este órgano jurisdiccional local determina que no se está ante una expectativa de derecho como lo



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y D
INCONSTITUCIONALES

hacen valer los comparecientes como terceros interesados, ya que con el otorgamiento de la constancia de candidato a cargo de gobernador del ahora actor se actualiza un acto de aplicación de la norma que considera vulnera su esfera derechos.

Además, el momento para conocer y resolver el planteamiento del actor respecto del plazo que deberá ejercer el candidato electo a la gubernatura del estado es éste ya que si se hiciera con posterioridad, como ya se explicó, se correría el riesgo de vulnerar uno de los principios fundamentales de la materia electoral, específicamente el relativo a la certeza respecto de voto activo ejercido por la ciudadanía de Baja California.

4.2. Procedencia respecto al acuerdo del Instituto

El PRI señala que el acto reclamado deriva de manera directa de la ejecución de una sentencia dictada por la Sala Superior, por lo que estima que es improcedente ya que los fallos emitidos por dicho órgano jurisdiccional son definitivos e inatacables, de acuerdo con lo previsto por el artículo 99 la Constitución federal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Medios, las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son **definitivas e inatacables** y, por tanto, adquieren la calidad de cosa juzgada, con excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración.

Así, de conformidad con la tesis XIX/98 de la Sala Superior, de rubro: "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", improcedencia deriva si en un segundo momento se impugna en un proceso autónomo y no como vía incidental, un acto o resolución en el cual se invoque como causa de pedir el exceso o el defecto en el cumplimiento de una ejecutoria dictada por la Sala Superior.

Cabe señalar que el retrotraer los efectos referidos **no fueron consecuencia de un razonamiento lógico-jurídico respecto al**



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA



estudio de fondo de la sentencia entonces combatida, ya que sólo versó sobre cuestiones procedimentales, así en el presente caso no se está ante una controversia que haya sido analizada previamente por la Sala Superior, máxime considerando que el presente medio de impugnación no controvierte los razonamientos de la sentencia SUP-JRC-5/2019 y acumulados, por tanto no le asiste razón a los terceros ni al Congreso del Estado respecto de la improcedencia del medio, puesto que parten de la premisa errónea de considerar que el acto combatido es el juicio de revisión constitucional señalado.

Además que del escrito de demanda se advierte a *prima facie* - primera vista- que alega la falta de fundamentación y motivación del acuerdo emitido por el Instituto no así la ejecución de la sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-5/2019.

De tal forma que, el análisis de dicho agravio será en el estudio de fondo de la presente ejecutoria, por lo que no resulta atendible el desechamiento solicitado, pues éste no procede con base en argumentos que entrañen la valoración relativa al fondo del asunto, ya que actuar en sentido contrario implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular materia de la controversia, incurriendo en el vicio de petición de principio, que consiste en que se dé por sentado previamente lo que en realidad constituye el punto de debate, haciendo nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución federal.

Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En la que se señala que las causales de improcedencia propuestas deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez.²⁶

²⁶ Con número de registro: 181395, localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004, página 865.



SECRETARÍA DE
JUSTICIA
SECRETARÍA DE
JUSTICIA
SECRETARÍA DE
JUSTICIA
SECRETARÍA DE
JUSTICIA

5. TERCERO INTERESADO

Durante la tramitación prevista en el artículo 289, en relación con el diverso 290, ambos de la Ley Electoral, comparecieron como terceros interesados, PAN, PRI y PMC arguyendo una pretensión contraria a la del actor, con la finalidad de que se confirme el acuerdo, así como lo establecido en el Decreto 112.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1. Planteamiento y resumen de agravios

De conformidad con el principio de economía procesal y porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir el acto impugnado²⁷, así como las alegaciones formuladas por el recurrente²⁸, máxime que se tiene a la vista el expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior que, al realizar el estudio de cada uno de ellos, se realice la síntesis correspondiente.

De una lectura integral y exhaustiva de los motivos de disenso hecho valer por el actor, este órgano jurisdiccional advierte que en realidad lo que pretende impugnar es sólo el transitorio octavo de dicho Decreto, es decir, el relativo a la duración del cargo de la Gubernatura electa dentro del actual proceso electoral local.

Lo anterior, porque el recurrente aduce que la aplicación del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 vulnera su derecho fundamental de ser votado, en su modalidad de ocupar y desempeñar el cargo, por el periodo de seis años establecido en el artículo 44 de la Constitución local.

Es decir, toda vez que existe una presunta contravención a un derecho fundamental y a la luz del criterio contenido en la Jurisprudencia 4/99 emitida por la Sala Superior, de rubro: "MEDIOS

²⁷ Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de título: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO".

²⁸ Por similitud jurídica sustancial y como criterio orientador, se toma en consideración la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 288, del Tomo XII, noviembre 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS".



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUST
SUBSECRETARÍA GENE
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y I
INGOSTTUCIO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", de la lectura integral y cuidadosa de la demanda, se advierte que la intención del actor es:

Pretensión: Que este Tribunal analice la vulneración a un derecho fundamental como lo es el ser votado, en su modalidad de ocupar y desempeñar el cargo, derivado de que dicha reforma limita el ejercicio del cargo a Gobernador a dos años, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución local y en consecuencia, determine la inaplicación del artículo Octavo Transitorio del decreto 112.

Causa de pedir: Como ya se señaló en párrafos anteriores, si bien el actor señala como acto impugnado el Decreto 112 por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución local, se advierte que lo que realmente controvierte es el transitorio octavo de dicho decreto, es decir, el establecimiento del periodo por dos años que durará en su cargo el Gobernador electo en el actual proceso electoral ordinario local en la entidad.

FEDERAL
DE LA NACI
LOS ACUERDO
CONTROVERSI
E ACCIONES DE
VALIDAD

Lo anterior a partir de cuatro motivos de disenso, que se resumen en lo siguiente:

I. Indebida motivación y fundamentación: violación a los principios de irretroactividad y supremacía constitucional

El actor aduce que el acuerdo del Consejo General no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Federal, al estar carente de una fundamentación acorde al caso concreto, dado que al momento de su registro se da con una convocatoria en la cual se establece que el periodo para ejercer el cargo de Gobernador en el proceso electoral local ordinario 2018-2019 sería de cinco años. Sin embargo, en el acuerdo controvertido se tiene una reducción a dos años de duración sin que medie un ejercicio argumentativo o razonamiento alguno.

Añade que con tal determinación se actualiza una retroactividad de la ley en contravención de su derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo dado que el veintisiete de marzo solicitó el registro como candidato a la



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMACIA DE JUST
SUBSECRETARIA GENER
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

Gubernatura del estado de Baja California, cargo que en esa fecha se establecía que quien fuera electo debía ejercerlo por un periodo de cinco años, sin embargo, tres días después a dicha solicitud sin razón alguna ni punto de acuerdo del Consejo General aprobó el registro por el plazo de dos años.

II. Incongruencia interna y externa del Acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019

El recurrente señala que el acuerdo cae en una incongruencia al permitir el registro con reglas de periodicidad del encargo de Gobernador de cinco años, mientras que al momento de la aprobación del acuerdo combatido, se modificó esa periodicidad sin mediar justificación, razonamiento o exponer las razones de tal limitación.

III. Indebida notificación a los ayuntamientos respecto de la reforma derivada en el Decreto 112 del Congreso

El inconforme alega vicios en el procedimiento legislativo, consistentes en que no se notificaron legalmente los oficios por los cuales se pretendía hacer del conocimiento a tres de los Ayuntamientos de Baja California, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate las adiciones y reforma a la Constitución local.

Además, el actor manifiesta que el Congreso local no respetó el plazo de un mes previsto en el artículo 112 de la Constitución local, ya que el once de septiembre de dos mil catorce declaró formalmente la incorporación constitucional relativa a la reforma, siendo esa fecha el límite para que los Ayuntamientos remitieran la votación correspondiente, por lo que señala que no permitió que concluyera el plazo de un mes previsto para recibir las votaciones de los ayuntamientos respecto de la adición y reforma a la constitución local, cuando el Congreso ya había declarado su incorporación.

Por las anteriores consideraciones, el enjuiciable solicita se decrete la invalidez de la reforma del Decreto 112 por no haberse seguido el procedimiento constitucionalmente previsto.

IV. Reducción arbitraria del periodo constitucional del cargo de Gobernador de Baja California (violación al artículo 116,



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SUBSECRETARÍA GENER
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INDOSTITUCIO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

párrafo segundo, fracción IV, inciso n) de la Constitución federal y 44 de la Constitución local)

El recurrente indica que el Decreto 112 impugnado debe considerarse inválido porque ello es contrario a una interpretación histórico-progresiva del proceso de homologación, lo que refiere implica la afectación de los trabajos de negociación entre los partidos políticos, la relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

También arguye que el término "al menos" establecido en el artículo 116, fracción n) de la Constitución federal no estipula la obligación de homologar la totalidad de los cargos a elegir, por lo que el accionante afirma que lo determinado por el Congreso de Baja California, no es idóneo ni proporcional ni necesario pues al establecer que la elección de Diputados y Ayuntamientos tendría verificativo en dos mil veintiuno ya se estaba cumpliendo con el mandato constitucional establecido en el inciso n) de la fracción IV, del artículo 116.

FEDERACI
DE LA NACI
L DE ACUERDO
CONTROVERSIA
DE ACCIONES
NACIONAL

6.2. Puntos a dilucidar y metodología

Cabe señalar que este órgano jurisdiccional resolutor está obligado a realizar la correcta comprensión del medio impugnativo, a efecto de advertir y atender preferentemente lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo.

Por todo lo anterior, es que resulta procedente el análisis de la controversia, a partir del estudio de la presunta violación del derecho fundamental de ser votado, en su vertiente de ocupación y desempeño del cargo a Gobernador, por la temporalidad establecida en el artículo 44 de la Constitución local, a partir del estudio temático siguiente.

De la pretensión y motivos de disenso anteriormente sintetizados, los puntos a dilucidar son:



9 JUDICIAL DE LA FEDI
A CORTE DE JUSTICIA DE
RETA RIA GENERAL DE A
DE TRAMITE DE CONTR
JUCIONALES Y DE ACC
STITUCIONALID

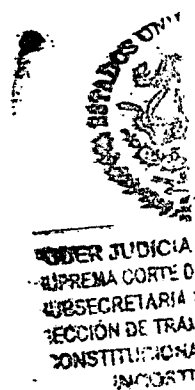
1. ¿Si el Consejo General incurrió en indebida fundamentación y motivación?
2. ¿Si el acuerdo combatido es congruente?
3. ¿Si la validez del Decreto 112, está afectado por vicios en la notificación a los Ayuntamientos?
4. ¿Si la reducción del plazo de gestión es proporcional?

Para ello, se analizaran en el orden propuesto, de manera conjunta las primeras dos interrogantes y en lo individual las restantes, debiéndose precisar que en cada tema se identifica el planteamiento del recurrente y la decisión concreta de este Tribunal con el propósito de presentar una sentencia transparente y congruente con el postulado de justicia abierta.

6.3. Indebida actuación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California

El recurrente hace valer una serie de agravios tendentes a controvertir la indebida actuación del Consejo General del OPLE al aprobar el acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019, toda vez que al momento de presentar la solicitud de registro como candidato a gobernador de la Entidad federativa –el 27 de marzo–, así como la documentación requisitada, estaba vigente una convocatoria para ejercer el cargo de gobernador por cinco años. Sin embargo, al aprobar la procedencia de la solicitud –el 30 de marzo– solamente se hace una somera referencia en el antecedente trece del acuerdo en mención, respecto a que la duración del cargo será por dos años. En ese sentido, el actor hace valer alegaciones tendentes a controvertir dos aspectos del acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 impugnado:

- a) Que no está debidamente fundado y motivado, ya que el Consejo General no razonó la modificación al periodo que durará el cargo de gobernador. En concreto se duele de que:
 - Se actualiza una retroactividad de la ley en contravención a su derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de acceso y desempeño del cargo.
 - Se viola la supremacía constitucional al poner en riesgo el debido funcionamiento y operatividad de las actividades



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE D
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRAJ
CONSTITUCIONA
INCOART

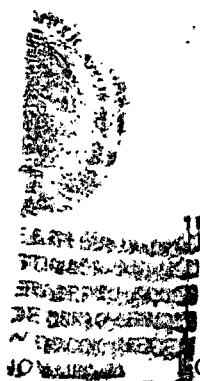


TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

que constitucionalmente tiene obligación de llevar a cabo el Gobernador de la entidad.

b) Que presenta una incongruencia externa e interna porque la mención aislada en un antecedente respecto a que la duración del cargo será de dos años, sin razonamiento alguno en considerandos o puntos de acuerdo, no es suficiente para dotar de certeza y congruencia el documento. Específicamente hace valer una:

- Incongruencia externa porque la autoridad responsable sin justificar su actuar, aceptó documentos que amparan la validez del registro como candidato al cargo de gobernador por un periodo de cinco años, siendo que tres días después aprobó el registro de la candidatura al mismo cargo, pero por un periodo de dos años.
- Incongruencia interna porque no se da una homologación de lo apenas referido en el antecedente trece, con los considerandos y/o puntos de acuerdo, es decir, existe una ausencia de razonamientos a lo largo del acuerdo controvertido.



Los motivos de disenso son **fundados** pero **inoperantes** en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

Esta autoridad jurisdiccional arriba a la convicción de que asiste razón al actor en tanto existe una falta de fundamentación y motivación en el acuerdo combatido, y que ello tiene como consecuencia una incongruencia -interna y externa- en el contenido de éste. Sin embargo, esto no se traduce en una aplicación retroactiva de la ley, puesto que la actuación del Consejo General se dio con base en dos momentos distintos. Primero, al presentarse la documentación y solicitud de registro como candidato, conforme a la convocatoria vigente; y segundo, al acordar la procedencia del registro, de conformidad con los efectos de un diverso juicio resuelto por la Sala Superior (sobreseimiento), por lo que no es posible acordar los alcances pretendidos por el recurrente.

En ese sentido, las razones para considerar **fundado** el motivo de disenso son las siguientes.



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SUBSECRETARIA GENER
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y I
INCONSTITUCIO

El artículo 14 de la Constitución federal impone la restricción a toda autoridad de respetar la esfera de derechos del ciudadano y, consecuentemente, evitar actos de molestia a los gobernados salvo que estén debidamente justificados, sean consecuencia de un juicio o procedimiento seguido con similitud ante los tribunales previamente establecidos —o autoridades administrativas, como en el caso— en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El artículo 16, párrafo primero de la Constitución federal establece la obligación a cargo de todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, exige que los actos de autoridad se emitan solamente cuando exista un respaldo legal para hacerlo (fundamentación); y se haya producido algún motivo para dictarlos (motivación).

El bien jurídico tutelado por ambos preceptos constitucionales es la regularidad constitucional y legalidad en su doble dimensión; que los actos de autoridad tengan como razón o fundamento un precepto normativo ya existente en la normativa; y que dicha razón o fundamento sea exactamente aplicable al caso que se analiza.

Eso tiene por finalidad evitar la arbitrariedad en el actuar de las autoridades, ya que, si éstas no expresan debidamente el precepto jurídico aplicable y el motivo para su aplicación, o bien, no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, se transgrede en perjuicio del gobernado el principio de legalidad previsto constitucionalmente²⁹.

De **manera ordinaria** se produce *falta o ausencia de fundamentación y motivación* cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, existe una *indebida fundamentación* cuando el precepto legal invocado resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una

²⁹ Sirven de apoyo las jurisprudencias de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE" y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE UN ACTO U OMISIÓN QUE, A SU VEZ, ADOLECE DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD".



PODER JUDICIAL DI
SUPREMACORTE DE JU
SUBSECRETARIA GEN
RECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



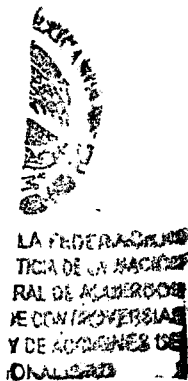
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

incorrecta motivación en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma que se aplica en el caso³⁰.

En el caso concreto, el acuerdo combatido hace referencia al periodo que ocupará el candidato electo a gobernador, en los antecedentes cinco y trece, en el sentido siguiente:

"5. El 24 de febrero de 2019 el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, al resolver el medio de impugnación con la clave RI-18/2019 y acumulados ordenó al Consejo General emitir una adenda a la Convocatoria de Elecciones, en los términos siguientes:

'Derivado de la interpretación de la Base Sexta, inciso a) deberá entenderse. Para efecto de la concurrencia de la elección de Gubernatura del Estado con el proceso electoral 2024, la Gubernatura electa en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.'



En consecuencia, en el Tomo CXXVI, de 08 de marzo del 2019, páginas 17 y 18 del Periódico Oficial se publicó la adenda a la Convocatoria de Elecciones."

...

"13. El 27 de marzo del 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-5/2019 y acumulados, por medio del cual revocó la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California RI-18/2019 y acumulados, referida en el antecedente 5 del presente acuerdo, estableciendo en el numeral (iii) de la 'Decisión y Efectos' lo que a continuación se transcribe:

*'(iii) Se **revocan** todos los actos que se hayan llevado a cabo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Local, destacadamente, pero sin ser limitativo, el acuerdo IEEBC-CG-PA13-2019, de veinticinco de febrero de este año, a través del cual el Instituto Electoral Local emitió la adenda a la Base Sexta de la Convocatoria pública para la celebración de elecciones ordinarias en el Estado de Baja California, durante el proceso electoral 2018-2019.'*

Motivo por el cual, la Convocatoria a Elecciones aprobada por el Consejo General el 28 de diciembre del 2018 queda subsistente, por lo tanto, la Gubernatura a elegir será para

³⁰ Criterio sostenido por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-5/2019.



PODER JUDICIAL D
PRIMERA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GE
RECTOR DE TRAMIT
CONSTITUCIONALES
INCOSTITI

el periodo Constitucional del 1 de noviembre del 2019 al 31 de octubre del 2021."

De lo anterior, se advierte que el acuerdo controvertido adolece de una debida fundamentación y motivación porque el Consejo General tenía la carga de razonar lo acontecido respecto de las diversas actuaciones de las autoridades administrativas y órganos jurisdiccionales en relación con la periodicidad del cargo de la gubernatura, por la cual se acordaba la procedencia del registro. Al no hacerlo, se genera incertidumbre y falta de certeza sobre la temporalidad del cargo.

En efecto, la jurisprudencia ha establecido la importancia de que tanto los órganos jurisdiccionales como las autoridades administrativas emitan actos en los cuales se tomen en cuenta todos y cada uno de los elementos que hacen eficaz la aplicación de la ley a efecto de dotarlos de congruencia en tanto conforman una unidad, lo que en la especie no ocurrió.

La referida línea jurisprudencial relacionada con el principio de congruencia es la siguiente:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE LA COMUNIDAD
JEFATURA EJECUTIVA
OFICINA DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y DE LOS NEGOCIOS LEGALES
Y DE LOS NEGOCIOS LEGALES

**CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE
DE ESTOS PRINCIPIOS.**

Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.

**PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.**

En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN
SUPLENTE DE
SECRETARÍA GEN
ERALE DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONGRUENCIA, SI EL JUZGADOR NO ANALIZA TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LA DEMANDA Y SU CONTESTACION, LA RESOLUCION QUE SE PRONUNCIE CARECE DE. De conformidad con el artículo 81 de la ley adjetiva civil, el juzgador tiene la ineludible obligación de analizar todos los puntos litigiosos que fueron objeto del debate, es decir, lo manifestado tanto en la demanda como en la contestación de la misma, haciendo las declaraciones que pretendieron las partes oportunamente, y así condenar o absolver de acuerdo a lo reclamado, atendiendo desde luego a las probanzas de autos; por tanto, si de las constancias de autos se advierte que dejó de analizar alguna cuestión planteada en la demanda o en la contestación de ésta, tal proceder se traduce en una falta de congruencia que debe mediar entre las resoluciones y las pretensiones deducidas en el pleito.

CONGRUENCIA, CONCEPTO DE. Las sentencias no sólo han de ser congruentes con la acción o acciones deducidas, con las excepciones opuestas y con las demás pretensiones de las partes que se hubieran hecho valer oportunamente, sino que deben ser congruentes con ellas mismas, es decir, **por congruencia debe entenderse también la conformidad entre los resultandos y las consideraciones del fallo.**

LA FEDERACION
DE LA JUSTICIA
ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DE CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES DE
JONALIZACION

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario.

En ese entendido, para dotar de congruencia, certeza y legalidad al acuerdo combatido, el Consejo General del OPLE debió tomar en cuenta, razonar y precisar al menos, los preceptos siguientes:



PODER JUDICIAL DE
PRIMERA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

Fundamentos	Motivación
Artículo 116, párrafo 2, fracción IV, inciso n) de la Constitución General, así como 44 de la Constitución local y Octavo Transitorio del Decreto 112.	<p>Con motivo de la reforma político-electoral federal de dos mil catorce, específicamente el artículo 116, fracción IV, inciso n), de la Constitución federal, dispuso que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se verifique al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales.</p> <p>Atendiendo a dicho mandato y para lograr la concurrencia a nivel local, el legislativo estatal procedió a modificar la Constitución local y mediante Decreto 112, que estableció en su artículo Octavo Transitorio que para efecto de la concurrencia de la elección de la Gubernatura del Estado con el proceso electoral federal de dos mil veintiuno, la persona electa para dicho cargo en dos mil diecinueve, iniciará funciones el primero de noviembre de este año y concluirá el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno; es decir, tendría un mandato reducido de dos años en vez de seis.</p>
Base sexta, inciso a) de la Convocatoria de Elecciones	En atención a lo anterior, el veintiocho de diciembre del año pasado, el Consejo General aprobó la Convocatoria a Elecciones Ordinarias para el periodo 2018-2019, en la que reprodujo en su Base Sexta, inciso a), el artículo Octavo transitorio del Decreto 112 aludido, es decir, el periodo de gestión del gobernador electo en este proceso tendría un mandato reducido de dos años y no de seis .
Sentencia del RI-18/2019 y acumulados	Derivado de los medios de impugnación interpuestos por Blanca Estela Fabela Dávalos y Jorge Alberto Larriau Creel (el cual fue desechado), el Tribunal local confirmó el Dictamen cinco y la "Convocatoria a Elección Ordinaria para el Proceso Electoral 2018-2019", emitida por el Instituto Electoral local; sin embargo, ordenó al Consejo General de ese Instituto emitir una adenda a la citada convocatoria, en la que se insertara la interpretación que realizó el Tribunal Local de la Base Sexta, inciso a), a efecto de dejar sin efectos el artículo Octavo Transitorio y tomar el periodo en cuestión por cinco años .
Sentencia del SUP-JRC-5/2019 y acumulados ³¹	Inconformes con lo anterior, diversos actores políticos interpusieron juicios ciudadanos y de revisión constitucional, siendo que la Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, sobreseyó el recurso de inconformidad RI-18/2019, dejando sin efectos todas las actuaciones derivadas de ésta; por tanto, el periodo en controversia nuevamente quedó en dos años .

De lo analizado es dable afirmar el incorrecto actuar de la autoridad debido a que la carente fundamentación y motivación en el acuerdo combatido trajo como consecuencia la falta de conformidad entre los resultandos y las consideraciones del mismo.

Lo anterior es así porque la obligación del Consejo General del OPLE era dotar de certeza a los aspirantes y candidatos al cargo de

³¹ No es óbice para esta autoridad la existencia del incidente de aclaración de la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-5/2019, promovido por el Partido de Baja California, sin embargo el mismo fue improcedente y, por tanto, no modificó el periodo del cargo sujeto a análisis.



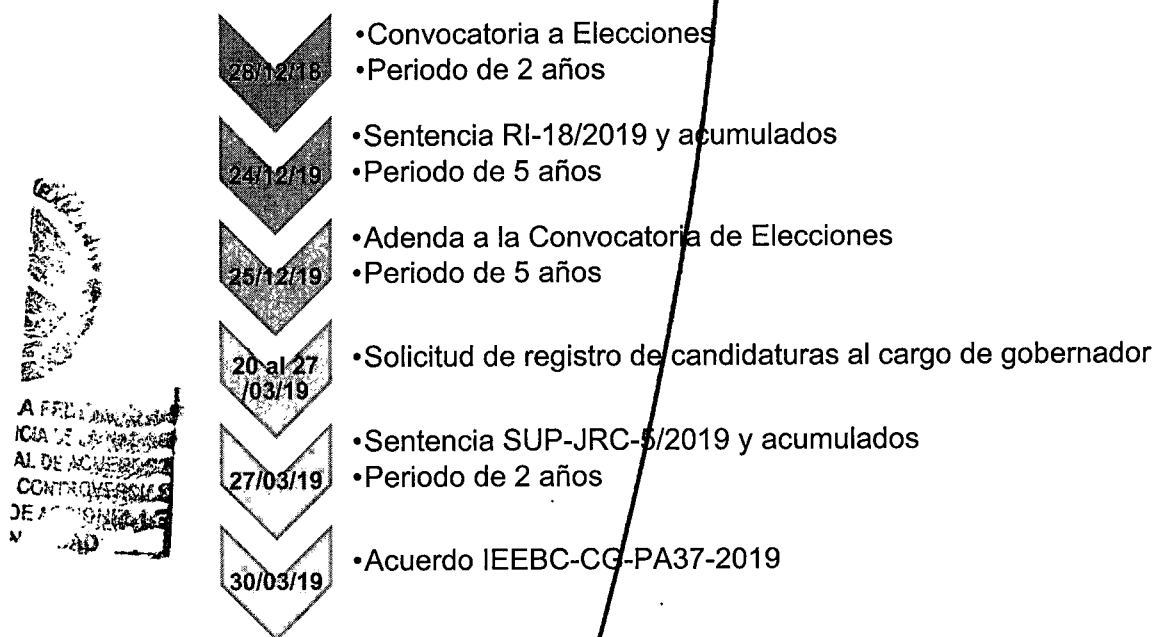
PODER JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE JU:
SUBSECRETARÍA GENE
SECCIÓN DE TRÁMITE C
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCI



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

gobernador de la entidad que habían solicitado el registro de su candidatura respecto del periodo de gestión del cargo por el cual contienden.

Al confrontar temporalmente la actuación de las diversas autoridades que se han pronunciado sobre la duración del encargo de gobernador se pone de manifiesto la existencia de un empalme disruptivo que genera confusión, particularmente en lo concerniente a tres momentos: la solicitud de registro, la sentencia de la Sala Superior y la aprobación del acuerdo IEEBC-CG-PA37/2019 y, consecuentemente, la determinación sobre la duración del encargo fue inconsistente, tal como se muestra a continuación:



La indebida fundamentación y motivación genera incertidumbre entre los contendientes al cargo de gobernador. Puesto que solicitaron su registro como candidatos del **veinte al veintisiete de marzo**, cargo que en esa fecha se establecía que quien fuera electo debía ejercerlo por un periodo de **cinco años**; sin embargo, el **treinta de marzo** –fecha posterior a la solicitud de registro– el Consejo General, en el caso concreto, el punto de acuerdo IEEBC-CG-PA37/2019, por el que aprueba el registro del recurrente pero por el periodo de **dos años**.

Así, la indebida fundamentación y motivación que aquí se evidencia es disímil a lo argumentado por los terceros interesados, específicamente por PAN y PRI, en tanto parten de la premisa errónea de que los fundamentos jurídicos y razonamientos lógicos a que estaba obligada la autoridad administrativa se circunscribían



CONSTITUCIONAL DE
MEXICO. CORTE DE JUS
TICIA. SECCION DE
REVISION DE TRATADO
CONSTITUCIONALES Y
CONSTITUCION

exclusivamente a señalar las razones de la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro. Esto es así, puesto que como se ha venido señalando el acuerdo es inconsistente entre las partes que lo integran, y si bien, no se requiere o exige una motivación reforzada, lo cierto es que el acuerdo es omiso, como aquí se ha evidenciado.

A mayor abundamiento, tal como lo manifiesta el PAN en su escrito de tercero interesado, la sentencia recaída al SUP-JRC-5/2019 contiene los fundamentos y consideraciones lógicas jurídicas que llevan a la Sala Superior a pronunciarse por un sobreseimiento, es decir tal resolución contiene una fundamentación y motivación respecto de las razones de aquel fallo, lo cual no irradia de fundamentación o motivación a un diverso acto de autoridad, como lo es el acuerdo que en esta oportunidad se analiza.

Por tales motivos, es que se considera que le asiste la razón al inconforme respecto a que el Consejo General incurrió en indebida fundamentación y motivación e incongruencia, empero, esta autoridad jurisdiccional arriba a la convicción de que no obstante la carencia de motivación y fundamentación en el acuerdo ~~controvertido~~, el agravio deviene **inoperante** porque la indebida actuación del Consejo General no es de la entidad suficiente para dejar sin efectos el acuerdo controvertido, ello porque la modificación al periodo de gestión del candidato electo al cargo de gobernador fue consecuencia del plazo vigente en la fecha del acuerdo –treinta de marzo– a partir del sobreseimiento determinado por la Sala Superior en el SUP-JRC-5/2019 y acumulados, por ello tampoco se actualiza la aplicación retroactiva de la ley, pues al momento del acuerdo de procedencia, el plazo era el previsto en la convocatoria publicada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.

6.4. Vicios en el procedimiento legislativo para la realización de reformas a la Constitución local.

Este órgano jurisdiccional considera que dicho agravio es **fundado pero inoperante**, de conformidad con los siguientes razonamientos.

El actor en su escrito de demanda señala que vulneró el proceso legislativo al aprobar el Decreto 112, ello pues alega que no se cumplió a cabalidad con lo previsto en el artículo 112 de la



PODERE GIUDIZIAL
SUPREMACIA DELLA
LEGGE
SOGGETTIVITA' DELLA
GIUSTIZIA
CONSTITUZIONALI
E COSTITUZIONALI



Constitución local, la cual establece el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para adicionar o reformar dicha normativa.

El precepto en comento señala que sólo podrá adicionarse o reformar la constitución local cuando se cumpla con las siguientes etapas:

- I. La reforma sea aprobada por las dos terceras partes del número total de diputados,
- II. Posteriormente el dictamen sea remitido a los Ayuntamientos para que lo analicen y emitan su voto, y en el caso de ser mayoritario a favor se realizará la adición o reforma.

Aunado a ello se establece que en el caso de los ayuntamientos a partir de que haya transcurrido un mes **de que se comprobara que recibieron el dictamen de reforma** y no hubiesen remitido respuesta alguna al Congreso, se tendrá como afirmativa ficta el voto a favor de la reforma o adición.



En ese sentido, el actor argumenta que fue incorrecto que el Congreso considerara que en el caso de los ayuntamientos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, se surte la afirmativa ficta respecto a la aprobación de la reforma derivada del Decreto 112 dado que no se cumple con el supuesto de que se haya comprobado que dichos ayuntamientos tuvieron conocimiento del dictamen de reforma.

Ello dado que por una parte de los sellos de recepción de los oficios por los cuales se pretendía hacer de su conocimiento, se advierte que no fueron recibidos por personal del ayuntamiento respectivo que contara con facultades para darle el trámite correspondiente; y, por otra, los propios ayuntamientos promovieron diversos amparos en los cuales señalaban que no tuvieron conocimiento de dicha reforma y en consecuencia solicita que se declare su invalidez.

Se estima que **le asiste razón** al actor en lo tocante a que no se puede tener por cierto o por comprobado que los ayuntamientos tuvieron conocimiento del dictamen de reforma y con ello estar en aptitud de poder emitir un voto a favor o en contra de la misma. Así, es claro que existió una violación al procedimiento de reforma constitucional previsto en la Constitución local.

SECRET
OFFICE OF THE
SECRETARY OF
DEFENSE
WASHINGTON, D.C.
20301

Lo anterior ya que de las constancias que obran en autos, en específico de los oficios 002222, 002223, 002224, de siete de agosto de dos mil catorce, dirigidos a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, respectivamente, suscritos por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso, se desprende que efectivamente **no puede tenerse por válida la pretendida notificación a tres de los cinco ayuntamientos** que conforman la entidad.

En la totalidad de los oficios señalados, se advierte que a la letra dicen:

Por este conducto, y para los efectos constitucionales establecidos en el Artículo 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, nos permitimos remitir, copia debidamente certificada del Dictamen No. 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia Político-Electoral; de igual manera se anexa la certificación de la reserva presentada y del acta de la Sesión celebrada el día 10 de julio del año 2014, en el cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

a) En el caso del **oficio 002222**, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, del sello de recibido de Presidencia, se advierte que fue recibido por "Ari", sin que se conozca el nombre, o cargo que desempeña la persona que recibió dicho oficio por lo cual se estima que con ello no se puede considerar con certeza que haya sido del conocimiento del Ayuntamiento, aunado a ello, conforme al artículo 67, fracción XIII, del Reglamento Interior del citado Ayuntamiento³², se establece que el Secretario Fedatario será el servidor público que tiene facultades para recibir y tramitar la correspondencia recibida en el ayuntamiento, sin embargo, como ya se precisó, en el sello de

³² ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y (...)

Publicado en el Periódico Oficial No. 28, del 06 de julio de 2007, Tomo CXIV (Última Reforma, POE No. 44, del 18 de septiembre de 2015)



SECRETARIA DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INSTITUCIO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

recepción no se advierte que haya sido este funcionario o algún otro quien recibió el oficio.

Por ello, al no ser el funcionario facultado para recibir correspondencia y darle el trámite que corresponda, es que este órgano jurisdiccional considera que no se puede tener por cierto que el ayuntamiento tuvo conocimiento pleno del dictamen de reforma para posteriormente emitir el voto que en su caso debía emitir conforme al proceso legislativo de reforma a la constitución local previsto en el artículo 112 de dicha normativa.

b) Por lo que hace al **oficio 002223** dirigido al Presidente Municipal de Ensenada, del sello de recepción se advierte que fue recibido por la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal, sin embargo, del Reglamento interno del citado ayuntamiento no se advierte facultad expresa de dicho titular para darle el trámite correspondiente a los dictámenes de reforma.

SECRETARÍA
DE
GOBIERNO
Y
ACERCA
AL
ALCALDE

Asimismo, cabe precisar que en el Reglamento Interior del referido Ayuntamiento se prevé en su artículo 66, fracción XII³³, que será el Fedatario del Ayuntamiento el encargado de recibir y revisar la correspondencia dirigida al Ayuntamiento así como los oficios que contengan asuntos de este, lo cual, como se advierte del sello de recepción no fue éste el funcionario quien recibió la documentación relativa al dictamen de reforma por lo que de igual manera este Tribunal considera que no existe certeza plena de que se le haya dado el trámite correspondiente y que por ende el Ayuntamiento haya tenido conocimiento cierto del dictamen de reforma que derivó en el Decreto ahora controvertido y que en su oportunidad pudiese haber presentado su voto a favor o en contra de dicha reforma ante el Congreso durante el periodo señalado para ello.

c) Por último, respecto del **oficio 002224**, dirigido al Presidente Municipal de Tecate, del sello de recepción se advierte que fue recibido por "Cuquita" quien de acuerdo con las constancias del expediente de amparo, a su decir, es la persona encargada de la limpieza y labores de intendencia con lo cual es evidente que dicho

³³ Artículo 66.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XII.- Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

oficio no fue recibido por algún servidor público del ayuntamiento facultado para recibir y revisar la correspondencia que sea dirigida al ayuntamiento, es decir, el Secretario Fedatario, tal y como se prevé en el artículo 44, fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tecate.³⁴

Por ello, se considera que no se puede tener certeza plena de que el Ayuntamiento de Tecate haya tenido conocimiento del dictamen de reforma y en consecuencia poder emitir su voto a favor o en contra del proyecto de reforma, tal y como se establece en el artículo 112 de la constitución local.

En consecuencia, como ya se había adelantado, este órgano jurisdiccional considera que de los sellos de recepción de los referidos oficios, por las razones antes expuestas, no se puede tener certeza de que los ayuntamientos señalados hayan tenido conocimiento de éstos, ya sea porque no se advierte por qué persona o funcionario fueron recibidos o porque no se recibieron por el funcionario facultado para darle trámite correspondiente.

Tales oficios merecen valor probatorio pleno en cuanto a su emisión y contenido por haber sido emitidos por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con los artículos 312 y 323 de la Ley Electoral local.

Cabe precisar que, el Congreso en su calidad de autoridad responsable fue omiso en allegar a esta autoridad jurisdicción cédulas de notificación o algún otro documento que acreditara la fehaciente notificación a los Ayuntamientos.

En esa tesitura, se advierte que del contenido citado de los oficios conllevan un apercibimiento implícito, puesto que en ellos se dice *"...para los efectos constitucionales establecidos en el Artículo 112 de la Constitución Política de nuestro Estado, nos permitimos remitir, copia debidamente certificada del Dictamen No. 1 de la Comisión de Reforma del Estado..."*.

³⁴ ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

(...)

X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y



COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS DE LA
SECRETARIA DE ASUNTOS EXTERIORES
RECONOCIDA POR LA
CONSTITUCION DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Esto es, mediante los referidos oficios se pretendió remitir el Dictamen, a efecto de que los Ayuntamientos que conforman el Estado, remitieran el resultado de la votación que en su interior se tomara respecto a las reformas constitucionales, con el apercibimiento que de no remitir dicha votación en el plazo de un mes se actualizará la afirmativa ficta, es decir, se entenderá por aceptada dicha reforma.

De manera que, las reglas generales de la notificación dictan que el emplazamiento, requerimientos o apercibimientos, deberán hacerse de forma personal, para lo cual se deberá asentar en un acta –acta de notificación o circunstanciada, según corresponda– o cédula de notificación en la que se indique brevemente la relación del auto o resolución que se notifica, en su caso, la entrega de las copias fotostáticas, el acto que se está requiriendo, así como el plazo para su cumplimiento.³⁵

Lo anterior permite, que la persona a quien se le pretende hacer conocimiento del acto, tenga los datos de forma fehaciente necesarios para ejercer su derecho de defensa, y en su caso, determinar el cumplimiento voluntario del requerimiento a sabiendas de las consecuencias que conllevan no cumplirlo.³⁶

AFEDERACION
CIA DE LA NACION
AL DE ACUERDO
CONTRAVERSIA
DE ACCIONES DE
NACIONAL

Cobra especial relevancia, el criterio sostenido en la jurisprudencia³⁷ que a continuación se transcribe:

MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN Y LA OBLIGACIÓN A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE.

Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una

³⁵ Sirve de sustento la jurisprudencia de la Primera Sala de la Corte 1a./J. 58/2011, de registro: 161089, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR.", así como la jurisprudencia XIII.3o. J/1, de registro: 176226, de rubro: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA CUANDO SE ENTIENDE CON PERSONA DISTINTA A LA BUSCADA."

³⁶ Es aplicable mutatis mutandis la jurisprudencia PC.I.A. J/94 A (10a.), con registro: 2013598, de rubro: "COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. PARA TENER POR EFECTUADA LA NOTIFICACIÓN DEL AVISO DE INCUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, REALIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SE REQUIERE PRUEBA FEHACIENTE DE SU RECEPCIÓN."

³⁷ I.4o.C. J/4, con registro: 203524

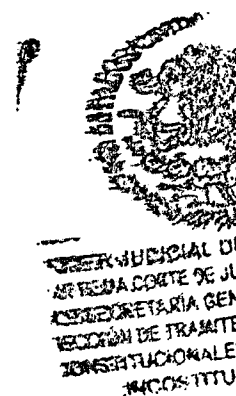


PODER JUDICIAL DE L.
JEFATURA DE LA JUSTI
SECRETARIA DE JUSTI
FICION DE TRABAJO DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que **se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar**, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. **La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento**, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal **situación se justifica**, además, porque **para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse**, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; **que se encontraran en posesión de persona distinta**, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; **casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento**.

(resaltado propio de este Tribunal)

En ese sentido, si bien se cuenta con los sellos de recepción, se desconoce si la persona que recibió cada uno de los oficios es la persona designada para ello y que le hubiese dado el trámite correspondiente, esto es, que lo remitiera al Secretario Fedatario respectivo a efecto de que éste diera continuidad con el trámite constitucional.





TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Es de resaltar la relevancia de la debida notificación de tales oficios, pues no se trata de correspondencia “común”, sino que es el documento por el cual se inicia el procedimiento interno de cada uno de los Ayuntamientos para fijar un posicionamiento, esto es, avalar las reformas propuestas por el Congreso.

Para mayor claridad se expone el procedimiento que debe seguir cada uno de los Ayuntamientos, desde la recepción de la notificación en el que hacen de su conocimiento de la propuesta del Congreso de reformas constitucionales, hasta la determinación de éstos.

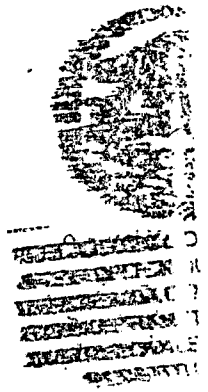
De manera general, se advierte de los Reglamentos Interiores de cada Ayuntamiento, que toda iniciativa deberá ser recibida por el respectivo Secretario Fedatario, a efecto de que sea turnada a la Comisión para su dictaminación una vez aprobada ésta, será remitida al Secretario Fedatario a efecto que la incorpore en el orden del día que será incluido en la convocatoria a sesión que formule la Presidencia Municipal. Posteriormente a que sea aprobado por el Ayuntamiento, el Secretario Fedatario será el responsable publicar la determinación, así como de la compilación y el resguardo de los acuerdos y resoluciones de Cabildo.

AFERTMUNICI
ICIA DE LA NAVEG
AL DE AGUERRIN
ECONOMIA Y SERVICIOS
DE ACCIONES DE
ONAL

Para mayor claridad, se inserta el siguiente cuadro comparativo en el que se muestra el procedimiento anteriormente relatado, especificado por cada uno de los Municipios, así como el fundamento legal.

Fase	Playas de Rosarito ³⁸	Ensenada ³⁹	Tecate ⁴⁰
Iniciativa		Artículo 11.- Los acuerdos y resoluciones de Cabildo podrán ostentar la denominación según la materia que regulen, pudiendo ser; IV.- Iniciativas de Leyes y Decretos;	ARTÍCULO 51.- Los acuerdos y resoluciones de Cabildo podrán ostentar la denominación según la materia que regulen, pudiendo ser: IV. Iniciativas de Ley o

³⁸ Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C. Publicado en el Periódico Oficial No. 28, del 06 de julio de 2007, Tomo CXIV (Última Reforma, POE No. 44, del 18 de septiembre de 2015) <http://www.rosarito.gob.mx/VII/Transparencia/archivo/2017-12/reglamento-interior-del-ayuntamiento.pdf>
³⁹ Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California Publicado en el Periódico Oficial No. 52, de fecha 14 de noviembre de 2003, <http://transparencia.ensenada.gob.mx/doc/file8977s6d87.pdf>
⁴⁰ Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Tecate, Baja California. Publicado en el Periódico Oficial No. 1, de fecha 06 de enero de 2017, Tomo CXXIV, Índice. <http://sindicaturatecate.mx/wordpress/PDFs/2017/reglamentos/REGLAMENTO%20INTERIOR%20PARA%20EL%20AYUNTAMIENTO%20DE%20TECATE,%20BAJA%20CALIFORNIA%20NUEVO.pdf>



Fase	Playas de Rosarito ³⁸	Ensenada ³⁹	Tecate ⁴⁰
		<p>Artículo 15.- Tienen el carácter de iniciativas de Leyes y decretos las resoluciones que sean emitidas para plantear al Congreso de Estado, en ejercicio de la facultad de iniciativa a que se refiere la Constitución Política del Estado de Baja California, la formación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos.</p> <p>Para los efectos del derecho de previa observación, el dictamen o votación sobre propuestas de reformas constitucionales que turne el Congreso del Estado, también tendrá este carácter.</p>	<p>Decreto;</p> <p>ARTÍCULO 55.- Tienen el carácter de iniciativas de Ley o decreto las resoluciones que sean emitidas para plantear al Congreso de Estado, en ejercicio de la facultad de iniciativa a que se refiere la Constitución Política del Estado de Baja California, la formación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos.</p> <p>Para los efectos del derecho de previa observación, el dictamen o votación sobre propuestas de reformas constitucionales que turne el Congreso del Estado, también tendrá este carácter.</p>
Recepción	<p>ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>V.- Ser el conducto para presentar ante la Sesión de Cabildo, proyectos de acuerdos y resoluciones, en los casos previstos por este reglamento e integrando el expediente respectivo;</p> <p>XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente;</p>	<p>Artículo 66.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>V.- Ser el conducto para presentar ante la Sesión de Cabildo, proyectos de acuerdos y resoluciones, en los casos previstos por este Reglamento e integrando el expediente respectivo;</p> <p>XII.- Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente;</p> <p>Artículo 71.- Recibido que sea un proyecto de acuerdo o resolución, el Secretario Fedatario procederá a integrar el expediente respectivo y a plantearlo ante el Presidente Municipal antes de presentarlo ante la Sesión de Cabildo para turnarse a comisiones.</p> <p>En casos excepcionales y cuando la urgencia del caso así lo amerite, el Presidente Municipal podrá turnar directa e inmediatamente los asuntos a la comisión competente, informando al Ayuntamiento en la próxima sesión de cabildo.</p> <p>Esta excepción aplicará</p>	<p>ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tiene la atribución de:</p> <p>X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y</p> <p>XI. Ser el conducto para presentar ante la Sesión de Cabildo, proyectos de acuerdos y resoluciones, en los casos previstos por este Reglamento e integrando el expediente respectivo.</p> <p>ARTÍCULO 66.- Las Iniciativas, se presentarán en la oficina del Secretario Fedatario, una vez recibido, el Secretario Fedatario procederá a integrar el expediente respectivo y a plantearlo ante el Presidente Municipal antes de presentarlo ante la Sesión de Cabildo para turnarse a comisiones.</p>



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Fase	Playas de Rosarito ³⁸	Ensenada ³⁹	Tecate ⁴⁰
		particularmente para el caso de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California enviadas para la votación del Ayuntamiento por el Congreso del Estado.	
Comisión	<p>ARTÍCULO 86.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Gobernación y Legislación:</p> <p>VI. Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución General de la República, y en especial la del Estado, y turnar la correspondiente opinión al Ayuntamiento;</p> <p>ARTÍCULO 102.- De ser aprobado el dictamen, el expediente será turnado por el Secretario Fedatario del Ayuntamiento a la Comisión o Comisiones que corresponda.</p> <p>ARTÍCULO 103.- Todos los dictámenes deberán hacerse llegar por el responsable de la Comisión al Secretario Fedatario del Ayuntamiento acompañados del expediente correspondiente.</p> <p>ARTÍCULO 104.- Recibido que sea en la Secretaría del Ayuntamiento dictamen con su expediente, deberán distribuirse copias simples del mismo ante los integrantes del Cabildo que no sean miembros de la comisión dictaminada, a más tardar al siguiente día hábil al de su recepción.</p>	<p>REUNIONES DE CONSENSOS. COMISIÓN DE COORDINACIÓN POLÍTICA.</p> <p>Artículo 65.- Las reuniones de consensos a que se refiere la fracción XVI del artículo anterior, podrán ser convocadas en cualquier momento cuando lo juzgue conveniente el Presidente Municipal o cuando se lo soliciten dos Municipales miembros de la Comisión, serán de carácter informal y tendrán por objeto:</p> <p>II.- Suscribir y presentar en sesión de cabildo proyectos de puntos de acuerdo, iniciativas, declaraciones y posicionamientos, mismos que se turnarán a las comisiones correspondientes para su respectivo dictamen o se resolverán en la misma sesión cuando sea necesario, dejando a salvo los derechos de los Municipales en lo individual;</p> <p>Artículo 72.- En Sesión de Cabildo, cuando así corresponda, el Secretario Fedatario dará cuenta de los proyectos de acuerdo o iniciativas recibidas y el Presidente Municipal anunciará de acuerdo al tema, que se turnen a la comisión o comisiones correspondientes.</p> <p>Las propuestas de acuerdo deberán ser turnadas a las comisiones, y una vez estudiadas, analizadas y discutidas formularán el dictamen correspondiente, salvo excepciones en que se demuestre que ameritan ser dictaminadas en el pleno por obvia y urgente resolución</p>	<p>ARTÍCULO 66, párrafo 2. En casos excepcionales y cuando la urgencia del caso así lo amerite, el Presidente Municipal podrá turnar directa e inmediatamente los asuntos a la comisión competente, informando al Ayuntamiento en la próxima sesión de cabildo</p> <p>ARTÍCULO 109.- La Comisión de Gobernación y Legislación tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>III. Dictaminar sobre las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California que sean propuestas por el Congreso del Estado; y</p> <p>ARTÍCULO 136.- Los dictámenes y sus expedientes, deberán hacerse llegar a la Secretaría del Ayuntamiento.</p> <p>De no presentarse dictamen conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la comisión interesada podrá presentarlo directamente en la sesión de Cabildo, pero no podrá discutirse, ni resolverse, sino hasta la siguiente sesión ordinaria, salvo acuerdo económico en contrario.</p>
Convocatoria	ARTÍCULO 27.- Los citatorios para las Sesiones Extraordinarias deberán ser liberados por el Secretario	Artículo 64.- El Presidente Municipal o quien ejerza sus funciones, en lo que al funcionamiento interior del	ARTÍCULO 30.- Para efectos de celebrar sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes



ORDEN JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

Fase	Playas de Rosarito ³⁸	Ensenada ³⁹	Tecate ⁴⁰
	<p>Fedatario a los miembros integrantes del Ayuntamiento.</p> <p>ARTÍCULO 38.- En las Sesiones Ordinarias, se, manejará el siguiente Orden del día:</p> <p>III. Informe del Secretario Fedatario de los asuntos pendientes o en trámite, acordados en Sesión de Cabildo;</p> <p>ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario tiene la atribución de:</p> <p>I. Formular el proyecto de Orden del Día de las sesiones, en atención a los asuntos que conforme a las disposiciones del presente reglamento deban agendarse;</p>	<p>Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>I.- Convocar a los integrantes del Ayuntamiento para efectos de celebrar la Sesión de Cabildo, por conducto del Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en los términos del presente Ordenamiento;</p> <p>Artículo 59.- La convocatoria que se expida para la celebración de sesiones de Cabildo deberá ir acompañada del Orden del Día.</p> <p>Artículo 66 El Secretario Fedatario tiene la atribución de:</p> <p>I.- Formular el proyecto de Orden del Día de las sesiones, en atención a los asuntos que conforme a las disposiciones del presente reglamento deban agendarse;</p>	<p>de Cabildo, por instrucción del Presidente Municipal, la convocatoria será expedida por el Secretario Fedatario del Ayuntamiento y notificada al Síndico Procurador y a los Regidores.</p> <p>ARTÍCULO 47.- La convocatoria que se expida para la celebración de sesiones de Cabildo deberá ir acompañada del Orden del Día.</p> <p>ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:</p> <p>I. Formular la propuesta del orden del día, en atención a los asuntos que conforme a las disposiciones legales y de este reglamento deban agendarse en las sesiones de Cabildo;</p>
Sesiones	<p>ARTÍCULO 15.- Las Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento, se deberán realizar por lo menos dos veces cada mes.</p> <p>ARTÍCULO 105.- Una vez distribuido el dictamen o los dictámenes en los términos del artículo anterior, el Secretario Fedatario del Ayuntamiento informará de su recepción al pleno dando cuenta con el número de expediente y el asunto de que se trate e informando de la distribución de las copias simples del mismo entre los integrantes del Cabildo.</p>	<p>Artículo 42.- El Ayuntamiento sesionará en forma ordinaria por lo menos dos veces al mes para tratar los asuntos de su competencia, de acuerdo a las necesidades de la administración.</p>	<p>ARTÍCULO 31.- El Ayuntamiento sesionará en forma ordinaria por lo menos dos veces al mes para tratar los asuntos de su competencia, de acuerdo a las necesidades de la administración.</p> <p>ARTÍCULO 67.- En Sesión de Cabildo, cuando así corresponda, el Secretario Fedatario dará cuenta de las iniciativas recibidas y el Presidente Municipal anunciará de acuerdo al tema, que se turnen a la comisión o comisiones correspondientes.</p>
Determinación	<p>ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario tiene la atribución de:</p> <p>VI. Compilar los acuerdos y resoluciones de Cabildo y difundirlos en los términos previstos en el presente ordenamiento;</p>	<p>Artículo 66.- El Secretario Fedatario tiene la atribución de:</p> <p>VI.- Compilar los acuerdos y resoluciones de Cabildo y difundirlos en los términos previstos en el presente ordenamiento;</p>	<p>ARTÍCULO 62.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento será el responsable de la compilación y el resguardo de los acuerdos y resoluciones de Cabildo, mediante los instrumentos y mecanismos que considere convenientes, a fin de brindar a sus integrantes el servicio de consulta y actualización que requieran para el ejercicio de sus funciones.</p> <p>ARTÍCULO 44.- El</p>



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTITUCIÓN Y DE
RECOSTITUCIÓN



Fase	Playas de Rosarito ³⁸	Ensenada ³⁹	Tecate ⁴⁰
			Secretario Fedatario tiene la atribución de: VI. Compilar los acuerdos aprobados por el Cabildo IX. Tramitar la publicación de los acuerdos de Cabildo, cuando las disposiciones legales o el acuerdo que corresponda así lo ordenen;

Del cuadro trasunto, se concluye que a efecto de que el Cabildo pueda discutir el Decreto emitido por el Congreso es imperante que sea recibido por el Secretario Fedatario a efecto de que sea turnado a la Comisión respectiva y pueda ser analizado en alguna de las dos sesiones ordinarias que tendrán verificativo en el plazo de treinta días previsto en el artículo 112 de la Constitución local.

De ahí la importancia que el Decreto sea notificado de forma fehaciente al Secretario Fedatario, caso contrario, como en el que nos ocupa, los Ayuntamientos de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, no estuvieron en condiciones de avalar el Decreto emitido por el Congreso.

FEDATARIO
SECRETARIO
DE REGISTRO
INTERPRETE
ACCIONES
LUGAR

Lo anterior se robustece con las copias certificadas de las actuaciones de tres juicios de amparo 114/2019, 131/2019, 367/2019, promovidos por los ayuntamientos de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito en los cuales medularmente se hicieron valer por parte de los referidos ayuntamientos la falta de notificación o de conocimiento respecto del dictamen de reforma que derivó en el Decreto que ahora se controvierte y los cuales se describen a continuación:

a) En el acuerdo recaído en el **juicio de amparo 131/2019** promovido por el Ayuntamiento de Tecate, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, determinó que efectivamente conforme al Reglamento interno del ayuntamiento, el funcionario facultado para recibir la documentación relativa al dictamen de reforma y posteriormente darle el trámite correspondiente era el Secretario Fedatario, asimismo al razonar las causales de improcedencia consideró tener por actualizada la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 105 de la Constitución Federal **consistente**



TRIBUNAL DE
APPEAL DE LOS
RECURSOS DE
RECURSOS DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCÓSTITUCI

en que los actos reclamados son materia electoral por lo que no puede ser combatido a través del juicio de amparo.

b) Ahora bien, en el acuerdo dictado en el **juicio de amparo 367/2019** interpuesto por el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, consideró desechar el referido juicio al considerar que al impugnarse la indebida notificación al referido ayuntamiento de una reforma **en materia electoral el juicio de amparo no era procedente** para impugnar dicho acto.

c) Respecto del acuerdo emitido en el **juicio de amparo 114/2019**, promovido por el Ayuntamiento de Ensenada, se advierte que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Ensenada, se pronunció en el mismo sentido que lo hizo el Juez Segundo de Distrito en el diverso juicio de amparo 367/2019.

En consecuencia de las constancias relativas a las copias certificadas de los acuerdos emitidos en los referidos juicios de amparo, se advierte que:

AL DEPARTAMENTO DE
CONTROVERSIAS
DE ACCIONES DE
NULIDAD

- Los Ayuntamientos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate acudieron a controvertir un estado de indefensión por haberlos dejado inauditos en el proceso de reforma al haber sido indebidamente notificados (ausencia de notificación) y por lo tanto no tener oportunidad de pronunciarse o emitir su voto a favor o en contra el dictamen de reforma respectivo, por lo que se considera que dicho proceso legislativo está viciado de origen.

- Asimismo, al resolver los juicios de amparo los jueces de Distrito determinaron que los actos controvertidos estaban vinculados con la materia electoral y en consecuencia conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 105 de la Constitución federal dicho juicios de amparo debían declararse improcedentes dado que los actos reclamados **son de naturaleza materialmente electoral** por lo que no puede ser combatido a través del juicio de garantías.

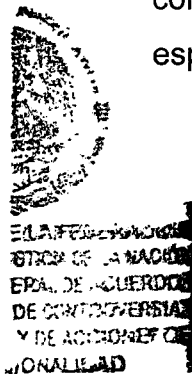
1957 ANNUAL
RECORDS OF
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL
BUREAU OF STANDARDS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Ahora bien, si tres de los cinco ayuntamientos promovieron juicios de amparo para combatir la indebida notificación del decreto de reforma y por ello se les impidió participar en el proceso constitucional para aprobarla, este órgano jurisdiccional electoral local considera que fue incorrecto que el Congreso estimara que se actualizaba la afirmativa ficta prevista en el artículo 112, párrafo segundo.

En consecuencia, este órgano jurisdiccional al valorar los oficios 002222, 002223, 002224 suscritos por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California y las copias certificadas de los acuerdo recaídos a los juicios de amparo 114/2019, 131/2019, 367/2019, arriba a la conclusión de que el agravio que ahora se estudia es fundado.

Lo anterior porque se considera que efectivamente no se cumplió con lo mandado en el artículo 112 de la Constitución local, en específico lo previsto en su párrafo segundo que a la letra señala:



(...)

Si transcurriere un mes después de que **se compruebe** que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

De dicho artículo se advierte que, para tener por acreditada la afirmativa ficta, es necesario que se haya comprobado que los ayuntamientos tuvieron conocimiento del dictamen de reforma respectivo, lo cual en el caso, como ya se demostró **no se comprobó que efectivamente los ayuntamientos hayan tenido conocimiento del proyecto de reforma.**

Ello porque de los oficios en párrafos antes referidos y las copias certificadas de los acuerdos recaídos en diversos juicios de amparo promovidos por los ayuntamientos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, no se desprende que los ayuntamientos hubiesen tenido conocimiento del dictamen de reforma y por ende pudieran emitir su voto a favor o en contra de este.

Lo anterior es de especial trascendencia, puesto que los Ayuntamientos en su carácter de entidades políticas, componentes del Estado, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que pretendan incorporarse a



OFICINA EJECUTIVA DE
GOBIERNO DE JU
GO. SECRETARÍA GEN
REGISTRACIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCI

la Constitución estatal, es decir, son entes públicos que intervienen en el proceso de formación de las normas locales supremas para validar o invalidar en su caso, con su voto las modificaciones a la Constitución, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso local como órgano legislativo que permanentemente efectúa esa función.

Por lo que si bien, dicha aprobación no tiene como efecto la modificación o revocación de las reformas propiamente, en consecuencia de la validación que realicen los Ayuntamientos es que la reforma sea parte de la Constitución local, por ende, tenga vigencia.⁴¹

Caso contrario, cuando la mayoría de los Ayuntamientos expresaran su desaprobación, las reformas constitucionales planteadas no serían viables, ni cobrarían vigencia.

En ese sentido, la validación que hagan los Ayuntamientos, al tener como resultado que cobre vida o no la reforma constitucional trasciende a la vida de los gobernados.

Ahora bien, no pasa desapercibido que tanto el PAN como Movimiento Ciudadano en sus respectivos escritos de comparecencia como terceros interesados, señalan que no podía considerarse que los ayuntamientos de Tecate y de Ensenada no hayan tenido conocimiento del proyecto de reforma del Decreto 112, ya que los actuales Presidencias Municipales de dichos ayuntamientos fueron diputados integrantes de la XXI Legislatura del Estado de Baja California y votaron dicho Decreto.

Al respecto, se **desestima** dicha alegación ya que en principio, como bien lo señalan los terceros, en el periodo en que se llevó a cabo el proceso legislativo del Decreto controvertido, los entonces presidentes municipales no son los que ahora ostentan el cargo. Es decir, el hecho de que los actuales Presidencias Municipales de Tecate y Ensenada fungieron como diputados durante el proceso legislativo de mérito, no es razón suficiente para considerar que los Ayuntamientos (como un órgano del Estado tuvieron conocimiento

⁴¹ Cobra relevancia la jurisprudencia P./J. 14/2008, con número de registro: 170256, de rubro: "MUNICIPIOS. SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN LOCAL ES ÚNICAMENTE PARA VALIDARLAS CON SU VOTO, PERO NO PARA MODIFICARLAS O REVOCARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008; Pág. 1869.

SECRET
OFFICE OF THE
SECRETARY OF
DEFENSE
CONSTITUTION



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

de la reforma porque lo cierto —tal como lo precisan los propios terceros interesados—, es que lo tuvieron en su carácter de personas integrantes del Congreso del Estado).

En esa tesitura, es claro que los terceros interesados parten de la premisa incorrecta de asumir que porque alguna persona se haya desempeñado como legislador al momento de aprobarse el dictamen y proyecto de reforma de marras, y posteriormente ejerza como presidente municipal de un ayuntamiento, debe tenerse por notificado este último. Tal circunstancia no puede acontecer, puesto que la obligación de las autoridades de dar publicidad, trámite y debida notificación de los actos que emiten, no puede sustituirse por el ejercicio personal de un cargo público.

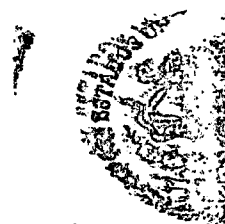
Así, con base en la teoría del órgano iniciada por Otto Von Gierke, se parte de la idea de que los empleados y funcionarios públicos, más que representantes del Estado, se incrustan en la organización estatal como parte integrante o constitutiva de ella, por lo que el órgano cuya existencia formal se da por la creación jurídica que el derecho impone, al disponerlo en las normas y darle una competencia determinada, sólo puede manifestarse a través de los individuos que expresan su existencia⁴².

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA
JEFATURA DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA FISCALÍA
UNIDAD DE COMPLEJIDAD
ALTA Y DE ALTA COMPLEJIDAD
FISCALÍA DE LA FISCALÍA

Esta teoría fue reforzada por Hans Kelsen por medio del principio de imputación, el cual señala que por mandato legal, determinada acción se atribuye a un sujeto y se le considera realizada por él, por lo que **la actuación del funcionario público sólo se considera expresión de la voluntad del Estado cuando ejerce la competencia atribuida al órgano.**

En estos términos, Kelsen señala que 'la persona jurídica se convierte así en un punto de imputación. Todos los actos de una persona jurídica son, en rigor de verdad, actos cumplidos por individuos, pero imputados a un sujeto ficticio que representa la unidad de un orden jurídico parcial o total'.

⁴² Cfr. Considerando tercero del análisis de la CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2016 ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Sesionada El 26 de octubre de 2016, disponible en <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26858&Clase=DetalleTesisEjecutorias>



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

Esta teoría sirve para precisar las actuaciones y responsabilidad del servidor público y distinguirlas de aquéllas realizadas por los órganos del estado.

Como es sabido la figura del ayuntamiento encuentra su definición en el artículo 115, fracción I, de la Constitución federal, que establece:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

En sintonía, el artículo 77 de la Constitución del Estado de Baja California prevé:

ARTÍCULO 77.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular, depositario de la competencia y atribuciones que le otorgan al Municipio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.

De la transcripción de ambos artículos se advierte que el Ayuntamiento es un órgano colegiado integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que determine la ley. Asimismo, se señala que el gobierno municipal será ejercido por el Ayuntamiento sin que haya autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado, pues es éste el depositario de la competencia y atribuciones que se otorgan al municipio en las constituciones federal y local.

Es decir, se debe tener al Ayuntamiento como un ente indisoluble y que si bien es integrado por diversos funcionarios, las facultades y atribuciones para gobernar el municipio, recae en el Ayuntamiento como ente y de ninguna manera se podrá entender que sus



PODER JUDICIAL D
CORTESIA CORTES DE JI
SECRETARIA GEN
REGION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
MEOSTHUK



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

facultades y atribuciones pueden ser ejercidas por otra autoridad intermedia o integrante en lo individual de este.

En efecto, en el caso concreto, no es posible determinar que tres de los cinco ayuntamientos como órganos del Estado de Baja California tuvieron conocimiento de la reforma señalada, sólo por el hecho de que quien ostenta la presidencia o alguno de sus miembros haya tenido conocimiento del dictamen de reforma, ya que el Ayuntamiento debe verse como un órgano indisoluble, es decir, como una unidad.

Por lo que sí es el órgano municipal como unidad quien promovió los respectivos amparos en los que se hizo valer el desconocimiento del dictamen de reforma,⁴³ es válido afirmar que dichos ayuntamientos no tuvieron conocimiento del dictamen de reforma que derivó en el Decreto 112, pues no hay constancia de lo contrario.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional local lo establecido en la tesis de jurisprudencia P./J. 110/2010 emitida por el Pleno de la Corte de rubro: REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. NO SE INVALIDAN PORQUE LAS NOTIFICACIONES DE LAS MINUTAS RESPECTIVAS SE HAYAN DIRIGIDO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

En dicha tesis se señala que las minutas debían ser notificadas al síndico al ser éste quien defiende los intereses municipales y es quien lo representa en todas las controversias o litigios. Sin embargo, se precisa que no puede invalidarse la reforma al haberse dirigido las notificaciones de las minutas al presidente municipal ya que por una parte en la normativa solo se establece que deben remitirse las minutas a los ayuntamientos sin que se precise que es al síndico a quien deban dirigirse las notificaciones y por otra parte, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal de dicho estado, señala que tanto el síndico como el presidente municipal son quienes de manera originaria ostentan la representación del municipio.

⁴³ Tomando en cuenta además que no existe acta de cabildo, sesión o constancia de la debida notificación realizada.



PODER JUDIC
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TR
CONSTITUCIO
INCOS

Este Tribunal considera que dicho criterio no resulta aplicable al caso concreto ya que a diferencia de lo que se establece en la señalada jurisprudencia, **en el caso en los reglamentos internos de los tres Ayuntamientos –Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito– sí se establece en específico que la correspondencia dirigida al Ayuntamiento deberá ser recibida por el Secretario Fedatario y será este quien dé el trámite correspondiente.** Asimismo en el caso se tiene que los ayuntamientos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate promovieron diversos juicios de amparo para controvertir la indebida o falta de notificación de los dictámenes de reforma.

Es decir, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable ya que en el caso concreto existen dos circunstancias específicas que hacen que se diferencie de la hipótesis prevista en la tesis de jurisprudencia:

1) En el caso de los Ayuntamientos de Ensenada (artículo 66), Playas de Rosarito (artículo 67) y Tecate (artículo 44), sí se establece de manera específica en sus Reglamentos internos que el Secretario Fedatario es el facultado para recibir correspondencia dirigida al ayuntamiento y será quien dé el trámite correspondiente; y

2) Existencia de autos copias certificadas de juicios de amparo promovidos por los ayuntamientos en los cuales hacen valer la indebida o la falta de notificación de los dictámenes de reforma con lo que se les privó de su derecho a participar en ella, tal como lo establece la Constitución local en su artículo 112.

Ahora bien, con independencia de que le asista razón al actor respecto de que existió un vicio en el procedimiento legislativo que derivó en el Decreto 112, como ya se precisó en párrafos anteriores, dicho agravio se declara **fundado pero inoperante**.

La **primera inoperancia** estriba en que el actor hace valer que la reforma fue aprobada antes de que se venciera el plazo establecido en el artículo 112, segundo párrafo, de la Constitución local la cual prevé que los ayuntamientos a partir de que se compruebe que recibieron el proyecto de reforma, en un plazo de un mes deberán remitir su respuesta al Congreso y en caso de que no lo hicieran se considerará como aceptada la adición o reforma.



OFICIAL D
DEPARTAMENTO DE J
SECRETARIA GEN
ECION DE TRAMITE
ORGANIZACIONALES
CONSTITUCI



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Si bien, en el escrito inicial se señala que dicho mes no se cumplió ya que se argumenta que el Congreso emitió la declaratoria de incorporación el mismo día en que se vencía el plazo para que los ayuntamientos remitieran sus votaciones, se considera inoperante puesto que al no haberse acreditado la notificación fehaciente a los ayuntamientos del Dictamen Uno del Congreso, es que no existe una fecha cierta a partir de la cual deba computarse el plazo previsto en la disposición señalada.

La **segunda inoperancia** de dicho agravio radica en que, si bien el actor solicita a este órgano jurisdiccional que decrete la invalidez del Decreto controvertido, sin embargo, cabe señalar que realizar dicha declaración excede la esfera de competencia de este órgano jurisdiccional local por lo que no podría aceptarse la pretensión abstracta del actor ya que escapa de las facultades otorgadas por la constituciones federal y local, y diversa normativa local a este órgano de justicia electoral.




LA FEDERACIÓN
DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE MEXICO
SECRETARÍA DE
INTERIORES

Además, que si se determinara decretar la invalidez de dicha reforma, se estaría rompiendo el modelo electoral local creado por el Congreso en cumplimiento a la reforma constitucional federal de dos mil catorce en materia electoral, la cual, entre otras cuestiones, estableció la obligación de los congresos locales de homologar elecciones locales con las nacionales.

Asimismo, el que se invalide la reforma del decreto 112 en la etapa en la que nos encontramos en el actual proceso electoral rompería con el principio de certeza, ya que de decretarse dicha invalidez se tendría que ordenar la reposición de diversas reglas a seguir en el proceso electoral en curso lo cual sería violatorio del artículo 105 de la Constitución federal.

De manera que, como se ha señalado a lo largo de la presente ejecutoria, para este órgano jurisdiccional la pretensión real del actor es impugnar lo relativo al transitorio octavo ya que considera que se vulnera su derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo al haberse modificado el periodo en el que deberá ejercer el gobernador que resulte electo en el actual proceso electoral local.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ORDEN JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITU

Tal consideración guarda congruencia con la tesis de jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro **INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE**. Ello es así puesto que para tener por acreditado el interés jurídico, es decir, el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, debe existir *prima facie* un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad **ocasionando un perjuicio a su titular**.

Es decir, el recurrente carece de interés jurídico directo para promover la invalidez del Decreto 112 (en su totalidad) toda vez que la esencia de dicha institución jurídica es que se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que **tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado**⁴⁴.

En el caso concreto, el Decreto 112 versa sobre diversas temáticas siendo que el único que le depara perjuicio en su esfera jurídica es lo relativo al Clavo Transitorio; por tanto, a ningún fin práctico llevaría el decretar la nulidad de toda la reforma si no va acorde a las pretensiones del actor al no vulnerar derechos de los cuales el recurrente tenga la titularidad.

En esa tónica, lo procedente conforme a derecho es que este Tribunal electoral emita una resolución que por una parte se centre en resolver la verdadera pretensión del actor y por otra proteger el sistema electoral y democrático del estado de Baja California, por lo que a fin de cumplir con dicha finalidad **no ha lugar a determinar la invalidez total del Decreto 112** a pesar de existir inconsistencias en el proceso legislativo.

Así, la pretensión del actor es que, mediante la invalidez del Decreto 112, la autoridad jurisdiccional ordene la restitución del periodo del cargo a gobernador establecido en el artículo 44 de la Constitución

⁴⁴ Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por la Sala Superior, identificada con la clave 7/2002, de rubro "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO".



GOVERNMENT OF THE STATE OF NEW JERSEY
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
DIVISION OF CONSTITUTIONAL AFFAIRS
TREASURY



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Local; es decir, dejar sin efectos el artículo Octavo Transitorio; sin embargo, **la petición del recurrente en realidad constituye un análisis del sistema normativo en su integridad.**

Cuestión que trasciende a los efectos que pueden generarse a partir de la inaplicación de una norma a un caso concreto, por lo siguiente.

En materia electoral, el control constitucional tiene una naturaleza mixta, porque es la **Corte**, en términos del artículo 105 fracción II de la Constitución, la única que puede conocer en **abstracto** la constitucionalidad de normas electorales; mientras que el **Tribunal Electoral**, de conformidad con el artículo 99 del mismo ordenamiento, **ejerce un control concreto de constitucionalidad.**

Aunado a lo anterior, a partir de la sentencia dictada por la Corte en el asunto Varios 912/2010, **todos los jueces** del país pueden ejercer **control difuso** de convencionalidad y constitucionalidad de las leyes, llegando la inaplicación de normas al caso concreto, cuando se estime procedente.

Así, válidamente se puede sostener que el sistema de control constitucional en materia electoral lo conforman la acción de inconstitucionalidad y todos los medios de impugnación cuya competencia corresponde al Tribunal Electoral, además de los juicios y recursos que corresponde conocer y resolver a los tribunales electorales de las entidades federativas.

Al respecto, en el ejercicio del control de constitucionalidad por parte de este Tribunal Electoral, así como de los tribunales de las entidades federativas, cuando se estime que un precepto legal es contrario al bloque de regularidad, puede dar lugar a **la inaplicación de una norma al caso concreto.**

Asimismo, de una interpretación sistemática y funcional del artículo 99 de la Constitución federal que dispone en su párrafo octavo, que las resoluciones que al efecto emitan las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la no aplicación de leyes en la materia por estimarlas contrarias a dicha norma fundamental se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio respectivo, dado que tal expresión debe ser entendida en su sentido material, de forma tal que cuando la inaplicación de una disposición normativa se declara en el contexto de un proceso electoral por



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE C
ONSTITUCIONALES Y DE
— INCOSTTUCION

resultar inconstitucional o inconvencional, sus efectos deben aplicarse a todos los sujetos que se encuentren en la misma situación jurídica respecto de dicho proceso, a fin de garantizar plenamente los principios de igualdad y certeza, debiendo las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena observancia.

En el caso concreto se advierte que los efectos de la presente resolución, pueden trascender a la esfera de derechos de más personas, que no habiendo sido parte formal en este procedimiento, se encuentran en una misma situación jurídica y fáctica respecto del hecho generador de la vulneración alegada.

En ese sentido, se tiene que las razones que justifican la modulación de los efectos de este tipo de sentencias en las cuales se realiza un control concreto de constitucionalidad deben considerar los siguientes elementos:

Evitar que la protección del derecho a una persona o grupo de personas afecten los derechos de otras que se encuentran en una misma situación jurídica, entre otros, el derecho de

igualdad;

Asegurar el goce efectivo de los derechos de todas las personas que se encuentren en un mismo supuesto que, por su situación jurídica o calidad que ostentan, se actualicen a su favor;

- Responder al contexto fáctico y normativo dentro del cual se inscribe cada proceso, y
- Garantizar el derecho de acceso a la justicia que comprende la tutela judicial efectiva.

Asimismo, se reconoce que las condiciones para que operen los citados efectos, son:

- Que se trate de persona en la misma situación jurídica;
- Que exista identidad en los derechos fundamentales vulnerados o que pueden verse afectados;
- Que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada;
- Identidad de la pretensión.



PODER JUDICIAL
SUPLENTE CORTE D
SECRETARIA
SECCION DE TRABA
CONSTITUCIONA
INCOGNITO



Ahora bien, en el presente caso se advierte que los elementos antes descritos se actualizan, ya que es evidente que el actor no es el único candidato aspirante a la gubernatura del Estado. En tal virtud, al haber más candidatos que se encuentran en las mismas condiciones fácticas lo que se decida respecto de uno, necesariamente repercutirá sobre la situación del otro.

Lo anterior, considerando que en dicho Decreto no solo se determinó modificar el artículo 44 de la Constitución local, es decir, el relativo al plazo en que el gobernador electo en el actual proceso electoral local deberá ejercer su cargo sino que también se adicionaron o reformaron los artículos 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 57, 58, 61 y 78 de la Constitución local, relativos entre otros, a los siguientes temas:

- La aplicación del principio de reelección a diputados e integrantes de los municipios locales a partir del proceso electoral de 2016.⁴⁵
- El inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la XXII Legislatura del Estado de Baja California.⁴⁶
- Periodo del cargo de diputados e integrantes de los ayuntamientos electos en los procesos electorales ordinarios 2016 y 2019.⁴⁷
- Duración del cargo del personal del instituto estatal electoral y los recursos financieros del referido instituto.⁴⁸
- El ejercicio del cargo de los Magistrados de este Tribunal Electoral local.⁴⁹

En consecuencia, como se advierte en el Decreto 112 se adoptaron modificaciones sobre temáticas diversas en materia político-electoral, que son ajenas y distintas a lo relativo al periodo del cargo de gobernador. En efecto, se trata de una reforma al sistema electoral, político y democrático del Estado de Baja California, por lo que al determinar la invalidez de dicho Decreto se estaría rompiendo con el nuevo modelo político-electoral implementado por el

⁴⁵ Reformas a los artículos 16 y 78 contenidas en los artículos transitorios segundo y tercero.

⁴⁶ Reforma del artículo 22, contenido en el transitorio quinto.

⁴⁷ Reformas a los artículos 19 y 78, contenidas en los artículos transitorios sexto y séptimo.

⁴⁸ Reformas contenidas en los artículos transitorios décimo y décimo primero.

⁴⁹ Reforma al artículo 58, contenida en el artículo transitorio décimo cuarto.



Congreso del estado a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el Constituyente Permanente en la reforma constitucional federal de dos mil catorce.

Asimismo, resulta aplicable *mutatis mutandi* el principio de "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", es decir, si bien existió durante el proceso de aprobación del referido Decreto ciertas irregularidades ello no debe derivar en la invalidez por completo de este, dado que ello rompería con la implementación del nuevo sistema democrático y electoral implementado por el Congreso local a fin de dar cumplimiento a la reforma político-electoral de dos mil catorce.

Aunado a lo anterior, se debe precisar que si bien este Tribunal considera que no es viable que se decrete la invalidez por completo del Decreto 112, también es cierto que esta determinación no deja en estado de indefensión al actor a pesar de haberlo solicitado expresamente en su punto petitorio tercero, ya que conforme a la Tesis de Jurisprudencia 4/99 emitida por la Sala Superior, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de leer detenida y cuidadosamente el escrito de demanda para determinar con exactitud la intención de promovente e interpretar lo que quiso decir y no lo que aparentemente se dijo, lográndose con ello una recta administración de justicia.

Por ello, en el caso concreto, de la lectura integral del escrito de demanda este órgano jurisdiccional electoral local advierte que lo que realmente le genera agravio no es el Decreto en su totalidad sino solamente la materialización del artículo Octavo Transitorio mediante el acto de aplicación concreto que constituye el Acuerdo del Consejo General controvertido.

Es decir, el actor en el cuerpo de su demanda menciona en varias ocasiones que lo que le causa lesión a su derecho político electoral de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo es el hecho de que se limite el periodo del ejercicio del cargo del Gobernador electo en el actual proceso electoral.

Por tanto se considera que, de lo que realmente se duele es sólo el artículo Octavo Transitorio del mencionado Decreto, ya que precisamente tal precepto es el que realiza una modificación al periodo del encargo del Gobernador que sea electo en el proceso



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRÁM
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

electoral local ordinario de 2018-2019, señalando que durará en su encargo por esta única ocasión dos años.

Si bien, lo ordinario es que ante el señalamiento de violaciones de fondo y procedimentales se privilegie las primeras a efecto de que se realice un control y se fijen los criterios que deberán imperar sobre las normas respectivas, porque de declarar fundados los aspectos formales, si bien tendría como efecto invalidar la norma, una vez que dichos vicios fueran subsanados por el legislador, dicha norma podría seguir subsistiendo con vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, al ser este un Tribunal de primera instancia, en aras de impartir una justicia integral a efecto de salvaguardar el acceso a la justicia y debida defensa consagrado en el artículo 17 de la Constitución federal, es que se analizó en primer término las irregularidades procedimentales planteadas, y en el capítulo posterior las de fondo.⁵⁰

LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE ACUERDO
CON LA LEY
DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES
Y DE ACCIONES DE
NULIDAD

En consecuencia, sin bien se acreditaron los vicios en el procedimiento legislativo, no es viable declarar la invalidez del Decreto 112, cuestión que no le causa agravio en su esfera de derechos al actor en específico a su derecho de acceso y desempeño del cargo, ya que de una lectura integral de su escrito de demanda se advierte que lo que realmente le causa agravio es solamente el artículo Octavo Transitorio de dicho decreto, lo que será objeto de análisis en el capítulo siguiente.

6.5. Reducción del periodo constitucional para ejercer el cargo a Gobernador en Baja California.

Del agravio CUARTO de la demanda, se advierte que el recurrente se duele de un indebido actuar del Congreso pues al homologar la totalidad de las elecciones lesiona su esfera de derechos, en concreto lo que se refiere a su derecho político-electoral de ser votado, en la modalidad de ocupar y desempeñar el cargo por el periodo establecido en el artículo 44 de la Constitución local, es

⁵⁰ Tal criterio tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 47/2006, con número de registro:175354, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS SEGUNDOS, SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SUBSISTAN NORMAS VICIADAS."



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUST
SUBSECRETARIA GENER
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCOSTITUCIO

decir, por un lapso de seis años y no de dos, como lo dispone el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112. El actor se inconforma porque lo considera arbitrario y desproporcionado.

Ello porque en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y n), así como segundo transitorio, fracción II, inciso a) de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, se establece que al menos una elección local debe celebrarse en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales; por lo que, basta con que una de las elecciones locales se encuentre homologada a alguna de las elecciones federales para dar por colmada la obligación de las entidades federativas.

A consideración de este Tribunal, el motivo de disenso es **fundado** y suficiente para **inaplicar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112**, pues se estima que el periodo del encargo de gobernador electo contenido en dicho artículo es restrictivo del derecho fundamental de ser votado, en su modalidad de ocupar y desempeñar el cargo y colisiona con lo previsto en el propio texto de la Constitución local —artículo 44—, en atención a las consideraciones siguientes.

6.5.1. Control abstracto realizado por la Corte

En primer término debe señalarse que, la Corte no ha emitido determinación alguna respecto a las disposiciones contenidas en el Decreto 112, menos aún el artículo Octavo Transitorio. De igual forma, tampoco se ha pronunciado la Sala Superior, ni este Tribunal, por lo que al no haber el estudio correspondiente realizado con anterioridad a la presente ejecutoria, es que se torna necesario que este órgano jurisdiccional realice el análisis respectivo.

No obstante lo anterior, se advierte que la Corte se ha pronunciado en diversos medios de impugnación, respecto a la interpretación y aplicación del artículo 116 de la Constitución federal.

Así, la Corte ha establecido en las acciones de inconstitucionalidad AI-8/2002 y AI-3/2002⁵¹ que de la interpretación de los artículos 116, fracción I, 40 y 41 de la Constitución federal, se concluye que si una entidad federativa establece en ley que, por única ocasión, el titular del Poder Ejecutivo del Estado durará en su

⁵¹ Relativas a los estados de Coahuila y Aguascalientes, respectivamente.



PODER JUDICIAL DE
OPORTUNAMENTE DE JUS
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDA DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
— INSTITUC



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

encargo cinco años –en ese asunto-, esto no vulnera el citado numeral 116, pues, por un lado, este precepto no establece que la duración en el cargo será forzosamente de seis años, sino sólo que no deberá exceder de ese término y, por otro lado, en uso de la autonomía estatal, cada entidad federativa puede determinar, en atención a su propia conveniencia jurídico-política y respetando los parámetros que señala la Constitución federal, la duración de la Gubernatura, pudiendo variar cuantas veces lo considere conveniente, puesto que no existe prohibición para ello.

En el mismo precedente se señaló además que, el hecho de que se varíe excepcionalmente y por una sola ocasión, el periodo de duración del ejercicio de los cargos de Poder Ejecutivo del Estado, miembros de las legislaturas y ayuntamientos, no es inconstitucional en sí mismo, ya que tal desajuste temporal es precisamente de excepción, con la finalidad expresa en la misma norma de tránsito de igualar los periodos de elección o los procesos electorales con los de las elecciones federales, por lo que, precisó el Pleno, tampoco puede decirse que ese propósito o efecto contraría la regla de duración prevista en el artículo 116, fracción I, de la Constitución federal o algún otro precepto fundamental.

LA FEDERACIÓN
TICA DE LA NACIÓN
VAL DE ACUERDO
E CONTROVERSIA
DE ACCIONES DE
INACCIÓN

De manera coincidente, en la acción de inconstitucionalidad AI-13/2015⁵², la Corte sostuvo que el artículo 116 de la Constitución, preceptúa que los titulares del Poder Ejecutivo del Estado no podrán durar en su encargo más de seis años, sin que mandate un lapso mínimo al efecto, por tanto, las legislaturas de los Estados tienen libertad para fijar lo conducente, siempre que no excedan del citado tope; por lo que, en dicho caso determinó que no es inconstitucional la previsión transitoria impugnada, en cuanto fija el periodo que, por única ocasión, durarán en el cargo, las diputaciones y la Gubernatura electas en junio de dos mil dieciséis (dos años), con el fin de adecuarse a la Constitución federal.

De igual forma, en la acción de inconstitucionalidad AI-39/2006⁵³, razonó que la concurrencia no se refiere únicamente a las elecciones Federales de Presidencia de la República, sino también de diversas elecciones federales intermedias relativas a los integrantes del Congreso de la Unión; por lo que los Estados

⁵² Relativa al estado de Veracruz.

⁵³ Relativa a la normativa electoral del estado de Michoacán.



SECRETARÍA DE LA
DEFENSA Y JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE C
INSTITUCIONALES Y DE
— INCONSTITUCION

cuentan con la facultad de regular en su Constitución y leyes secundarias, la materia electoral, en las que, entre otros aspectos, deben garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia en el ejercicio de la función electoral, así como los derechos y obligaciones de los partidos políticos.

En tanto que, se debe resaltar que en todos los casos la Corte dispuso que si bien la Constitución federal no establece lineamientos específicos que deban observar los Estados, por lo que éstos gozan de la libertad para legislar en su régimen interior, lo que es acorde con el sistema federal estatuido en los artículos 41, 116, fracción IV y 124 de la propia norma, la única limitante que se impone a los legisladores locales en cuanto a la normatividad que al efecto establezcan en su régimen interior es que deberá ser acorde con los principios fundamentales y rectores establecidos en la Carta Magna, de tal manera que los hagan vigentes.

No debe perderse de vista que el análisis realizado por la Corte, fue en atención a las alegaciones vertidas en las correspondientes demandas de acción de inconstitucionalidad, a efecto de que las normas fueran examinadas de manera abstracta.

Siendo que este Tribunal debe analizar los motivos de disenso hechos valer por la recurrente desde la **perspectiva concreta** de la restricción al derecho fundamental de ser votado, en su vertiente al acceso al cargo por un periodo determinado.

Es de mencionarse que la Sala Superior ha sostenido que en casos excepcionales, en los que si bien, la Corte se haya pronunciado respecto a la constitucionalidad de una norma en alguna acción de inconstitucionalidad que pudiese aplicar por analogía, se debe realizar el análisis concreto de las cuestiones fácticas que revisten la problemática planteada, a efecto de verificar si existe o no la trasgresión a derechos fundamentales.

Ello pues, consideró que cualquier ley puede tener un potencial violatorio de derechos humanos y ello solo puede advertirse en un caso concreto, no obstante que haya sido objeto de un control abstracto y reconocido su validez.⁵⁴

En consecuencia, la Sala Superior ha determinado que el ejercicio

⁵⁴ Criterio sostenido en el juicio SUP-JDC-44/2018 y acumulado.



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMACIA DE JUSTI
SUBSECRETARIA GENER
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y I
INCONSTITUCIO



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

de control constitucional consistente en la inaplicación de una determinada norma legal impugnada, involucra el análisis de todas aquellas normas que fueron aplicadas, así como su repercusión al caso concreto, **situación que no acontece en el control abstracto.**

De esta manera, en un determinado acto concreto pueden encontrarse circunstancias o situaciones que no implicaron un pronunciamiento por parte de la Corte, ya sea porque no fue alegado por quien presenta la acción de inconstitucionalidad o porque no fue materia del pronunciamiento en control abstracto.

Esto último implica una importancia notable, porque, precisamente este control de constitucionalidad dual, busca complementarse entre sí; sin menoscabo de que la jurisprudencia emitida por la Corte resulta vinculante para este Tribunal.

Por consiguiente, si bien la Corte en las acciones de inconstitucionalidad antes relatadas, de un análisis abstracto determinó la constitucionalidad de las reformas de diversos Estados, similares a la aquí impugnada, se advierte que dicho estudio no contempla el contexto fáctico de la entidad.

ANOTACIONES
FEDERACION
DE LA NACION
DE AGUASCALIENTES
INTERVENIENTE
ACCIONES DE
CIUDADANÍA

Lo anterior, pues como se determinó en el punto 6.4 que antecede, existieron diversos vicios en el procedimiento legislativo que resultaron en la emisión del Decreto 112, los cuales afectaron de inconstitucionalidad dicho Decreto.

Esto, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución federal, dentro de la estructura jerárquica de las normas que integran el sistema jurídico mexicano, la Constitución federal es la Ley Suprema del Estado Mexicano, de la cual derivan las leyes que reglamentan su contenido, las que a su vez, pueden ser desarrolladas, especificadas o complementadas por diversas normas, tales como reglamentos, acuerdos, bases, circulares, etcétera, en un proceso de individualización normativa siempre creciente.

En tal contexto, la supremacía constitucional se entiende como la obligación de adecuación de la ley y demás normas y actos que de ella emanen a la Constitución federal, así como la interpretación y aplicación del orden jurídico en conformidad con esta última.



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUST
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRÁMITE DI
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

En esa tesitura, para considerar que una norma es constitucional o legal, según el rango jerárquico, se debe cumplir con dos cuestiones fundamentales:

- Que su proceso de creación se haya realizado de conformidad con el procedimiento previsto en la propia Constitución y/o la ley respectiva (aspecto formal); y,
- Que su contenido sea acorde con lo prescrito en la propia Constitución y/o la ley correspondiente (aspecto material).⁵⁵

Consecuentemente, si el proceso de creación no fue realizado conforme a lo establecido en la Constitución local –artículo 112-, no cumple los parámetros formales para su validez, lo que por sí mismo trasgrede el derecho humano a la seguridad jurídica, el cual está vinculado al pleno ejercicio de los derechos políticos.

Tal consideración, tiene como base el derecho de que las personas destinatarias de ser regidas por normas generales constitucionalmente válidas, tengan certeza de que las leyes que la rigen sean resultado de un procedimiento legislativo válido, lo que se traduce en el derecho humano a la seguridad jurídica.⁵⁶

Por tales motivos, es procedente que este Tribunal realice el análisis concreto de la violación a los derechos fundamentales que aduce el accionante, contemplando las particularidades de nuestro Estado.

6.5.2. Análisis de la medida legislativa controvertida en el contenido del derecho fundamental

Es de observarse que del criterio adoptado por la Corte, en las acciones de inconstitucionalidad relatadas se advierte que si bien el artículo 116 de la Constitución federal dispone el plazo máximo de gestión de la Gubernatura de los Estados no así un mínimo y que por ello es constitucional que las legislaturas, **en ejercicio de la**

⁵⁵ Criterio sostenido en el juicio ciudadano SUP-JE-7/2018.

⁵⁶ Criterio sostenido en la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/1 (10a.), con registro:2007513, de rubro: "DEMOCRACIA DELIBERATIVA. CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE UNA LEY GENERAL, EL ÓRGANO LEGISLATIVO COMETE VIOLACIONES QUE TRANSGREDEN DICHO PRINCIPIO, ÉSTAS PUEDEN REPARARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL VULNERAR LA APLICACIÓN DE ESA NORMA LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD." Localización: [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo III; Pág. 2459.



INTERNATIONAL
CONVENTION DE
REGULATION DU
TRAFFIC MARITIME
INTERNATIONAL
REGULATION

libertad configurativa determinen como medida especial el ajuste tal periodo en aras de que sean concurrentes las elecciones locales y federal, ello **no se traduce en que la legislatura local pueda apartarse de los principios democráticos y constitucionales.**

Es decir, acorde a lo sostenido por la Corte el hecho de que se tomen medidas para lograr la concurrencia entre los procesos electorales federal y locales, entre las que se encuentra el ajustar los plazos de gestión de los diversos cargos de elección popular es constitucional, siempre y cuando tal ajuste se rija por los principios democráticos y constitucionales.

Para resolver la problemática a dilucidar, es decir, cómo proteger de la mejor manera y con la mayor amplitud posible un derecho fundamental en materia electoral, resulta orientador el criterio formulado por la Sala Superior en la sentencia recaída al SUP-JDC-352/2018 y acumulado. En tal resolución, la máxima autoridad jurisdiccional electoral del país estableció un ejercicio metodológico para dotar de contenido esa aspiración y obligación constitucional de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos como relativos a votar y ser votado, bajo cuatro postulados.

A. Marco normativo.

B. Principio de progresividad y no regresividad.

C. La garantía del derecho al voto.

D. Acciones de la autoridad competente.

Esos cuatro postulados se desarrollan a continuación respecto del derecho fundamental a ser votado, específicamente por lo que hace al cargo de gobernador de Baja California, electo en el proceso electoral 2018-2019.

A. Marco normativo. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, así como la Corte Interamericana y otros Tribunales Internacionales han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto (pasivo y activo).

B. Principio de progresividad y no regresividad. La interpretación jurisdiccional debe ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION DE JU
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

posible hasta lograr su plena efectividad de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

C. La garantía del derecho al voto. Ante la existencia de un deber jurídico de garantizar el derecho al voto, surge la necesidad de que la autoridad electoral competente implemente las acciones necesarias para hacer factible tal derecho.

D. Acciones del Instituto. Ante lo desproporcionado de la regla establecida en el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, el Consejo General deberá implementar las medidas necesarias y suficientes para hacer efectivo el derecho a ser votado, en su vertiente de ocupación y desempeño del cargo, por el periodo de seis años, tal como lo dispone el artículo 44 de la Constitución local.

En principio, ha de señalarse que el artículo 1° de la Constitución federal dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos, sin distinción de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Los derechos fundamentales son aquellos que comprenden los presupuestos éticos, así como los componentes jurídicos que comprometen la dignidad humana a efecto de que se tenga la posibilidad de desarrollar sus potencialidades en la sociedad, de tal forma que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, puesto que éstos no se otorgan con arreglo a las leyes nacionales, sino que se reconocen y protegen como dados antes que él, y en los que solo cabe penetrar en una cuantía mensurable en principio y sólo dentro de un procedimiento regulado⁵⁷.

Cabe señalar que el artículo 1° de la Constitución federal establece una cláusula de remisión, al señalar que los derechos humanos reconocidos serán los consagrados tanto en la propia Constitución federal como en tratados internacionales, los cuales deben ser promovidos, respetados, protegidos y salvaguardados por el Estado, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**, por lo que este

⁵⁷ García Belaunde, Domingo. *Diccionario de Jurisprudencia Constitucional*. Perú: GRIJLEY, 2009, página 170.



FEDERAL JUDICIAL
SYSTEM COURT OF
SUSSEX COUNTY
SECTION OF TRAVEL
CONSTITUTIONAL
INVESTIGATION



órgano jurisdiccional local debe analizar la presente controversia bajo dichos principios y potencializando los derechos humanos a favor del actor y, en su caso, ordenando la reparación de las violaciones a los mismos.

Los artículos 28 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; así como 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, disponen que los Estados se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos el ejercicio de los derechos fundamentales, lo que implica adoptar las medidas oportunas –sin dilaciones– para dictar las disposiciones legislativas que fuesen necesarias para hacer plenamente efectivos tales derechos, sin que haya la posibilidad de suspensión o exclusión salvo situaciones excepcionales que no entrañen discriminación.

En referencia a ello, la Corte Interamericana ha sostenido que todo Estado Parte debe adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención, y en consecuencia deben adoptar las medidas positivas, **evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental**, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

Ahora bien, una de las vertientes de los derechos humanos son los que refieren a los político-electorales, entendidos como aquellos que se caracterizan por una incidencia inmediata y directa en el funcionamiento del Estado y de la organización administrativa⁵⁸.

Así, mientras el **derecho político** regula y armoniza todo tipo de relación entre gobernantes y gobernados dentro de la organización política; el **derecho electoral** se refiere a un aspecto de estas relaciones cuando específicamente se refieren a la elección, designación y remoción de los gobernantes, en el marco de la justicia y la seguridad jurídica⁵⁹.

⁵⁸ Ansolabehere, Karina. *Diccionario Básico de derechos humanos. Cultura de los derechos en la era de la globalización*. México: Flacso México, 2009, página 89.

⁵⁹ Ponce de León, Luis. *Derecho político electoral*. México, Porrúa, 2010, página 4.



AGENCIA FISCAL DE
REVENIDOS DE JU
SUSSEPANA GEN
EDICION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
NO INSTITUC

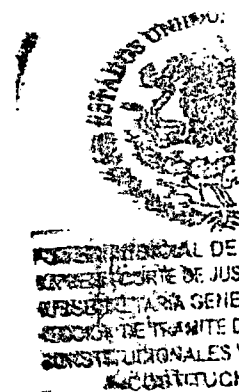
Estos derechos político-electorales se encuentran consagrados en los artículos 1º, 35 y 41 de la Constitución federal, con relación a los numerales 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XX, XXVIII, XXXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana, y en la totalidad del Código de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, de cuyas disposiciones se desprenden las premisas siguientes:

1. La democracia es la base del Estado de Derecho por lo que constituye un derecho de los pueblos americanos.
2. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público.
3. La voluntad ciudadana se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto.
4. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.
5. Toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos.
6. Toda persona tiene derecho a votar y ser electa.
7. Toda persona tiene derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.

Es conveniente tener presente que el artículo 29, inciso d) de la Convención Americana precisa que ninguna de sus disposiciones *"puede ser interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza"*.⁶⁰

Así, para el ejercicio efectivo de la **democracia representativa**, es necesario el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; a participar directamente o por medio de representantes libremente escogidos, en el gobierno de su país, así como en los asuntos públicos; al acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, entre otros.

⁶⁰ Orozco, J. Jesús. *Protección a los derechos humanos. Perspectivas nacionales e interamericanas*. México, Porrúa y otros, 2018, páginas 350 y 351.



DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
WASHINGTON, D.C. 20530
JUL 10 1964
RECEIVED

La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.⁶¹

Bajo tales consideraciones, la Corte Interamericana estimó que el párrafo 1 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce a toda la ciudadanía el derecho de acceso en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, siendo que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, al mismo tiempo, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos.⁶²

La propia Corte Interamericana en la sentencia *Yatama vs Nicaragua* sostuvo que de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio.

A FEDERACIÓN
CIA DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO
CONTINUACIÓN
DE ACCIONES DE
NATURALEZA

Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales.⁶³

A su vez, la participación política es parte del **núcleo esencial de los derechos político-electorales**, el cual contiene varios elementos, como lo son: el derecho a participar en el gobierno directamente o a través de sus representantes libremente elegidos;

⁶¹ Caso *Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párrafo 166. Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf>.

⁶² Idem, Serie C No. 184, párrafos 143, 148 y 154. Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf>, así como en el Caso *López Mendoza Vs. Venezuela*, Sentencia de 1 de septiembre de 2011, párrafo 108.1, disponible en http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf.

⁶³ Párrafo 201. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf.



DEPARTAMENTO DE L.
OPRACIONES DE JUST.
AGENCIA GENERAL
REGION DE PROTECCION DE
INSTITUCIONES Y
INVESTIGACION

el derecho a participar en las elecciones, lo cual comprende el derecho a elegir y a ser electo, así como el derecho de acceso a cargos públicos⁶⁴, en los términos que la propia normativa establece y sin restricción arbitraria y desproporcionada que en lugar de maximizar, vulnere un derecho fundamental como lo es el que se analiza.

Es decir, tal derecho no se limita a la participación en una campaña electoral y a la posterior proclamación de las personas electas de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino que incluye también la consecuencia de dichos actos jurídicos que consiste en el derecho a ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía, el de mantenerse en él durante el periodo correspondiente, así como obtener la remuneración correspondiente.⁶⁵

Ahora bien, como es sabido, los derechos fundamentales se encuentran protegidos, entre otros, por el **principio de progresividad** que implica tanto gradualidad como progreso, es decir, se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. Lo que patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe de mejorar y avanzar y no puede tener un retroceso.⁶⁶

Sirve de sustento la tesis de la Segunda Sala de la Corte, de rubro "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO".

6.5.3. Libertad configurativa frente al control constitucional y convencional

El Congreso cuenta con libertad configurativa para regular ciertas materias, como lo es la electoral, de manera que la previsión y aplicación de requisitos en determinado Estado para ejercer los derechos políticos **no constituyen, per se, una restricción**

⁶⁴ Méndez, Juan E. Diccionario electoral, Toma I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), México Tercera Edición 2003, foja 412.

⁶⁵ De la Mata Pizaña, Felipe y Coello Garcés, Clicerio (Coord.) *Tratado de Derecho Electoral*, Tirant lo Blanch, México 2018, págs. 323-324.

⁶⁶ Carbonell, Miguel *La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un nuevo paradigma*. México, 2012 página 159.



CONVENTION DE
L'AFRIQUE DE L'EST
ET DU CENTRE
AFRIQUE DE L'EST
ET DU CENTRE



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

indebida a los derechos políticos. Estos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones.

Así, derivado de la falta de disposición constitucional expresa que imponga reglas específicas, los Estados gozan en la materia electoral un amplio espacio de configuración legislativa y en esa medida están facultados para imprimir al sistema electoral local las particularidades de sus realidades concretas y necesidades.

Sin embargo, dentro de la libertad de que goza la Legislatura, no deben apartarse de las bases generales previstas en la Constitución, lo que implica que **la libertad configurativa se limita por lo mandatos constitucionales y de derechos humanos**, de forma que, la normativa que emitan debe estar adecuada a los preceptos constitucionales, y de tratados internacionales.

Sirven de sustento las jurisprudencias emitidas por la Corte, de rubros:

"LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS"⁶⁷

"DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN (MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA INTEGRACIÓN DE SUS CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN."⁶⁸

FACULTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

⁶⁷ Tesis: P./J. 11/2016 (10a.), con registro:2012593, Localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 34, Septiembre de 2016; Tomo I; Pág. 52.

⁶⁸ Tesis: P./J. 8/2010, con registro: 165279, localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Febrero de 2010; Pág. 2316. P./J. 8/2010



INTERNATIONAL
INSTITUTE OF
STATISTICS
GENEVA
1950

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES IRRESTRICTA, SINO QUE DEBE SATISFACER UNA RAZONABILIDAD EN FUNCIÓN DE LOS CARGOS QUE REGULE.⁶⁹

Es decir, la facultad de los Estados de regular o restringir los derechos no es discrecional sino está limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforma la restricción en indebida o ilegítima y contraria a la Convención Americana.⁷⁰

Al efecto, la Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención. Así, en cada caso particular, la autoridad debe avocarse a analizar si se cumplen los requisitos siguientes.⁷¹

1. Que sea acorde con el principio de legalidad;
2. Que se dirija a cumplir con una finalidad legítima;
3. Que sea necesaria en una sociedad democrática (satisface una necesidad social imperiosa o un interés público imperativo); y,
4. Que sea proporcional.

De manera que, para analizar si la restricción impuesta por el Legislador, cumple o no los parámetros antes señalados, las autoridades deben ejercer el control constitucional y en su caso convencional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 17 de la Constitución federal, así como los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVIII y XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humano, que señalan que todas las autoridades de la Nación están obligadas a otorgar una vía para hacer valer los derechos político-electorales.

En consonancia, la Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano a prever un medio de impugnación a través del cual se

⁶⁹ Tesis: P. I/2013 (9a.), con registro: 159869, Localización: [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013; Tomo 1; Pág. 373.

⁷⁰ Corte IDH, caso Castañeda, *cit. supra*, párrafo 174.

⁷¹ Orozco, J. Jesús, *cit supra*, páginas 358 y 359.



PODER JUDICIAL D
PRERA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONALE
"NCOST"

garantice de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido.⁷²

Es necesario traer a colación la evolución del control convencional, a efecto de determinar el alcance que tiene este Tribunal para la resolución de la presente controversia.

En un principio, los Estados se regulaban por la nomocracia –el gobierno de la ley–, con base en el principio de racionalidad del legislador, por lo que la tarea del juez era la mera subsunción, pues no era dable que el juzgador analizara la norma, sino solamente aplicarla.

Posteriormente, con el arribo del Estado constitucional de derecho, se reforzó la doctrina de supremacía constitucional, implementando no solo reglas, sino también principios y valores, exigibles ante los poderes públicos y particulares.

Ello implicó entonces, que la labor del juzgador se complicara ante la multiplicidad de fuentes jurídicas que impactan en las controversias planteadas, esto es, la leyes secundarias, la norma fundamental, así como el articulado internacional –*corpus juris*– y el espíritu de ésta a través de la jurisprudencia de la Corte Internacional.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Internacional indicó en un primer momento que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, sus jueces como parte del apartado del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, lo que implica que el poder judicial deba ejercer “una especie” de control convencional entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.⁷³

⁷² Caso Castañeda Gutman, sentencia de 6 de agosto de 2008 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 231, localizable en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf.

⁷³ Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26 de septiembre de 2006, párrafos 124 y 125.



PODER JUDICIAL D
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL
BOGOTA

En un precedente posterior, la Corte Interamericana sostuvo que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio.⁷⁴

De igual forma, en otro precedente la Corte Interamericana determinó que es obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado parte en la Convención Americana de Derechos Humanos, el controlar en el marco de sus competencias los derechos humanos, a efecto de prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, *"las cuales deben solucionarse a nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y sólo en caso contrario, pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad"*.⁷⁵

Tal jurisprudencia, implica que se le atribuya a **todos los juzgadores, en especial a los de primera instancia**, como es el caso de este Tribunal la **obligación primaria de salvaguardar, proteger y en su caso, restituir los derechos fundamentales**.

En consonancia con lo anterior, la Corte ha determinado que el control convencionalidad tiene el alcance de realizarse respecto de una **disposición constitucional**, atendiendo que la Constitución es derecho interno, por lo que debe adecuarse a los instrumentos internacionales, en aras de no incurrir en responsabilidad, bajo el razonamiento que los tratados son suscritos de buena fe, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

No obstante lo anterior, ha sido criterio reiterado de la Corte, que con anterioridad a determinar la inaplicación de una norma el juzgador debe realizar una interpretación –mediante las diversas técnicas aplicables– a efecto de agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible con la Constitución federal.⁷⁶

Así, de la **interpretación gramatical** del artículo Octavo

⁷⁴ Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 24 de noviembre de 2006

⁷⁵ Caso Gelman vs. Uruguay, resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, 20 de marzo de 2013.

⁷⁶ Conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Corte, en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a), con número de registro: 2010954 de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO".



SECRETARIA DE
INTERIORES
SECRETARIA DE
TRABAJO
SECRETARIA DE
COMERCIO



Transitorio se concluye que, a efecto de celebrar elecciones concurrentes, el constituyente local estableció, entre otras cosas, que la Gubernatura del Estado a elegirse en junio del año en curso, ocupe el cargo por un lapso de dos años.

Este Tribunal considera que no es viable realizar la interpretación sistemática y funcional de dicha disposición, atendiendo a los principios democráticos, de división de poderes y racionabilidad.

Ello, en virtud que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones.

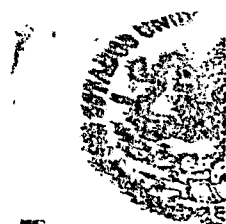
Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma, de manera que cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada, caso contrario llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso.⁷⁷

COLEGIO DE JUECES ELECTORALES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
JEFES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES
JEFES DE LOS JUZGADOS ELECTORALES
JEFES DE LOS TRIBUNALES DE CONFLICTOS DE INTERESES
JEFES DE LOS TRIBUNALES DE AMPARO

Así, se advierte que en caso de realizar la interpretación de la norma combatida, conllevaría a que este Tribunal sustituya al Poder Legislativo, en contravención de la división de poderes, sin que ello implique la imposibilidad de realizar el estudio correspondiente a la constitucionalidad y convencionalidad de la disposición de marras.

Por tales consideraciones es necesario analizar si la previsión del legislador es apegado a los parámetros constitucionales y convencionales, como los son el perseguir una finalidad, que la medida sea idónea, que no constituya un límite innecesario y que no sea desproporcionada.

⁷⁷ Criterio sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, de registro:173957, de rubro: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES." Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Noviembre de 2006; Pág. 29.



CONSTITUTIONAL DE
NACIONES UNIDAS DE LAS
AMERICANAS GENE
RALES DE LA AMERICA D
CONSTITUCIONALES
CONSTITUCION

6.5.4. Análisis de proporcionalidad en sentido amplio

Este Tribunal estima que el ajuste al período de gestión de la Gubernatura electa en este proceso electoral local, no fue conforme a los principios de progresividad y pro persona, puesto que debió contemplar la medida alterna que implicaba una restricción menor al derecho de ser votado y acceder al cargo por un período determinado en el artículo 44 de la Constitución local.

Por consiguiente, a efecto de analizar la restricción alegada y si esta se encuentra justificada, como lo solicita el actor, se implementará el test de proporcionalidad, con base en los siguientes elementos: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.⁷⁸

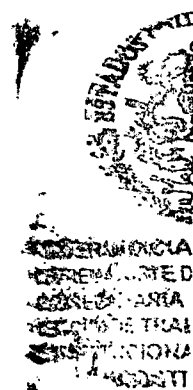
Debiéndose precisar que el análisis se hará conforme se superen los diversos *subtest* que conforman la proporcionalidad en sentido amplio, por ende, en caso de que la restricción no se ajustase a tales evaluaciones, se entenderá por tanto que la norma no es proporcional, en consecuencia, que deberá inaplicarse al caso concreto.

6.5.4.1. Finalidad

Por lo que hace a este *subtest*, la Corte ha sostenido que, al aplicar el test de proporcionalidad, en primer término se debe identificar cuál es el fin que persigue el legislador con la implementación de la medida (restricción) a efecto de determinar si tales razonamientos son válidos.

Para lo cual se debe delimitar que en este apartado únicamente se enfocará a determinar si la finalidad buscada por el legislador es adecuada, por lo que no se analizarán sus consecuencias, es decir,

⁷⁸ Criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXIII/2016 (10a.) de rubro: "TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL." Consultable en *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 915



NATIONAL ASSOCIATION OF
MANUFACTURERS
1100 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004
(202) 462-2600



la ponderación entre el beneficio social de permitirse la medida y la vulneración causada con ella a los derechos fundamentales del actor, será objeto de estudio en un apartado posterior.

De tal forma que, esta etapa conlleva a evaluar si la limitación a los derechos fundamentales se encuentra justificada, atendiendo a los valores, intereses, bienes o principios que el Estado legítimamente puede perseguir, a efecto de determinar si tal finalidad reviste la característica de ser un "fin adecuado".⁷⁹

Así, por razón del método a seguir para la aplicación del test de adecuación, se debe partir del fundamento y tipo de finalidad perseguida por el legislador.

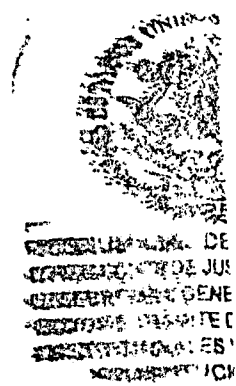
Se advierte que el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución federal prevé el mandato a las legislaturas locales de adecuar la norma estatal a efecto de que **al menos una de las elecciones sea concurrente con el proceso electoral federal.**

Como se advierte de la exposición de motivos⁸⁰, la finalidad que busca el legislador federal al establecer tal disposición es, por una parte, disminuir la saturación y consiguientemente abatir el posible abstencionismo de la ciudadanía.

Ahora bien, respecto de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución federal en relación con la homologación de los calendarios electorales de las entidades federativas, los elementos a considerar son tres: el día, el mes y el año de la jornada electoral local en referencia con los comicios federales. Dados estos tres elementos, los calendarios electorales en las entidades federativas se pueden clasificar en tres grupos "concurrentes, coincidentes, no concurrentes".

⁷⁹ El test de adecuación examina si una medida que restringe un derecho fundamental está dirigida a un fin que justifica tal restricción, por lo que dicho examen se enfoca en el fin de la medida más que en sus consecuencias, por consiguiente, el examen no conduce a ponderación alguna entre el beneficio que obtendría la sociedad si se permitiese que la medida proceda y la vulneración que se causaría al derecho como resultado de dicha medida, pues ese análisis se hará en otra fase del test de proporcionalidad. Barak, Aharon, *Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones*. Perú. Palestra. 2017

⁸⁰ Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado de Estudios Legislativos; Primera y Segunda; en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución federal en materia político electoral. Consultable en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/docleg/62/>.



COMMISSION INTERNATIONALE DE
DROITIER
GENEVE
SUISSE

- Los que son **concurrentes** con la jornada electoral federal: ambas elecciones se celebran el mismo día, mes y año;
- Los que **coinciden** en el día y mes, aunque no en el año de la celebración de la jornada electoral federal.
- Los que **coinciden** en el año, aunque no en el día y mes de la celebración de la jornada electoral federal.
- Los **no concurrentes**, porque la jornada electoral de la entidad federativa es diferente en el día, mes y año con la celebración de jornada electoral federal.

De allí que existen tres grupos de entidades federativas, las cuales son las siguientes:

- **Aquellas cuya jornada electoral es concurrente con la federal** (ambos tipos de comicios se celebran el mismo día, mes y año)⁸¹.
- **Aquellas cuya jornada electoral coincide con el día y el mes aunque no con el año de los comicios federales**, es decir, son jornadas electorales que se celebran el primer domingo de julio de un año diferente a la celebración de las elecciones federales⁸².
- **Aquellas cuya jornada electoral coincide con el año aunque no con el día y el mes de los comicios federales**, es decir, son jornadas electorales que se celebran en el año de la elección federal aunque no el primer domingo de julio⁸³.

Ahora bien, de las constancias obrantes en autos se advierte que la Comisión de la Reforma del Estado del Congreso local, entre los meses de enero a junio de dos mil catorce, recibió diversas iniciativas para reformar y adicionar la Constitución local, a fin de fijar, entre otros, las fechas en el tema de las elecciones

⁸¹ Las entidades federativas que caen en este supuesto son las siguientes: Campeche; Colima; Ciudad de México; Guanajuato; Jalisco; Morelos; Nuevo León; Querétaro; San Luis Potosí y Sonora. Los cargos de elección para Gobernador, Diputados locales y ayuntamientos para las entidades federativas y Jefe de Gobierno, Diputados para la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales para la Ciudad de México.

⁸² Las entidades federativas que caen en este supuesto son las siguientes: Chihuahua; Durango; Estado de México; Nayarit y Zacatecas para la elección de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos.

⁸³ Las entidades federativas que caen en este supuesto son las siguientes: Tabasco para la elección de Gobernador.



DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C.
20535



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

concurrentes, como se advierte del Dictamen Uno⁸⁴.

De dicho Dictamen se desprende que el PRI y el Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa en la que señalan que por única ocasión la Gubernatura que sea electa el primer domingo del mes de junio de dos mil diecinueve, iniciará el ejercicio de sus funciones el día primero de noviembre de ese año y durará en su cargo hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro **—cinco años—**.

El PAN propuso que la Gubernatura del Estado, que sea electa en el proceso electoral de dos mil diecinueve, por única ocasión, tendrá un periodo de **dos años** que dará inicio el primero de noviembre del dos mil diecinueve y concluirá el treinta y uno de octubre del dos mil veintiuno.

De ambas propuestas, el legislador adoptó la presentada por el PAN bajo el argumento que el empate de elecciones es un reclamo social, puesto que en los últimos años el tema de las elecciones concurrentes federal y local ha sido objeto de debate, del que se observan como argumentos a favor de ella desde aspectos económicos, como es el ahorro al eliminarse actividades que se realizan de manera duplicada, así como lo que refiere que al coordinarse ambos institutos se eleva la eficacia de la organización y operación de los comicios.

También se argumenta que, al coincidir las fechas de elecciones, los partidos políticos pueden disponer de mayor tiempo para la negociación y diálogo entre ellos, ya que ocupan menos tiempo para sus contiendas electorales, afirmándose además que los ciudadanos pueden comparar las propuestas de los partidos y observar su desempeño en condiciones similares, abatiendo los altos niveles de abstencionismo.

En consecuencia, se sostuvo que se dedica menos tiempo a los procesos electorales (uno de cada tres años) evitando la politización de las diversas actividades de gobierno, aunado a que se evita la constante presencia de propaganda electoral, concentrándola toda en un año.

⁸⁴ Consultable en http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/Dictamen/1_REFDESTADO_10JUL14.pdf



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMACIA DE JUST
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES
ENDOSITADO

De tales razonamientos, se hace patente que la legislatura en el afán de hacerse cargo de los reclamos y necesidades sociales, estimó que la concurrencia de las elecciones para renovar el Congreso del Estado, Ayuntamientos y Gubernatura con las elecciones federales, podía consumarse hasta el proceso federal a desarrollarse en "2021", en que se elijan Diputaciones al Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución federal, De ahí que se considere que la restricción cumple con un fin adecuado.

6.5.4.2. Idoneidad

La siguiente fase en la aplicación del Test de proporcionalidad es calificar si la medida impugnada tiende a alcanzar, en algún grado, los fines perseguidos por el legislador. Es decir, en este apartado se evaluará que los medios escogidos sean aptos para alcanzar el fin adecuado, sin que maximice o minimice la restricción impuesta.

Así, el examen de idoneidad o de conexión racional presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho, el fin que persigue dicha restricción, y el medio usado, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador.⁸⁵

De manera que como quedó patente en el análisis de la finalidad, con la implementación del artículo Octavo Transitorio el legislador pretendió la concurrencia de la totalidad de elecciones locales con las intermedias federales.

Por tanto, se reconoce que existe un motivo importante, que podría traer diversos beneficios en materia electoral para el Estado, por lo que los ajustes establecidos en el artículo octavo transitorio del Decreto 112, se contempla únicamente como una situación extraordinaria que hará factible el logro del objetivo buscado con la reforma Constitucional.

⁸⁵ Conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCLXVIII/2016 (10a.) de rubro: "SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA." Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 911.



RESERVAZIONE DI
REPRESENTAZIONE DE J
RUESEGGIARIA GEI
DECOGNIZIONE
SISTITUTTORE
UNIVERSITUM

Por consiguiente, se estima que hay una conexión racional entre la limitante al derecho político de ser votado en su vertiente de acceso al cargo por el periodo establecido en el artículo 44 de la Constitución (intervención al derecho), a efecto de lograr la concurrencia de las elecciones locales con la relativa a las Diputaciones federales (fin) con el plazo de gestión de la Gubernatura electa en la jornada comicial de la presente anualidad (medio usado). De ahí que se considere que es una medida idónea para alcanzar los fines pretendidos.

6.5.4.3. Necesidad

Una vez que se ha constatado un fin válido constitucionalmente y la idoneidad de la norma, corresponde analizar si la misma es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental.⁸⁶

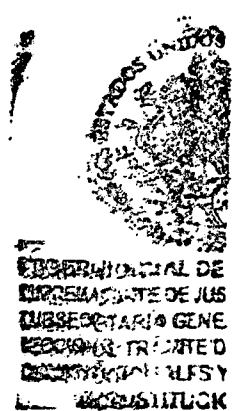
Así, el test de necesidad se basa en la premisa consistente en que el uso del medio de la ley se requiere sólo si el fin no puede ser alcanzado a través de otro medio legislativo hipotético, que satisfaga igualmente el test de la conexión racional e implicara un menor nivel de restricción al derecho en cuestión.

Es decir, el examen de necesidad implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad el derecho fundamental afectado.

De tal forma, para superar el test de necesidad de los medios definidos por la ley, surge del hecho de que no existe otra alternativa hipotética que sea menos dañina para el derecho en cuestión y al mismo tiempo, fomente el fin de la ley.

En ese sentido, se advierte que el legislador local tenía tres opciones para cumplir con el mandato constitucional. Esto es, establecer que el periodo inicie en dos mil diecinueve y concluya en dos mil veintiuno a efecto de que fuese concurrente con el proceso electoral

⁸⁶ Tesis: 1a. CCLXX/2016 (10a.) de rubro: "TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA." Consultable en *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época*, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 914.



federal intermedio; que concluyera en el dos mil veinticuatro, año en que se celebrará el proceso electoral federal general; o bien, dejar intocado el periodo de gobernador, toda vez que ya se cumplía con la regularidad constitucional al tener no sólo una sino dos elecciones locales concurrentes con las elecciones federales intermedias.

En otras palabras, el órgano reformador tenía **tres medidas alternas** para cumplir con el fin legítimo buscado por el Congreso de la Unión, **la primera** referente a establecer la duración de la gestión de dos años que se considera que restringe en mayor medida el derecho de acceder al cargo (ejercerlo); **la segunda**, disponer que el encargo de la Gubernatura concluyera en el dos mil veinticuatro, por lo que el periodo sería de cinco años y ello sería concurrente con las elecciones federales (concurrentes), es un lapso mayor a la primera opción y muy cercana al establecido en el artículo 44 de la Constitución local; y **la tercera**, establecer que la duración del cargo concluyera en dos mil veinticinco, siendo un periodo de seis, tal como lo dispone el artículo constitucional antes referido.

Cabe señalar que únicamente las primeras dos opciones fueron contempladas por los legisladores locales, como se advirtió de las diversas iniciativas analizadas en el apartado de "finalidad".

De forma que, para determinar el ajuste correspondiente se debió distinguir entre la Gubernatura y los cargos de Diputaciones y Municipales, pues si bien, con la referida reforma también se redujo el periodo de gestión de estos últimos, ello guarda consonancia a que de conformidad con los artículos 14, 16 y 78 de la Constitución local, tales cargos serán electos cada tres años. Máxime que dichos cargos tienen la posibilidad de ejercer la elección consecutiva, tal como lo señaló el Legislador en el debate relativo al Decreto controvertido⁸⁷.

⁸⁷ Como se desprende de la versión estenográfica de la sesión ordinaria de diez de julio de dos mil dieciséis, fojas 589 y 590, disponible en http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_sesiones.html, el cual se hace valer como hecho notorio en razón de encontrarse publicado en la página institucional de conformidad con lo sostenido en la jurisprudencia J/24 de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL



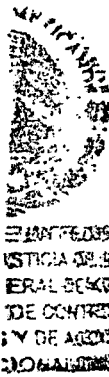
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARIA DE JUSTICIA Y FERIA
SECRETARIA DE JUSTICIA Y FERIA
SECRETARIA DE JUSTICIA Y FERIA
SECRETARIA DE JUSTICIA Y FERIA
SECRETARIA DE JUSTICIA Y FERIA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Por el contrario, el artículo 44 de la Constitución local, establece que la gubernatura se renovará **cada seis años sin que sea posible** que quien haya detentado el ejecutivo estatal pueda aspirar a ser **reelecto**. Sin embargo, como ya se razonó, el Congreso contaba con tres opciones:

- 1. Toda vez que se homologan las elecciones de diputados y municipales, es dable respetar el periodo de seis años previsto en el artículo 44 de la Constitución Local, es decir, concluir el periodo en **dos mil veinticinco**.
- 2. Homologar la totalidad de los cargos en la entidad federativa, optando por un periodo de dos, a efecto de la concurrencia en **dos mil veintiuno**.
- 3. Homologar la totalidad de los cargos en la entidad federativa, optando por un periodo de cinco, a efecto de la concurrencia en **dos mil veinticuatro**.



Para mayor claridad, se inserta un cuadro calendario en el que se plasman los procesos electorales locales y federales.

2013 Proceso Electoral local para la elección de la Gubernatura actual.*	2014	2015 Proceso Electoral federal en que se renovan las diputaciones.	2016 Proceso Electoral Local para renovar diputaciones y municipales.
2017	2018 Se celebró Proceso Electoral Federal en que se renovaron los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.	2019 Concluye la Gubernatura Actual. Se celebrará Proceso Electoral Local General.	2020
2021 Se propone la concurrencia de los Procesos Electorales federales (diputaciones y senadores).	2022	2023	2024 Proceso Electoral Federal en que se renovan los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Proceso Electoral Local para renovar diputaciones y municipales.
2025 Se propone la celebración del proceso para elegir gobernador.			

Como se observa del cuadro trasunto, al disponer en el artículo 44

ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.”



MINISTRE DE L'INTERIEUR
DES AFFAIRES LOCALES
ET REGIONALES
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

de la Constitución local que la Gubernatura será electa cada seis años, el legislador local podía determinar que dicha elección fuese concurrente hasta el dos mil veinticuatro o, en su caso, respetar el periodo constitucional de seis años.

Máxime que, **los procesos electorales para elegir diputaciones y municipios serán concurrentes en el año dos mil veintiuno** con el proceso electoral federal intermedio en el que se renovará la Cámara baja del Congreso de la Unión, por lo que con la concurrencia de estas elecciones **se da cumplimiento al mandato previsto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución federal.**

De manera que, es de resaltar que si bien la propia Constitución federal otorga libertad a los Estados de legislar en lo concerniente a sus regímenes interiores en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, así como los derechos fundamentales protegidos por el principio de progresividad, por lo que la regulación que hagan los Estados a, entre otros derechos, los político-electorales deben ser justificados y observar que la restricción sea la mínima necesaria para cumplir con el propósito buscado.

Lo cual es acorde, al criterio sostenido por la Primera Sala de la Corte, en cuanto a que la medida legislativa debe perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lograr en algún grado la consecución de su fin y no limitar de manera innecesaria y desproporcionada el derecho fundamental en cuestión, esto es, si existen medidas alternativas que también sean idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental.

Así, el derecho a ejercer el cargo por un periodo determinado por el legislador obedece a que el artículo 44 de la Constitución local dispone que la Gubernatura se renovará cada seis años, por lo que la previsión señalada en el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, no obstante que se trata de un sistema normativo de carácter transitorio, se estima que *de facto*, implica una restricción que incide en mayor grado en el derecho de acceso al cargo, que la opción relativa a que el encargo de la Gubernatura concluyera hasta el dos mil veinticinco.



ACORDA EL TRIBUNAL DE
LA AMERICA COMITE DE JUS
INTER-AMERICANA GENE
RECONOCIMIENTO DE LA VIDA E
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCION



De ahí que se estime que, la medida adoptada por el Congreso del Estado, **no supera el subtest de necesidad, y en consecuencia el test de proporcionalidad en sentido amplio**, pues implica una restricción mayor al limitar la gestión de la Gubernatura a dos años, habiendo dos medidas alternas con las cuales se lograba, en mayor medida, el fin pretendido por la Carta Magna y las cuales implican un menor nivel de restricción al derecho en cuestión.

En otras palabras, la medida adoptada por el legislador para lograr la concurrencia, fue la más restrictiva de las otras dos opciones que tenía, esto es, que el periodo sea de cinco años, lo que conlleva un lapso mayor a la adoptada en el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, o en su caso, respetar el periodo de seis años establecido en el artículo 44 de la Constitución local.

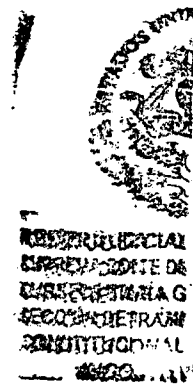
Por tal motivo es que, al no superar el subtest de necesidad no es necesario analizar el respectivo al de proporcionalidad en sentido estricto, puesto que, con que no se supere alguno de los subtest previos es suficiente para concluir la inconstitucionalidad de la norma combatida.

En ese orden de ideas, la restricción prevista por el legislador no cumple los parámetros constitucionales y convencionales de derechos humanos, en clara contravención a los principios pro persona que, implica que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios, así como el de progresividad y no regresividad que conlleva ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

Consecuentemente, este Tribunal estima que la norma combatida, trasgrede el derecho fundamental de ser votado en su vertiente de acceso al cargo por el periodo fijado en la Constitución local, por lo que lo procedente es **inaplicar** el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 al caso concreto.

6.6. EFECTOS

En razón de todo lo expuesto, lo procedente es **inaplicar** el artículo



Octavo Transitorio del Decreto 112, y en consecuencia se **modifica** el **acuerdo** IEEBC-CG-PA37-2019 emitido por el Consejo General, en el que determinó otorgar el registro como candidato a la Gubernatura del Estado a Jaime Bonilla Valdez postulado por la Coalición, y en vía de consecuencia la **Convocatoria** a Elecciones Ordinarias aprobada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.

Por consiguiente, se ordena al Consejo General, una vez que haya quedado firme esta determinación, la realización de los siguientes actos:

a) La emisión de un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado en el que, modifique únicamente por lo que hace al señalamiento del plazo de gestión de la Gubernatura electa en el presente proceso electoral, en términos de lo expuesto en el punto 6.3 de esta ejecutoria.

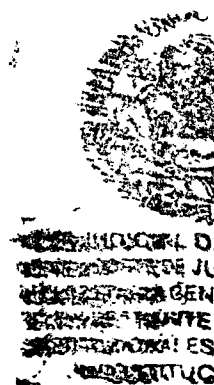
b) Por medio de su Presidente deberá emitir una adenda a la Convocatoria en la que inserte lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución local y la Base Sexta, inciso a) de la misma, en el sentido siguiente:

Toda vez que, el Tribunal de Justicia Electoral inaplicó el artículo Octavo Transitorio, del Decreto 112, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2018-2019, iniciará funciones el primero de noviembre de dos mil diecinueve (2019) y concluirá el treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Dicha adenda deberá ser **publicada una vez que la presente determinación haya quedado firme**, en los términos y con las formalidades relativas a la Convocatoria, para que sea del conocimiento de toda la ciudadanía y actores políticos, a fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de certeza en el proceso electoral.

Para los efectos de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, se vincula al **Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California**, para el cabal cumplimiento a la presente ejecutoria.

SIN TEXTO





c) Hecho lo anterior, el Consejo General así como el **Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California** deberán informar de su cumplimiento a este Tribunal dentro de las **veinticuatro horas** a que ello suceda, para lo cual deberán remitir las constancias de las publicaciones en comento, y demás documentación que considere pertinente.

Ello, en virtud que los efectos de este tipo de resoluciones no se limitan a las partes que acudieron a juicio, sino que se hacen extensivos a las personas que tienen coincidencia con determinadas calidades jurídicas y fácticas, dado el riesgo de vulnerar sus derechos de igualdad, lo cual no implica una conculcación al principio de relatividad de las sentencias, toda vez que en el caso, los efectos son únicamente para la personas que contiendan al cargo de la Gubernatura, en este proceso electoral.

Con ello, se da coherencia al fallo en cuanto que sus efectos permiten la concretización de los principios de igualdad y certeza en el proceso y, por el otro, establecer que todos los contendientes participen en igualdad de condiciones, lo que se armoniza con el artículo 41 de la Constitución federal, sin que dicha situación signifique que sea un efecto general, toda vez que ello abarca solo a esos sujetos respecto de este proceso en particular⁸⁸.

Además de lo anterior, en virtud de haberse determinado la **inaplicación** del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, **informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con copia certificada de la presente ejecutoria, de conformidad con los artículos 99 de la Constitución federal; 5 Apartado E de la Constitución local; así como 2, fracción I, inciso c) de la Ley del Tribunal.

Por lo anteriormente fundado y motivado se

RESUELVE

PRIMERO. Se **reencauza** el medio de impugnación identificado como MI-63/2019 a recursos de inconformidad, por lo que se

⁸⁸ Tales consideraciones fueron adoptadas por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-1163/2017.

SIN TEXTO.



instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

SEGUNDO. Se **declara la inaplicación** del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución local en materia político-electoral y su régimen transitorio.

TERCERO. Infórmese a la **Suprema Corte de Justicia de la Nación** con copia certificada de la presente ejecutoria, respecto de la inaplicación del referido precepto.

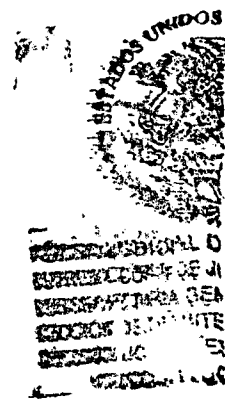
CUARTO. Se **modifica** el acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para los efectos precisados en el punto 6.6 de esta sentencia.

QUINTO. Se **ordena** al Consejo General emitir una *adenda* a la Convocatoria en la que inserte lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a la **Base Sexta**, inciso a) de la misma, en los términos y con las formalidades de publicación relativas a la Convocatoria, para que sea del conocimiento de toda la ciudadanía y actores políticos, en los términos del punto 6.6 de esta ejecutoria.

SEXTO. Se **vincula** al Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, para el cabal cumplimiento a la presente ejecutoria.

NOTIFÍQUESE a las partes **personalmente** en el domicilio señalado en autos, al Congreso del Estado de Baja California, al Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California y al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California por **oficio**, a la ciudadanía por **estrados**, publíquese por **lista** y en el **sitio oficial** de internet de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 302 fracciones I, II y III, 303 y 307; de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 63, 65, fracción I, 66, 68 y 72 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

SIN TELA 101



RECEIVED
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C.
JAN 10 1966

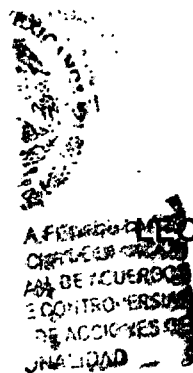


TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por **MAYORÍA** de votos de los Magistrados que lo integran con voto en contra de la Magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO
MAGISTRADA PRESIDENTA



LEOBARDO LOAIZA CERVANTES
MAGISTRADO

JAIME VARGAS FLORES
MAGISTRADO

ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

SIN TEXTO

REPUBLICA
DE CHILE
MINISTERIO DE
INTERIORES
SECRETARIA
DE SEGURIDAD
PUBLICA
SANTO DOMINGO
1980

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO, CON RELACIÓN A LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RI-63/2019, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 328, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ELECTORAL; 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL; Y 4, INCISO G), DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL, EL CUAL SE EMITE EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES.

Respetuosamente me aparto del proyecto que se somete a la consideración en el expediente RI-63/2019, toda vez que disiento de las consideraciones contenidas en el mismo, así como de los efectos y del sentido de los resolutivos segundo al quinto, con base en las razones que enseguida se exponen.

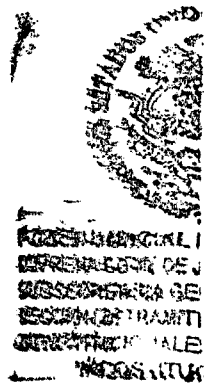
En la resolución que se pone a la consideración, se determina en lo que interesa, concretamente en los resolutivos segundo, cuarto y quinto, lo siguiente:

SEGUNDO. Se declara la inaplicación del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución local en materia político-electoral y su régimen transitorio.

CUARTO. Se modifica el acuerdo IEIBC-CG-PA37-2019 emitido por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para los efectos precisados en el punto 6.6 de esta sentencia.

QUINTO. Se ordena al Consejo General emitir una adenda a la Convocatoria en la que se inserte lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a la Base Sexta, inciso a) de la misma, en los términos y con las formalidades de publicación relativas a la Convocatoria, para que sea del conocimiento de toda la ciudadanía y actores políticos, en los términos del punto 6.6 de esta ejecutoria.

SIN TEXTIO





Por su parte, dentro de los efectos se dispone en esencia, en su apartado 6.6., lo siguiente:

- *Inaplicar el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, y en consecuencia modificar el acuerdo IEEBC-CG-PA37-2019 emitido por el Consejo General, en el que determinó otorgar el registro como candidato a la Gubernatura del Estado al hoy recurrente, así como en vía de consecuencia modificar la convocatoria a elecciones ordinarias aprobada el 28 de diciembre de 2018.*

Para tal efecto, se ordena al Consejo General que una vez que haya quedado firme esta determinación, realice lo siguiente:

a) *Un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado en el que modifique únicamente por lo que hace al señalamiento del plazo de gestión de la gubernatura electa en el presente proceso electoral.*

b) *Emitir una adenda a la Convocatoria en la que inserte lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución local, a la Base Sexta, inciso a) de la misma en el sentido siguiente:*

Toda vez que el Tribunal de Justicia Electoral inaplicó el artículo Octavo Transitorio, del Decreto 112, la gubernatura electa en el proceso electoral de 2018-2019, iniciará funciones el primero de noviembre de dos mil diecinueve (2019) y concluirá el treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Todo lo anterior basándose medularmente en las consideraciones contenidas en el apartado 6.5 de la resolución objeto del presente asunto, mismas a las que se remite por economía procesal, en aras de evitar repeticiones innecesarias.

Al respecto, no puedo coincidir ni con las consideraciones contenidas en el apartado 6.5 en las que se basa la sentencia, ni con las consideraciones contenidas en los apartados 6.3 y 6.4, así como tampoco con los efectos dispuestos en el apartado 6.6, ni con los

SIN TEXTO

RECEIVED
COMMISSION
SECRETARIA
REGION DE TRÁ
NSITO
L. 1960-11-17

resolutivos segundo al quinto de la sentencia. Ello, con base en las razones que enseguida expongo.

En principio y conforme a la materia objeto de impugnación, en mi opinión resulta extemporánea la demanda del recurrente, ya que las alegaciones que hace valer para controvertir el Punto de Acuerdo mediante el cual se aprobó su candidatura a la gubernatura del Estado, se encuentran fuera de plazo para impugnarse.

En segundo lugar, no comparto las consideraciones formuladas en el apartado 6.5 en torno a que el periodo del encargo de gobernador previsto en el artículo octavo transitorio del Decreto 112 es restrictivo del derecho fundamental del actor de ser votado y que colisiona con el artículo 44 de la Constitución local y que por ende se deba tener por fundado el agravio del actor e inaplicarse dicha disposición transitoria.

En tercer lugar, considero que en el caso concreto, de acogerse la pretensión del actor, se trastocaría el principio de certeza que debe regir en todo proceso electoral, así como el de reserva ley, ambos valores constitucionales que este tribunal está obligado a tutelar, y a privilegiar cuando así correspondiera como es el caso.

Finalmente, estimo que las consideraciones contenidas en los apartados 6.3 titulado Indebida actuación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, y 6.4 llamado Vicios en el Procedimiento legislativo para la realización de reformas a la Constitución local, parten de premisas inexactas para tener por fundados aunque inoperantes los agravios hechos valer, pues en mi percepción, debieron haberse tenido como infundados, en mérito de lo que más adelante señalaré.

Para situarnos en contexto, es de mencionarse que el actor en esencia, tal y como incluso lo refiere la resolución, se duele y pretende impugnar en realidad la supuesta violación a su derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo, derivado de que, en su opinión, la reforma al artículo octavo transitorio del Decreto 112, limitó el ejercicio del cargo de Gobernador a dos años, lo cual a su decir es contrario a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución local, es decir, a desempeñar el cargo por un periodo de seis años.

SIN TEXTO

REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARIA DE
COMERCIO Y TRABAJO
Buenos Aires, 1941



Pretendiendo que este Tribunal analice ello y determine la inaplicación del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112.

Esto es, como lo señala la sentencia, lo que realmente pretende el recurrente es impugnar el artículo octavo transitorio del Decreto 112, es decir, el establecimiento del periodo por dos años que durará en su cargo el Gobernador electo en el actual proceso electoral estatal.

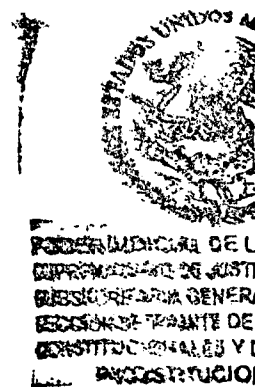
Al respecto, considero que no le asiste la razón al actor respecto a los agravios que hace valer, y en consecuencia la sentencia no debía otorgarle el calificativo de fundado, o fundados pero inoperantes, en virtud de lo que más adelante se explica, pero con independencia de ello y previo a cualquier cuestión, estimo que este Tribunal no debió entrar al estudio de fondo de la demanda, por lo siguiente.

Extemporaneidad

1. En efecto, considero que este Tribunal no debía entrar al estudio de fondo de la demanda por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 300, fracción IV, de la Ley Electoral local, dado que la demanda ya fue admitida, consistente en sobrevenir una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 299 de dicho ordenamiento, en el caso concreto, la contenida su fracción III, relativa a que transcurrió el plazo para impugnar de cinco días que señala el artículo 295 de Ley Electoral local.

Ello, porque de su análisis cuidadoso, se advierte que sus reclamos van dirigidos en realidad a controvertir la duración del cargo de la gubernatura del Estado para el periodo de 2019 a 2021, que se deriva del artículo octavo transitorio del Decreto 112 por el que se reformó la Constitución del Estado el 17 de octubre de 2014, y se reiteró en la Base Sexta, párrafo primero, inciso a), de la Convocatoria a Elección Ordinaria para el Proceso Electoral 2018-2019, emanada del Dictamen Cinco, emitida por el Consejo General para elegir Gobernador del Estado por un periodo de dos años, publicada el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico el Mexicano y el 4 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, y no a cuestionar aspectos propios materia del Punto de Acuerdo aprobado por el Consejo General el pasado 30 de marzo, mediante el cual se aprobó la solicitud de registro del recurrente como candidato a la gubernatura del Estado.

SIN TEXTO



Lo anterior, habida cuenta que el Punto de Acuerdo mediante el cual se aprobó la solicitud de registro del recurrente como candidato a la gubernatura del Estado, solamente tiene por objeto pronunciarse precisamente respecto a la procedencia o improcedencia de otorgar el registro como candidato al solicitante, en términos del cumplimiento de los requisitos que la normativa electoral aplicable exige, a efecto de expedir, en su caso, la constancia de candidatura conducente para poder participar con tal carácter en el proceso electoral.⁸⁹ Esto es, el Punto de Acuerdo recurrido trata sobre cuestiones ajenas a la materia objeto de impugnación por parte del actor.

En tanto que el Dictamen Cinco relativo a la Convocatoria a Elección Ordinaria para el Proceso Electoral 2018-2019, emitida por el Consejo General para elegir Gobernador del Estado por un periodo de dos años, publicada el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico el Mexicano y el 4 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, tuvo como propósito dar a conocer a la ciudadanía bajacaliforniana que se celebrarían elecciones para distintos cargos de elección popular y hacer saber las reglas a las que deberían sujetarse quienes se interesaran por participar en alguna de las elecciones a las que se convocó,⁹⁰ dentro de la que se encuentra la de la gubernatura del Estado, ello, tal y como lo sostuvo la Sala Superior en la resolución SUP-JRC-5/2019 y acumulados al revocar por unanimidad la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California en el expediente RI-18/2019 y acumulados, por resultar extemporáneo el medio de impugnación.

Esto es, la convocatoria de referencia, versa sobre aspectos relacionados directamente con lo que el recurrente aduce.

Apreciándose en consecuencia, en mi opinión, conforme a la materia objeto de impugnación, que el recurrente al impugnar la expedición del Punto de Acuerdo emitido por el Consejo General el 30 de marzo mediante el cual se declaró procedente otorgarle el registro como candidato a la gubernatura del Estado, controvierte cuestiones directamente relacionadas con el Decreto 112, particularmente su artículo

⁸⁹ Lo cual se desprende tanto de las consideraciones que sustentan el Punto de Acuerdo, como de sus resolutivos primero y segundo, a página 16.

⁹⁰ Lo anterior se desprende de la lectura del Dictamen Cinco y la Convocatoria en mención, y se corrobora con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la página 33 de su sentencia identificada con clave SUP-JRC-5/2019 y acumulados.

SIN TEXTO.



PROF. AMBICAR
SUPERADENTE DE
SUBSECRETARIA DE
SECCION DE FRUIT
CONSTRUCION DE
L. GUSTITU



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

octavo transitorio y la Base Sexta, párrafo primero, inciso a) de la Convocatoria a elección ordinaria para el proceso electoral 2018-2019 emanada del Dictamen Cinco, emitida por el Consejo General para elegir Gobernador por un periodo de dos años, publicada el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico el Mexicano y el 4 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, que en todo caso eran objeto de controvertirse dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surtió efectos la publicación del Dictamen Cinco del que derivó esa Convocatoria y no hasta este momento al amparo del Punto de Acuerdo en mención, lo cual de permitirse implicaría en mi percepción, la generación de una nueva oportunidad para impugnar cuestiones cuyo plazo legal ya transcurrió en demasía.

De ahí que al impugnar el recurrente mediante el Punto de Acuerdo aprobado por el Consejo General el 30 de marzo relativo al otorgamiento de registro de su candidatura a la gubernatura del Estado, cuestiones relacionadas directamente con la duración del cargo de Gobernador de Baja California para el periodo de 2019 a 2021, que se derivan del artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 y de la Convocatoria para la celebración de elecciones ordinarias para el proceso electoral 2018-2019, lo que en todo caso corresponde a la materia objeto de impugnación que hoy nos ocupa y lo habría posibilitado válidamente para inconformarse oportunamente, sus reclamos se encuentren claramente fuera del plazo legal para hacerse valer y en consecuencia deban sobreseerse.

Ello, pues el momento válido para plantearse era dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél en que surtió efectos la publicación de la Convocatoria referida, por lo que la fecha límite lo era a lo más, el diez de enero de 2019, en términos de lo dispuesto por la Sala Superior al resolver el SUP-JRC-5/2019 y acumulados.

En efecto, al resolver el SUP-JRC-5/2019 la Sala Superior estableció claramente que para que la impugnación a la que en aquél momento se le dio entrada, en la que se alegaban cuestiones idénticas a las ahora controvertidas, era necesario que la demanda respectiva se hubiera presentado dentro del plazo que la ley concedía para impugnar la convocatoria a la elección de Gobernador, pues como se ha visto, señaló la Sala Superior, **dicha convocatoria constituyó el acto de aplicación del Decreto 112.**

SIN TEXTO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA
SECRETARIA DE ESTADO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
LA HABANA, CUBA, 1970

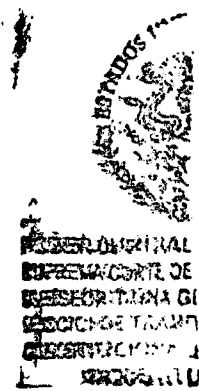
En ese tenor, puntualizó la Sala Superior que la convocatoria de referencia, fue publicada el 31 de diciembre de 2018 en el Periódico "El Mexicano", y el 4 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, por lo que si se tomara la primera publicación como referencia para realizar el cómputo para la interposición del medio de impugnación, se tendría que la publicación en el periódico local habría surtido sus efectos el 1 de enero de 2019, de modo que el plazo de cinco días para impugnarla habría transcurrido del 2 al 6 de enero siguiente.

En tanto que si se tomara en consideración, señaló la Sala Superior, la fecha en que se publicó la convocatoria reclamada en el Periódico Oficial del Estado, se llegaría a que surtió sus efectos al día siguiente (5 de enero) razón por la que el plazo para controvertirla habría corrido del seis al diez de enero del año en curso.

Siendo inconcuso, en cualquier caso, relató la Sala Superior, que la demanda resultó extemporánea al haberse presentado fuera de plazo, ya sea que se haya computado a partir de la publicación en el periódico estatal referido o de la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Todo lo expuesto, por la simple y sencilla razón que tal y como lo dijo la Sala Superior, la convocatoria constituyó el acto de aplicación del Decreto 112 (en torno al cual giran los puntos de disenso del recurrente), porque fue en el referido Decreto donde el Poder Legislativo determinó que quien fuese electo gobernador o gobernadora en el proceso electoral en curso durara en su cargo dos años, de modo que si la convocatoria reprodujo lo dispuesto en el Decreto, es claro que aquella constituyó el acto de aplicación del mismo.

Lo anterior se corrobora, tal y como lo menciona la Sala Superior, porque la convocatoria se dirigió tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía en general de Baja California. Por tanto, debe entenderse que, dentro de los destinatarios de la convocatoria se encontraban los militantes de los partidos políticos que tuvieran interés en obtener una candidatura para participar en el proceso electoral en curso por alguno de los cargos de elección popular ahí precisados.





TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

En ese sentido, todos los destinatarios, como es el caso de las personas que pretendían registrar una candidatura, a través de los partidos políticos, estaban vinculadas a ajustarse a las reglas dispuestas en la propia convocatoria, por lo que si ésta fue vinculante desde el día siguiente a aquél en que se publicó en los medios previstos por la ley, es notorio que desde ese momento incidía en la esfera jurídica de los destinatarios.

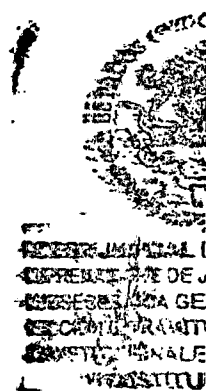
De ahí que si los militantes interesados en participar en el referido proceso electoral no estaban conformes con alguna o más de las disposiciones contenidas en la convocatoria, estaban constreñidos a impugnarla dentro del plazo de cinco días que concede la Ley Electoral local, contados a partir del día siguiente de aquel en que surtió efectos la publicación de la convocatoria.

Sostener lo contrario implicaría aceptar que tanto la observancia de las convocatorias como el momento a partir del cual debe empezar a computarse el plazo para impugnarlas se encuentra a voluntad de los destinatarios, lo cual rompería con toda regla de equilibrio procesal y de igualdad entre las partes, en detrimento del orden jurídico y en contravención al principio de certeza.

Sin que sea obstáculo a todo lo anterior la supuesta inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del Decreto 112 que se aduce, así como el proceso legislativo o el derecho político electoral y principios que la resolución estima vulnerados, pues con independencia de ello, que en el caso concreto, considero no resulta fundado, es criterio reiterado de la Suprema Corte que el gobernado no está exento de respetar los requisitos de procedencia y cargas procesales válidas a observar previstas en las leyes, para interponer un medio de defensa, como lo es su presentación con oportunidad.

De ahí que el gobernado no esté exento de acatar los requisitos de procedencia, so pretexto por ejemplo, de la maximización del ejercicio de derechos humanos o la existencia de principios constitucionales como el pro persona y recurso efectivo, de conformidad con la Jurisprudencia de la Suprema Corte, de rubro: **PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS**

SIN TEXTO



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
DE CHILE
SERIE DE ESTADÍSTICA DE
LA ECONOMÍA NACIONAL
VOLUMEN I
AÑO 1960

REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.

Por ende, la materia objeto de impugnación que plantea la debió haber hecho valer dentro de los plazos legales para ello y no con posterioridad, como se estima que en la especie sucede.

Sin que de igual forma, sea impedimento a lo sostenido por la suscrita, la diversas consideraciones contenidas en el apartado 4 Procedencia de la sentencia, en el sentido de que la presentación de la demanda es oportuna, de las cuales discrepo en el caso concreto, por la simple y sencilla razón que me parece pasan por alto lo recientemente resuelto por la Sala Superior, relativo a la oportunidad para impugnar una norma heteroaplicativa como quedó definido lo es el artículo octavo transitorio del Decreto 112, cuyo acto de aplicación, en la especie fue la convocatoria de referencia, precisando al efecto dicha Sala, lo siguiente:

"para determinar si la impugnación se presentó oportunamente deben aplicarse las reglas relativas a la impugnación de las leyes heteroaplicativas, que consisten básicamente en que la demanda respectiva debe presentarse dentro del plazo que la ley concede para controvertir el acto de aplicación de la norma.

Es decir, cuando se combate una ley heteroaplicativa con motivo de un acto de aplicación (como sucede en el caso) la demanda será oportuna solamente si se presenta dentro del plazo en que debe controvertirse el acto de aplicación"

Tampoco pasa desapercibida la Jurisprudencia de Sala Superior 35/2013 citada en la resolución, sin embargo en la especie estimo que atendiendo al caso concreto, ésta no resulta aplicable como sustento para justificar la oportunidad de la demanda, toda vez que si nos remitimos a las ejecutorias que la conformaron, podremos apreciar que dicho criterio se refiere a la obligación de las Salas Regionales de analizar la inaplicación de normas electorales, por estimarlas inconstitucionales, cuando les sea planteado, con motivo del acto de aplicación, y es el caso que en la especie como ya quedo precisado por la Sala Superior, el acto de aplicación del Decreto 112 fue la convocatoria.



UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE
INTERIOR
BUREAU OF LAND
MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Sin que en mi percepción el Punto de Acuerdo impugnado pueda resultar un acto de aplicación del Decreto 112, o irroque perjuicio alguno, pero además sostener que cualquier acto pueda servir como base para impugnar cuestiones ajenas a su materia, implicaría permitir que se pueda controvertir por aspectos no propios al mismo, quedando a voluntad de las partes impugnar sin observar las cargas y presupuestos procesales a las que deben ceñirse conforme al orden jurídico, y que es obligación de los órganos jurisdiccionales respetar.

Ello porque una cosa es que el recurrente hubiera solicitado su registro como candidato a la gubernatura el 27 de marzo estando pendiente de resolución diversas impugnaciones en torno a la adenda a la convocatoria ordenada por el Tribunal al dictar sentencia en el expediente RI-18/2019 y acumulados, y otra cosa que por ese solo hecho el Punto de Acuerdo impugnado del 30 de marzo siguiente, haya constituido un acto de aplicación que irroque perjuicio al actor o sirva como base para la materia objeto de impugnación, pues dicho Punto de Acuerdo solo se emitió en concordancia con lo resuelto por la Sala Superior al revocar la sentencia en cita por resultar extemporánea la demanda que originó el asunto, y en consecuencia el Consejo General estaba obligado a expedirlo en los términos que lo hizo.

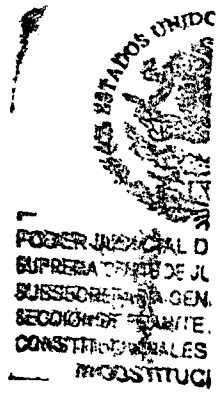
Periodicidad en el cargo de Gobernador

2. Ahora, en cuanto a las consideraciones formuladas en el apartado 6.5 en torno a que el periodo del encargo de gobernador previsto en el artículo octavo transitorio del Decreto 112 es restrictivo del derecho fundamental del actor de ser votado y que colisiona con el artículo 44 de la Constitución local y que por ende se deba tener por fundado el agravio del actor e inaplicarse dicha disposición transitoria, me permito manifestar respetuosamente mi disenso, con base en lo siguiente.

El núcleo esencial de la impugnación que hoy nos ocupa, ya fue objeto de controversia por otra parte recurrente, en el expediente RI-18/2019 resuelto por este Tribunal el 24 de febrero del año en curso.

En aquel asunto, se planteó el mismo tema que aquí nos ocupa, y se sostuvieron en la resolución aprobada por mis pares consideraciones sustancialmente idénticas a las contenidas en la presente sentencia,

SIN TEXTO



debida proporción guardada, sobre este aspecto de la supuesta inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del Decreto 112 y la adenda ordenada a la base sexta, inciso a), de la referida convocatoria, insertando lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución local.

Esto es, mandando que la gubernatura electa en este proceso electoral dure del primero de noviembre de dos mil diecinueve al treinta y uno de octubre de 2025, es decir, seis años, un año más que lo dispuesto en la sentencia RI-18/2019.

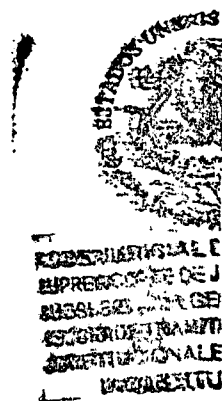
Al respecto, reitero en lo aplicable las consideraciones hechas valer en mi voto particular formulado con relación a dicha sentencia, mismas a las que remito para los efectos a que haya lugar, teniéndose de igual forma aquí por reproducidas, en aras de evitar repeticiones innecesarias.

Solamente me concretaría a puntualizar que, como dieron cuenta en su voto concurrente con la y el Magistrado de Sala Superior Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, y como lo sostuve en esencia en aquella ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 13/2015, por unanimidad de once votos, determinó que la adecuación normativa a las constituciones estatales que implica recortar, por única ocasión, el periodo del cargo a gobernador, de seis a dos años es constitucionalmente válida, porque no vulneraba los principios democráticos y en ese asunto como en la impugnación referente al RI-18/2019, no se advertía de qué manera pudiera vulnerar la Norma Fundamental.

La Suprema Corte determinó que era claro que el artículo 116 de la Constitución General dejaba a la libre configuración legislativa establecer la duración de cada periodo, ya que constitucionalmente no se fija ningún lineamiento para el lapso mínimo que deberá durar una persona en el cargo de gobernador, sino que solo indica el tope máximo (6 años), de tal manera que las legislaturas de los estados tenían la libertad para extender o acortar tal periodo, siempre que no excedan el citado tope.

Asimismo, la Suprema Corte determinó que tampoco era posible que se examinara si la medida tomada por el legislador era la más conveniente, dado que es el legislador estatal al que, en uso de su autonomía, le

SIN TEXTO





TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

competente decidir lo relativo a la duración en el cargo de gobernador de acuerdo con su propia conveniencia jurídico-política.

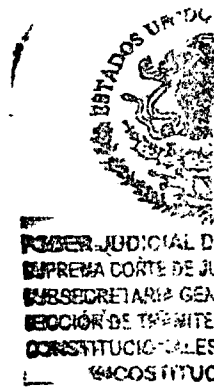
A partir de esto, se sostuvo que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, cada entidad federativa determinará cuál será la duración del cargo a gobernador, respetando el tope máximo de seis años.

Todo ello estimo rige en la especie, porque en dicha Acción de Inconstitucionalidad 13/2015 la parte actora en tal asunto atribuyó agravios semejantes a los aquí planteados al artículo cuarto transitorio de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que estableció la duración de dos años en el cargo de Gobernador electo en dos mil dieciséis, a fin de hacer concurrente la elección federal, que ese precepto era inconstitucional, sin embargo ese precepto fue declarado constitucional por unanimidad de once votos, cuyo contenido sustantivo es equivalente al del artículo octavo transitorio cuestionado.

En ese tenor, ese razonamiento contenido en las consideraciones de dicha Acción de Inconstitucionalidad resuelta por la Corte y que formó parte de lo aprobado por unanimidad, tiene carácter de jurisprudencia y resulta obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, incluyendo los electorales, de conformidad con los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución federal y las jurisprudencias del Pleno y Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro:

JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O MÁS, y JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, criterio último que en interpretación a los preceptos de referencia fija la obligatoriedad para todos los jueces del país de las razones contenidas en los considerandos de estos medios de control constitucional.

SIN TEXTO



De ahí que al resultar el artículo cuarto transitorio de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue declarado constitucional, con un contenido sustantivo equivalente al del artículo octavo transitorio cuestionado, ello obligue a observar el criterio adoptado, sin que sea obstáculo el hecho de que se invoque que se está ante control concreto, pues al menos en el caso específico no se aprecia cómo ello pueda traducirse a justificar válidamente el no acatamiento del criterio, lo cual no queda potestad, sino que es nuestra obligación observarlo conforme a las jurisprudencias expuestas, las cuales tampoco podemos pasar por alto.

Tampoco resulta ajeno que la libertad de configuración legislativa no es absoluta, ni los derechos humanos, incluyendo el de votar y ser votado, y que siempre se debe atender en nuestro actuar al parámetro de regularidad constitucional y no vulnerarlo.

En el caso concreto, reitero, no advierto la transgresión al orden constitucional con el actual contenido del artículo octavo transitorio ni de la base sexta de la convocatoria que lo reproduce en lo atinente, las justificaciones para considerar ello, constan en el voto particular de la sentencia RI-18/2019, por lo que me remito a ellas para los efectos que haya lugar.

Análisis de proporcionalidad en sentido amplio

3. Respetuosamente tampoco coincido con la conclusión a la que llega la sentencia mediante el análisis de proporcionalidad realizado, resultando innecesario dada mi percepción de que el artículo octavo transitorio es constitucional.

Mediante dicho análisis se determina que el ajuste al periodo de gestión de la gubernatura en este proceso electoral no fue conforme a los principios de de progresividad y pro persona, puesto que debió contemplarse la medida alterna que implicaba una restricción menor al derecho de ser votado y acceder al cargo por un periodo determinado en el artículo 44 de la Constitución.

Determinación que no puedo acompañar, porque con el respeto que me merecen las interpretaciones que se puedan construir para sustentar dicha postura, sencillamente no existe un derecho a ser gobernador por



GOBIERNO FEDERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE REGISTRO DE
CONSTITUCIONALES Y DE
LEGISLACIÓN



TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

seis años, eso no deduce ni de la constitución federal ni se puede desprender de la del Estado, y como prueba de ello está precisamente la interpretación que al efecto ha realizado la Suprema Corte, tanto en la Acción de Inconstitucionalidad 13/2015, como en la 3/2002 en las que se impugnaron normas sustancialmente similares al artículo octavo transitorio que se cuestiona, señalando medularmente la Corte que en ningún momento de la norma fundamental se deriva que la duración del encargo de gobernador deba ser de seis años como plazo fijo, sino solo que no se exceda de esa temporalidad, por lo que los Estados pueden extender o acortar el periodo, dentro de su libertad de configuración legislativa, mientras no excedan aquel tope máximo, y como una previsión a futuro.

Esta interpretación realizada por la Suprema Corte en Acción de Inconstitucionalidad también constituye jurisprudencia y resulta de observancia obligatoria.

Sin que sea obstáculo que en el caso concreto se pueda aducir como particularidad que el órgano reformador de la constitución local tenía varias posibilidades legislativas para cumplir con la finalidad constitucional perseguida, derivada de la reforma a la Constitución federal de febrero de 2014, y que se estime que una medida legislativa local era la menos restrictiva.

Ello, ni siquiera al amparo de principios como el pro persona y el de progresividad, puede resultar dable ordenarle al órgano reformador de la constitución local que entre las opciones que tenía para el empate de elecciones, debió optar por una determinada, porque esto se traduce en romper con el principio de división de poderes y el sistema de distribución de competencias que rige en nuestro orden jurídico, lo cual entiendo no es con esa intención, pero en mi percepción sucede por el grado de incidencia en el ámbito de atribuciones del órgano reformador de la constitución local.

El por qué estimo que se da ese grado de incidencia desproporcionado con la adenda ordenada y lo aquí resuelto, ya ha sido explicado ampliamente en el voto particular de la sentencia RI-18/2019, por resultar coincidente con lo aquí sostenido, simplemente me limito a mencionar que

SIN TEXTO



AGENCIA NACIONAL DE LA FE
SUPREMA OFICINA DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE
REGISTRACIÓN Y NOTARÍA
SECCIÓN DE REGISTRO DE CON
STITUCIONALES Y E M
REGISTRACIONAL

como lo señalé en su momento, existe toda una línea jurisprudencial en la materia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en determinados campos como el político, económico, de organización administrativa del Estado, y en general, donde no existe posibilidad excluir algún derecho fundamental, un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si determinadas medidas en estos rubros son las mejores o resultan necesarias.

Así, sostiene la Corte, la fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado, entre ellos el juzgador constitucional, debe respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos locales, en el marco de sus atribuciones, por lo que estos tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, lo que significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y la intensidad de su control se ve limitada.

De ahí que la facultad de control de normas que tienen los órganos jurisdiccionales tampoco sea absoluta, por lo que tiene límites, siendo estos, los campos político, económico, de organización administrativa del estado y en general cualquiera de donde no se desprenda la transgresión de derecho humano o principio constitucional alguno, como en la especie de nueva cuenta no se advierte.

En el caso concreto, se aprecia que el contenido del artículo octavo transitorio, en lo que interesa, referente a que para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021, no versa sobre temas exclusivos del derecho electoral, sino que pertenecen a la ciencia del derecho en lo general y del derecho constitucional en lo particular, observándose que trata sobre un aspecto concerniente al ámbito jurídico-político, cuya regulación se encuentra dentro del ámbito legislativo estatal.

De ahí que no pueda acompañar la realización del análisis de proporcionalidad del artículo octavo transitorio, pues en mi óptica, en el caso concreto excede las facultades del Tribunal, no porque no pueda

SIN TEXTO.



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMACIA DE JUST
SUBSECRETARÍA GENER
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIO

realizar control de normas, sino porque lo hace sobre un aspecto que no le es disponible en mérito de lo expuesto.

Violación al principio de certeza

4. Como lo sostuve en el voto particular de la sentencia RI-18/2019 y como lo reitero ahora, por resultar sustancialmente coincidente lo allá hecho valer con lo aquí resuelto, respetuosamente considero que la adenda ordenada a la convocatoria, así como la inaplicación declarada al párrafo primero del artículo octavo transitorio que fue previsto con anterioridad al inicio del proceso electoral en curso, norma que fue tomada en consideración por sus destinatarios, previo al inicio del mismo, a efecto de definir la estrategia política a seguir en el proceso comicial actual, se traducen en los hechos en una medida que modifica injustificadamente la reglas durante el curso del mismo.

Al respecto, es criterio de la Sala Superior que el principio de certeza implica que todos los participantes e interesados en un proceso electoral conozcan con antelación y claridad las reglas a que deberán ajustar su actuación y a las que se ajustarán las autoridades electorales.⁹¹

Ello implica que antes de que inicie el proceso comicial atinente, los participantes conozcan las reglas que les serán aplicables para planear y elaborar su estrategia política.

No obstante, en el caso concreto, a través de la adenda ordenada al Consejo General, a la base sexta, inciso a), de la convocatoria se modificó esta, así como se inaplicó lo dispuesto en el artículo octavo transitorio, lo cual repercute en la planeación de la estrategia política a seguir por los participantes, e incide en la certeza del proceso comicial, porque ya iniciado el mismo, se cambian las reglas que le sirvieron de base.

Incidencia que trasciende en función de la autoridad y el momento en que se desarrolle, por lo que tratándose de una autoridad administrativa, como lo es el Consejo General, aunque sea derivado de una resolución judicial, las modificaciones a las reglas del juego democrático deben efectuarse primordialmente antes del inicio del proceso electoral, salvo justificación

⁹¹ SUP-RAP-0103/2016.

SIN TEXTO



ROBERTO J. GARCIA C.
SUPLENTE DE J.
SUBSECRETARIA GEN.
SECCION DE PLANEACION
CONSTITUCIONALES
L. GARCIA C.

exhaustiva y reforzada en contrario, atendiendo a la particularidad del caso concreto.

Ello, pues el nivel en que las autoridades, incluyendo las jurisdiccionales, pueden tener incidencia en las reglas existentes, disminuye en función de lo avanzado del proceso electoral,⁹² en aras de salvaguardar el principio de certeza que coexiste con otros valores, y es de suma importancia su salvaguarda como rector de los procesos comiciales.

Punto de Acuerdo impugnado

5. En cuanto a este tema, no comparto la determinación a la que llega el sentencia, porque en mi percepción el Punto de Acuerdo se encuentra debidamente fundado y motivado.

La sentencia por un lado refiere falta de fundamentación y motivación, y por otra alude a una indebida fundamentación y motivación, cuestiones que son distintas, pero con independencia de ello, de la lectura del Punto de Acuerdo, concluyo que sí se encuentra debidamente fundado y motivado.

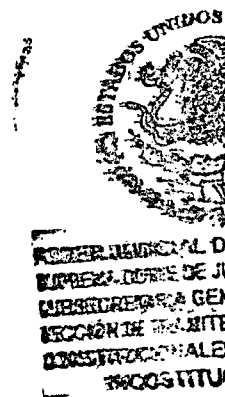
La razón por la que llego a la conclusión que el Punto de Acuerdo se encuentra debidamente fundado y motivado es muy sencilla, y estriba en que debemos recordar que la base para entender por debidamente fundado y motivado un acto de autoridad, es que en el cuerpo de la determinación, consten los preceptos y razones en que se apoye la autoridad para emitir un determinado acto.

En el caso concreto es de recordarse que la naturaleza del Punto de Acuerdo, radica en pronunciarse precisamente respecto a la procedencia o improcedencia de otorgar el registro como candidato al solicitante, en términos del cumplimiento de los requisitos que la normativa electoral aplicable exige, a efecto de expedir, en su caso, la constancia de candidatura conducente para poder participar con tal carácter en el proceso electoral

Luego, si para la emisión de dicho acto en el documento de referencia se contienen los fundamentos aplicables que sustentan la expedición del

⁹² Consideración sostenida en la sentencia recaída al expediente SUP-REC1929/2018, en el tema de medidas afirmativas, pero que en lo aplicable resulta orientadora al caso concreto

SIN TEXTO





TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

mismo y los motivos con base en los cuales ha lugar a otorgar o no el registro, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, es claro que el acto va a estar debidamente fundado y motivado.

Pero además el Punto de Acuerdo obedece a una cadena de actos concatenados y de los anteriores también se advierte una fundamentación y motivación que trasciende ha dicho Punto de Acuerdo.

Ahora si la justificación para determinar que el Punto de Acuerdo no estaba debidamente fundado y motivado, consiste en que al momento de solicitar el registro el recurrente de su candidatura a la gubernatura aún no resolvía la Sala Superior sobre las diversas impugnaciones en torno a la sentencia del Tribunal RI-18/2019 que modificó la base sexta de la Convocatoria en cuanto al periodo de la gubernatura derivada de este proceso electoral, y que con posterioridad el 30 de marzo ya se habían resuelto las impugnaciones, revocándose la sentencia de este Tribunal local, quedando el periodo por dos años, con el mayor de los respetos, considero que se parte de una premisa totalmente inexacta.

Elo, por la simple y sencilla razón que el Punto de Acuerdo tiene un propósito muy claro, pronunciarse sobre si es dable otorgar o no el registro en términos del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

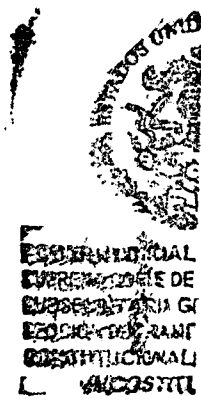
DE ACCIONES
JONALIDAD

Por su parte, la periodicidad del cargo fue materia de un asunto pendiente de resolución y corresponde definirse en otro acto, que en la especie fue la Convocatoria para la Celebración de Elecciones Ordinarias, en esta ocasión de conformidad con el artículo octavo transitorio del Decreto 112.

Por lo que no concuerdo con la afirmación de que en el caso concreto el Consejo General tenía la carga de razonar lo acontecido con relación a la periodicidad del cargo de la gubernatura, porque lo fundado y motivado de ello deriva del cumplimiento de la Sentencia de Sala Superior SUP-JRC-5/2019 y acumulados que revocó la sentencia RI-18/2019 del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

Fue en dicha resolución de Sala Superior donde se fijaron los efectos y se ordenó lo correspondiente, que fue revocar todos los actos que se hayan llevado a cabo en cumplimiento de la sentencia RI-18/2019 de este Tribunal de Justicia Electoral del Estado, lo cual inclusive se reiteró en el incidente de aclaración de sentencia relativo, por lo que no se requería

SIN TEXTO



que en los actos que constituyen su consecuencia legal, o que tienen alguna relación por formar parte del proceso comicial en curso, se tenga que repetir o reiterar todo lo acontecido con la sentencia electoral local revocada.

De ahí que tampoco advierta incertidumbre y falta de certeza sobre el tema de la temporalidad del cargo de la gubernatura, ni que exista falta de congruencia interna o externa en el Punto de Acuerdo controvertido.

Proceso legislativo del Decreto 112

6. Finalmente, me separo de las consideraciones con base en las cuales en la sentencia que nos ocupa se determina que es fundado la vulneración al proceso legislativo del Decreto 112 que refiere el actor.

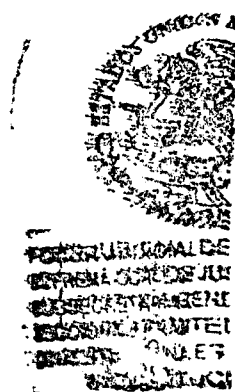
En la sentencia RI-18/2019 este fue uno de los puntos respecto a los cuales no disenti, porque soy de la idea que conforme al caudal probatorio obrante en el expediente y sobre todo a la materia objeto de impugnación, no se logra acreditar que se haya violado el proceso legislativo en mención.

El tema del proceso legislativo del Decreto 112, ha sido un tema ampliamente discutido y fue abordado por el ponente en la sentencia RI-18/2019, estableciendo en el apartado 7.6 de dicha resolución que no se violó dicho proceso en la expedición del decreto en mención.

Tengo claro que puede haber nuevas reflexiones, las cuales deben estar debidamente justificadas, en aras de una coherencia judicial. En el caso concreto, respetuosamente no observo razonamientos que orienten el por qué con anterioridad se sostuvo que no se violó dicho procedimiento, y ahora se construya toda una serie de consideraciones para señalar que si se transgredió, aunque se le dé el calificativo de inoperantes a las alegaciones al respecto.

Podemos hablar mucho acerca de ello, pero lo cierto es que en la sentencia no se explica por qué ese cambio de criterio, cuestión que estimo debió realizarse en aras de mayor claridad, para poder contrastar si efectivamente de una nueva reflexión se desprende que existió alguna irregularidad o no.

SIN TEXTO





Con independencia de lo anterior, en el caso concreto, reitero, no advierto irregularidades en el proceso legislativo en mención, por el contrario comparto las consideraciones de la sentencia RI-18/2019 por lo que hace a las contenidas en los apartados 7.6 No se violó el Proceso legislativo en la expedición del Decreto 112, y 7.7 Son válidos los diversos ordenamientos y sus correspondientes reformas; resolución que si bien se sobreseyó por la Sala Superior, ello fue por el tema de extemporaneidad de la demanda, sin pronunciarse en el fondo sobre dichas consideraciones.

Consideraciones mediante las cuales se determinó en la sentencia RI-18/2019 y acumulados que no se violó el proceso legislativo del Decreto 112 y que los ordenamientos derivados del mismo resultan válidos, mismas que se resaltan porque respondieron a alegaciones idénticas o sustancialmente similares a las aquí hechas valer por el recurrente.

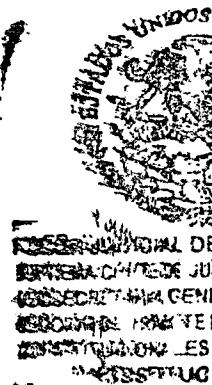
Por todo lo expuesto, con el mayor de los respetos, manifiesto que me aparto de las diversas consideraciones señaladas a lo largo del presente documento, así como de los efectos y de los resolutivos segundo al quinto, expresando mi disenso del sentido de la sentencia, en mérito de todo planteado, formulando en consecuencia el presente voto particular.

ATENTAMENTE

**ELVA REGINA JIMENEZ CASTILLO
MAGISTRADA PRESIDENTA**

**ALMA JESÚS MANRÍQUEZ CASTRO
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

SIN TEXTO



QUEJOSOS: MUNICIPIO y

AYUNTAMIENTO DE
TECATE, BAJA CALIFORNIA.

Juzgado Primero de Distrito
de Materia de Amparo

C/4 copias

Lauzo

19 FEB 22 PIZ 147

3247

AMPARO INDIRECTO 131/2019

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y
JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
CON SEDE EN TIJUANA.

PRESENTE
A, B, C

LIC. JAVIER AVILÉS BELTRÁN, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la
Ley de Amparo, por parte de los quejosos en el Juicio de Amparo citado al rubro; ante Usted
respetuosamente comparecemos para solicitar:

Que por medio del presente escrito, en vía de alcance, vengo a exhibir copia simple del
Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre del mismo año, mediante el cual se
reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; mismo que constituye uno de los actos reclamados; cuyo
contenido podrá ser corroborado a través de la página de internet, concretamente en la página
oficial del Periódico Oficial del Estado de Baja California, para que se tome en consideración
al momento de resolver sobre la admisión de demanda y sobre la concesión de la suspensión
provisional de los actos reclamados.

Por lo antes expuesto y fundado:

A Usted C. Juez, atentamente pedimos:

ÚNICO: Acordar de conformidad lo solicitado.

Tijuana, Baja California, en la fecha de presentación.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. JAVIER AVILÉS BELTRÁN

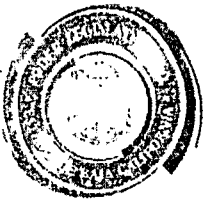
SIN TEXTO



ALZADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIOS
TJUAN



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE JUST
SUBSECRETARÍA GENE
SECCIÓN DE TRÁFICO DE
CONSTITUCIONALES Y
CONSTITUCIO



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

LA H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 112

UNICO: Se aprueban las reformas a los artículos 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 y 78, y la adición del Capítulo III a denominarse "de la Jurisdicción Electoral" al Título Quinto, integrándose con el numeral 68; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

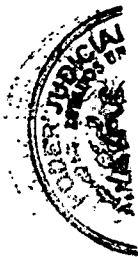
ARTÍCULO 5.- ...

La duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de diputados, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

El proceso electoral dará inicio el último domingo del mes de septiembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

La Ley electoral establecerá las faltas y sanciones administrativas, que se deriven de su incumplimiento o inobservancia.

181



ALZADO PRIM
EILATERI
DEL JUICIO
TIJUA

2011
11/11/11
57/11



REPOSICION DE
EXPREMAGATE DE JU
BIBBENTARIA GENI
BECORONCE TRAMITE
CORRETTIONALES
L. INCESTITUC



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano



ARTÍCULO A.- Los Partidos Políticos:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE AMPARO
DE LOS DERECHOS
FEDERALES
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

En los términos de las leyes electorales, los partidos políticos tienen el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las figuras de coaliciones totales, parciales o flexibles.

Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir con la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados, tanto propietarios como suplentes.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán registrar por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral, el cual tendrá la obligación de registrarlos para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado. El Instituto, en año no electoral, dará seguimiento de los compromisos de campaña mediante la emisión de informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso del Estado.

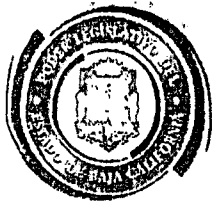
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE AMPARO
DE LOS DERECHOS
FEDERALES
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto Estatal Electoral, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

El acceso de los partidos políticos y de los candidatos independientes a los tiempos en radio y televisión se estará a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables.

Los partidos políticos de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, recibirán en forma equitativa, financiamiento público para la realización de sus fines.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

La ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el de origen privado.

El financiamiento para los partidos políticos que conserven su registro después de cada elección, se compondrá de financiamiento público permanente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, las de campaña electoral tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales en los términos de la Ley.

La Ley determinará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, le será cancelado el registro.

El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos estatales que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes, se hará en los términos que establezca la Ley.

El incumplimiento de las normas que regulen la comprobación de ingresos, egresos, topes de gastos y aportaciones, así como la liquidación de los partidos políticos, serán sancionados en los términos de las leyes correspondientes.

APARTADO B.- Del Instituto Estatal Electoral.

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, cuando exista causa justificada para ello, y en los términos que disponga la Ley.

El Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, de conformidad con la distribución de competencia que establecen las leyes de la materia, así como los convenios que suscriban, y agrupará para su desempeño, en forma integral y directa las siguientes actividades:

FEDERALES

- I.- B.C. Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica;
- II.- Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
- III.- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales;
- IV.- Preparar de la Jornada Electoral;
- V.- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones;
- VI.- Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos;
- VII.- Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de las fórmulas de representación proporcional;
- VIII.- Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;
- IX.- Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;
- X.- Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral; y
- XI.- Las demás que determinen las leyes aplicables.

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia; autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la Ley. La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

El órgano de dirección superior denominado Consejo General Electoral, se integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, contará además con un Secretario Ejecutivo. Los representantes de los partidos políticos, así



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

como el Secretario Ejecutivo concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voto. Cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la Ley General correspondiente. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios del Estado, contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley.

Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley respectiva.

Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

El Secretario Ejecutivo investido de fe pública para actos de naturaleza electoral, será nombrado en los términos de ley, por el órgano de dirección superior a propuesta del Consejero Presidente, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes; durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez; en el supuesto de que transcurridas dos rondas de votación, el aspirante propuesto no alcanzare la votación requerida, la designación se hará por mayoría simple del Consejo General Electoral.

Los Consejos Distritales son órganos operativos del Instituto Estatal Electoral que se integrarán por cinco Consejeros Electorales Distritales nombrados por las dos terceras partes de los integrantes del órgano de dirección superior del cual dependen, así como por representantes acreditados por los partidos políticos, con voz pero sin voto, en la forma que establezca la Ley y, un Secretario Fedatario nombrado mediante votación de las dos terceras partes de los Consejos Distritales a propuesta de cada uno de los Consejeros Presidentes, la Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

Los trabajadores incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, registrarán sus relaciones laborales por las disposiciones aplicables.

La selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos en el Servicio Profesional Electoral Nacional, será en los términos en que se regule por el Instituto Nacional Electoral.

Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos que disponga la Ley.

La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.

APARTADO C.- Participación Ciudadana.

RO DE DICT
DE AMPARO
FEDERALES
IA, B.C.

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular. Asimismo, tratándose de la solicitud ciudadana, verificará que se acompañe de las firmas correspondientes, a solicitud del Congreso, realizando la certificación respectiva.

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA PAZ
E DE CONTROL
S Y DE ACCIONES
C. UNALIDAD



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

APARTADO D.- De las candidaturas independientes.

Es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado para los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo solicitar su registro de manera independiente siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto.

De conformidad con el procedimiento que se establezca en la Ley, los ciudadanos tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral local para ocupar los cargos de Gobernador, Municipales por el principio de mayoría relativa, y Diputados por el principio de mayoría relativa.

Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de diputados o municipales por el principio de representación proporcional.

Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público de campaña en los términos de Ley.

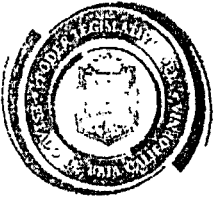
APARTADO E.- Justicia Electoral y sistema de nulidades.

Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación; este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

- a).- Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

b). Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c). Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Los actos o resoluciones dictados con motivo del desarrollo de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana relativos a la Consulta Popular, Plebiscito o Referéndum, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley.

ARTÍCULO 15.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan a cada partido político, se hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente:

I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán:

a).- ...

b). Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, y

c). Haber obtenido el registro de la lista de dos candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional. Este requisito solo será exigible a los partidos políticos que participen en coalición;

II.- El Instituto Estatal Electoral una vez verificados los requisitos de la fracción anterior, asignará un Diputado a cada partido político que tenga derecho a ello. Esta primera asignación corresponderá a los candidatos a diputados que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el de diputaciones asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse;

III.- Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción anterior, aun quedasen diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos, en los siguientes términos:

a) Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que reúnan los requisitos que señala la fracción I de este artículo, mediante el siguiente procedimiento:

1.- Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos, en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, que reúnan los requisitos, y

2.- ...

b).- Se procederá a multiplicar el porcentaje de la votación obtenido por los partidos políticos, en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, por veinticinco;

c).- ...

d).- Se asignará una diputación de representación proporcional por cada número entero que se haya obtenido en la operación señalada en el inciso anterior, procediendo en estricto orden de prelación conforme al porcentaje obtenido de cada partido político, en los términos del párrafo segundo de la fracción II de este artículo e inciso a) de esta fracción, y

e).- ...

IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete Diputados por ambos principios;

V.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.

VI.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda a cada partido político, la hará el Instituto Estatal Electoral, en los términos que señale la Ley.

ARTÍCULO 16.- Los Diputados se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera consecutiva de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULO 19.- El Congreso se renovará totalmente cada tres años y se instalará el día primero de Agosto posterior a la elección.

ARTÍCULO 20.- El Instituto Estatal Electoral de acuerdo con lo que establezca la Ley, otorgará las constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos que la hayan obtenido y hará la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establece el Artículo 15 de esta Constitución y la Ley.

ARTÍCULO 21.- Derogado.

ARTÍCULO 22.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos de Sesiones ordinarias, el Primer Período inicia a partir del primero de agosto al último día de noviembre de cada año, el Segundo Período comprende del primero de diciembre al



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

último día de marzo de cada año, y el Tercer Período será a partir del primero de abril al último día de julio de cada año.

APARTADOS A y B.- ...

APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia.

APARTADO D.- ...

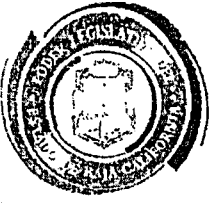
ARTÍCULO 27.- ...

I a VI.- ...

VII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

VIII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en el Municipio la declaración de munícipes electos que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

IX a XIV.- ...



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

XV.- Nombrar a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, así como a sus respectivos Supernumerarios en orden de prefación, y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, y designar a dos Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;

XVI a XVII.-

XVIII.- Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y del Gobernador; así como respecto a las renunciaciones y remociones de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y de los Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso;

XIX a XXXIX.-

ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:

la IV.-

V.- Al Instituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

ARTÍCULO 44.- El Gobernador será electo cada seis años, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y entrará a ejercer sus funciones el día primero del mes de septiembre posterior a la elección.

ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial del Estado se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz y Jurados.

AFERENCIACIÓN
AFERENCIACIÓN
AFERENCIACIÓN
AFERENCIACIÓN
AFERENCIACIÓN

La Ley garantizará la independencia de los Magistrados, Consejeros y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

La remuneración de los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión.

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no serán considerados trabajadores para efectos de la Ley especial de la materia.

Durante su encargo, los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, sólo podrán ser removidos en los términos que se señalan en esta Constitución y la Ley.

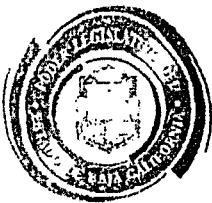
ARTÍCULO 58.- ...

El nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se efectuará bajo el siguiente procedimiento:

I.- Inmediatamente que exista una o varias vacantes de Magistrados o seis meses antes de la misma fuere previsible, el Consejo de la Judicatura deberá dar inicio al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del conocimiento del Congreso, el cual incluirá exámenes psicométricos, oposición y de méritos correspondientes, conforme a la Ley y el reglamento respectivo. El Consejo de la Judicatura, tendrá hasta noventa días naturales para desahogarlo, desde que emita la convocatoria pública, hasta que realice la entrega de la lista por conducto de su Presidente al Congreso;

II.- El Congreso resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba la lista, por mayoría calificada de sus integrantes, los nombramientos de Magistrados de entre los aspirantes que integren la lista, la cual deberá contener en orden de puntuación, únicamente a los profesionistas que hayan aprobado en el proceso de evaluación que practique el Consejo de la Judicatura;

III.- En caso de que el Congreso no aprobara el nombramiento o nombramientos que solo cubriera algunas de las vacantes de Magistrados, o fuera omiso en el término previsto en la fracción anterior, el Consejo de la Judicatura abrirá un nuevo proceso de evaluación,

**XXI LEGISLATURA**
El Poder Ciudadano

que se deberá desahogar y remitir al Congreso dentro de los treinta días naturales siguientes, en el cual podrá participar cualquier interesado e incluirse en la lista a quienes hayan aprobado en el proceso de evaluación previsto en la fracción I de este artículo, y

Recibida la segunda lista, el Congreso tendrá hasta treinta días naturales para nombrar por mayoría calificada de sus integrantes al Magistrado o Magistrados, y si no lo hiciese en dicho término, ocuparán los cargos de Magistrados las personas que se encuentren en los primeros lugares de la lista, la cual deberá ser elaborada en los términos señalados en las fracciones II y III de este artículo.

A, B.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de Ley, al término de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Al cumplir setenta años de edad.
- Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
- Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones.
- En los demás casos que establezca esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

RO DE DIST.
DE AMPARO
FEDERALES
A, B, C.

Tratándose de los incisos a) y b) de este artículo el Consejo de la Judicatura notificará al Magistrado, a más tardar seis meses antes, la fecha en que concluirá en definitiva su encargo, señalando la causa en que se funda la privación de su puesto. El supuesto previsto en el inciso c), se tendrá por acreditado en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Un año antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado el Magistrado, el Consejo de la Judicatura procederá a elaborar un dictamen técnico de evaluación en el que analice minuciosamente su actuación y desempeño y emita una opinión al respecto. El dictamen, así como el expediente del Magistrado, deberá ser remitido al Congreso, dentro de los noventa días naturales siguientes, debiendo contener todos aquellos elementos objetivos y requisitos que señale la ley y que den a conocer si el Magistrado sujeto al proceso de ratificación, durante su desempeño, ha ejercido el cargo con excelencia profesional, honestidad, diligencia y que goza de buena reputación y buena fama en el concepto público, además de precisar si conserva los requisitos requeridos para su nombramiento previstos en el artículo 60 de esta Constitución.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

El Congreso con base en lo anterior, y una vez que escuche al Magistrado sujeto a proceso de ratificación, resolverá sobre su ratificación o no ratificación, mediante mayoría calificada de sus integrantes, a más tardar seis meses antes de que el Magistrado concluya su encargo.

Si el Congreso resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado y se procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

ARTÍCULO 61.- Cuando ocurra la falta absoluta de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se estará a lo dispuesto por el artículo 58 de esta Constitución.

Los Magistrados y Consejeros Supernumerarios cubrirán las faltas temporales de los Numerarios, así como las faltas absolutas de los mismos hasta en tanto el Congreso efectúe el nombramiento correspondiente, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO III
DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 68.- El Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y como órgano constitucional autónomo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio.

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como órgano jurisdiccional especializado en materia electoral con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

El Tribunal de Justicia Electoral se integrará por tres Magistrados electorales, dos de las cuales serán nombrados por las terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, y uno por convocatoria pública, en los términos que determine la Constitución Federal y la Ley General de la materia. Los magistrados electorales permanecerán en su encargo por siete años.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

Todas las sesiones del Tribunal serán públicas.

Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Tribunal, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

101. 12.
DE A.
FEDE.
A, B, C.
Durante su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

El Tribunal expedirá su Reglamento Interno y las disposiciones administrativas para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO 78.- ...

Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus funciones el día primero de octubre que siga a su elección. Al efecto, el día inmediato anterior, se reunirán los munícipes electos, en sesión solemne con la finalidad de rendir protesta ante la comunidad e instalar los ayuntamientos.



**RO DE DIST.
DE AMBARD
FEDERALES
A, B, C.**

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos durarán en su cargo tres años, pudiendo ser electos por un periodo adicional consecutivo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.



ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

ECONTRON
D' AGGONES D
MEXICO



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

SEGUNDO.- La reforma al artículo 16 de esta Constitución en materia de reelección de diputados, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- La reforma al artículo 78 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- El Congreso del Estado deberá adecuar las normas electorales del Estado, a más tardar en el mes de febrero de 2015.

QUINTO.- La reforma prevista en el artículo 22 del presente Decreto, referente a los periodos ordinarios del Congreso del Estado, iniciará vigencia a partir del primero de octubre del 2016; por única ocasión, el primer periodo ordinario de sesiones de la XXII Legislatura Constitucional, será del primero de octubre al treinta de noviembre de 2016.

SEXTO.- La reforma prevista en el artículo 19, mediante el cual se adelanta la instalación del Congreso del Estado, al mes de agosto del año que corresponda, será aplicable a los Diputados que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de diputados con el proceso electoral federal 2021, los periodos de la XXII y XXIII Legislatura, serán los siguientes:

- a).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su periodo el primero de octubre de 2016 y concluirán el treinta y uno de julio del 2019.
- b).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de agosto de 2019 y concluirán el treinta y uno de julio del 2021.

SÉPTIMO.- La reforma prevista en el artículo 78, mediante el cual se adelanta el inicio de funciones de los ayuntamientos del Estado, al mes de octubre del año que corresponda, será aplicable a los munícipes que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de munícipes con el proceso electoral federal 2021, los periodos de los ayuntamientos respectivos, serán los siguientes:

- a).- Los munícipes electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su periodo el primero de diciembre de 2016 y concluirán el treinta de septiembre del 2019.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

b).- Los municipales electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de octubre de 2019 y concluirán el treinta de septiembre del 2021.

OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027.

NOVENO.- De conformidad con el artículo transitorio noveno del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los actuales consejeros electorales del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las nuevas designaciones en los términos de dicho transitorio.

5 FEDERALES
VA, B. D. DÉCIMO

DECIMO.- Una vez designado por el Instituto Nacional Electoral los nuevos consejeros estatales, éstos procederán dentro de los diez días siguiente a instalar el órgano de dirección superior del Instituto Estatal Electoral, debiendo nombrar en esa misma sesión al Secretario Ejecutivo del Instituto. Quiénes se encuentren ejerciendo las atribuciones que correspondan a la Dirección General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de Secretario Fedatario del Consejo General del Instituto que se abroga, continuarán en funciones hasta en tanto, no sea designado el Secretario Ejecutivo.

En caso de que a la fecha de integración del Instituto Estatal Electoral no hubieren entrado en vigor las leyes secundarias que derivan del presente Decreto, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en cuanto no contravengan las derivadas de las Leyes Generales

en la materia de CONTROL Y DE ACCIONES DE NACIONALIDAD



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pasarán a formar parte del Instituto Estatal Electoral una vez que quede integrado en términos del transitorio anterior.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los gastos realizados por los partidos políticos hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán fiscalizados por el Instituto Electoral local con sustento en las disposiciones jurídicas administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre de 2014.

DÉCIMO TERCERO.- El titular del órgano técnico del Consejo General Electoral del Instituto Electoral (Dirección de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos) que se deroga conforme al presente Decreto, estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiéndose dictaminar y resolver a más tardar en dicha fecha, la fiscalización de los partidos políticos, conforme lo dispone el artículo décimo octavo transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DÉCIMO CUARTO.- El titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que se abroga con el presente Decreto, estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiendo concluir a más tardar en dicha fecha los asuntos en trámite y entregar al Consejo General Electoral un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, los asuntos y recursos a su cargo.

DÉCIMO QUINTO.- Los Magistrados numerarios y suplentes del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, continuarán en su cargo hasta en tanto se sustituyan por los nuevos Magistrados Electorales, en los términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEXTO.- Una vez designado por el Senado de la República los nuevos Magistrados Electorales, éstos procederán dentro de los cinco días siguientes a instalar el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como órgano constitucional autónomo, debiendo designar el Secretario General de Acuerdos.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, una vez que quede integrado en términos de los transitorios anteriores.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

DÉCIMO OCTAVO.- Los medios de impugnación, denuncias y quejas que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite y las que se presenten en forma posterior pero antes de la reforma a la Ley de la materia, deberán resolverse conforme a las disposiciones vigentes al momento de su interposición.

DÉCIMO NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

**TERCERO DE DISTRITO
DE AMPARO
FEDERALES**

Se celebró en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los once días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

DIP. FELIPE DE JESUS MAYORAL MAYORAL
PRESIDENTE

**DE DISTRITO
DE AMPARO
FEDERALES**
C.

DIP. GERARDO ALVAREZ HERNANDEZ
SECRETARIO

**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECRETARÍA DE CONTRAPARTIDAS
SECRETARÍA DE ASISTENTES DE
SECRETARÍA DE NOTARÍA**



UZGADO PRIMER
EN MATERIA I
DE JUICIOS I
TUJANA,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL C
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GE
CCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
SNCOSTITUC

ORIGINAL

3874

48

59

191

Interposicion de Recurso,
Original de agravios
19 MAR -4 P1:19
Con 4 copias

JUICIO DE AMPARO 131/2019-VI.
QUEJOSO: MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE
TECATE, BAJA CALIFORNIA.
SE INTERPONE RECURSO DE QUEJA EN
CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA
DEMANDA.

C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN TIJUANA.
P R E S E N T E:



LIC. JAVIER AVILÉS BELTRÁN, con las facultades que me confiere el artículo 12
de la Ley de Amparo, en representación de la parte quejosa; ante Usted con el debido respeto
comparezco para exponer:

Que mediante el presente escrito y con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso
a) de la Ley de Amparo, vengo a interponer el recurso de que queja en contra del acuerdo de
fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda
de amparo promovida por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California; toda vez que la misma
le causa a mi representada los agravios que en escrito por separado se hacen valer, el cual
solicito sea remitido a la superioridad para la substanciación del mismo.

Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, señalo como constancias para
integrar el testimonio de Queja todo lo actuado en el expediente citado al rubro.

Por lo expuesto y fundado:

A Usted C. Juez atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito,
interponiendo RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL ACUERDO DE FECHA
VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

SEGUNDO.- Remitir el testimonio de queja al Tribunal Colegiado de Circuito en Turno
en Mexicali, Baja California, para la substanciación del recurso que aquí se hace valer.

Tijuana, B.C., a la fecha de su presentación.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. JAVIER AVILÉS BELTRÁN



UZGADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO.
TJUA

SIN TEXTO

PODER JUDICIAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORIGINAL

Juzgado Primero de Distrito
en el Estado de Baja California Sur
Residencia en Tijuana

19 MAR -4 P 1:19

en el Estado de
Baja California Sur
Residencia en Tijuana

SE INTERPONE RECURSO DE QUEJA EN
CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA
DEMANDA DERIVADO DEL JUICIO DE
AMPARO 131/2019-VI, PROMOVIDO POR
MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE
TECATE, BAJA CALIFORNIA.



TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN TURNO, CON
SEDE EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
PRESENTE:

LIC. JAVIER AVILÉS BELTRÁN, con las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en representación de la parte quejosa; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Calzada Cety's, número 2901, interior 305, colonia Rivera, código postal 21259, de esta ciudad de Mexicali, Baja California; subsistiendo las autorizaciones que la parte quejosa hizo en favor de los profesionistas que se precisan en la Demanda de Garantías; ante Usted con todo respeto, comparecemos para exponer:

que mediante el presente escrito y con fundamento en el artículo 97, fracción I inciso a), de la Ley de Amparo, vengo a interponer el recurso de que queja en contra del acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Baja California, con sede en Tijuana, dentro del Juicio de Amparo 131/2019-VI, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California; toda vez que dicha determinación le causa a mi representada los agravios que más adelante se hacen valer.

PREÁMBULO:

En observancia de los derechos y principios, de Debido Proceso, de Acceso a la Justicia, de Igualdad de Armas, de Presunción de Inocencia, Pro-Actione, entre otros, lo natural es que se admitan y se dé trámite a los juicios de amparo, pues es el medio de defensa por excelencia que tienen los gobernados en contra de los abusos de las autoridades públicas, de manera que el desechamiento de una demanda de amparo es un acto excepcional que debe encuadrar de manera estricta en los supuestos de excepción para el desechamiento.



JUZGADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO
CIVIL

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
MEXICO CORTA DE JI
SECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INSTITUC



ERO DE DISTRIT
A DE AMPARO
6 FEDERALES
NA, B.C.

EL

ERI
D
B F
NA



ERACIO
DI DE LA N
UL DE F
CONTR
E AC
LA LUDAD

Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis jurisprudenciales (énfasis añadido):

Época: Novena Época
Registro: 178541
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXI, Mayo de 2005
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 32/2005
Página: 47

AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.— *Del artículo 145 de la Ley de Amparo se advierte que es del propio escrito de demanda o de las pruebas anexas de donde puede desprenderse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la ley en cita, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 para desechar de plano una demanda. En ese tenor, la circunstancia de que la improcedencia derive del análisis que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los conceptos de violación en que se plantea una afectación inmediata por su sola vigencia, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente, claro y fehaciente si para determinar su actualización se requirió*



ABOGADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIOS
TJUAN

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORT DE JUST
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIO

de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva. Por ello, en la hipótesis aludida no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, ya que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello.

Época: Décima Época

Registro: 2011628

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV

Materia(s): Común

Tesis: II.1o.17 K (10a.)

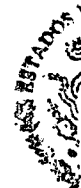
Página: 2782

DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN POR REGLA GENERAL.- De las exigencias de "indudable" y "manifiesta" de la causa de improcedencia establecidas en el citado precepto se obtiene que, por regla general, el desechamiento de plano de la demanda de amparo es una excepción debido a que, en principio, la admisibilidad del juicio de derechos fundamentales debe primar por tratarse del medio de control de constitucionalidad extraordinario, apto y eficaz para impugnar actos u omisiones de la autoridad que conculquen derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y/o en los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Lo anterior, sin que la preeminencia de la admisión de la demanda desconozca, desde luego, que en el amparo debe sobreseerse si se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia debidamente acreditada. Empero, aun así, lo jurídicamente preponderante es que cuando sólo se trata del auto inicial, la posibilidad para desechar de plano la demanda es legalmente reducida y excepcional, en la medida razonable en que el examen de procedencia del juicio requiere, por lo general, de estudios más profundos y exhaustivos -sea por la interpretación o alcance del ordenamiento o materia reclamada, la justificación amplia sobre la procedencia exacta y sin dudas de algún medio o recurso de defensa ordinario procedente, el tema, tipo o grado de minuciosidad inmerso en la causa de pedir u otro análisis o pronunciamiento de mayor escrutinio no propio para desarrollar y sustentar en el auto inicial-, con miras a que el juzgador de amparo no incurra en precipitaciones, aproximaciones o apariencias de



IZGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJUAN

SIN TEXTO



PODER JUDIC.
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRA
CONSTITUCIONA
UNICOSTI

improcedencia no justificadas en ese momento, o que no sean adecuadas para decidir en el auto inicial. En consecuencia, si se está en alguna de esas hipótesis u otras análogas, que propicien dudas o involucren algún tema a desarrollar no propio de la materia de examen en el auto inicial del juicio, no se colman los requisitos exigidos por el mencionado artículo 113; ante lo cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de lo que en la sustanciación del juicio pueda resultar en torno a la viabilidad o no de dicho medio de control de constitucionalidad extraordinario.

Época: Novena Época

Registro: 185783

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XVI, Octubre de 2002

Materia(s): Común

Tesis: VI.3o.C. J/50

Página: 1160

DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ES CASO DE Estricta Excepción.— Conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el desechamiento de la demanda sólo procede cuando exista "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", de lo cual se infiere que si la improcedencia no es patente, clara o evidente ello basta para admitir la demanda; tal consideración que deriva de la interpretación del artículo 145 antes mencionado, es acorde con la intención establecida por el legislador en los artículos 103 y 107 constitucionales, de instituir el juicio de amparo como un remedio abierto a los particulares en contra de los actos de autoridad de manera genérica; asimismo, la conclusión de que el desechamiento de la demanda de amparo es caso de estricta excepción, responde a la idea de que los afectados por la admisión (autoridades responsables y tercero perjudicado) tienen amplia oportunidad de defensa dentro del juicio, así como para acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, la existencia de cualquier causa de improcedencia, puesto que la admisión de la demanda no impide al Juez Federal pronunciarse al respecto con posterioridad.

Sentado lo anterior, manifiesto los siguientes

AGRAVIOS:



IZGADO PRMI
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJAN

SIN TEXTO

SECRETARIA
DE JUSTICIA
FEDERAL
MEXICO

PRIMERO.- El auto recurrido es violatorio de los artículos 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7, todos de la Ley de Amparo, por indebida aplicación al caso que nos ocupa.

En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, permite el desechamiento de plano de una demanda de amparo, siempre y cuando se actualice una causa de improcedencia MANIFIESTA e INDUDABLE, textualmente dice (énfasis añadido):

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Ahora bien, la jurisprudencia ha definido ampliamente los términos "manifiesta" e "indudable" contenidos en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

Por "manifiesta", debe entenderse: lo que salta a la vista, que su actualización se aprecie de forma patente, absolutamente diáfana, que no pueda ponerse en duda. Debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, esto es, debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones¹.

Mientras que por "indudable" debe entenderse: que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustentara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa².

DE LA FEDERACIÓN
JURISDICCIONAL
INTERIOR DE LA
E DE COYUNTURA
ESTADO DE AGUASCALIENTES
JURISDICCIONAL

Ahora bien, el acto reclamado en la demanda de Garantías se hizo consistir en:

"1).- La ilegal notificación de un oficio al que supuestamente se acompañó un Dictamen emitido por el Congreso del Estado, en el que se propone reformar y adicionar diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y

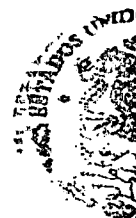
¹ Tesis: P./J. 140/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su parte conducente dice: "...lo que implica que dicho motivo debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, esto es, debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones..."

² Tesis: P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su parte conducente dice: "...por "indudable" [debe entenderse] resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustentara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa..."



UZGADO PRI
EN MATER
DE JUIC
TUJ

SAN TEXO



INTERNACIONAL
CORRECCION DE
CORRECCION DE
CORRECCION DE
CORRECCION DE
CORRECCION DE

Soberano de Baja California, y consta además de diecinueve artículos transitorios, con la finalidad de que fueran estudiados, discutidos y votados por el Cabildo del MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE TECATE, para que dentro del mes siguiente informar el resultado de la votación al referido Congreso, en el entendido de que de no recibir tal informe dentro de ese plazo, se presumiría que estaban conformes con dichas reformas, adiciones y artículos transitorios; y, 2).- El Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre del mismo año, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California."

Por su parte, el señor Juez de Distrito consideró que el juicio de amparo es improcedente en virtud de que, en su respetable opinión, se actualiza la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 7º y 105, todos de la Ley de Amparo, por dos motivos:

El primero, porque el Ayuntamiento quejoso carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, por no satisfacerse los requisitos que para ello exige el artículo 7º de la Ley de Amparo, por tener el carácter de autoridad y no afectarse su patrimonio dentro de una relación asimilada a la de un particular; y,

El segundo, porque los actos reclamados son de carácter electoral, contra los cuales es improcedente el amparo, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se actualiza ninguna de tales causas de improcedencia. Veamos:

Cabe precisar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, contiene la improcedencia genérica por remisión a otras normas, al decir "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."; esto es, no contiene una causa de improcedencia per se, de manera que la supuesta improcedencia detectada por el señor Juez debe estar forzosamente en los artículos 7º de la Ley de Amparo y/o en el 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



JUZGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TJUAN

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
PRIMEA CURTEL
SECRETARIA
EDICION DE TRA
CONSTITUCION
ACOST

El artículo 7º de la Ley de Amparo, contiene la posibilidad de que las autoridades públicas ocurran al juicio de amparo, básicamente cuando se afecta su patrimonio y han actuado en una relación de supraordinación, asimilados al gobernado.

Finalmente el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la posibilidad de acudir a la acción de inconstitucionalidad o a la controversia constitucional, sin embargo, en el caso concreto no procede ninguna de ellas, pues las normas infringidas por la autoridad responsable (Congreso del Estado) son de naturaleza local, es decir, no se le atribuyen solamente violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, concretamente al artículo 112; por lo que no es factible que las violaciones impugnadas las analice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la siguiente jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 192088

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XI, Abril de 2000

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 30/2000

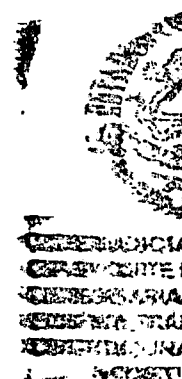
Página: 812

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SUPREMA CORTE SÓLO COMPEETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL. - Para determinar los planteamientos cuyo conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndose de ahí que se trata de violaciones a disposiciones



ALZADO PRE
EN MATER
DE JUICH
TJU

SIN TEXTO



constitucionales del orden federal. Por lo tanto, carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que sólo se atribuyan violaciones a la Constitución del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Constituyente Local o a las Legislaturas de los Estados.

Cabe precisar que el Estado de Baja California, no existe un remedio ordinario para corregir las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto que promovimos, por lo que el único medio de defensa es precisamente el juicio de amparo.

El señor Juez sostiene en dos premisas la supuesta improcedencia del juicio, a saber: a) la falta de legitimación de la parte quejosa y, b) que se reclaman actos electorales.

De entrada, se debe decir que la falta de legitimación no constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable que justifique desechar la demanda de amparo, al respecto es conveniente invocar la siguiente tesis:

Epoca: Octava Época

Registro: 214894

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo XII, Septiembre de 1993

Materia(s): Común

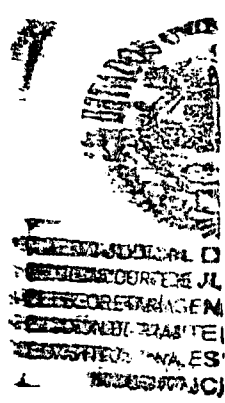
Página: 203

DEMANDA DE AMPARO. FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL QUEJOSO, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO— *El motivo manifiesto e indudable a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, para desechar una demanda por notoriamente improcedente, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; así, la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, relativa a la falta de legitimación del quejoso al momento de promover el juicio de amparo, no es motivo*



JUZGADO PRI
EN MATER
DE JUICI
TUJ

SIN TEXTO



manifiesto ni indudable de improcedencia, pues la legitimación puede acreditarse hasta la audiencia constitucional mediante las pruebas que al efecto se aporten; estimar lo contrario, implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto apriorísticamente se le priva de la oportunidad de allegar al juicio los elementos de convicción que justifiquen el señalado requisito de procedibilidad. En consecuencia, en ese supuesto debe admitirse la demanda de amparo, ya que el motivo aparente que al principio se advierte es ineficaz para desecharla, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia relativa.

Más adelante, tratamos el tema de la supuesta naturaleza electoral de los actos reclamados.

SEGUNDO.- El señor Juez sostiene que no se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 7º de la Ley de Amparo, pues se deben tratar de relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Que la interpretación de este precepto es estricta. Que el Estado en algunos casos obra como autoridad, con soberanía y en otros casos como ente privado vinculado a sus intereses particulares. Que admitir el amparo en los casos en que el Estado no actúa como particular, sería tanto como desconocer su imperio. De lo anterior concluye que, siempre que las personas morales actúen en su verdadero carácter de autoridad se encuentran excluidas de promover el juicio de amparo.

El señor Juez invocó en apoyo de sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 128/2017, cuyo rubro y texto es (énfasis añadido):

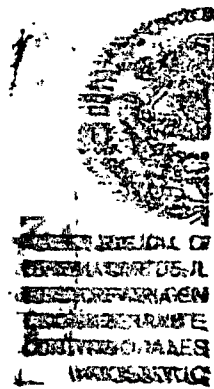
Época: Décima Época
Registro: 2015321
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.)
Página: 1022

PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD,



ORGANO PRINCIPAL
EN MATERIA DE
JURISDICCION FEDERAL
TJUNAN, I

SIN TEXTO



CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN.— La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano, habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos.

Ahora bien, la jurisprudencia que antecede deriva de la contradicción de tesis 374/2016; Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Tercero y Cuarto, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

LA SECRETARÍA DE
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
ESTADO DE AGUILO
DE LA ENTIDAD
DE AGUILO
DE AGUILO

Las tesis que contendieron fueron las siguientes:

Tesis XI.1o.A.T. J/13 (10a.), de título y subtítulo:	Tesis (III Región)4o.56 A (10a.), de título y subtítulo:
"PERSONAS MORALES OFICIALES. ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CUANDO PUGNEN POR SU DERECHO A SER JUZGADAS POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE, AUN CUANDO ESA PRETENSIÓN SURJA	"PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR EN AMPARO LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL JUICIO DE LESIVIDAD QUE LES FUE DESFAVORABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE



UZGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJUAN

SIN TEXTO



REPRESENTANTE DE LA
FEDERACION DE JUST
FEDERACION DE JUST
FEDERACION DE JUST
FEDERACION DE JUST
FEDERACION DE JUST
FEDERACION DE JUST

EN UN JUICIO EN EL QUE SE DEBATA LA NULIDAD O VALIDEZ DE UN ACTO QUE SE LES ATRIBUYE."	2018).
--	--------

RO DE DIST
DE AMPARO
FEDERALES
B.C.



RO DE DIST
DE AMPARO
FEDERALES

Esto es, los Tribunales contendientes analizaron la posibilidad o no de que autoridades sometidas a un juicio contencioso administrativo (en el que participaron como demandadas, por haber actuado con imperio al emitir el acto administrativo impugnado), tienen o no la oportunidad de acudir al juicio de amparo, concluyendo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que carecen de legitimación, precisamente por haber actuado como autoridades cuando emitieron el acto administrativo impugnado en los procesos de nulidad.

Sin embargo, el caso concreto es diferente; y por lo mismo, no aplica la jurisprudencia que antecede.

Cierto, en el caso concreto, el Ayuntamiento de Tecate, sólo puede considerarse autoridad dentro del municipio de Tecate, y nunca podrá considerarse que tiene imperio, soberanía o autoridad sobre el Congreso del Estado o fuera de su territorio municipal.

Ni siquiera puede considerarse que tiene la misma jerarquía que el Congreso del Estado, pues conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado tiene facultades para desaparecer el Ayuntamiento, el mismo municipio o destituir autoridades de aquel.

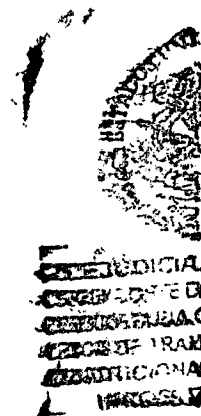
El fundamento de estas afirmaciones lo encontramos en los siguientes artículos de la Constitución de Baja California:

"ARTICULO 27.- Son facultades del Congreso [...] XXVI.- Crear o suprimir municipios, fijar, delimitar y modificar la extensión de sus territorios, autorizar mediante Decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los municipios; así como dirimir de manera definitiva las controversias o diferencias que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales, modificando en su caso el Estatuto Territorial. Lo previsto en



ABOGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
ORDINARIOS

SIN TEXTO



esta fracción se sujetará, a la emisión del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los Diputados integrantes del Congreso..."

"ARTICULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma..."

De manera que no podrá considerarse nunca que los Ayuntamientos y el Congreso del Estado se encuentran en un plano de igualdad, sino que existe una relación de supra a subordinación, donde el Ayuntamiento siempre está subordinado al Congreso del Estado. Léase al respecto la siguiente jurisprudencia obligatoria:

Época: Novena Época.

Registro: 177333

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXII, Septiembre de 2005

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 115/2005

Página: 890

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).-

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 14/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 277, del rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO QUE PUEDE AFECTAR



IZGADO PRIM
EN MATERI
DE JUICIC
TJUA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION
MEXICO
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL

AL MUNICIPIO, POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL AL AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DEL SÍNDICO (ESTADO DE MÉXICO)." sostuvo que cuando alguna autoridad afecte o restrinja facultades o prerrogativas establecidas a favor de los Municipios en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos deberán tener conocimiento de tales determinaciones, mediante notificación personal que se entienda con el síndico procurador, por ser éste el funcionario competente para defender los intereses municipales. Conforme a los artículos 51, fracción VI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 41 de la Constitución Política de dicha entidad federativa, el Congreso Local, a través de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, está facultado para iniciar el procedimiento de suspensión definitiva del cargo de presidente municipal. Ahora bien, aunque la citada ley orgánica no prevea expresamente la intervención de los Ayuntamientos en el señalado procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, en relación con el mencionado artículo 115, previamente a cualquier acto de privación debe hacerse saber a los Ayuntamientos el inicio del trámite relativo y darles la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar en su favor. En consecuencia, la referida legislatura debe ordenar el debido emplazamiento para permitirles esa defensa oportuna y adecuada.

En ese sentido, conforme a la Constitución de Baja California, el Ayuntamiento de Tecate, tienen una doble función o personalidad, por un lado, como municipio es la base de la organización territorial del Estado, con autoridades propias, atribuciones específicas y libre administración de su hacienda, su objeto es organizar a la población asentada en su territorio para la gestión de sus intereses, para ejercer funciones y prestar los servicios de su competencia. Mientras que por otra parte, el Ayuntamiento es el órgano depositario de la competencia y atribuciones del Municipio.

Lo anterior se contiene en los artículos 76 y 77 de la Constitución Local, que dicen:

ARTICULO 76.- El Municipio es la base de la organización territorial del Estado; es la institución jurídica, política y social, de carácter autónomo, con autoridades propias, atribuciones específicas y libre administración de su hacienda. Su objeto consiste en organizar a la comunidad asentada en su territorio, para la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral y sustentable; proteger y fomentar los



ALZADO PRIM
EN MATERI
DE JUIC
TI

RECEIVED
JAN 10 1900



RECEIVED
JAN 10 1900

valores de la convivencia Local, así como ejercer las funciones y prestar los servicios públicos de su competencia.

ARTICULO 77.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular, depositario de la competencia y atribuciones que le otorgan al Municipio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.

De manera que la función del Ayuntamiento se limita a ser depositario de la competencia y atribuciones del Municipio, por lo que no puede considerarse autoridad para toda clase de actos y mucho menos cuando se generan diferencias con el Congreso del Estado, pues éste sí tiene facultades de imperio para con el Municipio, por ejemplo, puede crearlos, desaparecerlos, fijar sus límites territoriales, destituir a sus autoridades, entre otras facultades del Congreso del Estado sobre los Municipios.

Así, contrario a lo que sostiene el señor Juez Federal, mi representado no es una autoridad, ni tampoco busca que en el juicio de amparo se diriman cuestiones entre autoridades.

De manera que sí es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el Congreso del Estado, abusando de posición constitucional afecta al Municipio o sus autoridades.

Al respecto es aplicable por analogía la siguiente tesis:

Epoca: Décima Época

Registro: 2011856

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV

Materia(s): Común

Tesis: XVI.1o.A.89 A (10a.)

Página: 2902

DIETAS DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. SU DISMINUCIÓN O PRIVACIÓN CON MOTIVO DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR LA INASISTENCIA A UNA SESIÓN DE ÉSTE SIN CAUSA JUSTIFICADA, ES IMPUGNABLE EN AMPARO.— *La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al*



ABGADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJUAN

SIN TEXTO



FORA JESIONA DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARIA CEN
REGIONAL DE TLAJUE
CONSTITUCIONALES
L. M. JESATUCI

interpretar el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinó que el juicio de amparo es improcedente contra actos o resoluciones que violen derechos políticos, entendiéndose por éstos, de acuerdo con los artículos 35 y 41 de ese ordenamiento: la asociación política, la afiliación a los partidos políticos, a votar y a ser votado. Con esa base, las dietas que reciben los servidores públicos que acceden al cargo a través del sufragio, por sí mismas, no pueden catalogarse como un derecho político; tendrán esa naturaleza cuando el motivo por el que dejan de percibir las sea consecuencia directa de la destitución del cargo público; en cambio, serán de carácter administrativo cuando la reducción o suspensión de su pago derive de las sanciones impuestas por el incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos que las perciben, en virtud de que no les impide ocupar con libertad el cargo al que accedieron a través del sufragio, ni interfiere directa o indirectamente con su actividad, ya que con esas percepciones económicas o sin ellas, pueden, válidamente, intervenir en las sesiones y realizar cualquier atribución o función que la ley les otorga. En ese sentido, la privación o disminución de las dietas con motivo de una sanción administrativa a los regidores de un Ayuntamiento por la inasistencia a una sesión de éste sin causa justificada, es impugnabile en amparo.

Así las cosas, como ya se dijo, el Ayuntamiento de Tecate, no puede considerarse como autoridad en el tema que nos ocupa, sino que simple receptor de una notificación que no se le hizo y que le privó de su derecho para opinar sobre la reforma constitucional.

COPIA DE LA SENTENCIA
AL SEÑOR JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA
DE ACQUIESCENCIA
Y VALIDAD

TERCERO.- Además, el Juez de Distrito pasó inadvertido que la afectación del patrimonio de mi representada con los actos reclamados, no tan solo se sustentó en el hecho de que se limitó a dos años la gubernatura, municipales y diputaciones, con lo que se impide el desarrollo económico del Ayuntamiento de Tecate al quedar inconclusos los planes y programas de desarrollo; sino sobre todo, la afectación de su patrimonio radica en que, entre las reformas a la Constitución Local contenidas en el Decreto 112, se contiene la adición al artículo 21, de un apartado "C", intitulado "**De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas**", en el cual se faculta al Congreso del Estado a examinar, discutir, y en su caso, modificar y aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, correspondiente al siguiente ejercicio fiscal, sin requerir para ello, la opinión, autorización o conformidad de estos, con lo cual se afecta gravemente el patrimonio de los Ayuntamiento, puesto que éstos no podrán tener intervención



SEGUNDO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIO
TJUAJ

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DEL
SUPREMACIA DE LA JUSTI
NUESTRO SEÑOR JESUS
RECONOCIMIENTO DE
CONSTITUCIONALES Y L
— INDEPENDENCIA

alguna, ni siquiera para exponer las necesidades que tiene, sobre la falta de inmuebles, vehículos, mobiliario, personal y servicios que requiere para cumplir con sus fines, y desde luego, para solicitar que en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, se incluyan partidas mayores o para otros rubros integrantes de su patrimonio.

Las anteriores consideraciones se plantearon en la demanda de amparo en los siguientes términos:

"En efecto, sobre todo el segundo de los actos reclamados afecta el patrimonio de la parte quejosa, toda vez que entre los artículos reformados y adicionados de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, destaca el Apartado C, del artículo 21, que textualmente dice lo siguiente:

"APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia."

Como se observa de dicho precepto, en el mismo se establece que en el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de



UZGADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO
TIJUA

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE LA
FEDERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA

ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes.

Por lo tanto, si en dicho precepto se faculta al Congreso del Estado a aprobar y modificar las **Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal**; es indudable que ello impactará de manera trascendente en el **patrimonio del Municipio y del Ayuntamiento de TECATE, Baja California**; motivo por el cual, resultaba indispensable que el Cabildo del Ayuntamiento de dicho Municipio, analizara, discutiera y votara tanto la redacción como el contenido del **artículo 21, Apartado "C"**, intitulado **"De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas"**, contenido en el Dictamen que se adjuntó al oficio dirigido al Presidente Municipal de **TECATE, Baja California**; sin embargo, al no haberse recibido jamás dicho oficio y documentación anexa, se impidió discutirlo en sesión de Cabildo y poder ser votado, provocando con ello que se presumiera que dicho Municipio se encontraba de acuerdo con dicha reforma o adición a la Constitución Local, por el solo hecho de no haber informado el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del mes siguiente al en que supuestamente fue recibido el oficio en comento, conforme al artículo 112 de la misma Constitución; motivo por el cual, se encuentra legitimado el **MUNICIPIO y el AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, para promover el presente Juicio de Amparo."

No obstante lo anterior, el Juez de Distrito fue omiso en analizar y atender los motivos y fundamentos expresados en ese apartado, en los cuales se justifica plenamente la procedencia del juicio de amparo, puesto que los actos reclamados no tan solo involucran cuestiones electorales, sino también las relacionada con los ingresos que debe percibir el Municipio, los cuales son determinados en la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California, y que por ello, es de vital importancia y trascendencia que se hubiera notificado legalmente el proyecto o dictamen de reformas y adiciones a la Constitución Local, para que dentro del mes siguiente de recibido, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo del Ayuntamiento, en el sentido de no aprobarlas en los términos en que aparece redactado el apartado "C" del artículo 21, ya que la aprobación a cualquier Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, por parte del Congreso, así como cualquier adición o reforma a la misma, deberá ser previamente autorizada por el Ayuntamiento de dicha Municipio, quien podrá hacer propuestas de los ingresos que debe percibir, atendiendo a sus necesidades referentes al patrimonio con que cuenta y la forma de incrementarlo para el cumplimiento de sus fines.



UZGADO PRIMER
EN MATERIA E
DE JUICIOS I
TIJUANA

SIN TEXTO



REGISTRADO DE
EXPEDIENTES DE JUS
SUCEDENTARIOS EN
RECONOCIMIENTO DE
DIRECHOS ORIGINALES Y
INTERVENCION

Por lo tanto, si dicho apartado "C" del artículo 21 de la Constitución Local contenido en el Decreto 112 fue aprobado en sus términos, bajo la presunción equivocada de que el Ayuntamiento de Tecate estaba de acuerdo con el mismo, por el solo hecho de que no rindió al Congreso del Estado, un informe con el resultado de la votación, dentro del mes siguiente al en que supuestamente se le notificó el Dictamen respectivo; obvio es que tal aprobación afecta gravemente su patrimonio; y por ende, está legitimado para acudir al juicio de amparo. Lo que omitió tomar en consideración el juez de Distrito en el auto recurrido.

Por lo que es innegable que en tal contexto el Ayuntamiento de Tecate se encuentra frente al Congreso del Estado en una relación de supra a subordinación, equiparándose dicho Ayuntamiento a un particular, carente de imperio o autoridad para que una vez aprobadas las reformas o adiciones a la Constitución Local, se pueda oponer a permitir que el Congreso del Estado, examine, discuta, y en su caso, modifique y apruebe la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate.

Lo anterior es así, porque en el contexto del artículo 112 de la Constitución Federal, ésta podrá ser adicionada o reformada, cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

ACUERDO
JUNTA DE GOBIERNO
MAYOR
AYUNTAMIENTO

Es decir, a los Ayuntamientos se les pide una opinión que deberán enviar al Congreso del Estado dentro del mes "de que se compruebe" que han recibido el proyecto de reformas o adiciones a la Constitución Local; y si en ese lapso no se recibe tal opinión, se entiende que las aceptan.

Por lo tanto, lo que es materia del presente juicio de amparo es precisamente que se conceda la protección constitucional para el efecto de que se declare insubsistente la "notificación" que se hizo al Ayuntamiento quejoso, con la que supuestamente se comprueba que recibió el proyecto de reformas o adiciones a la constitución; pues al demostrar que ésta se hizo de manera ilegal, a través de una intendente que carece de facultades para recibir ese tipo de notificaciones, ello traerá como consecuencia el considerar que nunca inició el plazo de un mes que se le concedió para emitir su voto de conformidad o inconformidad con las adiciones y reformas propuestas en el Dictamen que supuestamente se adjuntó a dicha notificación; y por ende, no podría cobrar vigencia la presunción de a que se refiere el



JUZGADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIOS
TIJUAN

1971



INTERMUNICIPAL
SUPLENTE DE J
SECRETARIA GE
REGIONAL FAMILI
DE LA JUDICIAL
INTERMUNICIPAL

segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, de entender que se encuentra conforme dicho Ayuntamiento con tales reformas o adiciones; y como consecuencia de ello, se deberá dejar insubsistente el Decreto 112 mediante el cual se publicaron tales reformas y adiciones de la Constitución Local.

CUARTO.- Por otra parte, el señor Juez Federal considera que el acto reclamado es de carácter electoral, porque —estima— se encuentra relacionado con el nombramiento por dos años para el cargo de Gobernador del Estado.

Sin embargo, lo que el Ayuntamiento reclamó, fue la "falta de notificación", en términos de la Constitución del Estado, de un documento que pretende reformar la constitución local, de manera que, si el Juez Federal partió de una premisa falsa para desechar la demanda, ello es bastante para que se revoque su resolución.

Véase al respecto la siguiente tesis:

Época: Décima Época

Registro: 2011048

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III

Materia(s): Común

Tesis: I.1o.A.30 K (10a.)

Página: 2057

LA FEDERACIÓN
JUEZ FEDERAL DE ACUERDO
CON LA LEY DE AMPARO
Y CONTRAVENCIONES
DE ACCIONES

DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO.— *Conforme al artículo 112 de la Ley de Amparo, una vez recibida la demanda por el Juez de Distrito, éste deberá resolver en un plazo de veinticuatro horas si: a) la desecha, b) previene al promovente en caso de advertir alguna irregularidad en el ocuso, o c) la admite. Para poder asumir cualquiera de las tres determinaciones referidas, el juzgador está obligado a examinar en su integridad dicho ocuso a efecto de verificar no solamente si cumple con los requerimientos formales definidos por la ley, sino también que el*



ALZADO PRIMER
EN MATERIA D
DE JUICIOS F
TJUANA

SIN TEXTO

ESTADOS UN

PODER JUD
MEXICANA
SECRETAR
SECCION
EXAMINAT

promoviente haya expuesto con claridad su pretensión, razón por la cual está autorizado, conforme al diverso 114, fracción IV, del propio ordenamiento, a requerirlo para que aclare su escrito inicial cuando de su lectura se advierta que no indicó con precisión los actos autoritarios cuya irregularidad constitucional reprocha, a efecto de estar en posibilidad de advertir con claridad cuáles son y, con ello, decidir qué curso darle. Por otro lado, si se toma en cuenta que, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez sólo puede desechar una demanda si advierte la configuración de una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable, esto es, que su actualización se aprecie de forma patente, absolutamente diáfana, que no pueda ponerse en duda, resulta entonces que sólo podrá estar en posibilidad de asumir una decisión en ese sentido si tiene presente, en primer lugar, y con igual nitidez, cuáles son los actos que el gobernado reclama. En este orden de ideas, si el auto mediante el cual se desecha una demanda de amparo refleja que el juzgador construyó su determinación a partir de una inexacta precisión de los actos reclamados, que revela su omisión de prevenir al agraviado, para que aclarara su escrito inicial respecto de éstos, se debe concluir que dicho proveído es ilegal simplemente porque no puede actualizarse de forma manifiesta e indudable alguna hipótesis de improcedencia ante la violación procedimental en que incurrió el juzgador.

ACCIÓN DE AMPARO
CONSTITUCIONAL
NÚMERO 13/2015
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO FEDERAL

Para soportar su criterio en el sentido de que el acto reclamado tienen matices electorales, el señor Juez de Distrito invoca una porción de la Acción de Inconstitucionalidad número 13/2015, que se reproduce:

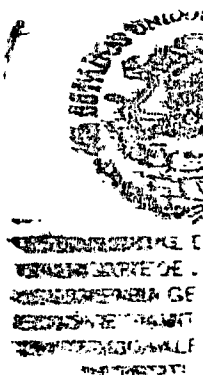
Por el contrario, este Tribunal considera que el partido político accionante sí tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de las restantes normas que impugna, dado que si son de naturaleza electoral para los efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, en virtud de que se refieren a la duración de dos años en el cargo de Gobernador del Estado electo en dos mil dieciséis (artículo cuarto transitorio del Decreto 536 cuestionado) y, por ende, cuándo se llevarán a cabo los procesos electorales para elegirlo (dos mil dieciséis y dos mil dieciocho), así como a violaciones dentro del procedimiento legislativo que dio origen a dicho Decreto...

Sin embargo, el señor Juez saca de contexto la porción reproducida y hace parecer que el tema es político por el periodo en que fungirá el nuevo gobernador (dos años), sin embargo, en realidad el tema es electoral (según la



ALZADO PR
EN MATE
DE JUN
TI.

SIN TEXTO



ejecutoria reproducida) por los momentos en que se llevarán a cabo los procesos electorales.

Pues como se advierte de la misma ejecutoria, que también invoca el señor Juez, estaremos frente a la materia electoral siempre que:

"Así, ha distinguido entre cuestiones relacionadas **directamente** con los procesos electorales, de aquellas relacionadas de manera indirecta, todas susceptibles de ser sometidas a examen de constitucionalidad por los partidos políticos.

Dentro de las **primeras** ha establecido las siguientes:

1) Las **reglas** que establecen el **régimen normativo** de los procesos electorales.

2) Los **principios para la elección** de determinados servidores públicos.

Y como cuestiones relacionadas **indirectamente**, ha enunciado:

1) Las reglas sobre distritación y redistribución

2) Las reglas sobre la creación de órganos administrativos para fines electorales.

3) Las reglas sobre la organización de las elecciones.

4) Las reglas sobre el financiamiento público

5) Las reglas sobre la comunicación social de los partidos políticos.

6) Las reglas sobre los límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones en materia de financiamiento partidario.

Las reglas sobre los delitos y faltas administrativas de carácter electoral y sus sanciones..."

Como se ve claramente, de la simple lectura de la porción transcrita, que también reprodujo el señor Juez de Distrito, el periodo en que fungirá un gobernador u otros funcionarios, no está incluido dentro de la materia electoral, según la teoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por analogía es aplicable la jurisprudencia

Época: Novena Época

Registro: 180378

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta



UZGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TIJUA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE C
CONSTITUCIONALES Y DI
INSTITUCION

Tomo XX, Octubre de 2004

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 105/2004

Página: 1766

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO 404 DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO DE VILLA DE POZOS NO TIENE CARÁCTER DE LEY ELECTORAL, AUN CUANDO SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO PREVENGA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES PARA ELEGIR A SU AYUNTAMIENTO.— *El mencionado decreto, al no instituir principios rectores para la elección de un Ayuntamiento, ni cuestiones organizativas, administrativas o de otra índole relacionadas con las funciones de las autoridades electorales o la creación de órganos administrativos para fines del sufragio, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos políticos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera, sino la constitución de la nueva municipalidad, no constituye un acto de naturaleza electoral, aun cuando su artículo segundo transitorio establezca que conforme a la Ley Electoral del Estado, el Consejo Estatal Electoral proveerá lo conducente a efecto de que se lleve a cabo la elección del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, que deberá entrar en funciones a partir del 1o. de enero de 2004, pues dicha disposición sólo es una norma complementaria del Decreto 404 del Congreso de esa entidad federativa por el que se creó tal Municipio.*

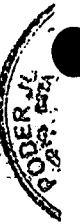
Por lo que opuesto a lo considerado por el señor Juez Federal, el acto reclamado (falta de notificación de un proyecto de decreto que modificaría la Constitución del Estado), no puede considerarse como de materia electoral y, por ende, no se puede estimar improcedente el juicio de amparo indirecto que promovieron mis representados.

QUINTO.- En las relatadas condiciones, toda vez que en el caso concreto no se actualiza de manera manifiesta e indudable ninguna causa de improcedencia, solicito que se revoque la resolución impugnada y en su lugar se orden la admisión de la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Tecate, Baja California.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMACIA DE J
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE FIANTE
CONSTITUCIONALES
INSTITUC



JUZGADOS
EN MAT
Y DE JU
T

Resultan aplicables por analogía las siguientes jurisprudencias obligatorias para este Tribunal Colegiado:

Época: Novena Época

Registro: 178541

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXI, Mayo de 2005

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 32/2005

Página: 47

AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.— Del artículo 145 de la Ley de Amparo se advierte

que es del propio escrito de demanda o de las pruebas anexas de donde puede desprenderse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la ley en cita, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 para desechar de plano una demanda. En ese tenor, la circunstancia de que la improcedencia derive del análisis que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los conceptos de violación en que se plantea una afectación inmediata por su sola vigencia, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente, claro y fehaciente si para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva. Por ello, en la hipótesis aludida no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, ya que en el acuerdo inicial en



JUZGADO PRI
EN MATER
DE JUIC
TIAL

SIN TEXTO



DER JUDICIAL DI
CIVIL Y COME JU
CIVIL Y COME JU
CIVIL Y COME JU
CIVIL Y COME JU
CIVIL Y COME JU

el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello.

Época: Novena Época

Registro: 188007

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XV, Enero de 2002

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 140/2001

Página: 1034

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.— El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministro instructor para desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que implica que dicho motivo debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo alguno a la vista del juzgador, esto es, debe acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, si para pronunciarse sobre la improcedencia de una demanda de controversia constitucional el Ministro instructor requiere hacer una interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal, es claro entonces que no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues para determinar su actualización se requeriría de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva.

Época: Décima Época

Registro: 2018980

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 62, Enero de 2019, Tomo I

Materia(s): Común



ABOGADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIO
TIJUA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS
SECRETARIA DE JUSTICIA
Y FALSA
SECRETARIA DE JUSTICIA
Y FALSA
SECRETARIA DE JUSTICIA
Y FALSA
SECRETARIA DE JUSTICIA
Y FALSA

Tesis: P./J. 34/2018 (10a.)

Página: 9

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.— El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir

la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable.

SEXTO.— Finalmente, por lo que respecta a las diversas tesis aisladas y de jurisprudencia que el juez de Distrito invoca en el acuerdo recurrido, no resultan aplicables al caso que nos ocupa; o en todo caso, al ser interpretadas a contrario censo, justifican la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos reclamados en la demanda de amparo; por los motivos y fundamentos expresados en los agravios que anteceden; por lo que deberá revocarse el auto recurrido y en su lugar, admitir la demanda de amparo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado:

A Ustedes CC. MAGISTRADOS, atentamente solicito:



JUZGADO PR
EN MATE
DE JUIC
TU

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
CORTE SUPLENTE DE J
SECRETARIA GE
SECRETARIA DE
SECRETARIA DE
SECRETARIA DE
SECRETARIA DE

PRIMERO.- Se me tenga presente en tiempo y forma interponiendo el presente recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda de amparo.

SEGUNDO.- Se me tenga señalando ante el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del presente recurso, como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el proemio de este escrito; y subsista la autorización para tales efectos a los mismos profesionistas que se precisan en la demanda de amparo.

TERCERO.- Solicito se autorice obtener imágenes digitalizadas del expediente, en términos de la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal.

CUARTO.- En su oportunidad se resuelva el presente recurso conforme a los intereses del Ayuntamiento quejoso y recurrente.

Mexicali, Baja California a la fecha de su presentación.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. JAVIER AMILS BELTRÁN



DERO DE DISTRI
IA DE AMPARO
IOS FEDERALES
IANA, B.C.



DE DIST
AMPARO
FEDERALES
B.C.

LA FEDERACIÓN
STICA DE JUDICACIÓN
ERAL DE AGUASCALIENTES
DE CONTROVERSIAS
Y DE ALLOCACIONES
FEDERALES



JUZGADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIO
TIJUA



PROFESOR DON C. C.
CARRERA COLEGIO J.
SECRETARIA GEN.
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
L. B. GARCIA



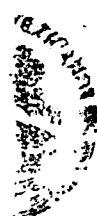
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



PRO DE DISTRI
DE AMPARO
S FEDERALES
NA, B.C.



PRO DE DISTRI
DE AMPARO
S FEDERALES
NA, B.C.



LA FEDERACIÓN
PRO DE AMPARO
S FEDERALES
NA, B.C.

Juicio de amparo 131/2019-VI

El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con el escrito y anexo presentado por **Javier Avilés Beltrán**, autorizado de la parte quejosa, registrado bajo folio 3874. Conste.

Tijuana, Baja California, cuatro de marzo de dos mil diecinueve.

Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por **Javier Avilés Beltrán**, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone **recurso de queja**, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y demás aplicables de la Ley de Amparo, en contra del proveído de **veinticinco de febrero de dos mil diecinueve**, dictado por este Juzgado.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el **informe sobre la materia de la queja** al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en relación con el juicio de amparo **131/2019-VI**, promovido por el **Municipio y Ayuntamiento**, ambos de Tecate, Baja California, por conducto de su Presidente Municipal y Síndico Procurador, en el sentido de que **es cierto** el acto, ya que el **veinticinco de febrero de dos mil diecinueve**, se **desechó la demanda de derechos fundamentales**, al considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7° —interpretado a contrario sensu— de ese ordenamiento legal y el diverso artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, remítase testimonio que se integre con copia certificada de cada una de las actuaciones necesarias para la resolución del recurso interpuesto, así como, el original del



3 244342 490021

escrito del recurso de queja y una copia de éste al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, a fin de que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación.

Sin que resulte necesario previamente efectuar notificación alguna a las demás partes, como establece el artículo 101 de la ley de Amparo, ya que en esta hipótesis se trata del desechamiento de la demanda y por ende, no se proveyó respecto al reconocimiento de partes, acorde al artículo 5° de la ley de la materia.

Notifíquese.

Así lo acordó y firmó **Alexis Manríquez Castro**, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante **Enoc Israel Romero Medina**, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

AMC/EIRM/Francisco

- - - Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil diecinueve, Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, -----

----- **Certifico:** -----

- Las presentes copias fotostáticas constantes de **75** (setenta y cinco) fojas, son fieles y exactas de su original que obran en autos del juicio de amparo **131/2019-IV**, promovido por el **Ayuntamiento de Tijuana, Baja California**, contra actos del **Congreso** del Estado de Baja California, las cuales se certifican y expiden por mandato judicial para ser entregadas a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de abril de dos mil diecinueve. -----

Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California.

Víctor Manuel Mercado Flores.



**JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN MATERIA DE AMPARO Y DE
JUICIOS FEDERALES, TIJUANA, B C**

TURNO DE DEMANDA DE AMPARO

OCC 1.1.0.72

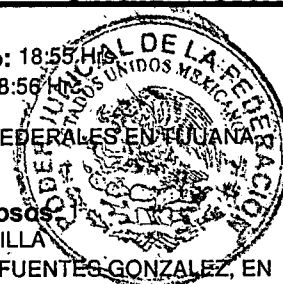
Número de registro: 000953/2019

Fecha de recibido: jueves, 21/02/2019

Fecha de turno: 002224

Hora de recibido: 18:55 Hrs

Hora de turno: 18:56 Hrs



Remanado al: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN TIJUANA -B.C.

Tipo de asunto: INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY

Número de quejosos:

Ingreso: VENTANILLA

Quejoso: AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE NEREIDA FUENTES GONZALEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y OTRO

Autoridad: CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI

Acto reclamado: DECRETO 112, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL 17/10/14, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESIDENCIA EN TIJUANA

Copias:

Firma:

Anexos: 1

Atenta contra la libertad: NO

Descripción de anexos: 1 LEGAJO QUE CONTIENE, ENTRE OTROS, COPIAS CERTIFICADAS DE: PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE B.C. DE 30/11/16, SESION DE CABILDO DE 30/11/16, COPIAS SIMPLES DE: NOMBRAMIENTO, OFICIO DE 07/08/14 Y CAPTURA DE PANTALLA DE PRESUPUESTO 2015

Demandado/Autor interesado: SE IGNORA

Expediente: NO MENCIONA

Autorizado: JUAN GUILLERMO RUIZ HERNANDEZ

Folio de Art. 41: NA

Observaciones: DE IGUAL FORMA RECLAMA LA ILEGAL NOTIFICACION QUE SE HIZO O SE PRETENDIO HACER EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C. RESPECTO DEL OFICIO

Fecha de cambio de turno: @

Hora de cambio de turno: @

13/1/2019-VI

Lic. María Elena Rosales
Técnica de Estudios de la OCC
en Materia de Amparo y Juicios Federales

MEI
RIA I
OS I
ANA, B

DISTRIT
PARO
ALES

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO
EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES
EN TIJUANA, B.C.

SIN TEXTO



LEGACION PRIMERO
EN MATERIA DE
DE NEGOCIOS FE
TLAXIQUANA.



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUST
SU SECRETA RY GERER
SECCION DE FRONTE DE
CONSTITUCIONALES Y
INSTITUCIO

ORIGINAL

02 2
220

3202

Juzgado Primero de Distrito
de Materia de Amparo

QUEJOSOS: MUNICIPIO y

AYUNTAMIENTO DE

TECATE, BAJA CALIFORNIA.

5 copias, 1 auto.

1

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO

JUZGADO PRIMERO

DE MATERIA DE
AMPARO Y JUICIOS FEDERALES

9/Septiembre 1990

709 FEB 21 PM 6:58

DE CORRESPONDENCIA

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y
JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
CON SEDE EN TIJUANA, EN TURNO.

PRESENTE.

NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ y GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA, en
nuestro carácter de PRESIDENTE Y SÍNDICO PROCURADOR, respectivamente, ambos del
AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, ante Usted respetuosamente
comparecemos para solicitar:

A.- Se nos reconozca la personalidad que ostentamos, en mérito a la copia certificada
de los nombramientos respectivos que se acompañan a la presente.

B.- Señalamos como domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos el
ubicado en Misión de San Ignacio 10613, Planta Baja, Zona Río, en Tijuana, Baja California.

C.- Autorizando para que oigan y reciban notificaciones a nombre de nuestro
representado, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en forma indistinta,
a los señores licenciados en derecho JUAN GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, JOEL
PACHECO GONZÁLEZ, JAVIER AVILÉS BELTRÁN, EZEQUIEL POZOS ZAMORA, KARLA
ESPINOZA SALAZAR, MARGARITA GARCÍA MATA, RAÚL MAURICIO ATONDO ZAVALA y
EDGAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, respectivamente, con Cédulas Profesionales Federales
debidamente inscritas y registradas ante la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría
de Educación Pública, así como en el registro en el Sistema Computarizado para el Registro
Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y
autorizando en términos simples para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las
CC. Carlos Alberto Cárdenas Serrano, Gabriela Valenzuela Sánchez y Paulina Lizbeth
Ruvalcaba Pérez; con el debido respeto comparemos para exponer:

Que con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 1º, fracción I, 5, fracción I, 6, 13, 107, fracción I y demás relativos
de la Ley de Amparo; a nombre del MUNICIPIO y del AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA



ALZADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJAN

Handwritten notes and signatures, including the word 'Rec' and a signature.



PODERADO DE
SUPREMACIA DE JUS
SUBSIDIARIA GENE
ESPECIAL DE TRATADO
CONSTITUCIONALES Y
CONSTITUCION

CALIFORNIA, venimos a demandar el **AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL**, en contra de los actos y autoridad que se señala como responsable en los capítulos respectivos.

Previo a dar cumplimiento al artículo 108 de la Ley de Amparo, se procede a continuación a justificar la personalidad de los promoventes para representar a la parte quejosa: "**MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**", en los siguientes términos:

PERSONALIDAD

Los artículos 21 y 23 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de **TECATE**, Baja California, en la parte que interesa dicen siguiente:

TECATE
AMPARO
GERALES
B.C.

"ARTÍCULO 21.- De acuerdo con lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el **Municipio es una persona moral que cuenta con personalidad jurídica**, por lo que actúa a través de sus órganos de representación.

La representación legal del Municipio recae en el Ayuntamiento, que es el órgano facultado para dar cumplimiento a los fines y objetos de la persona moral municipal.

El Ayuntamiento, en ejercicio de tal representación legal del Municipio, faculta a su vez al presidente Municipal y a los demás funcionarios de la Administración Pública Municipal, para que celebren y atiendan en representación del Municipio, los actos jurídicos que se les determinan en reglamentos y acuerdos que la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California les encomienda directamente."

"ARTÍCULO 23.- La Sindicatura Municipal es el órgano de **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO** y del Municipio, así como de control y vigilancia de la Administración Pública Municipal, por lo que fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales, además de la actuación de los servidores públicos, contando para tal efecto con la estructura administrativa que se establece en el presente Reglamento.

El Síndico Procurador actuará como representante jurídico del Municipio y Ayuntamiento, en los litigios en que éste sea parte.

[...]"

Conforme a dichos preceptos legales el **Municipio** es una persona moral que cuenta con personalidad jurídica, cuya representación recae en el **Ayuntamiento**, que es el órgano facultado para dar cumplimiento a sus fines y objetos. Por su parte el **Ayuntamiento**, en ejercicio de tal representación legal del **Municipio**, faculta a su vez al **Presidente Municipal** para que celebren y atiendan en representación del Municipio, los actos jurídicos que se les determinan en reglamentos. En el entendido de que el **Síndico Procurador** siempre actuará como representante jurídico del **Municipio y Ayuntamiento**, en los litigios en que éste sea parte.



JUZGADO PRIMER
EN MATERIA D
DE JUICIOS F
TUJANA

SIN TEXTO



REGISTRAR
SUPLENTE DE
REGISTRAR
SECCION REGISTRAL
INVESTIGACION

De ahí que los que suscribimos la presente tenemos los cargos de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, respectivamente, ambos del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, y como tales tenemos su legal representación y estamos facultados para promover a nombre de éstos la presente demanda de garantías.

LEGITIMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA PARA PROMOVER LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS

El artículo 7 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa dice lo siguiente:

Artículo 7o. *La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio...*

En el caso que nos ocupa, los actos reclamados afectan el **patrimonio de la parte quejosa, MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, toda vez que éstos se hacen consistir en: **1).- La ilegal notificación de un oficio al que supuestamente se acompañó un Dictamen emitido por el Congreso del Estado, en el que se propone reformar y adicionar diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y consta además de diecinueve artículos transitorios, con la finalidad de que fueran estudiados, discutidos y votados por el Cabildo del MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE TECATE, para que dentro del mes siguiente informar el resultado de la votación al referido Congreso, en el entendido de que de no recibir tal informe dentro de ese plazo, se presumiría que estaban conformes con dichas reformas, adiciones y artículos transitorios; y, 2).- El Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre del mismo año, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.**

En efecto, sobre todo el segundo de los actos reclamados afecta el patrimonio de la parte quejosa, toda vez que entre los artículos reformados y adicionados de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, destaca el Apartado C, del artículo 21, que textualmente dice lo siguiente:

"APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.



ALZADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJAN.

SIXTOS

RESERVA DE
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION
DIRECCION

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia."

Como se observa de dicho precepto, en el mismo se establece que en el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes.

NO DE DIST.
DE AMPARO
FEDERACION
RO. En tanto, si en dicho precepto se faculta al Congreso del Estado a aprobar y modificar las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal; es indudable que ello impactará de manera trascendente en el patrimonio del Municipio y del Ayuntamiento de TECATE, Baja California; motivo por el cual, resultaba indispensable que el Cabildo del Ayuntamiento de dicho Municipio, analizara, discutiera y votara tanto la redacción como el contenido del artículo 21, Apartado "C", intitulado "De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas", contenido en el Dictamen que se adjuntó al oficio dirigido al Presidente Municipal de TECATE, Baja California; sin embargo, al no haberse recibido jamás dicho oficio y documentación anexa, se impidió discutirlo en sesión de Cabildo y poder ser votado, provocando con ello que se presumiera que dicho Municipio se encontraba de acuerdo con dicha reforma o adición a la Constitución Local, por el solo hecho de no haber informado el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del mes siguiente al en que supuestamente fue recibido el oficio en comento, conforme al artículo 112 de la misma Constitución; motivo por el cual, se encuentra legitimado el MUNICIPIO y el AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, para promover el presente Juicio de Amparo.

COMPETENCIA

SIN TEXTO



ALZADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJAN



RESERVA DE DERECHO
CIVIL Y DE COMERCIO
DE LOS JUICIOS
DE LOS JUICIOS
DE LOS JUICIOS
DE LOS JUICIOS

Uno de los actos reclamados lo constituye el Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que **tiene su ámbito de aplicación en todo el Estado de Baja California.**

Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, si como se dijo, el Decreto reclamado se pretende ejecutar en el Estado de Baja California, en todos sus Municipios, entre el que se encuentra el de Tijuana; entonces resulta competente este Juzgado de Distrito para conocer de la presente demanda de garantías.

En cumplimiento de los requisitos de la demanda de amparo establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifestamos lo siguiente:

I. **QUEJOSOS: MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE,**
DE DIST. BAJA CALIFORNIA, con domicilio arriba señalado.
AMPARO
GERALES

II. **TERCERO INTERESADO:** Bajo protesta de decir verdad, ignoramos si a alguien le recaiga tal carácter.

III. **AUTORIDAD RESPONSABLE:** Congreso del Estado de Baja California, con domicilio conocido en la Ciudad de Mexicali.
ESTADO FEDERATIVO
DISTRITO DE LA BAJA
DE CONTRASEREN
Y DE APOYO LEGAL
JURISDICCION

IV.- **ACTOS RECLAMADOS:** De la referida autoridad responsable, se reclaman los siguientes:

- 1) La ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE** Baja, California, respecto del oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10



JUZGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TLUJAN

EXHIBIT
PRIME



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE C
CONSTITUCIONALES Y D
CONSTITUCION

de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones. Por lo que deberá concederse el amparo para que se deje insubsistente dicha notificación y todo lo actuado con posterioridad.

- 2) El Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; por derivar de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Presidentes Municipales de **TECATE**, Playas de Rosarito y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que deberá concederse el Amparo solicitado para el efecto de que se dejen insubsistentes las reformas y adiciones hechas a la Constitución en comento, derivadas del Decreto aludido.

El Decreto deriva de un proceso legislativo que no cumplió con las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que está precedido de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Ayuntamientos correspondientes a los municipios de **TECATE**, Playas de Rosarito y Ensenada, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que solicitamos se conceda al Ayuntamiento quejoso el Amparo solicitado, para el efecto de que se dejen insubsistentes las Reformas y Adiciones hechas a la Constitución en comento derivadas del Decreto aludido, incluyendo los artículos transitorios.

VI. PROTESTA LEGAL: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTAMOS LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE NOS CONSTAN Y CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON CIERTOS.

1.- Recientemente tuvimos conocimiento que con fecha 11 de septiembre de 2014, la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, emitió el **Decreto 112**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete

SIN TEXTO



ABOGADO PRIME
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUAN



SECRETARIA DE LA
SUPLEN COMPLETOS NISTIC
SUBSEBES AMAGENERA
SECCIONE TRAMITE DE
COMISTICI MANEJO D
L. INVESTIGACION

de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; del cual me enteré hasta el día 5 de enero de 2019 en que se publicó la convocatoria a que se hizo referencia en el numeral 1; lo cual nos motivó a verificar el procedimiento llevado a cabo para que fueran aprobadas dichas reformas; y sobre todo, si se habían observado las formalidades esenciales que para ello exige el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

2.- Conforme a dicho precepto de la Constitución Local ésta solo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, **debiéndose enviar ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado;** y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución, **siempre y cuando hubiere transcurrido un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata por los Ayuntamientos, sin que éstos remitieran al Congreso del Estado el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.**



USADO PRIMER
EN MATERIA DE
DE JUICIOS I
TUANA

SIN TEXTO



COMISIONAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
FINANCIAS
INSTITUCIONAL

3.- Por tal motivo, los suscritos, en nuestra calidad de Presidente Municipal y Síndico Procurador, respectivamente, ambos del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, nos dimos a la tarea de tratar de localizar el Acta de Sesión de Cabildo en la cual se debió haber discutido la iniciativa de adición o reforma a la Constitución Local debidamente aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, así como las actas de los debates que hubiera provocado el dictamen del Decreto 112, en el que se publicó dicha reforma, de la cual ahora tuvimos conocimiento.

4.- Sin embargo, después de arduas búsquedas, logramos concluir que no existe Acta de Reunión de Cabildo en la cual se hubiese analizado o discutido el Dictamen del Decreto mencionado; es decir, no se llevó a cabo Sesión de Cabildo a fin de discutir la iniciativa de adición o reformas a la Constitución Local, así como las actas de los debates en comento.

5.- En razón de lo anterior, el 18 de febrero de 2019, nos entrevistamos con el Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla, quien desempeñó el cargo de Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, pues expresamente acudimos a buscarlo por tener diversas dudas en relación a la Sesión de Cabildo en la cual debió existir la discusión o aprobación respecto del Decreto mencionado, a lo que nos contestó que él no tuvo conocimiento de la iniciativa de adición o reformas a la Constitución Local aprobadas por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, así como las actas de los debates que hubiera provocado el dictamen del Decreto 112, por lo cual nunca citó a los miembros integrantes del Ayuntamiento, a sesión de Cabildo para discutir ese tema, y así estar en aptitud de remitir al Congreso el resultado de la votación respectiva.

6.- Continuando con las investigaciones, logramos obtener copias del oficio **002224**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados **FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ**, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el que dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

7.- Una vez que tuvimos en nuestro poder dichas copias, con fecha 19 de febrero de 2019, nos entrevistamos nuevamente con Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla, cuestionándolo para que manifestara si reconocía haber recibido durante su gestión



ALZADO PRIMERO
EN MATERIA DE
DE JUICIOS FE
TUJANA, L

SIN TEXTO



PROSECUICION DE L
SUPREMACIA DE JUST
SUBSECRETARIA ENER
SECRETAR DE TRABAJO DE
CONSTITUCIONALES Y I
INSTITUCION

esas documentales en original, cuyas copias le mostramos, concretamente el día 08 de agosto de 2014, puesto que en el oficio en comento, aparece en el sello con la siguiente leyenda "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL" y escrito a mano el nombre de la persona que recibió "CUQUITA"; y luego de tener a la vista tales copias, respondió que jamás había recibido dicho oficio ni la documentación a la que hace referencia el mismo, ni en la fecha que indica el sello, ni en ninguna otra, agregando que nadie le hizo llegar dicho oficio y documentación que se relaciona en el mismo, además de que la señora Refugio Montellano Mercado, conocida como **CUQUITA**, en esa fecha desempeñaba el cargo de **INTENDENTE**.

Además, me aclaró que conforme al Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, el único facultado para recibir documentación de esa naturaleza; era Fernando Iván Esparza Murúa, el entonces **Secretario Fedatario**, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 44 fracción X Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

RECEBIR y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos **OFICIOS** que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y..."

8.- Por tal motivo, en la misma fecha de 19 de febrero de 2019, procedimos a entrevistarnos con Fernando Iván Esparza Murúa, quien en el mes de agosto de 2014, se desempeñó como Secretario Fedatario del Ayuntamiento de **TECATE**, a quien también se le requirió formalmente para que manifestara si en ese mes o en algún otro, recibió el oficio 002224, de fecha 08 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el cual dice se acompaña copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; respondiendo en sentido negativo; es decir, que nunca había recibido dicho oficio ni tampoco la documentación a que hace referencia el mismo, a pesar de ser él el único que tenía facultades para recibirlo, conforme al artículo 44, fracción X, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California.



JUZGADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIOS
TIJUANA

SIN TEXTO



FEDERACION
NACIONAL DE
LABORADORES
DE TIJUANA

9.- En consecuencia, toda vez que dicho oficio y documentación que se dice fue anexada al mismo, jamás fue recibida por el que fue Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, ni tampoco por el entonces Secretario Fedatario, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, ello motivó que no se discutiera en sesión de Cabildo el Dictamen Número 1, en el que se propone reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Local.

Lo anterior trajo como consecuencia que se tuviera por aprobado en afirmativa ficta dicho dictamen; y por lo tanto, en base a ello se publicó el Decreto 112, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, concretamente en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, y 78, se adicionó el capítulo III al título V, integrándose con el numeral 68 y se adicionaron 19 artículos transitorios; sin que se hubiera cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, pues nunca tuvo conocimiento de la notificación respectiva, privando al Ayuntamiento que representamos, de su debida participación en los términos del artículo 112 de la misma Constitución, tal y como se ordena.

10.- En efecto, conforme al texto de la Constitución local, al Congreso del Estado le compete la iniciativa, discusión y aprobación en su caso, de las normas legales ordinarias; es decir, el proceso de formación de la ley inicia y termina en el recinto legislativo.

AMPARO
FEDERALES

8.C. Sin embargo, tratándose de reformas y adiciones al texto constitucional local, se requiere de una mayoría calificada como la participación de todos y cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Baja California. PARA ELLO, CADA AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DEL ORGANISMO O FUNCIONARIO EXPRESO, DEBE SER NOTIFICADO LEGALMENTE.

EN ESTE CASO, TAL NOTIFICACIÓN DEBIÓ REALIZARSE FORZOSA Y NECESARIAMENTE A TRAVÉS DEL SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

Debido a la importancia del proceso de reformas constitucionales, la recepción de documentación por persona distinta al SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, ha dejado a la parte quejosa indefensa, al no estar enterada para pronunciarse tal y como la marca el texto constitucional local.

11.- Con motivo de dichas reformas y adiciones a la Constitución Local, resulta gravemente afectado el Patrimonio del MUNICIPIO y del AYUNTAMIENTO DE TECATE,

SIN TEXTO



IZGADO PRIM
EN MATERI
DE JUICIO
TLUAI



GOBIERNO FEDERAL LA F
UPPERCOT FEJIN TICA
UT SECRETARIA GENERAL I
RECORDADO FRANTIDE CO.
CONSTITUCIONALES FIDE A
NACIONAL

BAJA CALIFORNIA, toda vez que con tales reformas y adiciones se impacta la economía de éste, sobre todo porque al limitarse a dos años la ocupación de los cargos a la Gubernatura, Municipales de los Ayuntamientos de los cinco Municipios y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, todos del Estado de Baja California; con ello, se limita la planeación y desarrollo económico de dicho Ayuntamiento, puesto que es muy poco tiempo para que puedan continuarse y concluirse las obras planeadas; y sobre todo, su patrimonio se verá sumamente afectado; por lo que es procedente el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa dice lo siguiente:

Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio..."

STRIV

En efecto, la necesaria participación del **AYUNTAMIENTO** que representamos en el proceso de la reforma, era de vital importancia para el municipio de **TECATE**, pues la reforma deja atrás el periodo gubernamental de seis años, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La estabilidad patrimonial del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, así como del resto de los Ayuntamientos del Estado, se ve comprometida, toda vez que con tales reformas y adiciones se impacta gravemente a la sociedad, sobre todo, porque al limitarse a dos años la ocupación de la gubernatura, el desarrollo económico del referido Ayuntamiento estará sujeto a un periodo insuficiente de administración.

VII. FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS:

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que tuvimos conocimiento real y completo de los Actos Reclamados hasta el día **19 de febrero de 2019**, en que requerimos al Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla, entonces Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE** Baja, California, así como Fernando Iván Esparza Murúa, entonces Secretario Fedatario, de la misma época del año 2014, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte

SIN TEXTO



DO PRIMER
MATERIA
JULIADOS
TLAXCALA



FEDERACIONAL DE
SUPREMA Y PODER
SECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
CONSTITUCIONALES

del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; manifestando ambos que jamás lo recibieron e ignoraban su existencia y por tal motivo, nunca lo presentaron a sesión de Cabildo del Ayuntamiento para su discusión y votación. Motivo por el cual nos encontramos dentro del término de quince días que establece la Ley de Amparo, para promover el presente Juicio de Garantías.

VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

PRIMERO. – El acto reclamado consistente en la ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, entonces Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **TECATE** Baja, California, respecto del oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; resulta violatorio en mi perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 1º, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen:

Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

{...}

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio

SIN TEXTO



ABOGADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIOS
TLAJUAN



PODER JUDICIAL
SUPLENTE DE
SECRETARIA-GE
SECCION DE RAMA
CONSTITUCIONAL
L. V. ROSAS

14
232
14

de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

RO D DE AL FEDI
En estos tres preceptos constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, **propiedades o posesiones**, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En efecto, la serie de etapas que se siguen a fin de elaborar o modificar algún precepto de la Constitución de Baja California, conocido como Proceso Legislativo debe desarrollarse conforme a las etapas contenidas en ese mismo ordenamiento.

Ese Proceso Legislativo para modificar la Constitución Local, se constituye por una serie de actos con unidad indisoluble con la norma general emanada del mismo, desde las etapas que deben seguirse dentro del mismo órgano legislativo hasta en los Ayuntamientos que integran la división territorial de Baja California.

En la especie, el Proceso Legislativo llevado a cabo para modificar los preceptos de la Constitución de Baja California, así como las normas instrumentales de ésta, a través del



JUZGADO PRIMER
EN MATERIA C
DE JUICIOS I
TIJUANA

SIN TEXTO



GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA
SECCIÓN DE FALSA
FALSA

Decreto 112 a que se ha hecho referencia, infringe las garantías del debido proceso, audiencia y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a grado tal que justifica la procedencia del presente Juicio de Amparo para que se dejen sin efectos tales reformas y adiciones.

La razón es que la ilegalidad del proceso legislativo en comento está centrada en que no fue sometida de forma debida para su discusión y aprobación por parte del Cabildo de Tecate, como se expondrá más adelante, incluyen también de los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada-, lo que impacta en un desequilibrio entre la función legislativa con la interpretación y aplicación de las normas, tanto de las constitucionales como de las transitorias, que resultan en una clara irregularidad procedimental que impacta directamente en la validez, constitucionalidad y legalidad de esas normas.

DE DISTRITO;
JAMPAÑO
EDERALES
B.C.
En el caso que nos ocupa, se han violado los anteriores preceptos constitucionales, toda vez que la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio de la parte quejosa, las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en tales preceptos constitucionales, toda vez que se abstuvo de notificar "legalmente" al Presidente Municipal de **TECATE**, Baja California, a través del **Secretario Fedatario** en funciones, en el mes de agosto de 2014, el oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

En efecto, del análisis que se realiza a la copia del oficio en comento, se advierte que éste contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL**" y escrito a mano el nombre de la persona que recibió "**CUQUITA**"; es decir, se presume fue presentado ante la Secretaria Particular del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal. Sin embargo, estos carecen de facultades para recibir documentos de esa naturaleza e importancia, sobre todo porque se cuenta con el término de un mes para informar al Congreso del Estado sobre el resultado de la votación que debe llevarse a cabo por el Cabildo del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, en relación con el Dictamen de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California; y por lo mismo, no puede ser entregado el oficio y documentación relacionada con ese Dictamen a cualquier persona que nos sea la expresamente facultada por la Ley para tal efecto.

SIN TEXTO



ALZADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIO
TJUAL



EXCELENTISIMO SEÑOR JUEFE DE
LA CORTE SUPLENTE DE
SUSSESION DE LA CORTE
DE TRABAJO DE
JONAS Y
ICIO

Así es, en el artículo 31, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de **TECATE**, Baja California, se establecen con precisión las únicas facultades que tiene la Secretaria Particular, mismas que para mayor claridad se reproducen a continuación:

“ARTÍCULO 31.- A la *Secretaria Particular* corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

asuntos. *Coadyuvar a la organización de actividades, eventos y giras del Presidente*

4.- Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Presidente Municipal y conservar un archivo de las sesiones y acuerdos;

III.- Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno;

IV.- Recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía;

V.- Coordinar las audiencias con los funcionarios para el despacho de los asuntos de su competencia;

VI.- Turnar a quien corresponda, las representaciones oficiales cuando así lo determine el Presidente:

VII.- Realizar acciones administrativas que le correspondan a la Presidencia Municipal;

VIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función."

Como se observa, en dichas facultades no se contiene la de **recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste**, a que se refiere el artículo 44 fracción X, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California; sino solo las de **recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno y recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía**; a que se refieren las fracciones III y IV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de **TECATE**, Baja California.

Efectivamente, nótese que solo se le faculta a la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal de **TECATE**, Baja California, el recibir y dar seguimiento a peticiones o solicitudes de audiencia de la ciudadanía; jamás para recibir y dar seguimiento a peticiones formuladas por alguna autoridad u órgano de Gobierno, como lo es el Congreso del Estado, facultad esta última que se encuentra limitada en exclusiva al Secretario Fedatario al que se refiere el artículo 66 fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California.

SIN TEXTO



ALZADO PRIM
EN MATER
DE JUIC
TJUA



PODER JUDICIAL DEL
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SUBSECRETARIA GENERAL
REGION DE TLAHUACALTE DE C
CONSEJO DE JUECES Y DE
FISCALIA

Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones, no fue recibido por el **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, a pesar de ser el único legitimado para recibir tal documentación, revisarla y darle el seguimiento correspondiente, ello provocó que ni el Presidente Municipal ni el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de la misma; y por ende, jamás celebraron sesión de Cabildo alguna en la cual se discutiera y votara el Dictamen que supuestamente les fue remitido para su estudio por parte del Congreso del Estado; y por consiguiente, se vieron legalmente impedidos para comunicar su opinión a este dentro del término de un mes a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local de Baja California; lo que trae como consecuencia la inobservancia del principio constitucional de garantía de audiencia y finalmente, que el Decreto 112 mediante el cual se reformó y adicionó dicha Constitución, se encuentra viciado.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
JEFATURA DE LA FISCALÍA
DE AMPARO
DE LOS JUICIOS
FEDERALES
MEXICO, D.F.
NA, B.C.

Así es, además de que del propio sello de recibido que aparece en el oficio 002224, de fecha 07 de agosto de 2014, se desprende que este no fue presentado ante el Lic. Fernando Iván Esparza Murúa, en su carácter de Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para que a su vez lo turnara al Presidente Municipal y este lo hiciera del conocimiento del Cabildo para que fuera estudiado, sesionado y votado; se cuenta con el testimonio de las personas que presenciaron que en esa fecha, fueron legalmente interpelados o requeridos el Ingeniero César Rafael Moreno González de Castilla y el Fernando Iván Esparza Murúa, en su carácter de Presidente y Secretario Fedatario, respectivamente, ambos del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio en comento así como de la documentación a que se hace referencia en el mismo, consistente en copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; ambos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca recibieron tal oficio y documentación, desconociendo su existencia, no obstante que se les puso a la vista las copias simples de las mismas que fueron obtenidas directamente del Congreso del Estado; refiriendo ambos que nunca llevaron a cabo

SIN TEXTO



PRIME
ERIA
DE JUICIOS
TUUAN



SECRETARÍA
DE JUSTICIA
FEDERAL
DE JUSTICIA
FEDERAL

una Sesión de Cabildo en la que se discutieran y votaran las reformas y adiciones propuestas en el Dictamen en comento, debido a que jamás se enteraron de su existencia; y que por los mismos motivos jamás le informaron al Congreso del Estado el resultado de la votación que debió haberse llevado a cabo.

A causa de lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, el solo hecho de que no se reciba en el Congreso del Estado el resultado de la votación después de transcurrido un mes de haberse hecho llegar a los Municipios o Ayuntamientos, el Dictamen con las reformas y adiciones a la Constitución Local, así como el Acta de los Debates de la sesión de fecha 10 de julio de 2014, se presumirá que están conformes con las mismas.

Si bien es cierto, que el procedimiento señalado en el artículo 112 de la Constitución Local indica que dicho Pacto solo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias (sic) partes del número total de diputados, para posteriormente, el Congreso, debía ceñirse total y absolutamente al procedimiento legislativo y así evitar deficiencias que obstaculizaran de forma relevante la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, así como el debido desarrollo y proteger el patrimonio de los Ayuntamientos que pudieran resultar afectados con las reformas y adiciones aprobadas.

Por lo tanto, al no existir una debida notificación, impidió al Ayuntamiento (y consecuentemente al Cabildo), estar en condiciones de ser oídos y vencidos en un procedimiento que cuenta con sus propias formalidades.

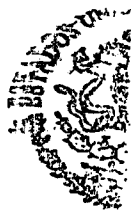
Es decir, el proceso constitucionalmente establecido debe ser idóneo para el ejercicio de las facultades de las personas públicas morales inmersas en este; sin existir, un error procesal o de otra naturaleza de tal gravedad como la falta de garantía de audiencia por una indebida notificación; y que de ninguna manera puede entenderse subsanada, ni mucho menos tenerse como válida la afirmativa ficta a que alude el artículo 112 de la Constitución Local, toda vez que ésta solamente opera cuando el acto previo de notificación es válido, situación o condición que en el caso no acontece.

En efecto, en el caso que nos ocupa esa presunción no puede operar, toda vez que no se notificó legalmente al **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, el referido Dictamen y Acta de debates; y por lo mismo, no se enteró que contaba con un mes para remitir el resultado de la votación al respecto; motivo por el cual es procedente que se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se declare insubsistente dicha notación y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en

SIN TEXTO



FEJUZGADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO
TJUA



PODER JUDICIAL
PRIMERA CORTE O
CONSEJERIA
SECCION DE TRAM
CONSTITUCIONALES
INCOF

el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California.

Por lo tanto, el Proceso Legislativo para modificar las normas constitucionales y la implementación de las normas transitorias de esas reformas contiene un vicio insuperable que justifica la implementación de una medida precautoria y su posterior revocación o dejarse insubsistente con motivo de la concesión del Amparo y Protección de la Justicia Federal que se solicita, por vulnerar los principios de debido proceso, audiencia y de legalidad, al impedir y conculcar el derecho de los Ayuntamientos para expresar y defender su opinión en el contexto de la implementación de dichas reformas, pero sobre todo, de sus reglas de implementación en las que indebidamente son acortados los periodos de gestión de los funcionarios que ocuparan los cargos de Gobernador, Legisladores Locales y Presidentes Municipales y sus Ayuntamientos, lo que vulnera y pone en riesgo el patrimonio de estos últimos, así como de los recursos con que éstos contarán.

SEGUNDO. De igual manera, se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal toda vez que al analizar las notificaciones que se supuestamente se hicieron a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, también se puede advertir que las mismas resultan ilegales, por no haberse practicado a través de los funcionarios expresamente facultados para ello.

Así, por lo que respecta al **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, se advierte que el oficio 002222, Dirigido al Líc. Silvano Abarca Macklis, de fecha 7 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 08 AGO 2014 PRESIDENCIA**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 67 fracción XIII Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

SIN TEXTO



GRADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJUAN



GRADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIOS
TUJUAN

"ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

Además, resulta importante subrayar que el referido reglamento excluye la posibilidad de que esa atribución de recibir y revisar la correspondencia que se dirija a los Ayuntamientos, pueda ser delegada aunado a que tampoco puede ejercerse en sustitución por algún otro funcionario, y menos por un intendente, por constituir una función del estudio y trámite de los asuntos contenidos en la documentación recibida de gran trascendencia para el patrimonio del Ayuntamiento.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Lo mismo aconteció con el **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, pues al revisar el oficio 002223, dirigido al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tecate, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; se advierte que contiene un sello de recibido con la siguiente



GADO PRIM
EN MATERI
DE JUICIO
TIJUA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACION
MEXICO
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL
SECRETARIA DE JUSTICIA
FEDERAL

leyenda: "SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL AUG 08 2014"
RECIBIDO".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 44, fracción X, Reglamento Interior para el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 44.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

RO DE DIST. ...
DE AMPAR
FEDERALE
I.A.C.

X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

DE DIST.
E. AMAR
ERALES
ma
Esto es, la omisión de realizar la notificación con el funcionario que legalmente cuenta con la atribución para recibir la documentación por parte de los Ayuntamientos, trasciende de manera fundamental en las normas constitucionales modificadas, sus artículos transitorios y sobre todo en las normas de implementación, impidiendo con ello que éstos a través de sus respectivos Cabildos discutan y voten los dictámenes en los que se propongan reformas o adiciones a la Constitución Local.

Por lo tanto, el Procedimiento Legislativo en comento al contener un vicio de tal magnitud, como lo es una indebida notificación al Ayuntamiento de Tecate, Baja California, trasgrede el Principio Reitor del Proceso Legislativo para reformar la Constitución del Estado de Baja California, con franca violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo que amerita la concesión del amparo solicitado.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

SIN TEXTO



ABOGADO PRIMER
EN MATERIA
DE JUICIOS
TJUAN



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTI DE
SUBSECRETARIA DE
REGISTRACION Y
CONSTITUCIONALES
CONSTITUTU

Por lo tanto, al ser ilegal tales notificaciones supuestamente realizadas a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, Baja California, ello trascendió al Decreto 112 en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local, por lo que deberá concederse el Amparo, para que también se declare insubsistente el mismo.

TERCERO.- También se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con la expedición y publicación del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California, toda vez que deriva de un acto viciado como lo es la ilegal notificación a los Presidentes Municipales y Ayuntamientos de los Municipios de **TECATE**, Playas de Rosarito y Tecate, del Dictamen a que se ha hecho referencia en el concepto de violación identificado como **"PRIMERO"**; toda vez que al no haberseles notificado legalmente se vieron impedidos para estudiarlo, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo, así como para dar a conocer el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del término de treinta días siguientes al en que supuestamente recibieron tal notificación; toda vez que si esta se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento tuteladas por el artículo 14 Constitucional, como lo es el que fueran hechas por conducto del funcionario expresamente facultado para ello y no por conducto de diversa persona; obviamente no podrían transcurrir los referidos treinta días; y sin embargo fueron ilegalmente computados y presumiéndose que no había oposición por parte de dichos Municipios o Ayuntamientos a tales reformas y adiciones, sin darles la oportunidad de conocerlas previamente, discutir las, votarlas y notificarles el resultado de dicha votación. Por lo que es procedente se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto en comento.

CUARTO.- El Artículo 112 de la Constitución Local para Baja California, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

SIN TEXTO



ACORDADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIO
TIJUA



EXCELENTISIMO
ACORDADO PRIMERO
DE JUICIO
DE JUICIO
DE JUICIO
DE JUICIO
DE JUICIO

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

Conforme a dicho precepto de la Constitución Local, se requiere para ser reformada o adicionada, entre otros, que se demuestre que hubo mayoría en favor de la adición o reforma; por lo que si en el caso que nos ocupa ni siquiera se tomó la opinión de **tres de los cinco Municipios del Estado de Baja California**, concretamente de **TECATE**, Playas de Rosarito y Ensenada, dado que no se les notificó legalmente el Dictamen en el que se contenía el proyecto de los artículos que se pretendían reformar y adicionar, así como las actas de debates; impidiéndoles analizarlas, discutir las y votarlas en sesión de Cabildo; por lo que no pudieron notificar su opinión al respecto ante el Congreso del Estado; ello pone en evidencia que no se contó con la mayoría en favor de tales adiciones o reformas; lo que constituye un motivo adicional para que se conceda el Amparo a la parte quejosa para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que reformó y adicionó la Constitución Local de Baja California.

FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
DE AMPARO
JIST.
RALES
DE SUSPENSION
DE ACCIONES DE
CIVILIDAD

IX. CAPITULO DE SUSPENSION.

En términos del artículo 124, 125, 126 y demás relativos a la Ley de Amparo, solicitamos se me conceda la **SUSPENSION PROVISIONAL** y en su caso la **DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS** para el efecto de que **se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no se apliquen ninguno de los artículos reformados o adicionados, incluyendo los transitorios, del Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA**; toda vez que con dicha suspensión no se contravienen disposiciones del orden público ni se afecta el interés social.

Lo anterior es así, toda vez que entre dichas reformas se limita a dos años la ocupación de los cargos de Gubernatura del Estado de Baja California, Municipales de los Ayuntamientos de los cinco Municipios del Estado de Baja California y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, ya que los establece tan solo para el periodo

SIN TEXTO



PR
TEF
JICI
TLU



PODER JUDICIAL DE LA F
SUPREMA CONE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL D
SECCIÓN DE TRAMITE DE COM
CONSTITUCIONALES Y DE AL
INCONSTITUCIONAL

del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021; con lo cual se afecta gravemente el patrimonio del Municipio y Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California en términos del Artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que resulta insuficiente dicho lapso de tiempo para que se lleven a cabo, se continúen y concluyan los proyectos y planes de desarrollo del mismo; lo que desde luego afectará gravemente su economía, impidiéndole acrecentar su patrimonio en beneficio del propio Ayuntamiento; además de que con ello se verá beneficiada la sociedad de **TECATE**, Baja California.

Por lo antes expuesto y fundado, A Usted C. Juez, atentamente pedimos:

Primero. Tenernos por presentados en representación del Ayuntamiento de **TECATE**, Baja California demandando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad señalada como responsable.

Segundo. Admitir a trámite la demanda de garantías, y mandar formar los cuadernos de suspensión por duplicado, solicitando a la autoridad señalada responsable su informes justificado y previo, respectivamente, dándole la intervención que corresponda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que manifieste lo que a su representación Social compete y señalar día y hora para que tengan verificativo las audiencias constitucionales e incidental.

Tercero. Conceder la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva para los efectos que se han precisado, expidiendo a nuestra costa copia certificada por duplicado del auto en que se conceda la primera y de la resolución en que se otorgue la segunda.

Cuarto. En su oportunidad conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos que se han precisado.

TECATE, Baja California, en la fecha de presentación.

PROTESTAMOS A USTED MIS RESPETOS



NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ,
Presidente Municipal de TECATE, B.C.



GERARDO SOSA MINAKATA
Síndico Procurador de TECATE, B.C.

SIN TEXTO



DO PRIMI
MATERIA
DE JUICIO:
TIJUA



ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA

**XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.****SESIÓN DE CABILDO
NÚMERO 01 SOLEMNE.**

En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las diecisiete horas con treinta minutos (17:30) del día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se dio inicio a la Sesión Solemne de Cabildo Número 01 del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, en el inmueble identificado como Salón Los Peregrinos, ubicado en el interior del Centro de Convenciones ASAO, con domicilio en Calle Rio Yaqui, número 798 de la Colonia Esteban Cantú de esta Municipalidad, declarado Recinto Oficial Temporal del Gobierno Municipal, mediante la cual se lleva a cabo la DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DEL HONORABLE XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 34, 35 y 36 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y los respectivos 29 y 30 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tecate, Baja California; encontrándose presentes los Regidores PRIKZIA IBETH FLORES MARTÍNEZ, OTTO MAGNO LEAÑO MENDOZA, DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ORTEGA, JUVENTINO RIVERA LÓPEZ, DANIELA CABALLERO GARCIGLIA, JACINTA RAQUEL QUINTERO ARMENTA, JESÚS ALFONSO ARÁMBURO ZATARAIN, JUDITH ARMENTA CRUZ, OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA, PATRICIA GUADALUPE DE LEÓN RAMOS, el Síndico Procurador GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA y la Presidente Municipal NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ; firmando lista de asistencia y estando presentes los doce miembros del Cabildo, se declaró la existencia de Quórum Legal; Acto seguido, la ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL, decretó legal y formalmente iniciada la presente Sesión de Cabildo. -----

IO DE DIS
DE AMPAR
FEDERAL
A. B. C.



BOLE DE
DE AYUNTAMIENTO
FEDERALES

A. B. C.

SECRETARÍA
CO

2.- En atención al Segundo Punto del Orden del día, la PRESIDENTE MUNICIPAL, pide al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO de lectura al Orden del día propuesto, leída que fue, se integra como apéndice de la presente Acta; La PRESIDENTE MUNICIPAL, abre el espacio para enmiendas, no existiendo comentarios al respecto, la ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL instruye al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO a efecto de que se someta a votación nominal el Orden del día propuesto, recabándose al efecto, la siguiente votación: -----

REGIDORA PRIKZIA IBETH FLORES MARTÍNEZ	A favor
REGIDOR OTTO MAGNO LEAÑO MENDOZA	A favor
REGIDORA DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ORTEGA	A favor
REGIDORA JUVENTINO RIVERA LÓPEZ	A favor
REGIDOR DANIELA CABALLERO GARCIGLIA	A favor
REGIDOR JACINTA RAQUEL QUINTERO ARMENTA	A favor
REGIDOR JESÚS ALFONSO ARÁMBURO ZATARAIN	A favor
REGIDORA JUDITH ARMENTA CRUZ	A favor
REGIDOR OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA	A favor
REGIDOR PATRICIA GUADALUPE DE LEÓN RAMOS	A favor
SÍNDICO PROCURADOR GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA	A favor
PRESIDENTE MUNICIPAL NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ	A favor

Por lo que emitiéndose doce votos a favor, ninguno en contra, se aprueba por unanimidad el Orden del día propuesta, para quedar como sigue: -----

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. -----

2.- Lectura del Orden del día propuesta, para su aprobación o enmienda. -----

3.- Rendición de la Protesta Legal de los integrantes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Baja California ante la representación del Honorable Congreso del Estado y la comunidad, conforme a lo previsto en el artículo 36, fracción II, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California. -----

4.- Declaratoria de Instalación Legal del Honorable XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California por la C. NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ, Presidente Municipal. -----

5.- Mensaje de inauguración de actividades del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, por la ciudadana Presidente Municipal. -----

6.- Citación a Sesión de Cabildo de carácter Extraordinaria número 02, para celebrarse el día jueves primero de Diciembre de dos mil dieciséis, a las cero horas con un minuto (00:01), en Sala de Cabildo "Benito Juárez García", Recinto Oficial Permanente del Gobierno Municipal, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, 29 y 30, del Reglamento Interior del Ayuntamiento

Patricia I. de León

de Tecate, Baja California.

7.- Clausura de la Sesión.

3.- En desahogo del Tercer Punto de la Orden del día, referente a Rendición de la Protesta Legal de los integrantes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Baja California ante la representación del Honorable Congreso del Estado y la comunidad, conforme a lo previsto en el artículo 36, fracción II, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California; Se ponen de pie los integrantes de Cabildo, colocándose la ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL manifestando: "PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA U OTRA EMANEN, LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL ENCARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE EL PUEBLO DE TECATE ME HA CONFERIDO, PROCURANDO SIEMPRE POR EL BIEN Y PROGRESO DE NUESTRO MUNICIPIO, Y SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO TECATENSE ME LO DEMANDE"; Acto seguido el Diputado Presidente del Honorable Congreso del Estado de Baja California, da lectura al Bando Solemne emitido por la XXII Legislatura, siendo este:

**BANDO SOLEMNE
PARA DAR A CONÓCER LA DECLARACIÓN DE MUNÍCIPES
ELECTOS HECHA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA.**

PRIMERO.- El Instituto Estatal de Baja California, declara la validez de la elección de Muncípales por el Ayuntamiento de Tecate, celebrada el 5 de junio de dos mil dieciséis en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

SEGUNDO.- De acuerdo con el computo de la elección y conforme a la "Constancia de Mayoría" la planilla que obtuvo el mayor número de votos en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tecate, así como de las "Constancias de Asignación de Regidores por el Principio de Representación Proporcional", documentación recibida en Oficialía de Partes del Congreso del Estado el 20 de junio y 7 de noviembre de la presente anualidad, respectivamente, los siguientes ciudadanos, se declaran electos para ser miembros del Ayuntamiento de Tecate para el periodo comprendido del 1 de diciembre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2019:

NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO

CARMEN YOLANDA CASTRO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA
SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO

ZAYD ZECKUA CONDE
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE

FRIKZIA IBETH FLORES MARTÍNEZ
REGIDOR PROPIETARIO

MIRIAN VÁZQUEZ ESCÁLERA
REGIDOR SUPLENTE

OTTO MAGNO LEANO MENDOZA
REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ ARTURO OLMOS ROBLES
REGIDOR SUPLENTE

DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ORTEGA
REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ
REGIDOR SUPLENTE

JUVENTINO RIVERA LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

JULIO RENÉ CONTRERAS CAMPOS

Periódico Oficial

del Estado de Baja California

Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Baja California



Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado

Loreto Quintero Quintero
Director

Autorizado como correspondencia de segunda clase por
la Dirección General de Correos el 25 de Marzo de 1958.

Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho
de publicarse en este periódico.

Tomo CXXIII Mexicali, Baja California, 30 de noviembre de 2016. No. 53

Índice

RO DE DE
DE ANPA
FEDORA

PODER LEGISLATIVO ESTATAL

H. XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA mediante el
cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido
del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **3**

BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA mediante el
cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido
del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **8**

BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA mediante el
cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido
del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **13**

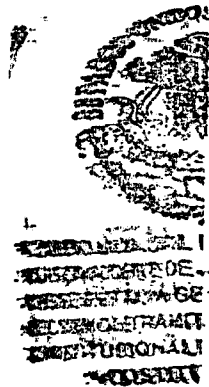
BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA mediante el
cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo Constitucional comprendido
del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del año 2019..... **18**

BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA mediante el cual se hace saber la integración de los mismos, para el periodo
Constitucional comprendido del día 1 de Diciembre del año 2016 al 30 de Septiembre del
año 2019..... **22**



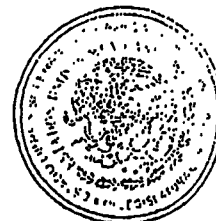
JUZGADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIOS
TJUNA

2014-10-14



**XXII LEGISLATURA**

El Poder Ciudadano



A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, SE LES HACE SABER QUE LA HONORABLE XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 36 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXPIDE EL SIGUIENTE:

OFICIO DE
DE AMPARO
FEDERALES
B.C.

**BANDO SOLEMNE
PARA DAR A CONOCER LA DECLARACIÓN DE MUNÍCIPIES
ELECTOS HECHA POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA**

OFICIO DE
DE AMPARO
FEDERALES
B.C.

PRIMERO.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California, declara la validez de la elección de Municipales por el Ayuntamiento de Tecate, celebrada el 5 de junio de dos mil dieciséis en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016.

SEGUNDO.- De acuerdo con el cómputo de la elección y conforme a la "Constancia de Mayoría" a la planilla que obtuvo el mayor número de votos en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tecate, así como de las "Constancias de Asignación de Regidores por el Principio de Representación Proporcional", documentación recibida en Oficialía de Partes del Congreso del Estado el 20 de junio y 7 de noviembre de la presente anualidad, respectivamente, los siguientes ciudadanos se declaran electos para ser miembros del Ayuntamiento de Tecate para el período comprendido del 1 de diciembre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2019:

**XXII LEGISLATURA***El Poder Ciudadano*

NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO

CARMEN YOLANDA CASTRO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA
SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO

ZAYD ZECKUA CONDE
SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE

FRIKZIA IBETH FLORES MARTÍNEZ
REGIDOR PROPIETARIO

MIRIAN VÁZQUEZ ESCALERA
REGIDOR SUPLENTE

OTTO MAGNO LEAÑO MENDOZA
REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ ARTURO OLMOS ROBLES
REGIDOR SUPLENTE

DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ORTEGA
REGIDOR PROPIETARIO

MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ
REGIDOR SUPLENTE

JUVENTINO RIVERA LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

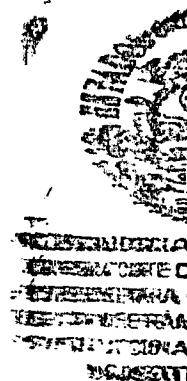
JULIO RENÉ CONTRERAS CAMPOS
REGIDOR SUPLENTE



PRIMER
MATERIA L
JUICIOS F
TIJUANA



PRIMER
MATERIA L
Y DE JUICIO
TIJUANA





XXII LEGISLATURA
El Poder Ciudadano



000003

DANIELA CABALLERO GARCIGLIA
REGIDOR PROPIETARIO

ABIGAIL LARA ACOSTA
REGIDOR SUPLENTE

JACINTA RAQUEL QUINTERO ARMENTA
REGIDOR PROPIETARIO

DALIA MARÍA SUÁREZ GÓMEZ
REGIDOR SUPLENTE

JESÚS ALFONSO ARAMBURO ZATARAÍN
REGIDOR PROPIETARIO

GABRIEL ALVA CISNEROS
REGIDOR SUPLENTE

JUDITH ARMENTA CRUZ
REGIDOR PROPIETARIO

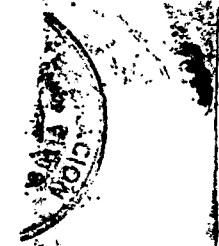
MARINA ESMERALDA BERBER CALDERÓN
REGIDOR SUPLENTE

OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
REGIDOR PROPIETARIO

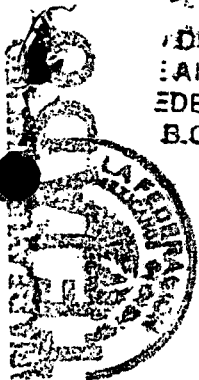
MARÍA HORTENCIA CASTILLO RICO
REGIDOR SUPLENTE

PATRICIA GUADALUPE DE LEÓN RAMOS
REGIDOR PROPIETARIO

ROSA ERICA HERNÁNDEZ TALAMANTE
REGIDOR SUPLENTE



DE DE TRI
AMPARO
EDERALES
B.C.



DE DIST
DE AMPARO
EDERALES
A.B.C.



DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
E DE CONTRAVEN
ES Y DE ACCIÓN
IGIONALIDAD

**XXII LEGISLATURA**

El Poder Ciudadano

TERCERO.- De conformidad con la declaración hecha por el Instituto Estatual Electoral de Baja California, los Municipales electos reúnen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Local y el Código Electoral.

CUARTO.- Se cita a los Municipales que resultaron electos para integrar el XXII Ayuntamiento del Municipio de Tecate, Baja California, a presentarse el día 30 de noviembre del 2016 a la hora y lugar donde se declare Recinto Oficial Municipal, de conformidad a la Convocatoria que emita el Ayuntamiento saliente, a efecto de protestar el fiel ejercicio de sus cargos, en Sesión Solemne.

QUINTO.- Remítase el presente Bando Solemne al Titular del Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEXTO.- Publíquese el presente Bando Solemne en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet del Congreso del Estado.

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 29 de noviembre de 2016.

Por la Mesa Directiva


DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO
Presidente

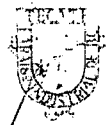



DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN
Prosecretaria



TECATE

XXII AYUNTAMIENTO



EN LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS
CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA 21 DE
FEBRERO DE 2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47
FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA
CALIFORNIA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA,-----
DE D-----
E AMPAR-----
EDERAL-----
B.C.-----

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, CONSISTENTE EN TRES (03)
HOJAS ÚTILES, DOS ESCRITAS POR LOS DOS LADOS Y UNA
POR UNO SOLO, TOMADO DEL EJEMPLAR DEL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA No. 53, TOMO
CXXIII, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE OBRA EN
EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DEL XXII AYUNTAMIENTO DE
TECATE, B. C. (RELATIVO A BANDO SOLEMNE DEL MUNICIPIO
DE TECATE, BAJA CALIFORNIA), SITUACIÓN QUE SE
CERTIFICA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.---

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA

LIC. MAGDALENO MONTIEL BLANCAS

EL LA FEDE. ACION
STICIA DE L. NACION
ERAL DE A. UTE
DE CONSTAT
DE ACCION
ONALIDAD

SIN TEXTO



PRIMI
ATERIA
JUICIOS
TIJUA



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
REGION DE TRAFICO DE
CONSTITUCIONALES DE
CONSTITUCION

30
248

REGIDOR SUPLENTE

DANIELA CABALLERO GARCIGLIA
REGIDOR PROPIETARIOABIGAIL LARA AGOSTA
REGIDOR SUPLENTEJACINTA RAQUEL QUINTERO ARMENTA
REGIDOR PROPIETARIODALIA MARÍA SUÁREZ GÓMEZ
REGIDOR SUPLENTEJESÚS ALFONSO ARAMBURO ZATARAÍN
REGIDOR PROPIETARIOGABRIEL ALVA CISNEROS
REGIDOR SUPLENTEJUDITH ARMENTA CRUZ
REGIDOR PROPIETARIOMARINA ESMERALDA BERBER CALDERÓN
REGIDOR SUPLENTEOLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
REGIDOR PROPIETARIOMARÍA HORTENCIA CASTILLO RICO
REGIDOR SUPLENTEPATRICIA GUADALUPE DE LEON RAMOS
REGIDOR PROPIETARIOROSA ERICA HERNÁNDEZ TALAMANTE
REGIDOR SUPLENTE

TERCERO.- De conformidad con la declaración hecha por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, los Municipales electos reúnen los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución Local y la Ley Electoral.

CUARTO.- Se cita a los Municipales que resultaron electos para integrar el XXII Ayuntamiento del Municipio de Tecate, Baja California, a presentarse el día 30 de noviembre del 2016 a la hora y lugar donde se declare Recinto Oficial Municipal, de conformidad a la Convocatoria que emita el Ayuntamiento saliente, a efecto de protestar el fiel ejercicio de sus cargos, en Sesión Solemne.

QUINTO.- Remítase el presente Bando Solemne al Titular del Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEXTO.- Publíquese el presente Bando Solemne en la Gaceta Parlamentaria y en el portal de internet del Congreso del Estado.

Finalizando lo anterior, la Ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL toma la protesta de ley a los miembros del Honorable Cabildo del Vigésimo Segundo Ayuntamiento de Tecate, Baja California; La ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL, manifiesta: SÍNDICO PROCURADOR, REGIDORAS Y REGIDORES, ¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE UNA U OTRA EMANEN, LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL ENCARGO DE SÍNDICO PROCURADOR Y REGIDORES QUE EL PUEBLO DE TECATE LES HA CONFERIDO, PROCURANDO SIEMPRE POR EL BIEN Y EL PROGRESO DE NUESTRO MUNICIPIO?, a lo que el Síndico Procurador, Regidoras y Regidores contestan: SI PROTESTO; continua la ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL: si no lo hicieren así, que el pueblo Tecatense se los demande. MUCHAS FELICIDADES; ¡MUCHAS FELICIDADES! ---

4.- En atención al Cuarto Punto de la Orden del Día, relativo a Declaratoria de Instalación Legal del Honorable XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California por la C. NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ, Presidente Municipal; la ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL manifiesta: "QUEDA LEGÍTIMAMENTE INSTALADO EL VIGÉSIMO SEGUNDO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, QUE DEBERÁ FUNCIONAR DURANTE EL



PERÍODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016";

5.- En atención al Quinto Punto de la Orden del día, referente a Mensaje de Inauguración de actividades del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, por la ciudadana Presidente Municipal; la Ciudadana Presidente Municipal dirigiéndose a la ciudadanía Tecatense expone: "...Ciudadano Gobernador Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Diputado Raúl Castañeda Pomposo, Presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura del Estado. Magistrado Jorge Armando Vázquez, Presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Amigos y amigas que hoy nos acompañan. Agradezco su presencia en esta sesión pública y solemne, en la cual he asumido uno de los retos más importantes de mi vida personal y profesional, ser la primera Alcaldesa de nuestro adorado Tecate. Hoy asumo esta distinción, con profundo agradecimiento, emoción política y conciencia plena de la responsabilidad que significa para mí, ocuparme de la administración municipal, con el apoyo de las personas que me acompañan. Mi reto y el compromiso que asumo, con mis compañeras y compañeros del Cabildo es actuar como esperan los ciudadanos, trabajar en la atención de sus necesidades, gobernar con pluralidad y con limpieza total en la rendición de cuentas. Tengo la certeza de sacar adelante esta encomienda de gobernanza, en la que impulsare el potencial de Tecate. Apoyada en el trabajo de las Comisiones de Cabildo, con las y los regidores, atenderemos los distintos sectores del municipio. Por eso, invité a los ciudadanos a que acudan y se apoyen en sus representantes del Ayuntamiento. Estoy segura de que en ellos siempre encontrarán una buena disposición para atenderlos y resolverlos lo que les planteen. Tecate merece más de cada uno de nosotros, por eso los convino a trabajar unidos como cuerpo edilicio, construyendo y dando cumplimiento a todas y cada una de las responsabilidades adquiridas. Hoy es el tiempo de gobernar para todos y con todos, ¡Cuenten conmigo porque yo estoy segura, que cuento con ustedes!. A mis amigos ex presidentes, los invito a seguir colaborando con su valiosa experiencia, trabajando de la mano con mi gobierno, en el fortalecimiento de nuestro municipio, hasta lograr que Tecate sea el mejor lugar para vivir en nuestro estado. Sr. Gobernador, agradezco el apoyo que desde el inicio de su gestión ha dado a nuestro municipio, principalmente en los temas de Pueblo Mágico, Infraestructura y desarrollo social. A manera personal, le agradezco el cariño y respeto demostrado a lo largo de su gobierno para nuestra ciudad. Le reitero mi compromiso solidario, para que juntos hagamos realidad los proyectos que necesitamos. ¡Para qué en Tecate nos vaya bien, contamos con usted Señor Gobernador!. Estoy convencida de que Tecate puede transformarse y mejorar, a partir de un modelo colectivo de ciudad aplicable a todo el municipio. Este modelo al que he denominado **Tecate Innovador y Sustentable** parte de una visión concreta, motivadora, posible de materializar y de evaluar en sus avances y se apoya en seis ejes **ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE, EFICIENTE Y CAPAZ, SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO SALUDABLE, TECATE PUEBLO MÁGICO INNOVADOR Y SUSTENTABLE, TECATE MERECE MÁS, AMIGA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD**. Para que este Modelo detone se necesita la participación ciudadana, el establecimiento de alianzas estratégicas y la planeación apoyada siempre en una administración gubernamental responsable, eficiente y capaz de dar resultados medibles. Por eso, en primer término, he elegido de manera acuciosa a cada una de las personas que integrarán mi equipo de trabajo, tomando en consideración su experiencia en la administración pública, su capacidad profesional y sobre todo, su honestidad. Con el trabajo de esta gente, asumo el compromiso de combatir la ineficiencia, mejorar la calidad de los servicios y lograr que la rendición de cuentas se realice con limpieza y oportunidad. No puedo negar que la administración que recibimos, no es en las mejores condiciones económicas que quisiéramos, la deuda pública arrastrada a través de las distintas administraciones por falta de liquidez y los compromisos crediticios adquiridos, han crecido al igual que la desconfianza ciudadana en las instituciones. ¡Enfrentarlo no me asusta!, estoy convencida de que el saneamiento de las finanzas públicas es un compromiso inaplazable, actuare como corresponde y esperaré los ciudadanos, con disciplina presupuestal y austeridad en el gasto, no pretendo buscar culpables, pero tampoco solapare los desvíos y las ineficiencias de otros. Porque a pesar de todo la sociedad Tecatense, mantiene la esperanza de que las cosas habrán de ser diferentes para bien, ¡nos preocupa la seguridad!. Por eso, comprometo a que voy a rectificar el rumbo de la seguridad pública en nuestra ciudad, reordenando con seriedad y profesionalismo la atención ciudadana, la calidad en el servicio y las tareas de inteligencia. Para lograrlo, he establecido un programa diseñado y estructurado sobre tres ejes fundamentales: **Participación Ciudadana y Prevención del Delito; Operación Policial; Gabinete de seguridad Ciudadana**. Con estos tres ejes, implementare un enfoque de seguridad ciudadana que vincule la participación preventiva de la comunidad, con la profesionalización del personal operativo. Habremos de reordenar la actividad, para que la nueva policía de proximidad vecinal, apoye a la inteligencia policiaca, permitiendo así que la de reacción, actúe con acciones efectivas y contundentes. En este nuevo esquema, habrán de participar un gabinete de funcionarios de la administración municipal, que atiendan y resuelvan en forma inmediata, los asuntos que incidan en las distintas áreas que afectan la seguridad de nuestra comunidad. El problema de las adicciones, se relaciona con la violencia y la delincuencia, por eso estoy empeñada en enfrentarlo, a través de un programa que provea de atención y seguimiento psicológico, que no solo involucre al enfermo, sino también a su familia. Con el apoyo de la señora Brenda Ruacho de Vega a quien agradezco su presencia, el DIF municipal tendrá un papel primordial en la atención de la salud de los sectores más vulnerables, ampliaremos la cobertura de desayunos escolares y los programas de prevención y promoción de la salud. Con ello gestionare y ampliare la red de comunidades saludables, apoyando su evolución hacia comunidades sustentables. Aprovechare la infraestructura existente para crear Centros de Activación Comunitaria, para que los vecinos se apropien de estos espacios, para su convivencia social y familiar. El río que es la columna vertebral de nuestra ciudad, se integrara a estos espacios, rescatándolo y respetando su función, para habilitarlo de manera segura en beneficio



de la gente, ¡Este es un compromiso de mi gobierno!, Creare una nueva ruta ecoturística que combine el conocimiento la aventura y el encuentro con la naturaleza a la que he denominado Ruta del Viento, que además de detonar la economía de la zona Este del municipio, reafirmara nuestra vocación de Pueblo Mágico. Los espacios culturales existentes se han visto complementados con la construcción del Teatro de la Ciudad, un nuevo icono de Tecate, con el cual impulsare como nunca antes visto el desarrollo de la cultura, para que junto con los eventos artísticos de gran magnitud de la Ruta del Viento, habrán de ubicar a Tecate como un auténtico centro cultural del estado. A lo largo de mi vida he fincado mi conducta en el cumplimiento de mi palabra, soy congruente con lo que digo y lo que hago, respeto la pluralidad de las ideas y la armonía política, sé que los logros se alcanzan trabajando con humildad y honestidad, por eso te aseguro ciudadano, que sabré responder de manera positiva a la expectativa que tienes de mi gobierno." -----

6.- En atención al Sexto Punto de la Orden del día, referente a Citación a Sesión de Cabildo de carácter Extraordinaria número 02, para celebrarse el día jueves primero de Diciembre de dos mil dieciséis, a las cero horas con un minuto (00:01), en Sala de Cabildo "Benito Juárez García", Recinto Oficial Permanente del Gobierno Municipal, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, 29 y 30, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tecate, Baja California; no existiendo comentarios al respecto, la ciudadana PRESIDENTE MUNICIPAL instruye al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO pase al siguiente punto del orden del día; -----

7.- En atención al Séptimo Punto del orden del día, siendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos (18:32) la PRESIDENTE MUNICIPAL, decreta clausurada la Sesión Solemne de Cabildo número 01 del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California. -----


PRESIDENTE MUNICIPAL.
NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ.


SÍNDICO PROCURADOR.
GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA.



REGIDORA.
ERIKZIA IBETH FLORES MARTÍNEZ.


REGIDOR.
OTTO MAGNO LEÑO MENDOZA.


REGIDORA.
DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ORTEGA.


REGIDOR.
JUVENTINO RIVERA LÓPEZ.


REGIDORA.
DANIELA CABALLERO GARCIGLIA


REGIDORA.
JACINTA RAQUEL QUINTERO ARMENTA.


REGIDOR.
JESÚS ALFONSO ARÁMBURO ZATARAIN.


REGIDORA.
JUDITH ARMENTA CRUZ.


REGIDORA.
OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA.


REGIDORA.
PATRICIA GUADALUPE DE LEÓN RAMOS


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
LIC. LUIS FERNANDO DE LA TORRE CASTAÑEDA

Acta de Cabildo No. 01 Consta de tres hojas,
dos de ellas escritas por ambos lados, y una
por un solo lado.

SIN TEXTO

SIN TEXTO



GRADO PRIMARIO
EN MATERIA
DE JUICIOS
TIJUAN



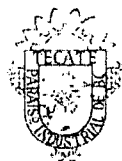
GRADO PRIMARIO
EN MATERIA
Y DE JUICIOS
TIJUAN



GRADO PRIMARIO
EN MATERIA
Y DE JUICIOS
TIJUAN

TECATE

XXII AYUNTAMIENTO



EN LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA,-----

RO DE -----
DE AMPLIO -----
FEDERALES -----
A. B. C. -----

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, CONSISTENTE EN TRES (03) FOJAS ÚTILES, DOS ESCRITAS POR LOS DOS LADOS Y UNA POR UNO SOLO, CORRESPONDE CON EL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, B. C., (RELATIVO AL ACTA DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO NUMERO 01 DEL XXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE BAJA CALIFORNIA, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016), SITUACIÓN QUE SE CERTIFICA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.-----

IO DE DIST -----
DE AMPLIO -----
FEDERALES -----
B. C. -----



L DE LA FEDERACIÓN
E JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ASUNTOS
ITE DE CONTROVERSIAS
LES Y DE ACCIONES
TUCIONALIDAD

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA

LIC. MAGDALENO MONTIEL BLANCAS

SIN TEXTO



JUZGADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO
TUVA



SECRETARIA DE L
INTERIOR JUST
SECRETARIA GENER
DE TRAMITE DE
EXCEPCIONES Y
RECURSOS

013308



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECATE, B. C.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, B. C.F.A.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECATE, BAJA CALIFORNIA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 82 A. FRACC. II INCISO a DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON LA FRACC. II DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, HA TENIDO A BIEN NOMBRAR A:

LIC. FRANCISCO JAVIER PALACIO MANJARREZ

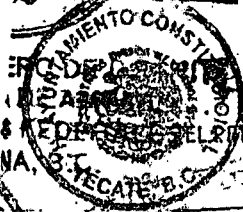
CON CARÁCTER DE EMPLEADO: **CONFIANZA**

CON PUESTO DE: **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

ADSCRITO A: **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

CON EL SUELDO QUE FIJA A DICHO EMPLEO LA PARTIDA RESPECTIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE.

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 01 DE DICIEMBRE DEL 2013.



EDICIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. CESAR RAFAEL MORENO GONZALEZ DE CASTILLO

FIRMA DEL NOMBRADO

[Firma manuscrita]
LIC. FRANCISCO JAVIER PALACIO MANJARREZ

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma manuscrita]
LIC. FRANCISCO JAVIER PALACIO MANJARREZ

ERÓ DE LIT. T.
DE AMPARO
S FEDERALES
IA, B.C.

AL ACEPTAR EL PUESTO A QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO, PROTESTÓ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL VIGENTE Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLA EMANEN.

TOMA DE POSESIÓN

EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE EN DICHA FECHA Y PREVIA PROTESTA DE LEY TOMÓ POSESIÓN DEL PUESTO A QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO LA PERSONA A CUYO FAVOR FUE EXPEDIDO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma manuscrita]
LIC. FRANCISCO JAVIER PALACIO MANJARREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECATE, B.C. MEX.

DESPACHADO
DEC 04 2013
DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

C. Oficialía Mayor
C. Tesorería Municipal
C. Oficina Adscripción del Empleado
C. Archivo

SIN TEXTO



ADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO
TUJA



INTERJUDICIAL
EXERCISE DE
CIRCUITO DE
ESTADOS UNIDOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA



LEGISLATURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Recibo unidos
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
TECATE, B.C. 2014

AUG 05 2014

RECIBO

10:02 am

49 Area X

DEPENDENCIA: CONGRESO DEL ESTADO

SECCION: PRESIDENCIA

OFICIO No.

EXPEDIENTES: 002224

34
252
34

ASUNTO: Informe para su opinión Dictamen No. 1 de la Comisión de Reforma del Estado; así como sus correspondientes.

ING. CESAR RAFAEL ANDRENO GONZALEZ DE CASTILLO

Presidente del Comité de Reforma del Estado

AUG 11 2014
11:15 am

Por este conducto, y para los efectos constitucionales establecidos en el Artículo 111 de la Constitución Política de nuestro Estado, nos permitimos remitir, copia debidamente certificada del Dictamen No. 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia Política-Electoral; de igual manera se anexa la certificación de la reserva presentada y del acta de la Sesión celebrada el día 10 de julio del año 2014, en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia.

agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y

TERO DE DIST.
DE AMPARO
IS FEDERALES
INA, B.C.

ATENTAMENTE
Mexicali, B.C., 07 de agosto de 2014
Por la Mesa Directiva

CONSTITUCION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

10/07/2014

P. FELIPE JESUS MAYORAL MAYORAL
PRESIDENTE

DIP. GERARDO ALVAREZ HERNANDEZ
SECRETARIO

Cep. Dip. Fausto Gallardo García - Presidente de la Comisión de Reforma del Estado.
Cep. Lic. César Daniel González Solís - Secretario de Servicios Parlamentarios de la H. Legislatura

Presidencia Legislativa del Estado de Baja California
Paseo de la Libertad s/n. Zona Centro, Mexicali, B.C. 22500
Tel. 01 (612) 254-2000 - 254-2001 y 254-2002



RECIBO

AUG 10 2014

FAUSTO GALLARDO GARCIA
DIPUTADO

SIN TEXTO



PLAZADO PRIM
EN MATERIA
DE JUICIO
TJUAL



SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO
SECRETARÍA DE INTERIO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SECRETARÍA DE CULTURA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD Se ha deshabilitado la inclusión automática de los vínculos

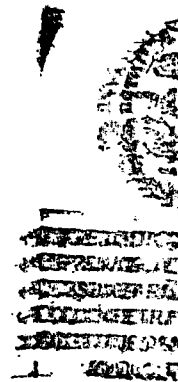
Habrá que contenido

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ELTS	SARMIENTO GUEVARA,										
115	1926 PATRICIA ARRAZO VILLEGAS SUVA		OFICINA DE PRESIDENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/SECCION		GUARDERIA SIN		40511 BNS	N02	\$	8,968.20
116	1927 ELENA ANDRADE MACAZANI,		OFICINA DE PRESIDENCIA	INTENDENTE		S/SECCION	IMDTE	40315 BNS	N01	\$	8,883.60
117	1730 REFUGIO MONTIELANO MERCADO.		OFICINA DE PRESIDENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/SECCION		DIF		40056 BNS	N02	\$	8,968.20
118	1921 SILVIA ELIANA		OFICINA DE PRESIDENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/SECCION		INADTE		40066 BNS	N02	\$	8,968.20
119	1928 DIMAS MARTINEZ JOSEFINA		OFICINA DE PRESIDENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/SECCION		TENCARROCA		39785 BNS	N02	\$	8,968.20
20											
21											
22											
23	1094 FRAJO LINO JUAN CARLOS		OFICINA DE PRESIDENCIA	CHOFER		S/SECCION		41609 C	N51	\$	7,999.80
24	1964 MARTHA RUAN MARTIN		OFICINA DE PRESIDENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/SECCION				41609 C	N51	\$	5,672.40
25	YARGAS GARCIA MARIA DEL REFUGIO		OFICINA DE PRESIDENCIA	INTENDENTE		S/SECCION		41609 C	N51	\$	4,991.70
26	LOPEZ MONTUZZANA TORRES, LUIS IGNACIO		OFICINA DE PRESIDENCIA	PERSON		S/SECCION		41609 C	N51	\$	9,825.90
27	RONERO MONTEVEDE, LUVIS		OFICINA DE PRESIDENCIA	JEFE ADJ. ASISTIVO		S/SECCION		40513 C	N51	\$	9,825.90
28	COTA MUÑOZ, ROMARI CESAR RAFAEL MORENO		OFICINA DE PRESIDENCIA	ASISTENTE		S/SECTION		41609 C	N51	\$	7,659.90
29	GONZALEZ DE CASTILLA		OFICINA DE PRESIDENCIA	PRESIDENTE MUNICIPAL					N15		

SIN TEXTO



ALZADO PRIMERO
EN MATERIA
DE JUICIOS
TIJUAN





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

0082

FORMA B

254

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; principio el cual implica que la autoridad de amparo no puede actuar de forma oficiosa, sino que requiere que una persona acuda ante ella y solicite la declaración de inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad que estime ha violado sus derechos fundamentales, de tal manera, que si no existe una persona que promueva la acción constitucional de amparo, éste no podrá iniciarse.

Ahora en el caso, quien promovió el juicio de amparo en que se actúa lo fue **Mirna Cecilia Rincón Vargas**, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, y la prevención que se le formuló lo fue para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 fracción I, segunda párrafo de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación con el diverso 128 fracción II, última parte del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, acordara que por acuerdo del Ayuntamiento se le otorgó la representación jurídica para actuar en su defensa en un contradictorio de esta naturaleza, ello, en virtud de que a su escrito inicial de demanda, no adjuntó documento alguno del que se desprendera tal situación.

En esa medida, es evidente que al tratarse de un acto jurídico personalísimo, corresponde sólo a la persona que expresó su voluntad al suscribir la demanda de amparo de origen, en este caso **Mirna Cecilia Rincón Vargas**, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, el desahogo de la prevención de que fue objeto por acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, pues es esta quien promovió la acción

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa...

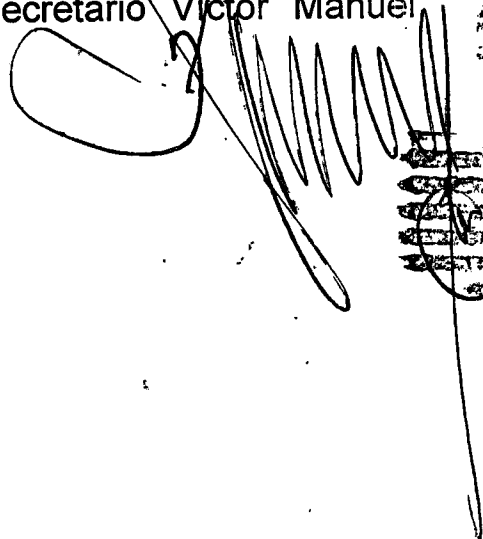
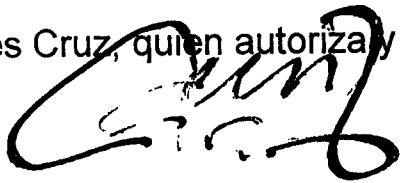
3 245200 530022

constitucional en representación del Ayuntamiento agraviado y no el promovente; pues es un hecho que éste no puede hacer suya la demanda, porque no puede apropiarse de la expresión de voluntad de una persona distinta.

En consecuencia, hágase saber a **Mirna Cecilia Rincón Vargas**, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que **subsiste en sus términos la prevención mencionada.**

Notifíquese personalmente.

Así lo proveyó y firma el **Juez Brando Arturo González Ramírez**, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Manuel Avilés Cruz, quien autoriza y da fe.



SECRETARÍA
JUDICIAL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES
VÍCTOR MANUEL AVILÉS CRUZ



5454

0083

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 367/2019-VII
QUEJOSO: AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

9: 42

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS
FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESIDENCIA EN
TIJUANA.

P R E S E N T E.

LIC. KARLA ESPINOZA SALAZAR, con las facultades que me confiere el
artículo 12 de la Ley de Amparo, en representación de la parte quejosa, ante
Usted, C. Juez, respetuosamente comparezco para exponer.

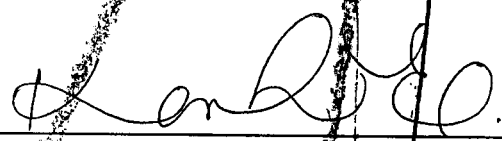
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 y 279 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo
solicito ~~se me expida copia debidamente certificada por duplicado~~ de todas y
cada una de las actuaciones que integran el juicio de amparo indirecto en que
se actúa.

Por lo anteriormente expuesto a Usted, C. Juez Segundo de Distrito en
Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California con
residencia en Tijuana, solicito.

UNICO. Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo del presente
escrito.

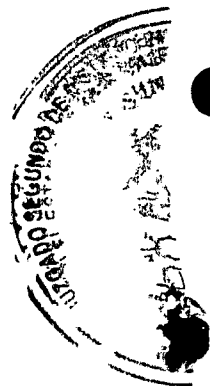
Tijuana, Baja California, a la fecha de su presentación.

PROTESTO LO NECESARIO



LIC. KARLA ESPINOZA SALAZAR





Juicio de amparo 367/2019

Promoción: 5454

En veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con un escrito. Conste.

Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de las constancias que integran el presente expediente a su costa; con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, explíganse las mismas, y entréguese previa constancia que por su recibo se deje agregada en autos.

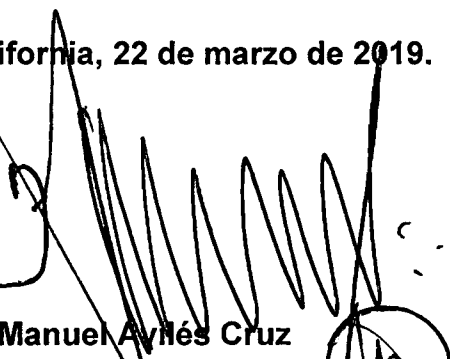
Notifíquese.

Así lo proveo y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Manuel Avilés Cruz, quien autoriza y da fe.

RG

CAL DE LA FEI ERA

12



en Mater
e Baia Cal



REPUBLICA
ESTADO DE
SECRETARIA G
DEPARTAMENTO DE
CONSTITUCIONAL
INSTITUTO

4574
 Juzgado de
 Distrito en Materias
 de Juicio y
 de Juicio Federal

2

SECRETARÍA DE CORRESPONDENCIA
 COMÚN DE LOS JUZGADOS
 DE DISTRITO EN MATERIA

QUEJOSOS: MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

2019 MAR -8 AM 9:00

CALIFORNIA.

7 PM 5:49

en el Estado de
 Baja California
 Ciudad de Tijuana

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO

EMPARGO Y JUICIOS FEDERALES EN
 EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 POR RESIDENCIA EN TIJUANA

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y
 JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
 CON SEDE EN TIJUANA, EN TURNO.
 PRESENTE.

CIERNA CECILIA RINCÓN VARGAS, en mi carácter de PRESIDENTE del
 AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, ante Usted
 respetuosamente comparezco para solicitar:

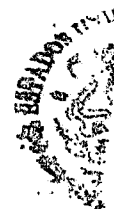
A.- Se me reconozca la personalidad que ostento en mérito a la copia certificada del
 nombramiento respectivo que se acompaña a la presente.

B.- Señalo como domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos el
 ubicado en Misión de San Ignacio 10613, Planta Baja Zona Río, en Tijuana, Baja California.

C.- Autorizando para que oigan y reciban notificaciones a nombre de mi
 representada, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en forma
 indistinta, a los señores licenciados en derecho JUAN GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ,
 JOEL PACHECO GONZÁLEZ, JAVIER AVILÉS BELTRÁN, EZEQUIEL POZOS ZAMORA,
 KARLA ESTINOZA SALAZAR, MARGARITA GARCÍA MATA, RAÚL MAURICIO ATONDO
 ZÁVALA y EDGAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, HIRÁM SÁNCHEZ ZAMORA,
 respectivamente, con Cédulas Profesionales Federales debidamente inscritas y registradas
 ante la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, así como
 en el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del
 Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y autorizando en términos
 simples para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las CC. Carlos Alberto



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRAMITACION
CONSTITUCIONAL
MEXICO

~~0003~~

Cárdenas Serrano, Gabriela Valenzuela Sánchez y Paulina Lizbeth Ruvalcaba Pérez; con el debido respeto comparezco para exponer:

Que con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1º, fracción I, 5, fracción I, 6, 13, 107, fracción I y demás relativos de la Ley de Amparo; a nombre del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, vengo a demandar el **AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL**, en contra de los actos y autoridad que se señala como responsable en los capítulos respectivos.

Previo a dar cumplimiento al artículo 108 de la Ley de Amparo, se procede a continuación a justificar la personalidad del promovente para representar a la parte quejosa: **"MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA"**, en los siguientes términos:

PERSONALIDAD

El artículo 7 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, en la parte que interesa dicen siguiente:

ARTÍCULO 7.- El Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California gozará de personalidad jurídica propia, de conformidad a lo previsto por el Artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Baja California y sus atribuciones se regirán de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 2º, 3º y 18º y demás relativos y aplicables de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California."

Conforme a dichos preceptos legales el **Municipio** es una persona moral que cuenta con personalidad jurídica, cuya representación recae en el **Ayuntamiento**, que es el órgano facultado para dar cumplimiento a sus fines y objetos. Por su parte el **Ayuntamiento**, en ejercicio de tal representación legal del **Municipio**, faculta a su vez al **Presidente Municipal** para que celebren y atiendan en representación del Municipio, los actos jurídicos que se les determinan en reglamentos.

De ante que la que suscribe la presente tengo el cargo de **PRESIDENTE MUNICIPAL** del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**,

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

~~00004~~

y como tal tengo su legal representación y estoy facultada para promover a nombre de éstos la presente demanda de garantías.

LEGITIMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA PARA PROMOVER LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS

El artículo 7 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa dice lo siguiente:

"Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio.

En el caso que nos ocupa, los actos reclamados afectan el patrimonio de la parte quejosa, MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, toda vez que éstos se hacen consistir en: 1).- La ilegal notificación de un oficio al que supuestamente se acompaña un Dictamen emitido por el Congreso del Estado, en el que se propone reformar y adicionar diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y consta además de diecinueve artículos transitorios, con la finalidad de que fueran estudiados, discutidos y votados por el Cabildo del MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, para que dentro del mes siguiente informar el resultado de la votación al referido Congreso, en el entendido de que de no recibir tal informe dentro de ese plazo se presumiría que estaban conformes con dichas reformas, adiciones y artículos transitorios; y, 2).- El Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre del mismo año, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

En efecto, sobre todo el segundo de los actos reclamados afecta el patrimonio de la parte quejosa, toda vez que entre los artículos reformados y adicionados de la Constitución

JUZGAO SEGUNDO DE DEGRADO
DO ESTADO DE BAHIA
ESTADOS



SECRETARIA DE JUSTICIA
EXERCICIO DE TRU
CONSTITUCION
ESTADOS

~~00005~~

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, destaca el Apartado C, del artículo 21, que textualmente dice lo siguiente:

"APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas."

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia."

Como se observa de dicho precepto, en el mismo se establece que en el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes.

Por lo tanto, si en dicho precepto se faculta al Congreso del Estado a aprobar y modificar las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal; es indudable que ello impactará de manera trascendente en el patrimonio del Municipio y del Ayuntamiento de PLAYAS DE ROSARITO, Baja California; motivo por el cual, resultaba indispensable que el Cabildo del Ayuntamiento de dicho Municipio, analizara, discutiera y votara tanto la redacción como el contenido del artículo 21, Apartado "C", intitulado "De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas



SIN TEXTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CALIFORNIA
SECRETARIA DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE
RECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
MODIFICACION



~~00008~~

hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que deberá concederse el Amparo solicitado para el efecto de que se dejen insubsistentes las reformas y adiciones hechas a la Constitución en comento, derivadas del Decreto aludido.

Este Decreto deriva de un proceso legislativo que no cumplió con las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que está precedido de actuaciones viciadas, **si no haberse notificado legalmente a los Ayuntamientos correspondientes a los municipios de Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado**, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que solicitamos se conceda al Ayuntamiento quejoso el Amparo solicitado, para el efecto de que se dejen insubsistentes las Reformas y Adiciones hechas a la Constitución en comento derivadas del Decreto aludido, incluyendo los artículos transitorios.

VI. PROTESTA LEGAL: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON CIERTOS.

cuando

??

Recientemente tuve conocimiento que con fecha 11 de septiembre de 2014, la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, emitió el **Decreto 112**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; lo cual me motivó a verificar el procedimiento llevado a cabo para que fueran aprobadas dichas reformas; y sobre todo, si se habían observado las formalidades esenciales que para ello exige el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que es del tenor siguiente:

SIN - LATION



PODER JUDICIAL
 SUPREMA CORTE DE
 SUBSECRETARIA
 SECCION DE TRANS-
 CONSTITUCIONA
 INACOSTI

~~00006~~

Públicas", contenido en el Dictamen que se adjuntó al oficio dirigido al Presidente Municipal de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California; sin embargo, al no haberse recibido jamás dicho oficio y documentación anexa, se impidió discutirlo en sesión de Cabildo y poder ser votado, provocando con ello que se presumiera que dicho Municipio se encontraba de acuerdo con dicha reforma o adición a la Constitución Local, por el solo hecho de no haber informado el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del mes siguiente al en que supuestamente fue recibido el oficio en comento, conforme al artículo 112 de la misma Constitución; motivo por el cual, se encuentra legitimado el **MUNICIPIO** y el **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, para promover el presente Juicio de Amparo.

COMPETENCIA

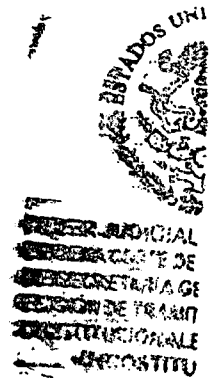
Uno de los actos reclamados lo constituye el Decreto 112 expedido por la H. XXI **LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catóros, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que **tiene su ámbito de aplicación en todo el Estado de Baja California**.

Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, si como se dijo, el Decreto reclamado se pretende ejecutar en el Estado de Baja California, en todos sus Municipios, entre el que se encuentra el de Tijuana; entonces resulta competente este Juzgado de Distrito para conocer de la presente demanda de garantías.

En cumplimiento de los requisitos de la demanda de amparo establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifiesto lo siguiente:

QUEJOSOS: MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, con domicilio arriba señalado.

SIN TEXTO



~~0007~~

II. **TERCERO INTERESADO:** Bajo protesta de decir verdad, ignoramos si a alguien le recaiga tal carácter.

III. **AUTORIDAD RESPONSABLE:** Congreso del Estado de Baja California, con domicilio conocido en la ciudad de Mexicali.

IV.- **ACTOS RECLAMADOS:** De la referida autoridad responsable, se reclaman los siguientes:

- 1) La ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Lic. Silvano Abarca Macklis, Presidente Municipal del H. VI Ayuntamiento de PLAYAS DE ROSARITO Baja, California, respecto del oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayora y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de PLAYAS DE ROSARITO, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones. Por lo que deberá concederse el amparo para que se deje insubsistente dicha notificación y todo lo actuado con posterioridad.
- 2) El Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; por derivar de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se

SIN PLATO

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TI
CONSTITUCIONAL
UNOS

JUZGAU MUNDO DE DISTRIT
EL ESTADO DE BAJA CA
ESTADOS UNIDOS

~~00009~~

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, **se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

Conforme a dicho precepto de la Constitución Local ésta solo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, **debiéndose enviar ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución, siempre y cuando hubiere transcurrido un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata por los Ayuntamientos, sin que éstos remitieran al Congreso del Estado el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.**

SIN TEXTO

ESTADOS UN
SECRETARIA G
CONSTITUCIONAL
MEXICO



~~00010~~

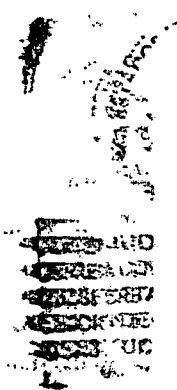
3.- Por tal motivo, la suscrita, en mi calidad de Presidente Municipal del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, me di a la tarea de tratar de localizar el Acta de Sesión de Cabildo en la cual se debió haber discutido la iniciativa de adición o reforma a la Constitución Local debidamente aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, así como las actas de los debates que hubiera provocado el dictamen del Decreto 112 en el que se publicó dicha reforma, de la cual ahora tuve conocimiento.

4.- Sin embargo, después de arduas búsquedas, logré concluir que no existe Acta de Reunión de Cabildo en la cual se hubiese analizado o discutido el Dictamen del Decreto mencionado; es decir, no se llevó a cabo Sesión de Cabildo a fin de discutir la iniciativa de adición o reformas a la Constitución Local, así como las actas de los debates en comento.

5.- En razón de lo anterior, el 01 de marzo de 2019, me entreviste con el Lic. Silvano Abasco Macías, quien desempeñó el cargo de Presidente Municipal del H. VI Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO, Baja California**, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, pues expresamente acudí a buscarlo por tener diversas dudas en relación a la Sesión de Cabildo en la cual debió existir la discusión o aprobación respecto del Decreto mencionado, a lo que me contestó que él no tuvo conocimiento de la iniciativa de adición o reformas a la Constitución Local aprobadas por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, así como las actas de los debates que hubiera provocado el dictamen del Decreto 112, por lo cual nunca dio a los miembros integrantes del Ayuntamiento, a sesión de Cabildo para discutir ese tema, y así estar en aptitud de remitir al Congreso el resultado de la votación respectiva.

6.- Continuando con las investigaciones, logré obtener copias del oficio **002222**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados **FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ**, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el que dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual

SIN TEXTO



se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

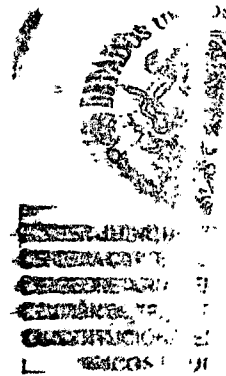
7.- Una vez que tuve en mi poder dichas copias, con fecha 04 de marzo de 2019, me entrevisté nuevamente con el Lic. Silvano Abarca Macklis, cuestionándolo para que manifestara si reconocía haber recibido durante su gestión esas documentales en original, cuyas copias le mostramos, concretamente el día 08 de agosto de 2014, puesto que en el oficio en comento, aparece en el sello con la siguiente leyenda **"AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL"**; y luego de tener a la vista tales copias, respondió que jamás había recibido dicho oficio ni la documentación a la que hace referencia el mismo, ni en la fecha que indica el sello, ni en ninguna otra; agregando que nadie le hizo llegar dicho oficio y documentación que se relaciona en el mismo.

Además, me aclaró que conforme al Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, el único facultado para recibir documentación de esa naturaleza; era Luis Fernando Serrano García, el entonces **Secretario Fedatario**, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 fracción XIII Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

ARTÍCULO 67.- El Secretario Fedatario tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y..."

SIN TEXTO



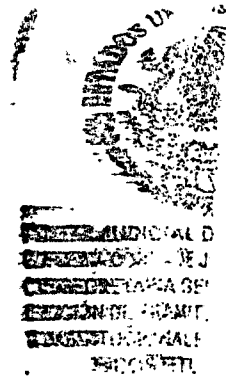
~~0012~~

8.- Por tal motivo, en la misma fecha de 04 de marzo de 2019, procedí a entrevistarme con Luis Fernando Serrano García, quien en el mes de agosto de 2014, se desempeñó como Secretario Fedatario del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, a quien también se le requirió formalmente para que manifestara si en ese mes o en algún otro, recibió el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el cual dice se acompaña copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; respondiendo en sentido negativo; es decir, que nunca había recibido dicho oficio ni tampoco la documentación a que hace referencia el mismo, a pesar de ser él el único que tenía facultades para recibirlo, conforme al artículo 67 fracción XIII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California.

9.- En consecuencia, toda vez que dicho oficio y documentación que se dice fue anexada al mismo, jamás fue recibida por el que fue Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, ni tampoco por el entonces Secretario Fedatario, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, ello motivó que no se discutiera en sesión de Cabildo el Dictamen Número 1, en el que se propone reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Local.

Lo anterior trajo como consecuencia que se tuviera por aprobado en afirmativa ficta dicho dictamen; y por lo tanto, en base a ello se publicó el Decreto 112, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, concretamente en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, y 78, se adicionó el capítulo III al título V, integrándose con el numeral 68 y se adicionaron 19 artículos transitorios; sin que se hubiera cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, pues nunca tuvo conocimiento de la notificación

SIN TEXTO



~~0013~~

respectiva, privando al Ayuntamiento que representamos, de su debida participación en los términos del artículo 112 de la misma Constitución, tal y como se ordena.

10.- En efecto, conforme al texto de la Constitución local, al Congreso del Estado le compete la iniciativa, discusión y aprobación en su caso, de las normas legales ordinarias; es decir, el proceso de formación de la ley inicia y termina en el recinto legislativo.

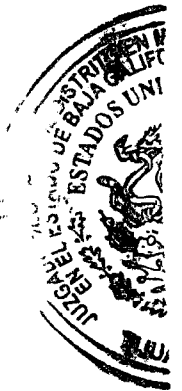
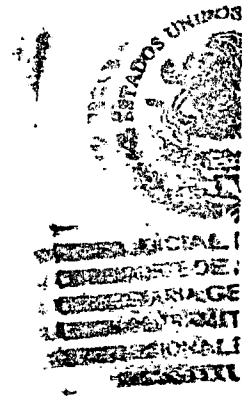
Sin embargo, tratándose de reformas y adiciones al texto constitucional local, se requiere de una mayoría calificada como la participación de todos y cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Baja California. PARA ELLO, CADA AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DEL ÓRGANO O FUNCIONARIO EXPRESO, DEBE SER NOTIFICADO LEGALMENTE.

EN ESTE CASO, TAL NOTIFICACIÓN DEBIÓ REALIZARSE FORZOSA Y NECESARIAMENTE A TRAVÉS DEL SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

Debido a la importancia del proceso de reformas constitucionales, la recepción de documentación por persona distinta al SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, ha dejado a la parte quejosa indefensa, al no estar enterada para pronunciarse tal y como la marca el texto constitucional local.

11.- Con motivo de dichas reformas y adiciones a la Constitución Local, resulta gravemente afectado el Patrimonio del MUNICIPIO y del AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, toda vez que con tales reformas y adiciones se impacta la economía de éste, sobre todo porque al limitarse a dos años la ocupación de los cargos a la Gubernatura, Alcaldes de los Ayuntamientos de los cinco Municipios y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, todos del Estado de Baja California; con ello, se limita la planeación y desarrollo económico de dicho Ayuntamiento, puesto que es muy poco tiempo para que puedan continuarse y concluirse las obras planeadas; y sobre

SIN TEXIDON



~~0014~~

todo, su patrimonio se vera sumamente afectado; por lo que es procedente el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa dice lo siguiente:

"Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio..."

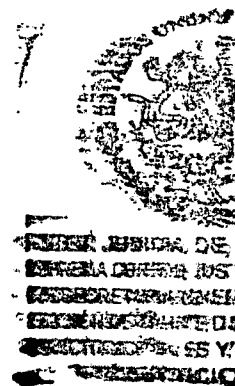
En efecto, la necesaria participación del **AYUNTAMIENTO** que represento en el proceso de la reforma, era de vital importancia para el municipio de **PLAYAS DE ROSARITO**, pues la reforma deja atrás el periodo gubernamental de seis años, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La estabilidad patrimonial del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, así como del resto de los Ayuntamientos del Estado, se ve comprometida, toda vez que con tales reformas y adiciones se impacta gravemente a la sociedad, sobre todo, porque al limitarse a dos años la ocupación de la gubernatura, el desarrollo económico del referido Ayuntamiento estará sujeto a un periodo insuficiente de administración.

VII. FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS:

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que tuve conocimiento real y completo de los Actos Reclamados hasta el día 01 de marzo de 2019, en que requerí al Lic. Silvano Abarca Macklis, entonces Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO** Baja, California, así como Luis Fernando Serrano García, entonces Secretario Fedatario, de la misma época del año 2014, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de

SIN TEXTO



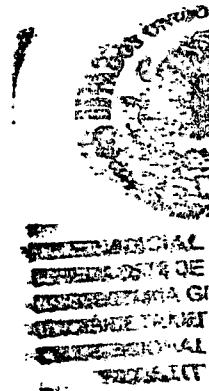
~~0015~~

la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; manifestando ambos que jamás lo recibieron e ignoraban su existencia y por tal motivo, nunca lo presentaron a sesión de Cabildo del Ayuntamiento para su discusión y votación. Motivo por el cual me encuentro dentro del término de quince días que establece la Ley de Amparo, para promover el presente Juicio de Garantías.

VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

PRIMERO. - El acto reclamado consistente en la ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Lic. Silvano Abarca Macklis, entonces Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO** Baja, California, respecto del oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; resulta violatorio en mi perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 1º, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen:

SIN TEXTO



~~0016~~

"Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

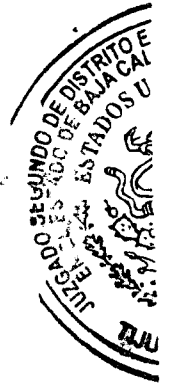
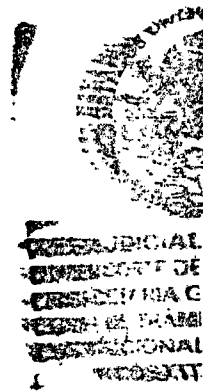
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En estos tres preceptos constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas

SIN TEXTO



la protección más amplia, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, **propiedades o posesiones**, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

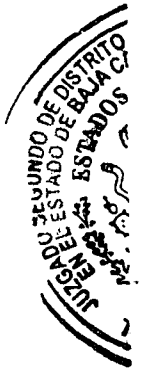
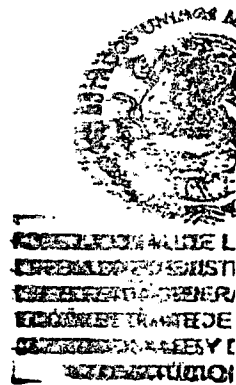
En efecto, la serie de etapas que se siguen a fin de elaborar o modificar algún precepto de la Constitución de Baja California, conocido como Proceso Legislativo debe desarrollarse conforme a las etapas contenidas en ese mismo ordenamiento.

Ese Proceso Legislativo para modificar la Constitución local, se constituye por una serie de actos con unidad indisoluble con la norma general emanada del mismo, desde las etapas que deben seguirse dentro del mismo órgano legislativo hasta en los Ayuntamientos que integran la división territorial de Baja California.

En la especie, el Proceso Legislativo llevado a cabo para modificar los preceptos de la Constitución de Baja California, así como las normas instrumentales de ésta, a través del Decreto 712 a que se ha hecho referencia, infringe las garantías del debido proceso, audiencia y legalidad contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a grado tal que justifica la procedencia del presente Juicio de Amparo para que se dejen sin efectos tales reformas y adiciones.

La razón es que la ilegalidad del proceso legislativo en comento está centrada en que no fue sometida de forma debida para su discusión y aprobación por parte del Cabildo de Playas de Rosarito -como se expondrá más adelante, incluyen también de los municipios de Tecate y Ensenada-, lo que impacta en un desequilibrio entre la función legislativa con la interpretación y aplicación de las normas, tanto de las constitucionales como de las

SIN TEXTO



~~0018~~

transitorias, que resultan en una clara irregularidad procedimental que impacta directamente en la validez, constitucionalidad y legalidad de esas normas.

En el caso que nos ocupa, se han violado los anteriores preceptos constitucionales, toda vez que la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio de la parte quejosa, las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en tales preceptos constitucionales, toda vez que se abstuvo de notificar "**legalmente**" al Presidente Municipal de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, a través del **Secretario Fedatario** en funciones, en el mes de agosto de 2014, el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

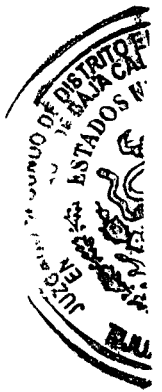
En efecto, del análisis que se realiza a la copia del oficio en comento, se advierte que éste contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PLAYAS DE ROSARITO B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL**"; es decir, se presume fue presentado ante la Secretaría Particular del Ayuntamiento o de la Presidencia Municipal. Sin embargo, estos carecen de facultades para recibir documentos de esa naturaleza e importancia, sobre todo porque se cuenta con el término de un mes para informar al Congreso del Estado sobre el resultado de la votación que debe llevarse a cabo por el Cabildo del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, en relación con el Dictamen de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California; y por lo mismo, no puede ser entregado el oficio y documentación relacionada con ese Dictamen a cualquier persona que nos sea la expresamente facultada por la Ley para tal efecto.

Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ

SIN TESTIMONIO



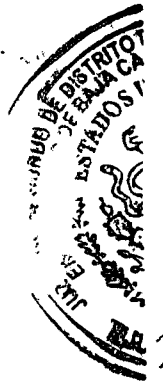
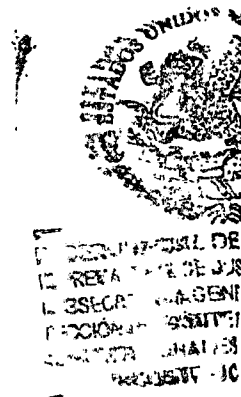
SECRETARIA DE
INTERIORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
1967



HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones, no fue recibido por el **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, a pesar de ser el único legitimado para recibir tal documentación, revisarla y darle el seguimiento correspondiente, ello provocó que ni el Presidente Municipal ni el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de la misma; y por ende, jamás celebraron sesión de Cabildo alguna en la cual se discutiera y votara el Dictamen que supuestamente les fue remitido para su estudio por parte del Congreso del Estado; y por consiguiente, se vieron legalmente impedidos para comunicar su opinión a este dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, lo que trae como consecuencia la inobservancia del principio constitucional de garantía de audiencia y finalmente, que el Decreto 112 mediante el cual se reformó y adicionó la Constitución, se encuentra viciado.

Así es, además de que del propio sello de recibido que aparece en el oficio 002222, de fecha 07 de agosto de 2014, se desprende que este no fue presentado ante Luis Fernando Serrano García, en su carácter de Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para que a su vez lo turnara al Presidente Municipal y este lo hiciera del conocimiento del Cabildo para que fuera estudiado, sesionado y votado; se cuenta con el testimonio de las personas que presenciaron que en esa fecha, fueron legalmente interpelados o requeridos el Lic. Silvano Abarca Macklis y Luis Fernando Serrano García, en su carácter de Presidente y Secretario Fedatario, respectivamente, ambos del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio en comento así como de la documentación a que se hace referencia en el mismo, consistente en copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el

SIN TEXTO



~~0-20~~

dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, sobre dichas Reformas y Adiciones; ambos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca recibieron tal oficio y documentación, desconociendo su existencia, no obstante que se les puso a la vista las copias simples de las mismas que fueron obtenidas directamente del Congreso del Estado; refiriendo ambos que nunca llevaron a cabo una Sesión de Cabildo en la que se discutieran y votaran las reformas y adiciones propuestas en el Dictamen en comento, debido a que jamás se enteraron de su existencia; y que por los mismos motivos jamás le informaron al Congreso del Estado el resultado de la votación que debió haberse llevado a cabo.

A causa de lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, el solo hecho de que no se reciba en el Congreso del Estado el resultado de la votación después de transcurrido un mes de haberse hecho llegar a los Municipios o Ayuntamientos, el Dictamen con las reformas y adiciones a la Constitución Local, así como el Acta de los Debates de la sesión de fecha 10 de julio de 2014, se presumirá que están conformes con las mismas.

Si bien es cierto, que el procedimiento señalado en el artículo 112 de la Constitución Local indica que dicho Pacto sólo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de reforma o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias (sic) partes del número total de diputados, para posteriormente el Congreso, debía ceñirse total y absolutamente al procedimiento legislativo y así evitar deficiencias que obstaculizaran de forma relevante la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, así como el debido desarrollo y proteger el patrimonio de los Ayuntamientos que pudieran resultar afectados con las reformas y adiciones aprobadas.

Por lo tanto, al no existir una debida notificación, impidió al Ayuntamiento (y consecuentemente al Cabildo), estar en condiciones de ser oídos y vencidos en un procedimiento que cuenta con sus propias formalidades.

Es decir, el proceso constitucionalmente establecido debe ser idóneo para el ejercicio de las facultades de las personas públicas morales inmersas en éste; sin existir, un error procesal o de otra naturaleza de tal gravedad como la falta de garantía de audiencia por

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODERA JUDICIAL DE
SUPREMACIA DE JUI
SUBSECRETARIA DE
REGION DE FRONTE
CONSTITUCIONALES
MEXICANOS

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA CIUDAD DE GUAYMAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

~~00021~~

una indebida notificación; y que de ninguna manera puede entenderse subsanada, ni mucho menos tenerse como válida la afirmativa ficta a que alude el artículo 112 de la Constitución Local, toda vez que ésta solamente opera cuando el acto previo de notificación es válido, situación o condición que en el caso no acontece.

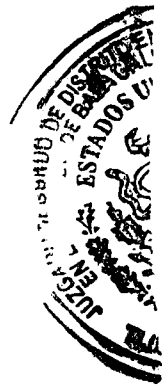
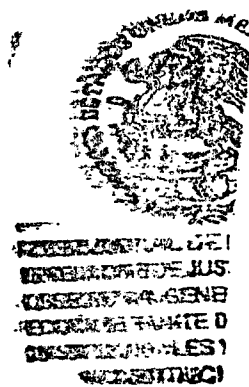
En efecto, en el caso que nos ocupa esa presunción no puede operar, toda vez que no se notificó legalmente al **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, el referido Dictamen y Acta de debates; y por lo mismo, no se enteró que contaba con un mes para remitir el resultado de la votación al respecto; motivo por el cual es procedente que se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se declare insubsistente dicha notación y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California.

Por tanto, el Proceso Legislativo para modificar las normas constitucionales y la implementación de las normas transitorias de esas reformas contiene un vicio insuperable que justifica la implementación de una medida precautoria y su posterior revocación o dejarse insubsistente con motivo de la concesión del Amparo y Protección de la Justicia Federal que se solicita, por vulnerar los principios de debido proceso, audiencia y de legalidad, al impedir y coartar el derecho de los Ayuntamientos para expresar y defender su opinión en el contexto de deliberación de dichas reformas, pero sobre todo, de sus reglas de implementación en las que indebidamente son acortados los periodos de gestión de los funcionarios que ocuparan los cargos de Gobernador, Legisladores Locales y Presidentes Municipales y sus Ayuntamientos, lo que vulnera y pone en riesgo el patrimonio de estos últimos, así como de los recursos con que éstos contarán.

SEGUNDO.- De igual manera, se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que al analizar las notificaciones que se supuestamente se hicieron a los Presidentes Municipales de Ensenada y Tecate, también se puede advertir que las mismas resultan ilegales, por no haberse practicado a través de los funcionarios expresamente facultados para ello.

Así es, por lo que respecta al **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, se advierte que el oficio 002223, Dirigido al Maestro GILBERTO ANTONIO

SIN TEXTO



HIRATA CHICO, de fecha 7 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C. RECIBIDO 08 AGO 2014 PRESIDENCIA".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 66, fracción XII del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

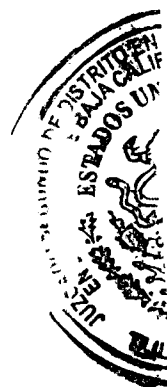
"ARTÍCULO 66.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento,
en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere,
tendrá las siguientes atribuciones:

XII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y...

Además, resulta importante subrayar que el referido reglamento excluye la posibilidad de que esa atribución de recibir y revisar la correspondencia que se dirija a los Ayuntamientos, pueda ser delegada aunado a que tampoco puede ejercerse en sustitución por algún otro funcionario, y menos por un intendente, por constituir una función del estudio



SIN TILATION



y trámite de los asuntos contenidos en la documentación recibida de gran trascendencia para el patrimonio del Ayuntamiento.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Lo mismo aconteció con el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, pues al revisar el oficio 002224, dirigido al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tecate de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; se advierte que contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda: "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. RECIBIDO AUG 08, 2014, PRESIDENCIA MUNICIPAL**" y escrito a mano el nombre de la persona que recibió "**CUQUITA**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 44, fracción X, Reglamento Interior para el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, que textualmente dice lo siguiente:

SIN TEXTO



"ARTÍCULO 44.- El **Secretario Fedatario** tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

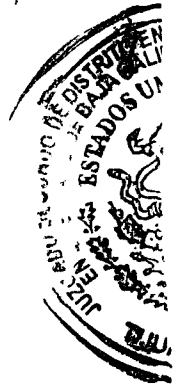
Esto es, la omisión de realizar la notificación con el funcionario que legalmente cuenta con la atribución para recibir la documentación por parte de los Ayuntamientos, trasciende de manera fundamental en las normas constitucionales modificadas, sus artículos transitorios y sobre todo en las normas de implementación, impidiendo con ello que éstos a través de sus respectivos Cabildos discutan y voten los dictámenes en los que se propongan reformas o adiciones a la Constitución Local.

Por lo tanto, el Procedimiento Legislativo en comento al contener un vicio de tal magnitud como lo es una indebida notificación al Ayuntamiento de Tecate, Baja California, trasgrede el Principio Rector del Proceso Legislativo para reformar la Constitución del Estado de Baja California, con franca violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo que amerita la concesión del amparo solicitado.

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Por lo tanto, al ser ilegal tales notificaciones supuestamente realizadas a los Presidentes Municipales de Ensenada y Tecate, Baja California, ello trascendió al Decreto 112 en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local, por lo que deberá concederse el Amparo, para que también se declare insubsistente el mismo.

SIN TEXTO



TERCERO.- También se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con la expedición y publicación del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California; toda vez que deriva de un acto viciado como lo es la ilegal notificación a los Presidentes Municipales y Ayuntamientos de los Municipios de Ensenada, **Playas de Rosarito** y Tecate, del Dictamen a que se ha hecho referencia en el concepto de violación identificado como "PRIMERO"; toda vez que al no haberseles notificado legalmente se vieron impedidos para estudiarlo, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo, así como para dar a conocer el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del término de treinta días siguientes al en que supuestamente recibieron tal notificación; toda vez que si esta se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento tuteladas por el artículo 14 Constitucional, como lo es el que fueran hechas por conducto del funcionario expresamente facultado para ello y no por conducto de diversa persona; obviamente no podrían transcurrir los referidos treinta días, y sin embargo fueron ilegalmente computados y presumiéndose que no había oposición por parte de dichos Municipios o Ayuntamientos a tales reformas y adiciones, sin darles la oportunidad de conocerlas previamente, discutir las, votarlas y notificarles el resultado de dicha votación. Por lo que es procedente se conceda el amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto en comento.

CUARTO.- El Artículo 112 de la Constitución Local para Baja California, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, **demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

SIN TEXTO



Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la efectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

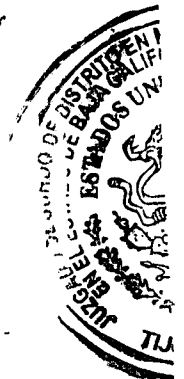
Conforme a dicho precepto de la Constitución Local, se requiere para ser reformada o adicionada, entre otros, que se demuestre que hubo mayoría en favor de la adición o reforma; por lo que si en el caso que nos ocupa ni siquiera se tomó la opinión de **tres de los cinco Municipios del Estado de Baja California**, concretamente de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, dado que no se les notificó legalmente el Dictamen en el que se contenía el proyecto de los artículos que se pretendían reformar y adicionar, así como las actas de debates; impidiéndoles analizarlas, discutir las y votarlas en sesión de Cabildo; por lo que no pudieron notificar su opinión al respecto ante el Congreso del Estado; ello pone en evidencia que no se contó con la mayoría en favor de tales adiciones o reformas; lo que constituye un motivo adicional para que se conceda el Amparo a la parte quejosa para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que reformó y adicionó la Constitución Local de Baja California.

XX. CAPITULO DE SUSPENSIÓN.

En términos del artículo 124, 125, 126 y demás relativos a la Ley de Amparo, solicito se conceda al **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL** y en su caso la **DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS** para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no se apliquen ninguno de los artículos reformados o adicionados, incluyendo los transitorios, del Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la **H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO**



SIN TEXTO



LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; toda vez que con dicha suspensión no se contravienen disposiciones del orden público ni se afecta el interés social.

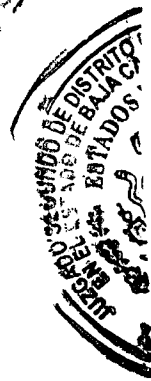
Lo anterior es así, toda vez que entre dichas reformas se limita a dos años la ocupación de los cargos de Gubernatura del Estado de Baja California, Municipales de los Ayuntamientos de los cinco Municipios del Estado de Baja California y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, ya que los establece tan solo para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021; con lo cual se afecta gravemente el patrimonio del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que resulta insuficiente dicho lapso de tiempo para que se lleven a cabo, se continúen y concluyan los proyectos y planes de desarrollo del mismo, pero sobre todo, al dejar en manos del Congreso del Estado la aprobación de las leyes de ingresos del municipio de Playas de Rosarito, sin permitirle a éste o a su Ayuntamiento proponer u opinar sobre dichos rubros en cuanto a sus necesidades, desde luego afectará gravemente su economía, impidiéndole acrecentar su patrimonio en beneficio del propio Ayuntamiento; además de que con ello se verá beneficiada la sociedad de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California.

Por lo antes expuesto y fundado, A Usted C. Juez, atentamente pedimos:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en representación del Ayuntamiento de **PLAYAS DE ROSARITO**, Baja California, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad señalada como responsable.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la demanda de garantías, y mandar formar los cuadernos de suspensión por duplicado, solicitando a la autoridad señalada responsable su informes justificado y previo, respectivamente, dándole la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que manifieste lo que a su representación social compete y señalar día y hora para que tengan verificativo las audiencias constitucional e incidental.

SIN TEXTO



0028

283

0028

Tercero. Conceder la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva, para los efectos que se han precisado, expidiendo a nuestra costa copia certificada por duplicado del auto en que se conceda la primera y de la resolución en que se otorgue la segunda.

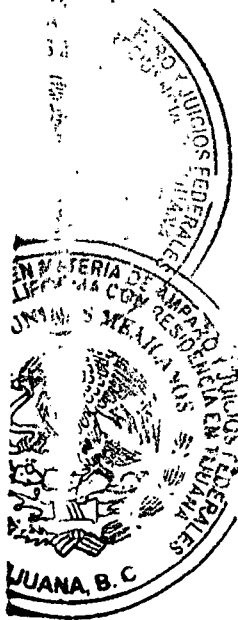
Cuarto. En su oportunidad conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos que se han precisado.

Tijuana, Baja California, en la fecha de presentación.

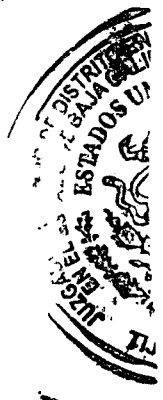
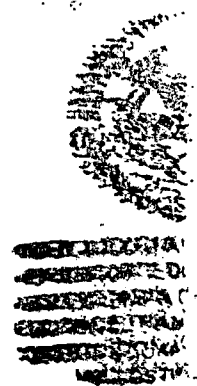
PROTESTO A USTED MIS RESPETOS

MIRNA CECILIA RINCON VARGAS

Presidente Municipal de PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

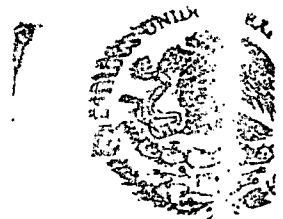


SIN TEXTO



E LA FEDERACION
ISTICA DE LA NACION
IERAL DE MUJERES
DE CONTROVERSIAS
S Y DE ACCIONES DE
CIVILIDAD

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE LA F
FEDERACIÓN DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CC
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES

TURNO DE DEMANDA DE AMPARO

Número de registro: 059457/2019

Fecha de recibido: jueves, 21/02/2019

Fecha de turno: martes, 21/02/2019

292/2019

059 17072

Hora de recibido: 10:00
Hora de turno: 10:00

Juan y/o el C. JULIANO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y ANEXOS PRODUCE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESIDENCIA EN Tijuana

Tipo de asunto: INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY

Quejoso: AFUNTAMIENTO DE ENSEÑADA BAJA CALIFORNIA POR CONDUCTO DE MARCO ANTONIO NOVELLO CUBA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y OTRO

Autoridad: CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESIDENCIA EN MEXICO

Acta reclamado: DECRETO 112 EXPEDIDO POR LA XX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON Y ADICIONARON DIVERSOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA

Cópias: 4
Firma: 34

Anéxos: 1
Atenta contra la libertad

Descripción de anexos: 1 LEGAL QUE CONTIENE COPIA CERTIFICADA DE PAGO DE ENLACE, COPIA SIMPLE DEL CIRCUITO DE 07/04/17

Demandado / Int. Interesado: SE DESCONOCE

Expediente: DEL
Averiguado: DEL C. GUILLERMO RIVERA HERNANDEZ

Folio de Act 41: NA

Observaciones: DE ENVÍO PARA RECLAMAR LA LEGAL NOTIFICACION QUE SE PRETENDIO HACER RESPECTO AL

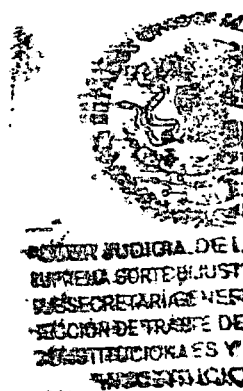
Fecha de cambio de turno: 21/02/2019

Hora de cambio de turno: 10:00

Se autoriza para que, a partir de la fecha de recepción de la presente, se reciban notificaciones a nombre de los señores licenciados en derecho JUAN GUILLERMO RIVERA HERNANDEZ, JOEL BACHECO GONZÁLEZ, JAVIER AVILES BELTRÁN, EZEQUIEL POROS CAMORA Y A ESPINOZA SALAZAR, MARGARITA GARCIA MATA, RAUL MAURICIO ATONDO Y A EDGAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, respectivamente, con Cédulas Profesionales Federales debidamente inscritas y registradas ante la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, así como en el registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y autorizando en términos simples emitir y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los CC. Carlos Alberto Carreras, Sergio, Gabriela, Valenzuela, Sánchez y Poucha, Dabail, Ruvalcaba, Pareda, Sebastian, Verdugo, Ica y Alejandro, Coronado, Guiltana, con el debido comparecencia para exhibir.

Que con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 103, fracción I, 5, fracción I, 6, 13, 107, fracción

SIN TEXTO



002813

1912

00000

QUEJOSOS MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y
JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
CON SEDE EN TIJUANA, EN TURNO.
PRESENTE.

MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA y LAURA KARINA CASTREJÓN BAÑUELOS, de
nuestro carácter de PRESIDENTE Y SÍNDICO PROCURADOR, respectivamente, ante
del MUNICIPIO y del AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, ante Usted
respaldadamente comparecemos para solicitar:

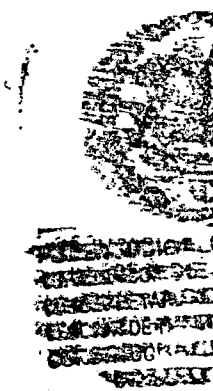
A. Se nos reconozca la personalidad que ostentamos, en mérito a la copia
certificada de los nombramientos respectivos que se acompañan a la presente.

B. Señalarnos como domicilio para recibir toda clase de notificaciones
documentales el ubicado en Milón de San Jacinto 10513, Planta Baja, Zona R,
Tijuana, Baja California.

C. Autorizando para que pidan y reciban notificaciones a nombre de
enseñados, en los términos amplos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en lo
relativo, a los señores licenciados en derecho JUAN GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ,
JOSE PACHECO GONZÁLEZ, JAVIER AVILES BELTRÁN, EZEQUIEL POZOS ZAMORA, KARLA
ESPINOZA SALAZAR, MARGARITA GARCÍA MATA, RAÚL MAURICIO ATONDO ZAVALA,
RODAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, respectivamente, con Cédulas Profesionales
Federales, debidamente inscritas y registradas ante la Dirección General de
Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, así como en el registro
Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y autorizando en términos similares
para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las CC. Carlos Alberto Cordero
Serrano, Gabriela Valenzuela Sánchez y Paulina Elizabeth Ravalcaba Pérez,
Sebastián Verdugo Leal y Alejandra Castaneda Quintana; con el deber de
comparecer para exponer.

Que con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos; artículos 1º fracción I, 6, fracción I, 6, 13 y 107 fracción

SIN TEXTO



DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y
JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
CON SEDE EN TIJUANA, EN TURNO.
P R E S E N T E .

MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA y LAURA KARINA CASTREJÓN BAÑUELOS, en
nuestro carácter de **PRESIDENTE Y SÍNDICO PROCURADOR**, respectivamente, ambos del
MUNICIPIO y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, ante Usted
respetuosamente comparecemos para solicitar:

A.- Se nos reconozca la personalidad que ostentamos, en mérito a la copia
certificada de los nombramientos respectivos que se acompañan a la presente.

Señalamos como domicilio para recibir toda clase de notificaciones y
documentos el ubicado en Misión de San Ignacio 10613, Planta Baja, Zona Río, en
Tijuana, Baja California.

Autorizando para que oigan y reciban notificaciones a nombre de nuestro
representado, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en forma
indistinta, a los señores licenciados en derecho JOEL PACHECO GONZÁLEZ, JAVIER
AVILÉS BELTRÁN, EZEQUIEL POZOS ZAMORA, KARLA ESPINOZA SALAZAR, MARGARITA
GARCÍA MATA, RAÚL MAURICIO ATONDO ZAVALA y EDGAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ,
respectivamente, con Cédulas Profesionales Federales debidamente inscritas y
registradas ante la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación
Pública, así como en el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de
Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y
autorizando en términos simples para oír y recibir notificaciones e imponerse de los
autos a las CC. Carlos Alberto Cárdenas Serrano, Gabriela Valenzuela Sánchez y
Paulina Lizbeth Ruvalcaba Pérez; con el debido respeto comparemos para exponer:

Que con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 1º, fracción I, 5, fracción I, 6, 13, 107, fracción I y

SIN TEXTO

RECEIVED
EXPRESSION
ACCESSORY
RECORDING
RECORDING
RECORDING

demás relativos de la Ley de Amparo; a nombre del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, venimos a demandar el **AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL**, en contra de los actos y autoridad que se señala como responsable en los capítulos respectivos.

Previo a dar cumplimiento al artículo 108 de la Ley de Amparo, se procede a continuación a justificar la personalidad de los promoventes para representar a la parte quejosa: "**MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**", en los siguientes términos:

PERSONALIDAD

Los artículos 20 y 22 del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California, en la parte que interesa dicen siguiente:

"ARTÍCULO 20.- De acuerdo con lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el **Municipio es una persona moral que cuenta con personalidad jurídica**, por lo que actúa a través de sus órganos de representación.

La representación legal del Municipio recae en el Ayuntamiento, que es el órgano facultado para dar cumplimiento a los fines y objetos de la persona moral municipal.

El Ayuntamiento, en ejercicio de tal representación legal del Municipio, faculta a su vez al presidente Municipal y a los demás funcionarios de la Administración Pública Municipal, para que celebren y atiendan en representación del Municipio, los actos jurídicos que se les determinan en reglamentos y acuerdos que la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California les encomienda directamente."

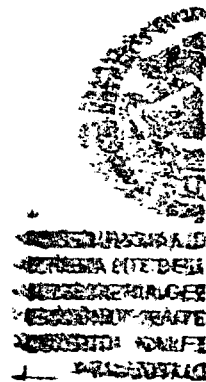
"ARTÍCULO 22.- La Sindicatura Municipal es el órgano de **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO** y del Municipio, así como de control y vigilancia de la Administración Pública Municipal, por lo que fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales, además de la actuación de los servidores públicos, contando para tal efecto con la estructura administrativa que se establece en el presente Reglamento.

El Síndico Procurador actuará como representante jurídico del Municipio y Ayuntamiento, en los litigios en que éste sea parte.

[...]"

Conforme a dichos preceptos legales el **Municipio** es una persona moral que cuenta con personalidad jurídica, cuya representación recae en el **Ayuntamiento**, que es el órgano facultado para dar cumplimiento a sus fines y objetos. Por su parte el **Ayuntamiento**, en ejercicio de tal representación legal del **Municipio**, faculta a su vez al **Presidente Municipal** para que celebren y atiendan en representación del Municipio, los actos jurídicos que se les determinan en reglamentos. En el entendido de que el

SIN TEXTO



Síndico Procurador siempre actuará como representante jurídico del **Municipio 289 Ayuntamiento**, en los litigios en que éste sea parte.

De ahí que los que suscribimos la presente tenemos los cargos de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, respectivamente, ambos del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, y como tales tenemos su legal representación y estamos facultados para promover a nombre de éstos la presente demanda de garantías.

LEGITIMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA PARA PROMOVER LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS

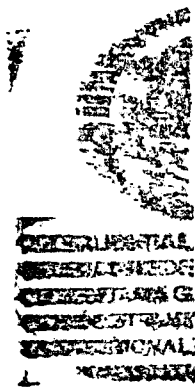
El artículo 7 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa dice lo siguiente:

"Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, **los municipios** o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, **cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio...**"

En el caso que nos ocupa, los actos reclamados afectan el **patrimonio de la parte quejosa, MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, toda vez que éstos se hacen consistir en: **1).-** La ilegal notificación de un oficio al que supuestamente se acompañó un Dictamen emitido por el Congreso del Estado, en el que se propone reformar y adicionar diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y consta además de diecinueve artículos transitorios, con la finalidad de que fueran estudiados, discutidos y votados por el Cabildo del MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, para que dentro del mes siguiente informar el resultado de la votación al referido Congreso, en el entendido de que de no recibir tal informe dentro de ese plazo, se presumiría que estaban conformes con dichas reformas, adiciones y artículos transitorios; y, **2).-** El Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 17 de octubre del mismo año, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

En efecto, sobre todo el segundo de los actos reclamados afecta el patrimonio de la parte quejosa, toda vez que entre los artículos reformados y adicionados de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, destaca el Apartado C, del artículo 21, que textualmente dice lo siguiente:

SIN TEXTO



"APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.

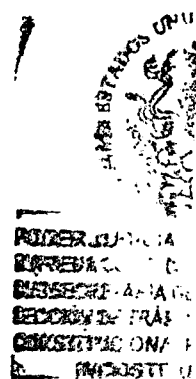
En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia."

Como se observa de dicho precepto, en el mismo se establece que en el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes.

Por lo tanto, si en dicho precepto se faculta al Congreso del Estado a aprobar y modificar las **Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal**; es indudable que ello impactará de manera trascendente en el **patrimonio del Municipio y del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California**; motivo por el cual, resultaba indispensable que el Cabildo del Ayuntamiento de dicho Municipio, analizara, discutiera y votara tanto la redacción como el contenido del **artículo 21, Apartado "C"**, intitulado **"De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas"**, contenido en el Dictamen que se adjuntó al oficio dirigido al Presidente Municipal de Ensenada, Baja California; sin embargo, al no haberse recibido jamás dicho oficio y documentación anexa, se impidió discutirlo en sesión de Cabildo y poder ser votado, provocando con ello que se presumiera que dicho Municipio se encontraba de acuerdo con dicha reforma o adición a la Constitución Local, por el solo hecho de no haber informado el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del mes siguiente al en que supuestamente fue recibido el oficio en comento, conforme al artículo 112 de la misma Constitución; motivo por el cual, se encuentra

SIN TEXTO



legitimado el **MUNICIPIO** y el **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, para promover el presente Juicio de Amparo.

COMPETENCIA

Uno de los actos reclamados lo constituye el Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que **tiene su ámbito de aplicación en todo el Estado de Baja California**.

Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, si como se dijo, el Decreto reclamado se pretende ejecutar en el Estado de Baja California, en todos sus Municipios, entre el que se encuentra el de Tijuana; entonces resulta competente este Juzgado de Distrito para conocer de la presente demanda de garantías.

En cumplimiento de los requisitos de la demanda de amparo establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifestamos lo siguiente:

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DISTRITO JUDICIAL
DE Tijuana

QUEJOSOS: MUNICIPIO y AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, con domicilio arriba señalado.

II. TERCERO INTERESADO: Bajo protesta de decir verdad, ignoramos si a alguien le recaiga tal carácter.

III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso del Estado de Baja California, con domicilio conocido en la ciudad de Mexicali.

IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la referida autoridad responsable, se reclaman los siguientes:

- 1) La ilegal notificación que se hizo o se pretendió hacer al Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, entonces Presidente Municipal del H. XXI MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, Baja California, respecto del oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral

SIN TEXTO



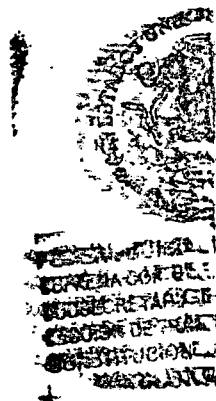
AGENCIA ADICIONAL
DE INVESTIGACION
DE LA FISCALIA
DE LA DEFENSA
DE LA JUSTICIA
DE LA NACION

y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones. Por lo que deberá concederse el amparo para que se deje insubsistente dicha notificación y todo lo actuado con posterioridad.

- 2) El Decreto 112 expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; por derivar de actuaciones viciadas, al no haberse notificado legalmente a los Presidentes Municipales de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que deberá concederse el Amparo solicitado para el efecto de que se dejen insubsistentes las reformas y adiciones hechas a la Constitución en comento, derivadas del Decreto aludido.

Este Decreto deriva de un proceso legislativo que no cumplió con las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política del Estado de Baja California, ya que está precedido de actuaciones viciadas, **al no haberse notificado legalmente a los Ayuntamientos correspondientes a los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, el Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado**, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, ni la reserva a la que se hizo referencia en el punto que antecede. Por lo que solicitamos se conceda al Ayuntamiento quejoso el Amparo solicitado, para el efecto de que se dejen insubsistentes las Reformas y Adiciones hechas a la Constitución en comento derivadas del Decreto aludido, incluyendo los artículos transitorios.

SIN TEXTO



VI. PROTESTA LEGAL: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFESTAMOS LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE NOS CONSTAN Y CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON CIERTOS.

1.- Con fecha 5 de enero de 2019, se expidió la convocatoria mediante la cual se convoca para participar en los cargos de Gubernatura del Estado de Baja California, Municipales de los Ayuntamientos de los cinco Municipios del Estado de Baja California y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, todos para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

2.- En atención a ello, causó sorpresa el por qué tendrían tan solo un periodo de dos años quienes resultaran electos para ocupar dichos cargos, por lo que procedimos a investigar sobre el origen de esa situación, encontrando lo siguiente:

3.- Con fecha 11 de septiembre de 2014, la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, emitió el **Decreto 112**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; del cual me enteré hasta el día 5 de enero de 2019, en que se publicó la convocatoria a que se hizo referencia en el numeral 1.

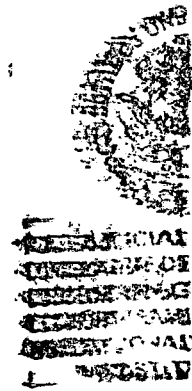
Ahora bien, el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, **se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

SIN TEXTION



Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

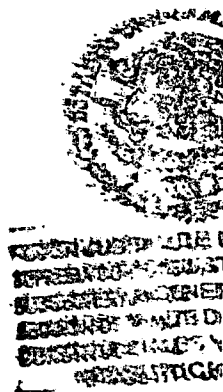
4.- Ahora bien, conforme a dicho precepto de la Constitución Local ésta solo podrá adicionarse o reformarse cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, **debiéndose enviar ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado**; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución, **siempre y cuando hubiere transcurrido un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata por los Ayuntamientos, sin que éstos remitiesen al Congreso del Estado el resultado de la votación**, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

5.- Por tal motivo, los suscritos, en nuestra calidad de Presidente Municipal y Síndico Procurador, respectivamente, ambos del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, nos dimos a la tarea de tratar de localizar el Acta de Sesión de Cabildo en la cual se debió haber discutido la iniciativa de adición o reforma a la Constitución Local debidamente aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, así como las actas de los debates que hubiera provocado el dictamen del Decreto 112, en el que se publicó dicha reforma, de la cual ahora tuvimos conocimiento.

6.- Sin embargo, después de arduas búsquedas, logramos concluir que **no existe Acta de Reunión de Cabildo en la cual se hubiese analizado o discutido el Dictamen del Decreto mencionado**; es decir, no se llevó a cabo Sesión de Cabildo a fin de discutir la iniciativa de adición o reformas a la Constitución Local, así como las actas de los debates en comento.

7.- En razón de lo anterior, fue que el 15 de febrero de 2019, nos entrevistamos con el Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, quien desempeñó el cargo de Presidente Municipal del H. XXI MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, pues expresamente acudimos a buscarlo por tener diversas dudas en relación a la Sesión de Cabildo en la cual debió existir la discusión o aprobación respecto del Decreto mencionado, a lo

SIN TEXTO



que nos contestó que **él no tuvo conocimiento de la iniciativa de adición o reformas a la Constitución Local aprobadas por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, así como las actas de los debates que hubiera provocado el dictamen del Decreto 112**, por lo cual nunca citó a los miembros integrantes del Ayuntamiento, a sesión de Cabildo para discutir ese tema, y así estar en aptitud de remitir al Congreso el resultado de la votación respectiva.

8.- Continuando con las investigaciones, solicitamos al Congreso del Estado nos permitieran copias de los documentos en los que constara que se cumplió con la **formalidad esencial** a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local.

Logramos que nos entregaran copias del oficio **002223**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el que dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

9.- Una vez que tuvimos en nuestro poder dichas copias, con fecha **21 de febrero de 2019**, se las mostramos al Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, quien desempeñó el cargo de Presidente Municipal del H. XXI MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, Baja California, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, interpellándolo para que manifestara si reconocía haberlas recibido durante su gestión, concretamente el día 08 de agosto de 2014, que aparece en el sello con la siguiente leyenda **"SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL AUG 08 2014 RECIBIDO"**; quien luego de tener a la vista las copias que le mostramos, respondió que jamás había recibido dicho oficio ni la documentación a la que hace referencia el mismo, ni en la fecha que indica el sello, ni en ninguna otra.

Agregó en el acto, que la **Secretaría Particular de la Presidencia** nunca le hizo llegar dicho oficio y documentación que se relaciona en el mismo, además de que conforme al Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, **carece de facultades para recibir documentación de esa naturaleza**; ya que en todo caso el único facultado para ello sería el **Secretario Fedatario**, de conformidad por lo

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE ADMINISTRACION
CONSTRUCCION Y O
L. ADMINISTRACION

dispuesto por el artículo 66, fracción XII, del citado reglamento, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 66.- El Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

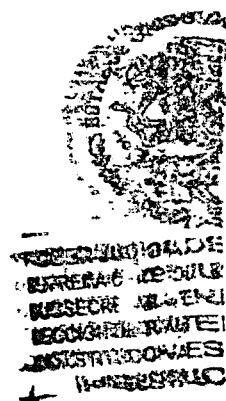
XII.- Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de este, dándole el curso correspondiente; y...

10.- Por tal motivo, en la misma fecha de 21 de febrero de 2019, procedimos a entrevistarnos con el señor JESÚS JAIME GONZÁLEZ AGUNDEZ, quien en el mes de agosto de 2014, se desempeñó como **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA**, a quien también se le requirió formalmente para que manifestara si en esos meses o en algún otro, recibió el oficio **002223**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, en el cual dice se acompaña copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; respondiendo en sentido negativo; es decir, que nunca había recibido dicho oficio ni tampoco la documentación a que hace referencia el mismo, a pesar de ser él el único que tenía facultades para recibirlo, conforme al artículo 66, fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.

11.- En consecuencia, toda vez que dicho oficio y documentación que se dice fue anexada al mismo, jamás fue recibida por el Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, quien desempeñó el cargo de Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, en el periodo comprendido del año 2013 a 2016, ni tampoco, fue presentado por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, quien legalmente era el único facultado para recibir y turnar a quien correspondiera la documentación antes aludida, de contenido importante que por su propia naturaleza debería hacerse del conocimiento del Cabildo para su discusión y votación.

En efecto, la violación a dicha formalidad motivó que no se discutiera en sesión de Cabildo el Dictamen Número 1, en el que se propuso reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Local.

SIN TEXTO



Lo anterior trajo como consecuencia que se tuviera por aprobado en afirmativa ficta dicho dictamen; y por lo tanto, en base a ello se publicó el Decreto 112, mediante el cual se reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, concretamente en los artículos 5, 15, 16, 19, 21, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, y 78, se adicionó el capítulo III al título V, integrándose con el numeral 68 y se adicionaron 19 artículos transitorios; **sin que se hubiera cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, pues nunca tuvo conocimiento de la notificación respectiva, privando al Ayuntamiento que presentamos, de su debida participación en los términos del artículo 112 de la misma Constitución, tal y como se ordena.**

12.- En efecto, conforme al texto de la Constitución local, al Congreso del Estado le compete la iniciativa, discusión y aprobación en su caso, de las normas legales ordinarias; es decir, el proceso de formación de la ley inicia y termina en el recinto legislativo.

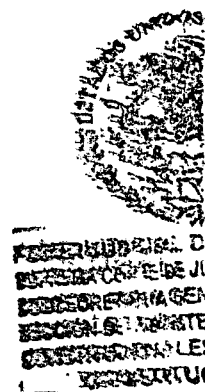
Sin embargo, tratándose de reformas y adiciones al texto constitucional local, se requiere de una mayoría calificada como la participación de todos y cada uno de los Ayuntamientos del Estado de Baja California. PARA ELLO, CADA AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DEL ÓRGANO O FUNCIONARIO EXPROFESO, DEBE SER NOTIFICADO LEGALMENTE.

EN ESTE CASO, TAL NOTIFICACIÓN DEBÍO REALIZARSE FORZOSA Y NECESARIAMENTE A TRAVÉS DEL SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XII, DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

Debido a la importancia del proceso de reformas constitucionales, la recepción de documentación por persona distinta al SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, ha dejado a la parte quejosa indefensa, al no estar enterada para pronunciarse tal y como la marca el texto constitucional local.

13.- Con motivo de dichas reformas y adiciones a la Constitución Local, resulta gravemente afectado el Patrimonio del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, toda vez que con tales reformas y adiciones se impacta la economía de éste, sobre todo por que al limitarse a dos años la ocupación de los cargos a la Gubernatura, Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco Municipios y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, todos del Estado de Baja California; con ello, se limita la planeación y desarrollo económico de dicho Ayuntamiento, puesto que es muy poco tiempo para que puedan continuarse y

SIN TEXTO



concluirse las obras planeadas; y sobre todo, su patrimonio se vera sumamente afectado; por lo que es procedente el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa dice lo siguiente:

"Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio..."

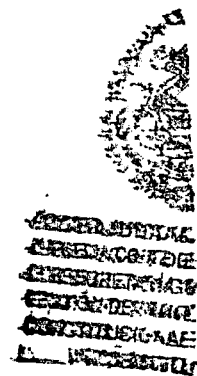
En efecto, la necesaria participación del **AYUNTAMIENTO** que presentamos en el proceso de la reforma, era de vital importancia para el municipio de Ensenada, pues la reforma deja atrás el periodo gubernamental de seis años, tal y como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La vida política y estabilidad patrimonial del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, así como del resto de los Ayuntamientos del Estado, se ve comprometida, toda vez que con tales reformas y adiciones se impacta gravemente a la sociedad, sobre todo, porque al limitarse a dos años la ocupación de la gubernatura, el desarrollo estará sujeto a un periodo insuficiente de administración.

VII. FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS:

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que tuvimos conocimiento real y completo de los **Actos Reclamados** hasta el día **21 de febrero de 2019**, en que requerimos al Maestro Gilberto Antonio Hirata Chico, entonces Presidente Municipal del H. XXI AYUNTAMIENTO DE ENSENADA BAJA, CALIFORNIA, así como al Lic. JESÚS JAIME GONZÁLEZ AGÚNDEZ, en su carácter de Secretario Fedatario, de la misma época, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio **002223**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; manifestando ambos que jamás lo recibieron e ignoraban su existencia y por tal motivo, nunca lo presentaron a sesión de Cabildo del Ayuntamiento para su

SIN TEXTO



discusión y votación. Motivo por el cual nos encontramos dentro del término de quince días que establece la Ley de Amparo, para promover el presente Juicio de Garantías.

VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

PRIMERO. – El acto reclamado consistente en la **ilegal notificación** que se hizo o se pretendió hacer al Maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO, entonces Presidente Municipal del H. XXI AYUNTAMIENTO DE ENSENADA Baja, California, respecto del oficio **002223**, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; resulta violatorio en perjuicio del Ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, que se encuentran protegidas y tuteladas por los artículos 19, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra establecen:

DE LA FEDERACIÓN
JUSTI-
NACIONAL
DE ACUERDO
DE CONCORDIA
Y
NACIONAL

Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

{...}

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION
SUPLENTE DE JEFES
SUBSECRETARIA GENERAL
REGISTRARIA DE LA FEDERACION
CONSTITUCIONALES Y
CONSTITUCIONALES

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En estos tres preceptos constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley; que nadie podrá ser privado de sus **propiedades, posesiones o derechos**, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, **propiedades o posesiones**, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En el caso que nos ocupa, se han violado los anteriores preceptos constitucionales, toda vez que la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio de la parte quejosa, las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en tales preceptos constitucionales toda vez que se abstuvo de notificar "**legalmente**" al Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, a través del **Secretario Fedatario** en funciones, en el mes de agosto de 2014, el oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se

SIN TEXTO



AGENCIA EJECUTIVA
SUPREMA DE ELECTORES
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE ASISTENTE D
COORDINADOR. MARCOS Y
SECRETARÍA

aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones.

En efecto, del análisis que se realiza a la copia del oficio en comento, se advierte que éste contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL AUG 08 2014 RECIBIDO**"; es decir, se presume fue presentado ante la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal.

Sin embargo, esta carece de facultades para recibir documentos de esa naturaleza e importancia, sobre todo porque se cuenta con el término de un mes para informar al Congreso del Estado sobre el resultado de la votación que debe llevarse a cabo por el **CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, en relación con el Dictamen de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del Estado de Baja California; y por lo mismo, no puede ser entregado el oficio y documentación relacionada con ese Dictamen a cualquier persona que no sea la expresamente facultada por la Ley o por los Reglamentos Municipales para tal efecto.

Así es, en el artículo 31, del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California, se establecen con precisión las únicas facultades que tiene la **Secretaria Particular**, mismas que para mayor claridad se reproducen a continuación:

ARTÍCULO 31.- A la **Secretaria Particular** corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Coadyuvar a la organización de actividades, eventos y giras del Presidente Municipal;

II.- Programar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Presidente Municipal y conservar un archivo de las sesiones y acuerdos;

III.- Recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno;

IV.- Recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía;

V.- Coordinar las audiencias con los funcionarios para el despacho de los asuntos de su competencia;

VI.- Turnar a quien corresponda, las representaciones oficiales cuando así lo determine el Presidente;

VII.- Realizar acciones administrativas que le correspondan



REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE INTERIORES
SECRETARIA DE ESTADO
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE
RELACIONES INTERNACIONALES

a la Presidencia Municipal; y

VIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables a las relativas a su ámbito de competencia que resulten necesarias para el buen desarrollo de su función."

Como se observa, en dichas facultades no se contiene la de **recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste**, a que se refiere el artículo 66 fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; sino solo las de **recibir y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que se formulen por actos municipales y encauzar las que correspondan a otros niveles de gobierno y recibir y atender las solicitudes de audiencia de la ciudadanía**; a que se refieren las fracciones III y IV del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California.

Efectivamente, nótese que solo se le faculta a la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, el recibir y dar seguimiento a peticiones o solicitudes de audiencia de la ciudadanía; jamás para recibir y dar seguimiento a peticiones formuladas por alguna autoridad u órgano de Gobierno, como lo es el Congreso del Estado, facultad esta última que se encuentra limitada en exclusiva al Secretario Fedatario al que se refiere el artículo 66 fracción XII, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California.

Por lo tanto, si en el caso que nos ocupa el oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados FELIPE DE JESÚS MAYORAL Y GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que se dice se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones, no fue recibido por el **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, a pesar de ser el único legitimado para recibir tal documentación, revisarla y darle el seguimiento correspondiente, ello provocó que ni el Presidente Municipal ni el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de la misma; y por ende, jamás celebraron sesión de Cabildo alguna en la cual se discutiera y votara el Dictamen que supuestamente les fue remitido para su estudio por parte del Congreso del Estado; y por consiguiente, se vieron legalmente impedidos para comunicar su

10

4 46 2

1. THE
2. UNITED STATES OF AMERICA
3. VS.
4. JOHN EDGAR HOOVER
5. DEFENDANT
6. IN
7. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
8. FILED
9. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
10. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
11. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
12. AT WASHINGTON, D.C.
13. BY
14. JOHN EDGAR HOOVER
15. ATTORNEY AT LAW
16. FOR THE DEFENDANT
17. JOHN EDGAR HOOVER
18. DEFENDANT
19. IN
20. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
21. FILED
22. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
23. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
24. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
25. AT WASHINGTON, D.C.
26. BY
27. JOHN EDGAR HOOVER
28. ATTORNEY AT LAW
29. FOR THE DEFENDANT
30. JOHN EDGAR HOOVER
31. DEFENDANT
32. IN
33. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
34. FILED
35. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
36. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
37. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
38. AT WASHINGTON, D.C.
39. BY
40. JOHN EDGAR HOOVER
41. ATTORNEY AT LAW
42. FOR THE DEFENDANT
43. JOHN EDGAR HOOVER
44. DEFENDANT
45. IN
46. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
47. FILED
48. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
49. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
50. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
51. AT WASHINGTON, D.C.
52. BY
53. JOHN EDGAR HOOVER
54. ATTORNEY AT LAW
55. FOR THE DEFENDANT
56. JOHN EDGAR HOOVER
57. DEFENDANT
58. IN
59. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
60. FILED
61. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
62. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
63. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
64. AT WASHINGTON, D.C.
65. BY
66. JOHN EDGAR HOOVER
67. ATTORNEY AT LAW
68. FOR THE DEFENDANT
69. JOHN EDGAR HOOVER
70. DEFENDANT
71. IN
72. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
73. FILED
74. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
75. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
76. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
77. AT WASHINGTON, D.C.
78. BY
79. JOHN EDGAR HOOVER
80. ATTORNEY AT LAW
81. FOR THE DEFENDANT
82. JOHN EDGAR HOOVER
83. DEFENDANT
84. IN
85. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
86. FILED
87. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
88. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
89. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
90. AT WASHINGTON, D.C.
91. BY
92. JOHN EDGAR HOOVER
93. ATTORNEY AT LAW
94. FOR THE DEFENDANT
95. JOHN EDGAR HOOVER
96. DEFENDANT
97. IN
98. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
99. FILED
100. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
101. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
102. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
103. AT WASHINGTON, D.C.
104. BY
105. JOHN EDGAR HOOVER
106. ATTORNEY AT LAW
107. FOR THE DEFENDANT
108. JOHN EDGAR HOOVER
109. DEFENDANT
110. IN
111. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
112. FILED
113. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
114. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
115. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
116. AT WASHINGTON, D.C.
117. BY
118. JOHN EDGAR HOOVER
119. ATTORNEY AT LAW
120. FOR THE DEFENDANT
121. JOHN EDGAR HOOVER
122. DEFENDANT
123. IN
124. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
125. FILED
126. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
127. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
128. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
129. AT WASHINGTON, D.C.
130. BY
131. JOHN EDGAR HOOVER
132. ATTORNEY AT LAW
133. FOR THE DEFENDANT
134. JOHN EDGAR HOOVER
135. DEFENDANT
136. IN
137. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
138. FILED
139. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
140. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
141. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
142. AT WASHINGTON, D.C.
143. BY
144. JOHN EDGAR HOOVER
145. ATTORNEY AT LAW
146. FOR THE DEFENDANT
147. JOHN EDGAR HOOVER
148. DEFENDANT
149. IN
150. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
151. FILED
152. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
153. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
154. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
155. AT WASHINGTON, D.C.
156. BY
157. JOHN EDGAR HOOVER
158. ATTORNEY AT LAW
159. FOR THE DEFENDANT
160. JOHN EDGAR HOOVER
161. DEFENDANT
162. IN
163. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
164. FILED
165. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
166. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
167. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
168. AT WASHINGTON, D.C.
169. BY
170. JOHN EDGAR HOOVER
171. ATTORNEY AT LAW
172. FOR THE DEFENDANT
173. JOHN EDGAR HOOVER
174. DEFENDANT
175. IN
176. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
177. FILED
178. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
179. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
180. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
181. AT WASHINGTON, D.C.
182. BY
183. JOHN EDGAR HOOVER
184. ATTORNEY AT LAW
185. FOR THE DEFENDANT
186. JOHN EDGAR HOOVER
187. DEFENDANT
188. IN
189. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
190. FILED
191. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
192. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
193. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
194. AT WASHINGTON, D.C.
195. BY
196. JOHN EDGAR HOOVER
197. ATTORNEY AT LAW
198. FOR THE DEFENDANT
199. JOHN EDGAR HOOVER
200. DEFENDANT
201. IN
202. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
203. FILED
204. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
205. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
206. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
207. AT WASHINGTON, D.C.
208. BY
209. JOHN EDGAR HOOVER
210. ATTORNEY AT LAW
211. FOR THE DEFENDANT
212. JOHN EDGAR HOOVER
213. DEFENDANT
214. IN
215. CRIMINAL CASE NO. 100-10000
216. FILED
217. IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES
218. FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
219. THIS 10TH DAY OF JANUARY 1960
220. AT WASHINGTON, D.C.
221. BY
222. JOHN EDGAR HOOVER
223. ATTORNEY AT LAW
224. FOR THE DEFENDANT
225. JOHN EDGAR HOOVER
226. DEFENDANT
227. IN



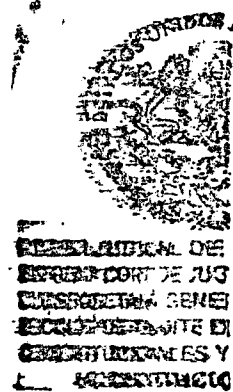
opinión a este dentro del término de un mes a que se refiere el artículo 112 de la Constitución Local de Baja California; lo que trae como consecuencia que se encuentre viciado el Decreto 112 mediante el cual se reformó y adicionó esta.

Así es, además de que del propio sello de recibido que aparece en el oficio 002223, de fecha 07 de agosto de 2014, se desprende que este no fue presentado ante el Secretario Fedatario del Ayuntamiento, para que a su vez lo turnara al Presidente Municipal y este lo hiciera del conocimiento del Cabildo para que fuera estudiado, sesionado y votado; se cuenta con la fe de hechos levantada ante Notario Público, en la cual se hace constar que fueron legalmente interpelados o requeridos los señores maestro GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO e IVÁN ALONSO BARBOSA OCHOA, en su carácter de Presidente y Síndico Procurador, respectivamente, ambos del Ayuntamiento y Municipio de Ensenada, Baja California, sobre si habían recibido o tenían conocimiento del oficio en comento así como de la documentación a que se hace referencia en el mismo, consistente en copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; ambos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que nunca recibieron tal oficio y documentación, desconociendo su existencia, no obstante que se les puso a la vista las copias simples de las mismas que fueron obtenidas directamente del Congreso del Estado; refiriendo ambos que nunca llevaron a cabo una Sesión de Cabildo en la que se discutieran y votaran las reformas y adiciones propuestas en el Dictamen en comento, debido a que jamás se enteraron de su existencia; y que por los mismos motivos jamás le informaron al Congreso del Estado el resultado de la votación que debió haberse llevado a cabo.

A causa de lo anterior, conforme al segundo párrafo del artículo 112 de la Constitución Local de Baja California, el solo hecho de que no se reciba en el Congreso del Estado el resultado de la votación después de transcurrido un mes de haberse hecho llegar a los Municipios o Ayuntamientos, el Dictamen con las reformas y adiciones a la Constitución Local, así como el Acta de los Debates de la sesión de fecha 10 de julio de 2014, se presumirá que están conformes con las mismas.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa esa presunción no puede operar, toda vez que no se notificó legalmente al **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**,

SIN TEXTO



el referido Dictamen y Acta de debates; y por lo mismo, no se enteró que contaba con un mes para remitir el resultado de la votación al respecto; motivo por el cual es procedente que se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se declare insubsistente dicha notación y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California.

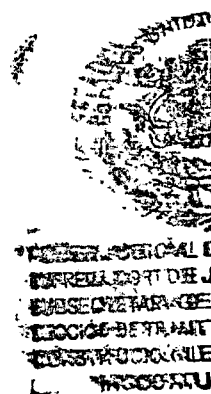
SEGUNDO.- De igual manera, se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que al analizar las notificaciones que se supuestamente se hicieron a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, también se puede advertir que las mismas resultan ilegales, por no haberse practicado a través de los funcionarios expresamente facultados para ello.

Así es, por lo que respecta al **AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, se advierte que el oficio 002222, Dirigido al Lic. Silvano Abarca Macklis, de fecha 7 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 10 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia; con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda "**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. RECIBIDO 08 AGO 2014 PRESIDENCIA**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 67 fracción XIII Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que textualmente dice lo siguiente:

"ARTÍCULO 67.- El **Secretario Fedatario del Ayuntamiento**, en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

SIN TEXTO



...

XIII. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Lo mismo aconteció con el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, pues al revisar el oficio 002224, dirigido al Ingeniero Cesar Rafael Moreno González de Castilla, Presidente Municipal del H. XXI Ayuntamiento de Tecate, de fecha 07 de agosto de 2014, suscrito por los Diputados Felipe de Jesús Mayoral y Gerardo Álvarez Hernández, en su carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al cual dicen se acompañó copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de Reforma del Estado, mediante el cual se aprueban diversas Reformas y Adiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la certificación de la reserva presentada y del acta de sesión celebrada el 04 de julio de 2014 en la cual se aprobaron el dictamen y la reserva de referencia, con la finalidad de que se emitiera la opinión correspondiente por parte del **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, sobre dichas Reformas y Adiciones; se advierte que contiene un sello de recibido con la siguiente leyenda: "**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TECATE B.C. MEX. RECIBIDO AUG 08 2014 PRESIDENCIA MUNICIPAL**".

Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Presidencia como tales están facultados para recibir directamente ese tipo de correspondencia, sino que forzosa y necesariamente debe ser presentada por conducto del **SECRETARIO FEDATARIO DEL AYUNTAMIENTO**, de conformidad con el artículo 44, fracción X, Reglamento Interior para el **AYUNTAMIENTO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA**, que textualmente dice lo siguiente:

...

"ARTÍCULO 44.- El **Secretario Fedatario** tendrá como atribuciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, las siguientes:

...

SIN TEXTO

CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIAL

X. Recibir y revisar la correspondencia que se dirija al Ayuntamiento, así como aquellos oficios que contengan asuntos de éste, dándole el curso correspondiente; y..."

De ahí que si dicho oficio y sus anexos no fueron presentados ante la autoridad competente y expresamente facultada para recibirlo, tal notificación es ilegal; y por lo mismo, también se vieron impedidos para sesionarlos ante el Cabildo, así como para votarlos y hacer del conocimiento del Congreso del Estado el resultado de la votación; y por lo mismo, resulta ilegal la presunción de que no tuvieron oposición al Dictamen propuesto por el hecho de haber transcurrido más de treinta días sin que el Congreso del Estado recibiera el resultado de la votación.

Por lo tanto, al ser ilegal tales notificaciones supuestamente realizadas a los Presidentes Municipales de Playas de Rosarito y Tecate, Baja California, ello trascendió al Decreto 112 en el que se aprobaron las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local, por lo que deberá concederse el Amparo, para que también se declare insubsistente el mismo.

TERCERO.- También se violan los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, con la expedición y publicación del Decreto 112, de fecha 11 de septiembre de 2014, en el que se aprueban las reformas y adiciones a diversos preceptos de la Constitución Local de Baja California; toda vez que deriva de un acto viciado como lo es la ilegal notificación a los Presidentes Municipales y Ayuntamientos de los Municipios de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, del Dictamen a que se ha hecho referencia en el concepto de violación identificado como "PRIMERO"; toda vez que al no haberseles notificado legalmente se vieron impedidos para estudiarlo, discutirlo y votarlo en sesión de Cabildo, así como para dar a conocer el resultado de la votación al Congreso del Estado dentro del término de treinta días siguientes al en que supuestamente recibieron tal notificación; toda vez que si esta se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento tuteladas por el artículo 14 Constitucional, como lo es el que fueran hechas por conducto del funcionario expresamente facultado para ello y no por conducto de diversa persona; obviamente no podrían transcurrir los referidos treinta días; y sin embargo fueron ilegalmente computados y presumiéndose que no había oposición por parte de dichos Municipios o Ayuntamientos a tales reformas y adiciones, sin darles la oportunidad de conocerlas previamente, discutir las, votarlas y notificarles el resultado de dicha votación. Por lo que es procedente se conceda el Amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto en comento.

CUARTO.- El Artículo 112 de la Constitución Local para Baja California, es del tenor siguiente:

SIN TEXTO



"ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de los Ayuntamientos, **demuestra que hubo mayoría en favor de la adición o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.**

Si transcurriere un mes después de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma.

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca.

Las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del Estado, mediante Dictamen, referente a la afectación del texto de ésta, y a la parte de su cuerpo en que deba de incorporarse, aprobado por mayoría calificada, produciendo una declaratoria de reforma o adición constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de ningún otro trámite.

Conforme a dicho precepto de la Constitución Local, se requiere para ser reformada o adicionada, entre otros, que se demuestre que hubo mayoría en favor de la adición o reforma; por lo que si en el caso que nos ocupa ni siquiera se tomó la opinión de **tres de los cinco Municipios del Estado de Baja California**, concretamente de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, dado que no se les notificó legalmente el Dictamen en el que se contenía el proyecto de los artículos que se pretendían reformar y adicionar, así como las actas de debates; impidiéndoles analizarlas, discutir las y votarlas en sesión de Cabildo; por lo que no pudieron notificar su opinión al respecto ante el Congreso del Estado; ello pone en evidencia que no se contó con la mayoría en favor de tales adiciones o reformas; lo que constituye un motivo adicional para que se conceda el Amparo a la parte quejosa para el efecto de que se deje insubsistente el Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, que reformó y adicionó la Constitución Local de Baja California.

IX. CAPITULO DE SUSPENSIÓN.

En términos del artículo 124, 125, 126 y demás relativos a la Ley de Amparo, solicitamos se me conceda la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL** y en su caso la DEFINITIVA DE

SIN TEXTO

ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
CENTRAL
SECRETARIA
DE INTERIO
L. 1000000

LOS ACTOS RECLAMADOS para el efecto de que **se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no se apliquen ninguno de los artículos reformados o adicionados, incluyendo los transitorios, del Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014, expedido por la H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA**; toda vez que con dicha suspensión no se contravienen disposiciones del orden público ni se afecta el interés social.

Lo anterior es así, toda vez que entre dichas reformas se limita a dos años la ocupación de los cargos de Gubernatura del Estado de Baja California, Munícipes de los Ayuntamientos de los cinco Municipios del Estado de Baja California y Diputaciones Locales por principio de mayoría relativa, ya que los establece tan solo para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021; con lo cual se afecta gravemente el patrimonio del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que resulta insuficiente dicho lapso de tiempo para que se lleven a cabo, se continúen y concluyan los proyectos y planes de desarrollo del mismo; lo que desde luego afectará gravemente su economía, impidiéndole acrecentar su patrimonio en beneficio del propio Ayuntamiento; además de que con ello se verá beneficiada la sociedad de Ensenada, Baja California.

Por lo antes expuesto y fundado:

A Usted C. Juez atentamente pedimos:

PRIMERO. Tenemos por presentados en representación del **MUNICIPIO** y del **AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad señalada como responsable.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la demanda de garantías, y mandar formar los cuadernos de suspensión por duplicado, solicitando a la autoridad señalada responsable su informes justificado y previo, respectivamente, dándole la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que manifieste lo que a su representación social compete y señalar día y hora para que tengan verificativo las audiencias constitucional e incidental.

Tercero. Conceder la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva, para los efectos que se han precisado, expidiendo a nuestra costa copia certificada por duplicado del auto en que se conceda la primera y de la resolución en que se otorgue la segunda.

SIN TEXTO



SECRETARIA DE
HERRAMIENTAS DE J
SECRETARIA GE
SECCION DE HANT
SECRETARIA DE
SECRETARIA

Cuarto. En su oportunidad conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos que se han precisado.

Tijuana, Baja California, en la fecha de presentación.

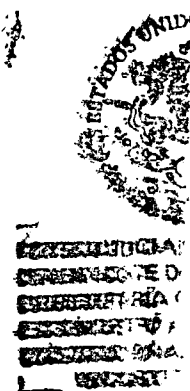
PROTESTAMOS A USTED MIS RESPETOS

MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA,
Presidente Municipal de Ensenada, B.C.

LAURA KARINA CASTREJÓN BAÑUELOS
Síndico Procurador de Ensenada, B.C.

EL LA-EDU-MA-0000
STI-DE-CA-0000
E-BA-DE-AL-0000
DE-CA-0000
Y DE-CA-0000
10/00/00

SIN TEXTO



TURNOS DE DEMANDA DE AMPARO

Número de registro: 001238/2019

Fecha de recibido: jueves, 07/03/2019

Fecha de turno: jueves, 07/03/2019

Juzgado Segundo de
Distrito en Materias
de Amparo y
de Juicios Federales

Hora de recibido: 17:49 Hrs.

Hora de turno: 17:49 Hrs.

Turnado al: JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN TIJUANA, B.C.

Tipo de asunto: INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY

Número de quejosos: 1

Ingreso: VENTANILLA

Quejoso: ANTONIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. A TRAVÉS DE PRESIDENTE MIRNA CECILIA RINCON VARGAS

Autoridad: CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESIDENCIA EN MEXICALI

Acto reclamado: ILEGAL NOTIFICACION QUE SE HIZO O PRETENDIO HACERSE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO LIC. SILVANO ABARCA MACLIS AL QUE SE ACOMPAÑO COPIA CERTIFICADA DEL DICTAMEN NUMERO 1 DE LA COMISION DE REFORMA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE B.C.; DECRETO 112 EXPEDIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA INCONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE B.C., ENTRE OTROS ACTOS

Anexos: 2

Atenta contra la libertad: NO

Descripción de anexos: COPIA CERTIFICADA DE BANDO SOLEMNE; COPIA DE DECRETO 112

Demandado: No interesado: N/E

Expediente: NO MENCIONA

Autorizado: EN GUAYTERMO RUIZ HERNANDEZ Y OTROS

Observaciones: AGENCIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES

Fecha de cambio de turno: @

Hora de cambio de turno: @



Irma K. Figueroa Cárdenas
Técnica de Estrategia
Materia de Amparo
y Juicios Federales

27 367/19

LA INTERACCIÓN
DE LAS INSTITUCIONES
DE ACUERDO
CON LAS NORMAS
DE LA LEY

SIN TEXTO





XXII LEGISLATURA DE Baja California

#CongresoDeResultados

HONORABLE XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 36 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXPIDE EL SIGUIENTE:

BANDO SOLEMNE

Que en el presente Bando Solemne se hace saber que los Municipales que fueron electos para integrar el VII Ayuntamiento del MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, periodo Constitucional comprendido del día 1 de diciembre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2019, son:

MIRNA CECILIA RINCÓN VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO

CLAUDIA VERÓNICA LEÓN RIVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

MIGUEL ÁNGEL VILA RUIZ

SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO

DAVID ALFREDO RIVERA HERNÁNDEZ

SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE

BELEM DEL CARMEN ABARCA MENDOZA

REGIDOR PROPIETARIO

ANA CLAUDIA ARAUJO LUEVANOS

REGIDOR PROPIETARIO

NANCY CORDERO GASILLAS

REGIDOR SUPLENTE

MICHEL E HINOJO OCEGUERA

REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL APOLINAR CALLES MUÑOZ

REGIDOR PROPIETARIO

JULIO CESAR GARCÍA SERNA

REGIDOR PROPIETARIO

FRODO GONZÁLEZ VILLENA

REGIDOR SUPLENTE

ORLANDO HERRERA RUELAS

REGIDOR SUPLENTE

NANCY VERÓNICA RAMÍREZ RAMÍREZ

REGIDOR PROPIETARIO

MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ

REGIDOR PROPIETARIO

DIOSELMO SALCEBA GARCÍA

REGIDOR SUPLENTE

MANUEL REAL BECERRA

REGIDOR SUPLENTE

LUIS RICARDO MARTÍNEZ CABRALES

REGIDOR PROPIETARIO

MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

REGIDOR PROPIETARIO

JESÚS GONZÁLEZ LOMELI

REGIDOR SUPLENTE

RUBÉN OCHOA AYALA

REGIDOR SUPLENTE

ANA LUISA ESQUIVEL FIERRO

REGIDOR PROPIETARIO

ELÍAS MENDOZA ROJAS

REGIDOR PROPIETARIO

HILDA ANAHI MACHADO SÁNCHEZ

REGIDOR SUPLENTE

FABIAN MAYORAL MAYORAL

REGIDOR SUPLENTE

En el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, B.C. a los veintinueve días del mes de noviembre de 2016:

RAÚL CASTAÑEDA POMPOS
Presidente

MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN
Prosecretaría



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO

Horizonte de Posibilidades

EL CIUDADANO, DIEGO ALFONSO RAMÍREZ ROBLES, SECRETARIO
GENERAL DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO,
BAJA CALIFORNIA:

CERTIFICA:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA
COMPULSADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJE
EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C. Y CONSTA DE (1) UNA FOJA ÚTIL
ESCRITA POR UN SOLO LADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 FRACCION III DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, Y
FRACCION VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA
CALIFORNIA, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE
HAYA LUGAR, A LOS (31) TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE:

UN HORIZONTE DE POSIBILIDADES



DIEGO ALFONSO RAMÍREZ ROBLES
SECRETARÍA GENERAL DEL
H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

LA H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 112

ÚNICO: Se aprueban las reformas a los artículos 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 y 78, y la adición del Capítulo III denominarse "De la Jurisdicción Electoral" al Título Quinto, integrándose con el numeral 68, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California para quedar como sigue:

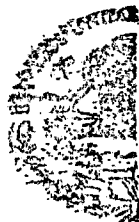
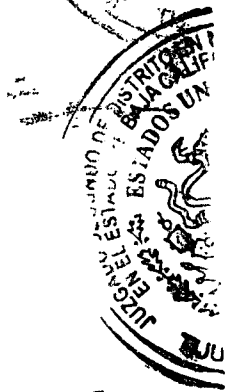
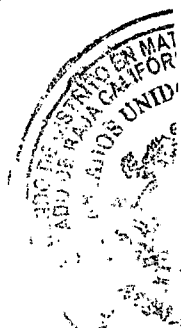
ARTÍCULO 5.- ...

La duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

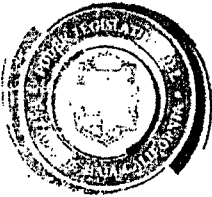
El proceso electoral dará inicio el último domingo del mes de septiembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

La Ley electoral establecerá las faltas y sanciones administrativas, que se deriven de su incumplimiento o inobservancia.

SIN TEXTO



GOVERNMENT OF
SURRENDERED TO
SUBSEQUELARY
REGIONALITY
CONSTITUTIONAL
RESISTANCE



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

APARTADO A.- Los Partidos Políticos:

En los términos de las leyes electorales, los partidos políticos tienen el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargo de elección popular, y podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las figuras de coaliciones totales, parciales o flexibles.

Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir con la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados, tanto propietarios como suplentes.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán registrar por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral, el cual tendrá la obligación de registrarlos para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado. El Instituto, en año no electoral, dará seguimiento de los compromisos de campaña mediante la emisión de informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso del Estado.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto Estatal Electoral, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

El acceso de los partidos políticos y de los candidatos independientes a los tiempos en radio y televisión se estará a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables.

Los partidos políticos de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, recibirán en forma equitativa, financiamiento público para la realización de sus fines.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MÉXICO



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

La ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el de origen privado.

El financiamiento para los partidos políticos que conserven su registro después de cada elección, se compondrá de financiamiento público permanente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, las de campaña electoral tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales en los términos de la Ley.

La Ley determinará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

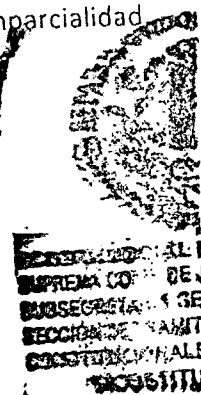
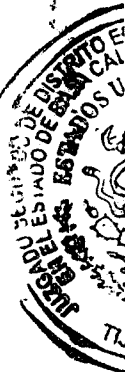
El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, le será cancelado el registro.

El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos estatales que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes, se hará en los términos que establezca la Ley.

El incumplimiento de las normas que regulen la comprobación de ingresos, egresos, topes de gastos y aportaciones, así como la liquidación de los partidos políticos, serán sancionados en los términos de las leyes correspondientes.

APARTADO B.- Del Instituto Estatal Electoral.

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.





XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, cuando exista causa justificada para ello, y en los términos que disponga la ley.

El Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, de conformidad con la distribución de competencias que establecen las leyes de la materia, así como los convenios que suscriban, y agrupará para su desempeño, en forma integral y directa las siguientes actividades:

- I.- Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica;
- II.- Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
- III.- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales;
- IV.- Preparar de la Jornada Electoral;
- V.- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones;
- VI.- Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos;
- VII.- Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de las fórmulas de representación proporcional;
- VIII.- Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;
- IX.- Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;
- X.- Complementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral; y
- XI.- Las demás que determinen las leyes aplicables.

El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y secretarios para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la Ley. La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

El órgano de dirección superior denominado Consejo General Electoral, se integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, contará además con un Secretario Ejecutivo. Los representantes de los partidos políticos, así





XXI LEGISLATURA

como el Secretario Ejecutivo concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la Ley General correspondiente. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios del Estado o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley.

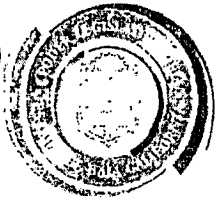
Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley respectiva.

Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos empujados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

El Secretario Ejecutivo investido de fe pública para actos de naturaleza electoral, será nombrado en los términos de ley, por el órgano de dirección superior a propuesta del Consejero Presidente, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez; en el supuesto de que transcurridas dos rondas de votación, el aspirante propuesto no alcanzare la votación requerida, la designación se hará por mayoría simple del Consejo General Electoral.

Los Consejos Distritales son órganos operativos del Instituto Estatal Electoral, que se integrarán por cinco Consejeros Electorales Distritales nombrados por las dos terceras partes de los integrantes del órgano de dirección superior del cual dependen; así como por representantes acreditados por los partidos políticos, con voz pero sin voto, en la forma que establezca la Ley y, un Secretario Fedatario nombrado mediante votación de las dos terceras partes de los Consejos Distritales a propuesta de cada uno de los Consejeros Presidentes, la Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación.

DIRECTORIAL
 DEPARTMENT
 DEPARTMENT
 DEPARTMENT
 DEPARTMENT
 DEPARTMENT
 DEPARTMENT



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

Los trabajadores incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, registrarán sus relaciones laborales por las disposiciones aplicables.

La selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos en el Servicio Profesional Electoral Nacional, será en los términos en que se regule por el Instituto Nacional Electoral.

Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos que disponga la Ley.

La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.

APARTADO C.- Participación Ciudadana



El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular. Asimismo, tratándose de la solicitud ciudadana, verificará que se acompañe de las firmas correspondientes, a solicitud del Congreso, realizando la certificación respectiva.

LA FEDERACIÓN
ESTADAL DE ESTATOS UNIDOS
REPUBLICANOS
DE ACCIÓN
CIVIL



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

APARTADO D.- De las candidaturas independientes.

Es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado, poder ser votado para los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo solicitar su registro de manera independiente siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto.

De conformidad con el procedimiento que se establezca en la Ley, los ciudadanos tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral local para ocupar los cargos de Gobernador, Municipales por el principio de mayoría relativa, y Diputados por el principio de mayoría relativa.

Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de diputados o municipales por el principio de representación proporcional.

Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público de campaña en los términos de Ley.

APARTADO E.- Justicia Electoral y sistema de nulidades.

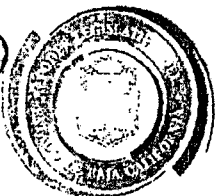
Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación; este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

- a).- Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.

REGISTRADO
SECRETARÍA DE
GOBIERNO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE
GOBIERNO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

b).- Se compre o adquiera cobertura informativa en tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c).- Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Los actos o resoluciones dictados con motivo del desarrollo de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana relativos a la Consulta Popular, Plebiscito o Referendum podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley.

ARTÍCULO 35.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan a cada partido político, se hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente:



Los partidos políticos que los partidos políticos tengan este derecho deberán:

a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, y

b) Haber obtenido el registro de la lista de dos candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional. Este requisito solo será exigible a los partidos políticos que participen en coalición;

II.- El Instituto Estatal Electoral una vez verificados los requisitos de la fracción anterior, asignará un Diputado a cada partido político que tenga derecho a ello. Esta primera asignación corresponderá a los candidatos a diputados que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría.

DE LA ELECCIÓN
USTO...
REP...
DE...
BY...
TODAL...



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el de diputaciones por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse;

III.- Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción anterior, aún quedasen diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos, en los siguientes términos:

a) Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que reúnan los requisitos que señala la fracción I de este artículo, mediante el siguiente procedimiento:

1.- Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos, en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, que reúnan los requisitos, y

2.- ...

b).- Se procederá a multiplicar el porcentaje de la votación obtenido por los partidos políticos, en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, por veinticinco;

c).- ...

d).- Se asignará una diputación de representación proporcional por cada número entero que se haya obtenido en la operación señalada en el inciso anterior, procediendo en estricto orden de prelación conforme al porcentaje obtenido, de cada partido político, en los términos del párrafo segundo de la fracción II de este artículo e inciso a) de esta fracción, y

e).- ...

IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete Diputados por ambos principios;

V.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda del

SECRETARÍA
DE GOBIERNO
ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA
DE GOBIERNO
ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA
DE GOBIERNO
ESTADO DE VERACRUZ



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Para base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de su total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

Asimismo, en la integración de la legislatura el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.

VI.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda a cada partido político, la hará el Instituto Estatal Electoral, en los términos que seale la Ley.

ARTÍCULO 16.- Los Diputados se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera consecutiva de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULO 19.- El Congreso se renovará totalmente cada tres años y se instalará el día primero de Agosto posterior a la elección.

ARTÍCULO 20.- El Instituto Estatal Electoral de acuerdo con lo que establezca la Ley, otorgará las constancias de mayoría a las formulas de candidatos que la hayan obtenido y dará la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establece el Artículo 15 de esta Constitución y la Ley.

ARTÍCULO 21.- Derogado.

ARTÍCULO 22.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos de Sesiones ordinarias. El Primer Período inicia a partir del primero de agosto al último día de noviembre de cada año, el Segundo Período comprende del primero de diciembre al

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDOS
ITE DE CONTROL
ESTADUAL
UCIONALIDAD



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

último día de marzo de cada año, y el Tercer Período será a partir del primero de abril al último día de julio de cada año.

APARTADOS A y B.- ...

APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia.

APARTADO D.- ...

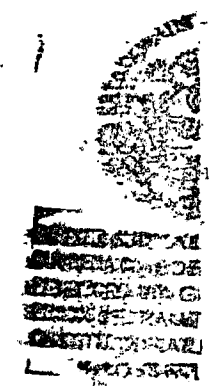
ARTÍCULO 27.- ...

I a VI.- ...

VII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración del Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

VIII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en el Municipio respectivo la declaración de munícipes electos que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

IX a XIV.- ...





XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

La remuneración de los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión.

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no serán considerados trabajadores para efectos de la Ley especial de la materia.

Durante su encargo, los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, sólo podrán ser removidos en los términos que se señalan en esta Constitución y la Ley.

ARTÍCULO 58.- ...

El nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se efectuará bajo el siguiente procedimiento:

I.- Inmediatamente que exista una o varias vacantes de Magistrados o seis meses antes de que la misma fuere previsible, el Consejo de la Judicatura deberá dar inicio al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del conocimiento del Congreso, el cual incluirá exámenes psicométricos, oposición y de méritos correspondientes, conforme a la Ley y el reglamento respectivo. El Consejo de la Judicatura, tendrá hasta noventa días naturales para desahogarlo, desde que emita la convocatoria pública, hasta que realice la entrega de la lista por conducto de su Presidente al Congreso;

II.- El Congreso resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba la lista, por mayoría calificada de sus integrantes, los nombramientos de Magistrados entre los aspirantes que integren la lista, la cual deberá contener en orden de puntuación únicamente a los profesionistas que hayan aprobado en el proceso de evaluación que practique el Consejo de la Judicatura;

III.- En caso de que el Congreso no aprobara el nombramiento o nombramientos, o solo cubriera algunas de las vacantes de Magistrados, o fuera omiso en el término previsto en la fracción anterior, el Consejo de la Judicatura abrirá un nuevo proceso de evaluación.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE J
SECRETARÍA GE
SECRETARÍA DE TRAMITI
SECRETARÍA DE LEY
SECRETARÍA DE JUSTICIA



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

que se deberá desahogar y remitir al Congreso dentro de los treinta días naturales siguientes, en el cual podrá participar cualquier interesado e incluirse en la lista a quienes hayan aprobado en el proceso de evaluación previsto en la fracción I de este artículo, y

IV.- Recibida la segunda lista, el Congreso tendrá hasta treinta días naturales para nombrar por mayoría calificada de sus integrantes al Magistrado o Magistrados, y si no lo hiciese en dicho término, ocuparán los cargos de Magistrados las personas que se encuentren en los primeros lugares de la lista, la cual deberá ser elaborada en los términos señalados en las fracciones II y III de este artículo.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de Ley, al término de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a).- Al cumplir setenta años de edad.
- b).- Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
- c).- Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones.
- d).- En los demás casos que establezca esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Tratándose de los incisos a) y b) de este artículo el Consejo de la Judicatura notificará al Magistrado, a más tardar seis meses antes, la fecha en que concluirá en definitiva su encargo, señalando la causa en que se funda la privación de su puesto. El supuesto previsto en el inciso c), se tendrá por acreditado en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Un año antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado el Magistrado, el Consejo de la Judicatura procederá a elaborar un dictamen técnico de evaluación en el que analice minuciosamente su actuación y desempeño y emita una opinión al respecto. El dictamen, así como el expediente del Magistrado, deberá ser remitido al Congreso, dentro de los noventa días naturales siguientes, debiendo contener todos aquellos elementos objetivos y requisitos que señale la ley y que den a conocer si el Magistrado sujeto a proceso de ratificación, durante su desempeño, ha ejercido el cargo con excelencia profesional, honestidad, diligencia y que goza de buena reputación y buena fama en el concepto público, además de precisar si conserva los requisitos requeridos para su nombramiento previstos en el artículo 60 de esta Constitución.

ELABORADO POR:
STICIA ALI...
GERAL...
IDE CON...
AT: DE...
MONTE...



XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

El Congreso con base en lo anterior, y una vez que escuche al Magistrado sujeto a proceso, de ratificación, resolverá sobre su ratificación o no ratificación, mediante mayoría calificada de sus integrantes, a más tardar seis meses antes de que el Magistrado concluya su encargo.

Si el Congreso resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado y se procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

ARTÍCULO 61.- Cuando ocurra la falta absoluta de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se estará a lo dispuesto por el artículo 58 de esta Constitución.

Los Magistrados y Consejeros Suplenumerarios cubrirán las faltas temporales de los Numerarios, así como las faltas absolutas de los mismos hasta en tanto el Congreso efectúe el nombramiento correspondiente, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

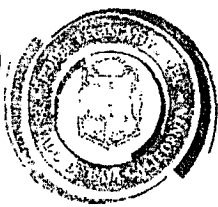
TÍTULO QUINTO CAPÍTULO III DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 68.- El Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y como órgano constitucional autónomo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio.

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como órgano jurisdiccional especializado en materia electoral con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

El Tribunal de Justicia Electoral se integrará por tres Magistrados electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la Constitución Federal y la Ley General de la materia. Los magistrados electorales permanecerán en su encargo durante siete años.

DE
JU.
GENI
SITE
LES
VCI



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

Todas las sesiones del Tribunal serán públicas.

Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Tribunal, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dependencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

El Tribunal expedirá su Reglamento Interno y las disposiciones administrativas para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO 78.- ...

Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus funciones el día primero de octubre que siga a su elección. Al efecto, el día inmediato anterior, se reunirán los munícipes electos, en sesión solemne con la finalidad de rendir protesta ante la comunidad e instalar los ayuntamientos.

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos durarán en su cargo tres años, pudiendo ser elegidos por un periodo adicional consecutivo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

SEGUNDO.- La reforma al artículo 16 de esta Constitución en materia de reelección de diputados, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- La reforma al artículo 78 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- El Congreso del Estado deberá adecuar las normas electorales del Estado, a más tardar en el mes de febrero de 2015.

QUINTO.- La reforma prevista en el artículo 22 del presente Decreto, referente a los periodos ordinarios del Congreso del Estado, iniciará vigencia a partir del primero de octubre del 2016; por única ocasión, el primer periodo ordinario de sesiones de la XXII Legislatura Constitucional, será del primero de octubre al treinta de noviembre de 2016.

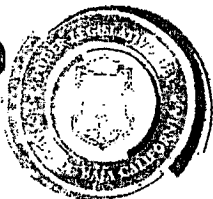
SEXTO.- La reforma prevista en el artículo 19, mediante el cual se adelanta la instalación del Congreso del Estado, al mes de agosto del año que corresponda, será aplicable a los Diputados que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de diputados con el proceso electoral federal 2021, los periodos de la XXII y XXIII Legislatura, serán los siguientes:

- a).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su periodo el primero de octubre de 2016 y concluirán el treinta y uno de julio del 2019.
- b).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán sus funciones el primero de agosto de 2019 y concluirán el treinta y uno de julio del 2021.

SÉPTIMO.- La reforma prevista en el artículo 78, mediante el cual se adelanta el inicio de funciones de los ayuntamientos del Estado, al mes de octubre del año que corresponda, será aplicable a los munícipes que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de munícipes con el proceso electoral federal 2021, los periodos de los ayuntamientos respectivos, serán los siguientes:

- a).- Los munícipes electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su periodo el primero de diciembre de 2016 y concluirán el treinta de septiembre del 2019.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
SECRETARÍA DE CULTURA



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

b).- Los munícipes electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de octubre de 2019 y concluirán el treinta de septiembre del 2021.

OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.

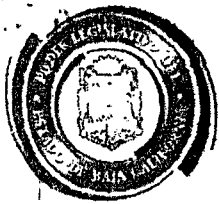
La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027.

NOVENO.- De conformidad con el artículo transitorio noveno del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los actuales consejeros electorales del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las nuevas designaciones en los términos de dicho transitorio.

DECIMO.- Una vez designado por el Instituto Nacional Electoral los nuevos consejeros estatales, éstos procederán dentro de los diez días siguiente a instalar el órgano de dirección superior del Instituto Estatal Electoral debiendo nombrar en esa misma sesión al Secretario Ejecutivo del Instituto. Quiénes se encuentren ejerciendo las atribuciones que correspondan a la Dirección General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de Secretario Fedatario del Consejo General del Instituto que se abroga, continuarán en funciones hasta en tanto no sea designado el Secretario Ejecutivo.

En caso de que a la fecha de integración del Instituto Estatal Electoral no hubieren entrado en vigor las leyes secundarias que derivan del presente Decreto, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en cuanto no contravengan las derivadas de las Leyes Generales en la materia.

REGISTRACIÓN
INSTRUMENTOS
JUDICIALES
CONTROVERSIA
ECONOMÍA
FISCAL



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pasarán a formar parte del Instituto Estatal Electoral una vez que quede integrado en términos del transitorio anterior.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los gastos realizados por los partidos políticos hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán fiscalizados por el Instituto Electoral local con sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre de 2014.

DÉCIMO TERCERO.- El titular del órgano técnico del Consejo General Electoral del Instituto Electoral (Dirección de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos) que se deroga conforme al presente Decreto, estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiéndose dictaminar y resolver a más tardar en dicha fecha, las fiscalizaciones de los partidos políticos, conforme lo dispone el artículo décimo octavo transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

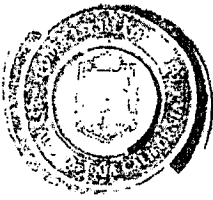
DÉCIMO CUARTO.- El titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que se abroga con el presente Decreto, estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiendo concluir a más tardar en dicha fecha los asuntos en trámite y entregar al Consejo General Electoral un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, los asuntos y recursos a su cargo.

DÉCIMO QUINTO.- Los Magistrados numerarios y supernumerarios del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, continuarán en su cargo hasta en tanto se sustituyan por los nuevos Magistrados Electorales, en los términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEXTO.- Una vez designado por el Senado de la República los nuevos Magistrados Electorales, éstos procederán dentro de los cinco días siguientes a instalar el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como órgano constitucional autónomo, debiendo designar al Secretario General de Acuerdos.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, una vez que quede integrado en términos de los transitorios anteriores.

SECRETARÍA
DE
ESTADOS
SECRETARÍA
DE
ESTADOS



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0040

0040

32

DÉCIMO OCTAVO.- Los medios de impugnación, denuncias y quejas que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite y las que se presenten en forma posterior pero antes de la reforma a la Ley de la materia, deberán resolverse conforme a las disposiciones vigentes al momento de su interposición.

DÉCIMO NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

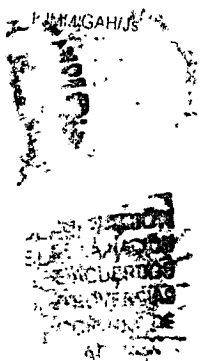
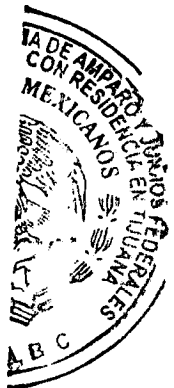
DADO en el Salón de Sesiones del Honorable Benito Juárez García del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los once días del mes de septiembre del año dos mil catorce.



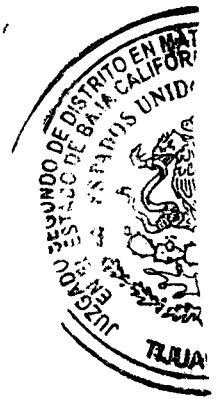
DIP. FELIPE DE JESUS MAYORAL MAYORAL
PRESIDENTE



DIP. GERARDO ALVAREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO



0A-9



GOBIERNO FEDERAL DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SECRETARIA DE INTERIORES
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INSTITUCION



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

ORIGINAL DEL EJECUTIVO
SECRETARÍA PARTICULAR

RECIBID
GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

SEP 25 2014

DEPENDENCIA: CONGRESO DEL ESTADO

SECCIÓN: PRESIDENCIA

OFICIO No.:

002919

EXPEDIENTE:

ASUNTO: Se remite Decreto N° 112 para su publicación.

LAE. FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID,
Governador Constitucional del Estado de Baja California
Presente.-

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y 3, fracción I de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California, se remite en veinte (20) fojas útiles, Decreto N° 112, mediante el cual se aprueban las reformas a los artículos 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 y 78, y la adición del Capítulo III a denominarse "De la Jurisdicción Electoral" al Título Quinto, integrándose con el numeral 68, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

El presente ordenamiento fue aprobado en Sesión Ordinaria de la H. XXI Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el día 10 de julio de 2014, y declarado procedente conforme al procedimiento establecido en el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C. en Sesión Ordinaria de la H. XXI Legislatura Constitucional del Estado, celebrada el día 11 de septiembre de 2014.

Sin otro particular, reiteramos a Usted la seguridad de nuestra distinguida consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., 11 de septiembre de 2014
Por la Mesa Directiva

DIP. FELIPE DE JESUS MAYORAL MAZOR
PRESIDENTE

DIP. GERARDO ALVAREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

C.c.p. Dip. Fausto Gallardo García.- Presidente de la Comisión de Reforma del Estado.

C.c.p.-Lic. Juan Macklis Anaya.- Dirección General de Proceso Parlamentario de la H. XXI Legislatura.

C.c.p.-C.P. Francisco Rueda Gómez.- Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California.

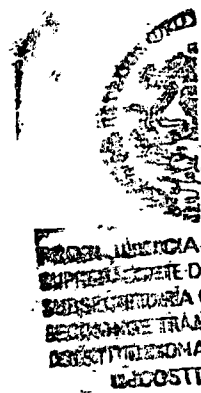
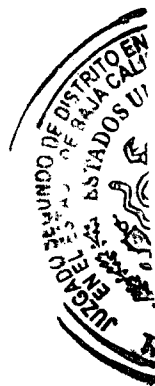
C.c.p.-Lic. Jorge Sáucedo Esquerre.- Director de Seguimiento Legislativo de la Secretaría Gral. de Gob.

FJMM/GAH/JS

A FERIA DE
NACIONALIZACIÓN
AL DE
CONTENIDO
DE ACCIÓN
NACIONAL

RECIBID
SEP 25 2014
M 2:20pm
SECRETARIA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

SIN TEXTO





XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

LA H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

DECRETO No. 112

ÚNICO: Se aprueban las reformas a los artículos 5, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 44, 57, 58, 61, 68 y 78, y la adición del Capítulo III denominarse "de la Jurisdicción Electoral" al Título Quinto, integrándose con el número 68, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.- ...

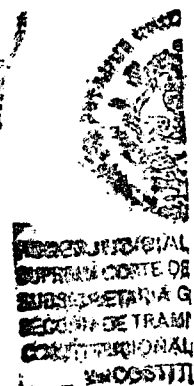
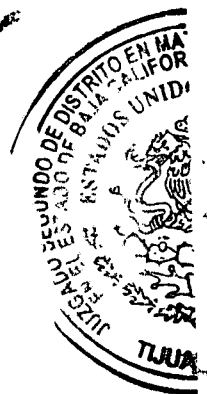
La duración de las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador, y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan diputados o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

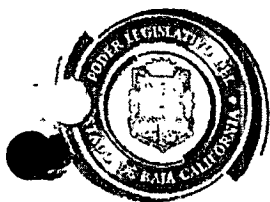
El proceso electoral dará inicio el último domingo del mes de septiembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

La Ley electoral establecerá las faltas y sanciones administrativas, que se deriven de su incumplimiento o inobservancia.

DE LA F. C. JURISDICCION
JUSTICIA ELECTORAL
EN SALA DE LOS JUICIOS
FE DE CONFECCION
MES Y DIA
JURISDICCION

SIN TEXTO





XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0043

325

0-43

APARTADO A.- Los Partidos Políticos:

En los términos de las leyes electorales, los partidos políticos tienen el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las figuras de coaliciones totales, parciales o flexibles.

Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir con la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados, tanto propietarios como suplentes.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán registrar por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral, el cual tendrá la obligación de registrarlos para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado. El Instituto, en año no electoral, dará seguimiento de los compromisos de campaña mediante la emisión de informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso del Estado.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto Estatal Electoral, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado.

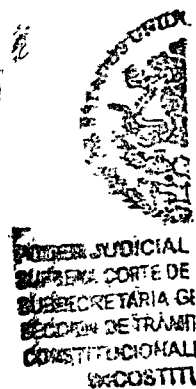
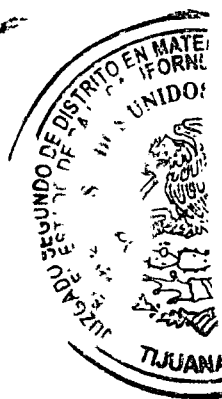
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

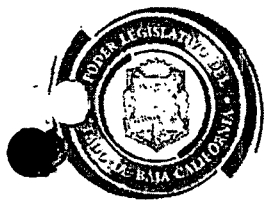
El acceso de los partidos políticos y de los candidatos independientes a los tiempos en radio y televisión se estará a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables.

Los partidos políticos de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, recibirán en forma equitativa financiamiento público para la realización de sus fines.

EL REGISTRO
DE CANDIDATOS
A CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR
DE LA LEGISLATURA
XXI PERÍODO ORDINARIO
DE LA JUNTA ELECTORAL
ESTADAL DE BAJA CALIFORNIA

SIN TEXTO





XXI LEGISLATURA

El Poder Ciudadano

La ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el de origen privado.

El financiamiento para los partidos políticos que conserven su registro después de cada elección, se compondrá de financiamiento público permanente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, las de campaña electoral tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales en los términos de la Ley.

La Ley determinará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes.

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, perderá cancelado el registro.

El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos estatales que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes se hará en los términos que establezca la Ley.

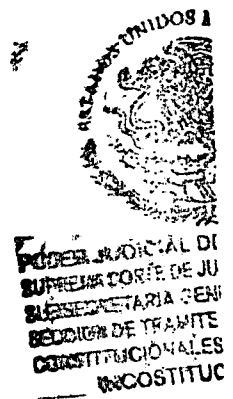
El incumplimiento de las normas que regulen la comprobación de ingresos, egresos, topes de gastos y aportaciones, así como la liquidación de los partidos políticos, serán sancionados en los términos de las leyes correspondientes.

APARTADO B.- Del Instituto Estatal Electoral.

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

DE LA EL. ACIÓN
BUT. L. A. LOS A. LOS
GENERAL DE A. LOS
DE DE DON. T. A. LOS
ES. A. LOS
REGIONALIDAD

SIN TEXTO





XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

El Instituto Estatal Electoral podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral, se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, cuando exista causa justificada para ello, y en los términos que disponga la ley.

El Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, de conformidad con la distribución de competencia que establecen las leyes de la materia, así como los convenios que suscriban, y agrupará para su desempeño, en forma integral y directa las siguientes actividades:

- I.- Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica;
 - II.- Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
 - III.- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales;
 - IV.- Preparar de la Jornada Electoral;
 - V.- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones;
 - VI.- Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos;
 - VII.- Expedir las constancias de mayoría y la de asignación de las fórmulas de representación proporcional;
 - VIII.- Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;
 - IX.- Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;
 - X.- Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional Electoral; y
- as demás que determinen las leyes aplicables.

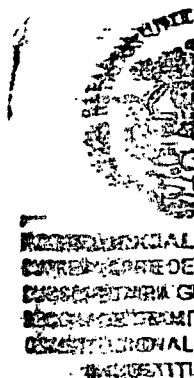
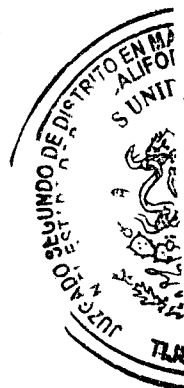
El Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fiscalizadores para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por la Ley. La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

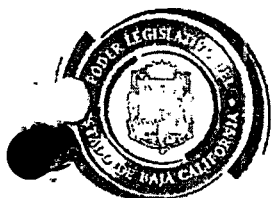
El órgano de dirección superior denominado Consejo General Electoral, se integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto, contará además con un Secretario Ejecutivo. Los representantes de los partidos políticos, así



SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA

SIN TEXTIO





XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

como el Secretario Ejecutivo concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano.

El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la Ley General correspondiente. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios del Estado o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley.

Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley respectiva.

Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dependencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

El Secretario Ejecutivo investido de fe pública para actos de naturaleza electoral, será nombrado en los términos de ley, por el órgano de dirección superior a propuesta del Consejero Presidente, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá permanecer en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez; en el supuesto de que transcurridas dos rondas de votación, el aspirante propuesto no alcanzare la votación requerida, la designación se hará por mayoría simple del Consejo General Electoral.

Los Consejos Distritales son órganos operativos del Instituto Estatal Electoral, que se integrarán por cinco Consejeros Electorales Distritales nombrados por las dos terceras partes de los integrantes del órgano de dirección superior del cual dependen; así como por representantes acreditados por los partidos políticos, con voz pero sin voto, en la forma que establezca la Ley y, un Secretario Fedatario nombrado mediante votación de las dos terceras partes de los Consejos Distritales a propuesta de cada uno de los Consejeros Presidentes, la Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación.

DE LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

SIN TEXTO



FEDERAL
SUPERINTENDENTE DE
REGISTRO Y NOTARÍA
SECCIÓN DE REGISTRO
INSTITUCIÓN CALI
-GROSSITU

XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

Los trabajadores incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional, registran sus relaciones laborales por las disposiciones aplicables.

La selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos en el Servicio Profesional Electoral Nacional, será en los términos en que se regule por el Instituto Nacional Electoral.

Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas, en los términos que disponga la Ley.

La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.

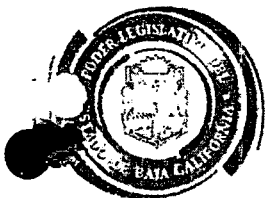
APARTADO C.- Participación Ciudadana.

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular. Asimismo, tratándose de la solicitud ciudadana, verificará que se acompañe de las firmas correspondientes, a solicitud del Congreso, realizando la certificación respectiva.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPLENTE DE
SUBSECRETARÍA DE
RECORRERÍA DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL
— GUSTITU



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0048

330

0148

APARTADO D.- De las candidaturas independientes.

Es derecho de los ciudadanos residentes en el Estado poder ser votado para los cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa, pudiendo solicitar su registro de manera independiente siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determinen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto.

De conformidad con el procedimiento que se establezca en la Ley, los ciudadanos tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes dentro de un proceso electoral local para ocupar los cargos de Gobernador, Municipales por el principio de mayoría relativa, y Diputados por el principio de mayoría relativa.

Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de diputados o municipales por el principio de representación proporcional.

Los candidatos independientes tendrán derecho al financiamiento público de campaña en los términos de Ley.

APARTADO E.- Justicia Electoral y sistema de nulidades.

Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. Este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.

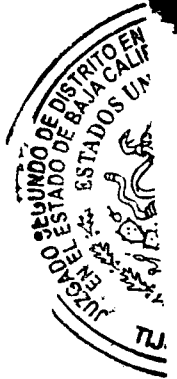
En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

- a).- Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

LA SECRETARÍA DE
JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
SERAL DE ACUERDO
CON EL CONSTITUCIONAL
DE LA LEY DE LOS
JUDICIALES

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONAL
INCOGITI



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0049

331

0 49

b).- Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c).- Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Los actos o resoluciones dictados con motivo del desarrollo de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana relativos a la Consulta Popular, Plebiscito o Referéndum, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley.

ARTÍCULO 15.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan a cada partido político, se hará por el Instituto Estatal Electoral de acuerdo con el procedimiento que se establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente:

I.- Para que los partidos políticos tengan este derecho deberán:

a).- ...

b).- Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, y

c).- Haber obtenido el registro de la lista de los candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional. Este requisito solo será exigible a los partidos políticos que participen en coalición;

II.- El Instituto Estatal Electoral una vez verificados los requisitos de la fracción anterior, asignará un Diputado a cada partido político que tenga derecho a ello. Esta primera asignación corresponderá a los candidatos a diputados que tengan mayor porcentaje de votación válida en el distrito y que no hayan obtenido constancia de mayoría.

LA REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL
MEXICANA
ESTADAL DE ACUERDOS
CONSTITUCIONALES
ESTADAL

0005

SIN TEXTO



REGISTRADO
EXHIBICION
SECRETARIA
SECRETARIA
CONSTITUCION
L. 100051



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el de diputaciones por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse;

III.- Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción anterior, aún quedasen diputaciones por asignar, se otorgarán a los partidos políticos, en los siguientes términos:

a) Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos que reúnan los requisitos que señala la fracción I de este artículo, mediante el siguiente procedimiento:

1.- Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos, en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, que reúnan los requisitos, y

2.- ...

b).- Se procederá a multiplicar el porcentaje de la votación obtenido por los partidos políticos, en la elección de Diputados por el principio de representación proporcional de cada partido político, por veinticinco,

c).- ...

- Se asignará una diputación de representación proporcional por cada número entero que se haya obtenido en la operación señalada en el inciso anterior, procediendo en estricto orden de prelación conforme al porcentaje obtenido, de cada partido político, en los términos del párrafo segundo de la fracción II de este artículo e inciso a) de esta fracción, y

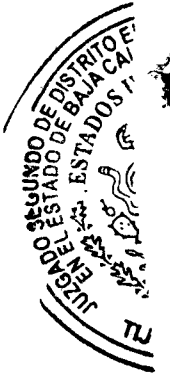
IV.- Ningún partido político podrá tener más de diecisiete Diputados por ambos principios;

V.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y ESTE ALGUNOS D
COMUNICACIÓN

6766

SIN TEXTO



PÓDER JUDICIAL
SUPERINTENDENTE DE
SUBSECRETARÍA DE
SECCIONES TRAMITE
CONSTITUCIONALES
L. GONZALEZ



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0051

383

ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.

Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.

VI.- La asignación de los Diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda a cada partido político, la hará el Instituto Estatal Electoral, en los términos que señale la Ley.

ARTÍCULO 16.- Los Diputados se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera consecutiva de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULO 19.- El Congreso se renovará totalmente cada tres años y se instalará el día primero de Agosto posterior a la elección.

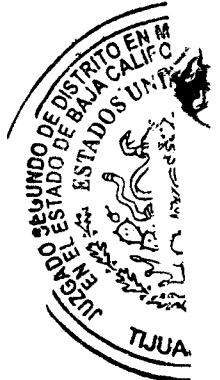
ARTÍCULO 20.- El Instituto Estatal Electoral de acuerdo con lo que establezca la Ley, dará las constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos que la hayan obtenido y hará la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establece el Artículo 15 de esta Constitución y la Ley.

ARTÍCULO 21.- Derogado.

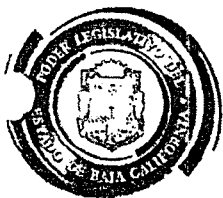
ARTÍCULO 22.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres periodos de Sesiones ordinarias, el Primer Período inicia a partir del primero de agosto al último día de noviembre de cada año, el Segundo Período comprende del primero de diciembre al

LA FEDERACIÓN
ESTADAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIA
SIN DE ACUERDOS
NO ALIADA

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE C
CONSTITUCIONALES Y DE
I - INCONSTITUCIONALES



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

10052

334

0-152

último día de marzo de cada año, y el Tercer Período será a partir del primero de abril al último día de julio de cada año.

APARTADOS A y B.- ...

APARTADO C.- De las Leyes de Ingresos, los Presupuestos de Egresos y las Cuentas Públicas.

En el Segundo Período Ordinario, antes de concluir el año, examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondientes al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia. Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de Egresos correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.

En el Tercer Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la materia.

APARTADO D.- ...

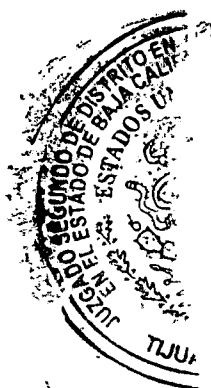
ARTÍCULO 27.- ...

VII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración de Gobernador Electo que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

VII.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en el Municipio respectivo la declaración de municipales electos que hubiere hecho el Instituto Estatal Electoral;

IX a XIV.- ...

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SEGUNDO DISTRITO EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
JUZGADO



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

XV.- Nombrar a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, así como a sus respectivos Supernumerarios en orden de prelación, y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, y designar a dos Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;

XVI a XVII.- ...

XVIII.- Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y del Gobernador; así como respecto a las renunciaciones y remociones de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y de los Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso.

XIX a XXXIX.- ...

ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:

I a la IV.- ...

V.- Al Instituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y

VI.- ...

ARTÍCULO 44.- El Gobernador será electo cada seis años, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y entrará a ejercer sus funciones el día primero del mes de septiembre posterior a la elección.

ARTÍCULO 57.- El Poder Judicial del Estado se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz y Jurados.

La Ley garantizará la independencia de los Magistrados, Consejeros y Jueces en el ejercicio de sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.

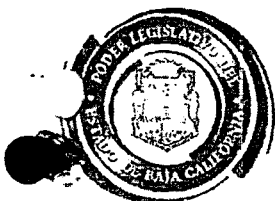
LA LEY
DE
LA
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DE ACUERDO

03 200

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE C
CONSTITUCIONALES Y DE
INCOSTITUCION



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0054

336

0054

La remuneración de los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión.

Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, no serán considerados trabajadores para efectos de la Ley especial de la materia.

Durante su encargo, los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura, del Poder Judicial, sólo podrán ser removidos en los términos que se señalan en esta Constitución y la Ley.

ARTÍCULO 58.- ...

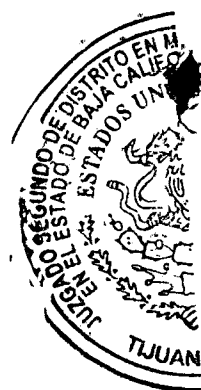
El nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se efectuará bajo el siguiente procedimiento:

I.- Inmediatamente que exista una o varias vacantes de Magistrados o seis meses antes si la misma fuere previsible, el Consejo de la Judicatura deberá dar inicio al proceso de evaluación de aspirantes, haciéndolo del conocimiento de Congreso, el cual incluirá exámenes psicométricos, oposición y de méritos correspondientes, conforme a la Ley y el reglamento respectivo. El Consejo de la Judicatura, tendrá hasta noventa días naturales desahogarlo, desde que emita la convocatoria pública, hasta que realice la entrega de la lista por conducto de su Presidente al Congreso;

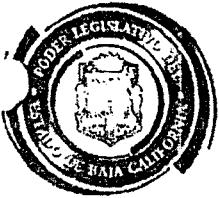
II.- El Congreso resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes a que reciba la lista, por mayoría calificada de sus integrantes, los nombramientos de Magistrados de entre los aspirantes que integren la lista, la cual deberá contener en orden de puntuación, únicamente a los profesionistas que hayan aprobado en el proceso de evaluación que practique el Consejo de la Judicatura;

III.- En caso de que el Congreso no aprobara el nombramiento o nombramientos, o solo cubriera algunas de las vacantes de Magistrados, o fuera omiso en el término previsto en la fracción anterior, el Consejo de la Judicatura abrirá un nuevo proceso de evaluación,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL E
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GEI
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSITUI



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

que se deberá desahogar y remitir al Congreso dentro de los treinta días naturales siguientes, en el cual podrá participar cualquier interesado e incluirse en la lista a quienes hayan aprobado en el proceso de evaluación previsto en la fracción I de este artículo, y

IV.- Recibida la segunda lista, el Congreso tendrá hasta treinta días naturales para nombrar por mayoría calificada de sus integrantes al Magistrado o Magistrados, y si no lo hiciese en dicho término, ocuparán los cargos de Magistrados las personas que se encuentren en los primeros lugares de la lista, la cual deberá ser elaborada en los términos señalados en las fracciones II y III de este artículo.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de fey, al término de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Al cumplir setenta años de edad.
- Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
- Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones.
- En los demás casos que establezca esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

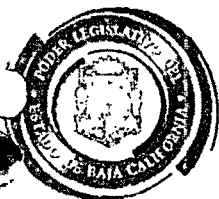
Tratándose de los incisos a) y b) de este artículo el Consejo de la Judicatura notificará al Magistrado, a más tardar seis meses antes, la fecha en que concluirá en definitiva su encargo, señalando la causa en que se funda la privación de su puesto. El supuesto previsto en el inciso c), se tendrá por acreditado en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Un año antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado el Magistrado, el Consejo de la Judicatura procederá a elaborar un dictamen técnico de evaluación en el que analice minuciosamente su actuación y desempeño y emita una opinión al respecto. El dictamen, así como el expediente del Magistrado, deberá ser remitido al Congreso, dentro de los noventa días naturales siguientes, debiendo contener todos aquellos elementos objetivos y requisitos que señale la Ley y que den a conocer si el Magistrado sujeto a proceso de ratificación, durante su desempeño, ha ejercido el cargo con excelencia profesional, honestidad, diligencia y que goza de buena reputación y buena fama en el concepto público, además de precisar si conserva los requisitos requeridos para su nombramiento previstos en el artículo 60 de esta Constitución.

SIN TEXTO



FEDERACIONAL DE
SUPREMACIA DE JUS
SUBSECRETARIA GENE
RECCION DE TRABAJO D
CONSTITUCIONAL Y
INSTITUCION



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

El Congreso con base en lo anterior, y una vez que escuche al Magistrado sujeto a proceso de ratificación, resolverá sobre su ratificación o no ratificación, mediante mayoría calificada de sus integrantes, a más tardar seis meses antes de que el Magistrado concluya su encargo.

Si el Congreso resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en sus funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado y se procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

ARTÍCULO 61.- Cuando ocurra la falta absoluta de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se estará a lo dispuesto por el artículo 58 de esta Constitución.

Los Magistrados y Consejeros Supernumerarios cubrirán las faltas temporales de los Numerarios, así como las faltas absolutas de los mismos hasta en tanto el Congreso efectúe el nombramiento correspondiente, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

TÍTULO QUINTO **CAPÍTULO III** **DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL**

ARTÍCULO 68.- El Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y como órgano constitucional autónomo, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio.

De conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como órgano jurisdiccional especializado en materia electoral con autonomía técnica y de gestión, en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

El Tribunal de Justicia Electoral se integrará por tres Magistrados electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la Constitución Federal y la Ley General de la materia. Los magistrados electorales permanecerán en su encargo durante siete años.

FEDERACIÓN
ACUERDOS
DE ACUERDOS
ENTRE
GOBIERNOS
ESTATALES

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMACIA DE JUSTI
SUBSECRETARIA GNERA
RECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y C
INCUSTITUCION



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

Todas las sesiones del Tribunal serán públicas.

Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación del Tribunal, y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

El Tribunal expedirá su Reglamento Interno y las disposiciones administrativas para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO 78.- ...

Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus funciones el día primero de octubre que siga a su elección. Al efecto, el día inmediato anterior se reunirán los munícipes electos, en sesión solemne con la finalidad de rendir protesta ante la comunidad e instalar los ayuntamientos.

Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos durarán en su cargo tres años, pudiendo ser electos por un periodo adicional consecutivo. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

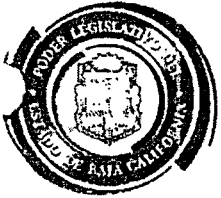
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

EDICIÓN
A MINACIÓN
ACUERDOS
CONVERSAS
EXHIBES DE
IDAD

SIN TEXTO



REGISTRACION
ORIGINAL Y COPIA
CARRERA DE LA
FACULTAD DE TRABAJO
CARRERA DE TRABAJO
— REMOVI —



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0058

0058

340

SEGUNDO.- La reforma al artículo 16 de esta Constitución en materia de reelección de diputados, no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- La reforma al artículo 78 de esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO.- El Congreso del Estado deberá adecuar las normas electorales del Estado, a más tardar en el mes de febrero de 2015.

QUINTO.- La reforma prevista en el artículo 22 del presente Decreto, referente a los periodos ordinarios del Congreso del Estado, iniciará vigencia a partir del primero de octubre del 2016; por única ocasión, el primer periodo ordinario de sesiones de la XXII Legislatura Constitucional, será del primero de octubre al treinta de noviembre de 2016.

SEXTO.- La reforma prevista en el artículo 19, mediante el cual se adelanta la instalación del Congreso del Estado, al mes de agosto del año que corresponda, será aplicable a los Diputados que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de diputados con el proceso electoral federal 2021, los periodos de la XXII y XXIII Legislatura, serán los siguientes:

- a).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su periodo el primero de octubre de 2016 y concluirán el treinta y uno de julio del 2019.
- b).- Los Diputados que sean electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de agosto de 2019 y concluirán el treinta y uno de julio del 2021.

SEPTIMO.- La reforma prevista en el artículo 78, mediante el cual se adelanta el inicio de funciones de los ayuntamientos del Estado, al mes de octubre del año que corresponda, será aplicable a los munícipes que sean electos a partir del proceso electoral del 2019. Para efecto de la concurrencia de la elección de munícipes con el proceso electoral federal 2021, los periodos de los ayuntamientos respectivos, serán los siguientes:

- a).- Los munícipes electos en el proceso electoral de 2016, iniciarán su periodo el primero de diciembre de 2016 y concluirán el treinta de septiembre del 2019.

LA FIEL EJECUCIÓN
DE LAS LEYES
Y DE LOS ACUERDOS
DE LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ES DEBER DEL
GOBIERNO DEL ESTADO

86.17

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DI
SUPREMA CORTE DE JL
SUBSECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCOSTITUC



XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

0059

341

~~0059~~

b).- Los municipios electos en el proceso electoral de 2019, iniciarán funciones el primero de octubre de 2019 y concluirán el treinta de septiembre del 2021.

OCTAVO.- Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027.

NOVENO.- De conformidad con el artículo transitorio noveno del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, los actuales consejeros electorales del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las nuevas designaciones en los términos de dicho transitorio.

DÉCIMO.- Una vez designado por el Instituto Nacional Electoral los nuevos consejeros estatales, éstos procederán dentro de los diez días siguiente a instalar el órgano de dirección superior del Instituto Estatal Electoral, debiendo nombrar en esa misma sesión al Secretario Ejecutivo del Instituto. Quienes se encuentren ejerciendo las atribuciones que correspondan a la Dirección General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de Secretario Fedatario del Consejo General del Instituto que se abroga, continuarán en funciones hasta en tanto, no sea designado el Secretario Ejecutivo.

En caso de que a la fecha de integración del Instituto Estatal Electoral no hubieren entrado en vigor las leyes secundarias que derivan del presente Decreto, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en cuanto no contravengan las derivadas de las Leyes Generales en la materia.

FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
AL REACUERDO
CONTRAFERIAS
E ADICIONES OF
ANALIDAD

SIN TEXTO





XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

10060

342

0060

DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pasarán a formar parte del Instituto Estatal Electoral una vez que quede integrado en términos del transitorio anterior.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los gastos realizados por los partidos políticos hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán fiscalizados por el Instituto Electoral local con sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, los cuales deberán ser dictaminados y resueltos a más tardar el último día de diciembre de 2014.

DÉCIMO TERCERO.- El titular del órgano técnico del Consejo General Electoral del Instituto Electoral (Dirección de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos) que se deroga conforme al presente Decreto, estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiéndose dictaminar y resolver a más tardar en dicha fecha, la fiscalización de los partidos políticos, conforme lo dispone el artículo décimo octavo transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DÉCIMO CUARTO.- El titular de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que se abroga con el presente Decreto, estará en funciones hasta el 31 de diciembre de 2014, debiendo concluir a más tardar en dicha fecha los asuntos en trámite y entregar al Consejo General Electoral un informe resumido de su gestión y mediante acta administrativa, los asuntos y recursos a su cargo.

DÉCIMO QUINTO.- Los Magistrados numerarios y supernumerarios del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, continuarán en su en cargo hasta en tanto se sustituyan por los nuevos Magistrados Electorales, en los términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO SEXTO.- Una vez designado por el Senado de la República los nuevos Magistrados Electorales, éstos procederán dentro de los cinco días siguientes a instalar el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como órgano constitucional autónomo, debiendo designar al Secretario General de Acuerdo.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, una vez que quede integrado en términos de los transitorios anteriores.

LA FEDERACIÓN
DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

6.00

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL
INCONSTITUCIONAL

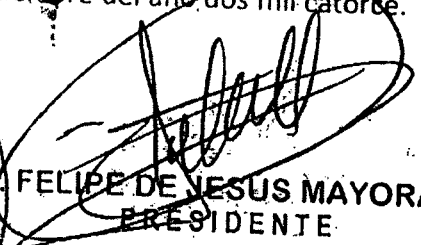


XXI LEGISLATURA
El Poder Ciudadano

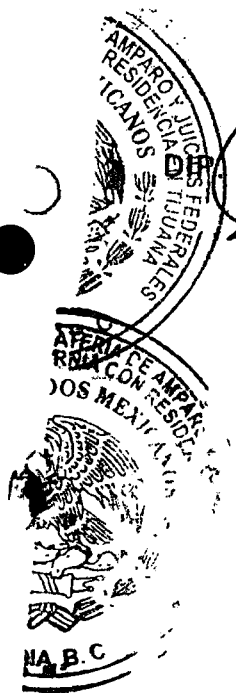
DÉCIMO OCTAVO.- Los medios de impugnación, denuncias y quejas que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en trámite y las que se presenten en forma posterior pero antes de la reforma a la Ley de la materia, deberán resolverse conforme a las disposiciones vigentes al momento de su interposición.

DÉCIMO NOVENO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los once días del mes de septiembre del año dos mil catorce.


FELIPE DE JESUS MAYORAL MAYORAL
PRESIDENTE


DIP. GERARDO ALVAREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO



FJMM/GARZ

FEDERACIÓN
AGELACIÓN
DE ACERDOS
INTRODUCCIÓN
ACCIONES O
ACAS



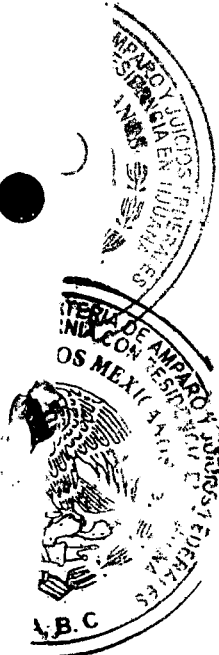
PODER JUDICIAL D.
SUPREMA CORTE DE J.
SUBSECRETARÍA GEN.
SECCIÓN DE TRÁMITES
CONSTITUCIONALES
INCOG 11

0062

0062

**SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
REGISTRO ELECTRÓNICO****NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 3619****SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.****Información del Funcionario que validó la información y realizó la
captura****Nombre:** HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ISRAEL**Adscripción:** JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**Cargo:** SECRETARIO DE JUZGADO**Fecha y hora de
registro:** 13/09/2005 01:55:10 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	JUAN GUILLERMO RUIZ HERNANDEZ
Número de Cédula Profesional:	491649
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	30/03/1978
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 102137279093805694135517745

AFILIACIÓN
AL REGISTRO
AL DE DERECHO
CONTRAVENSIÓN
DE ACCIONES DE
NACIONAL

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUST
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIO

0063

SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ~~0063~~
REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 3738

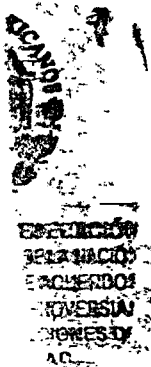
SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

Información del Funcionario que validó la información y realizó la
captura

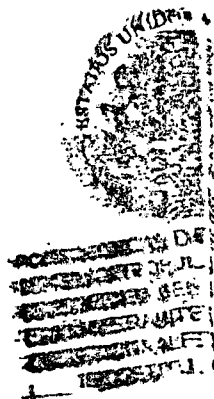
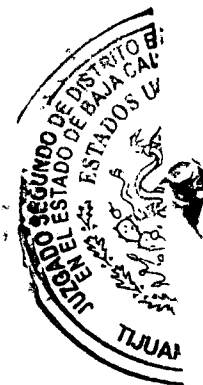
Nombre: HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ISRAEL
Adscripción: JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO
Fecha y hora de registro: 19/09/2005 12:14:01 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	JOEL PACHECO GONZALEZ
Número de Cédula Profesional:	540807
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	15/03/1979
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 102197833093805694121419377



SIN TEXTO



0064

SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ~~0064~~
REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 148419

SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

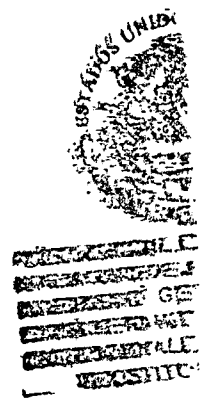
Información del Funcionario que validó la información y realizó la captura

Nombre: ÁNGELES GARCÍA LUIS
Adscripción: JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO
Fecha y hora de registro: 11/02/2015 01:47:08 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	JAVIER AVILES BELTRAN
Número de Cédula Profesional:	1368701
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	02/07/2003
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 10211147629216153181347





0065

SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ~~0065~~
REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 106670

SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

Información del Funcionario que validó la información y realizó la
captura

Nombre: MEDRANO MEZA LIDIA
Adscripción: JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO
Fecha y hora de registro: 24/09/2010 11:27:15 A. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	EZEQUIEL POZOS ZAMORA
Número de Cédula Profesional:	4424362
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	03/07/2009
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CODIGO DE VALIDACIÓN: 10224283477509331013511276319905



GRANDE
A FEDERACIÓN
IGABE LA HACIÓ
AL DE CUERPOS
E CONTROVERSIAS
DE ACCIONES DE
MALISDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRAMITACION
CONSTITUCIONAL
L - INCOSTI

SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 168535

SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

Información del Funcionario que validó la información y realizó la captura

Nombre: PARRA GALVAN ALEJANDRA
Adscripción: JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO
Fecha y hora de registro: 08/11/2016 04:19:53 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	KARLA ESPINOZA SALAZAR
Número de Cédula Profesional:	9347769
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	08/09/2015
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 1028167744 158168391619



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITE DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

0067

349

**SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
REGISTRO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 169529

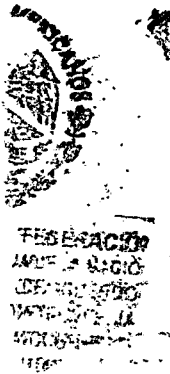
SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

Información del Funcionario que validó la información y realizó la captura

Nombre: JIMÉNEZ HINOJOSA HERIBERTO MANUEL
Adscripción: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO
Fecha y hora de registro: 06/01/2017 02:22:39 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	MARGARITA GARCIA MATA
Número de Cédula Profesional:	9752675
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	27/05/2016
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 102616873815172221422



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SECRETARIA GEN
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INDUSTRIAL

0068 350

**SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
REGISTRO ELECTRÓNICO**

0068

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 169100**SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.****Información del Funcionario que validó la información y realizó la
captura**

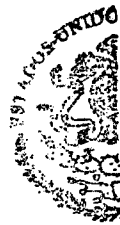
Nombre: FARFÁN DOURIET IGNACIO
Adscripción: OCTAVO TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO
Cargo: SECRETARIO DE TRIBUNAL
Fecha y hora de registro: 06/12/2016 01:57:20 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	RAUL MAURICIO ATONDO ZAVALA
Número de Cédula Profesional:	7308583
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	11/01/2012
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 1096683091270166901357

LA FEDERACIÓN
DE LA NACIÓN
AL DE ACUERDO
E CONTROVERSIAS
DE ACCIONES O
QUALIDAD

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA DE
SECCION DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL
INCOSTITU

0069

~~0-69~~

**SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
REGISTRO ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 132177

SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

Información del Funcionario que validó la información y realizó la captura

Nombre: CÁRDENAS NARANJO FRANCISCO JAVIER

Adscripción: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL

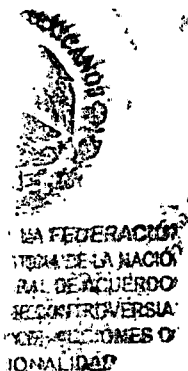
Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO

Fecha y hora de registro: 22/10/2013 02:41:10 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	EDGAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ
Número de Cédula Profesional:	6801588
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	10/12/2010
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 10222486971310921320514411069690

[REDACTED]



SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE D
SUBSECRETARIA
SECCION DE TRAM
CONSTITUCIONAL
L INCOSTIT

0070

352

SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE
PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO: 119968

SE RECIBIÓ EL ENVÍO DE SU INFORMACIÓN.

Información del Funcionario que validó la información y realizó la
captura

Nombre: FLORES ANTONIO

Adscripción: JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Cargo: SECRETARIO DE JUZGADO

Fecha y hora de
registro: 01/02/2012 01:01:07 P. M.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL EN DERECHO REGISTRADO	
Nombre:	HIRAM SÁNCHEZ ZAMORA
Número de Cédula Profesional:	2542798
Institución que Emite la Cédula:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Fecha de expedición:	30/09/1997
Nivel:	LICENCIATURA
Materia:	DERECHO

CÓDIGO DE VALIDACIÓN: 10201369854202571263413018180402



E LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ERAR EL JUZGADO
DE COMERCIO Y
INDUSTRIA
Y DE LOS NEGOCIOS
FINANCIEROS

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARIA DE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI

En once de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo, cuatro copias de la misma y anexos que se adjuntan; asimismo, Lorena Lugo Romero, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, certifica que Juan Guillermo Ruiz Hernández, Joel Pacheco González, Javier Avilés Beltrán, Ezequiel Pozos Zamora, Karla Espinoza Salazar, Margarita García Mata, Raúl Mauricio Atondo Zavala, Edgar Noé García Hernández e Hiram Sánchez Zamora, cuentan con cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo Del Registro Único de Profesionales del Derecho del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó al número 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha de julio de dos mil cinco. Doy fe.

Tijuana, Baja California, once de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la demanda de amparo promovida por Mirna Cecilia Rincón Vargas, quien se ostenta como Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, con copia certificada del bando solemne de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, fórmese y regístrese con el número 367/2019.

Como preámbulo, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, se impone precisar lo que se prevé en el artículo

LA FEDERACIÓN
STIC
ERAL
DE
Y DI
CMA

114 de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará.

"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;

II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;

[...]

Por su parte, el diverso ordinal 108 fracción I de la ley de la materia, en relación al arábigo 11, señalan:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;

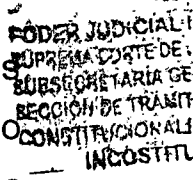
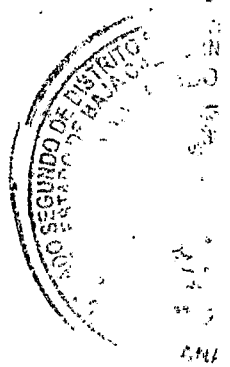
[...]

Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta."

Así pues, de la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de este Juzgado examinar ante todo el escrito de demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al



promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo.

Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa incumplió con uno de los extremos contemplados en los numerales antes transcritos, por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, **requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, dé cumplimiento a las siguientes prevenciones:**

1. Acredite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, segundo párrafo de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación con el diverso 108, fracción II, última parte del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que por acuerdo del Ayuntamiento se le otorga la representación jurídica para actuar en su defensa en un contradictorio de esta naturaleza, en virtud de que a su escrito inicial de demanda no adjuntó documento alguno del que se desprenda tal situación.

Para sostener lo determinado, se hace necesario acudir a lo dispuesto en la primera parte del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por

LA FEDERACIÓN
JUDICIAL DE LA RACIÓN
ERAL DE ACUERDOS
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES
NACIONALIDAD

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

[...]"

Así, se impone precisar que el numeral 2 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, define al Municipio, como el orden de gobierno local, que tiene la finalidad de organizar la comunidad asentada en su territorio, en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los servicios que éste requiera, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California.

Por su parte, el dispositivo legal 4 de la mencionada Ley, establece que el **Ayuntamiento** es el órgano de Gobierno del Municipio, el cual se encuentra integrado por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, y por el número de Regidores que establezca la Ley Electoral, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Y, conforme a dicho cuerpo de leyes, el Presidente Municipal; en su calidad de alcalde, es el órgano Ejecutivo del Ayuntamiento y ostenta, en todo caso, las atribuciones que refiere el numeral 7¹ de la ley mencionada.

Sin embargo, el propio numeral 8, fracción I, establece que la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales, así como en las negociaciones relativas a la

¹ ARTÍCULO 7.- Del órgano Ejecutivo del Ayuntamiento.- El Presidente Municipal, en su calidad de alcalde de la comuna, es el órgano Ejecutivo del Ayuntamiento y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones:
IV.- Ejercer la representación política, legal y social del Municipio conforme lo disponga el reglamento respectivo. La representación legal podrá delegarla mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento..."



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
INCOSE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

0073

FORMA B-1

0073

355

hacienda municipal, recaer en el Síndico Procurador, pudiendo nombrar apoderado legal y delegar sus facultades con arreglo a las que específicamente el Ayuntamiento le delegue y, sólo en caso de que el referido Síndico, se encuentre imposibilitado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento, la podrá ejercer el Presidente Municipal por acuerdo del Ayuntamiento.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el normativo legal 7, antes citado, se tiene que acudir al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, que en su artículo primero señala que se encuentra normado por dicha Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California y que en su dispositivo 128 fracción II, dispone lo siguiente:

"ARTICULO 128.- El Síndico Procurador es el órgano de representación legal de los intereses del Ayuntamiento, así como de control y vigilancia de la Administración Pública Municipal, por lo que fiscalizará la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos municipales, además de vigilar la actuación de los servidores públicos y la Contraloría Interna, ejerciendo en todo caso las siguientes atribuciones:

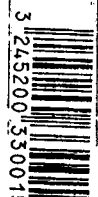
I.- Ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios Jurisdiccionales y en las negociaciones relativas a la Hacienda Municipal;

En ejercicio de la representación podrá nombrar apoderado legal, con arreglo a las facultades específicas que el Ayuntamiento le delegue; designar delegados o representantes para oír y recibir notificaciones, presentar pruebas y promociones, hacer alegatos, promover recursos y demás medios de defensa.

También podrá nombrar uno o más apoderados especiales o generales a fin de que actúen en representación del Ayuntamiento ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en los que se ventilen los litigios en que éste sea parte o tenga interés, otorgándoles facultades suficientes para la adecuada defensa del mismo.

En caso de que el Síndico Procurador, por cualquier causa, se encuentre imposibilitado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento,

LA FEDERACIÓN
JUDICIAL DE LA RACIÓN
TAL DE ACUERDO
EXCELSIVO
DE PROMOCIONES IV



éste resolverá lo conducente;..." (lo destacado es propio)

Mientras que, el diverso 65, del mencionado Reglamento, señala:

"ARTÍCULO 65.- El Presidente Municipal o quien ejerza sus funciones en lo que al funcionamiento interior del Ayuntamiento se refiere, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar a los Integrantes del Ayuntamiento para efectos de celebrar la Sesión de Cabildo, por conducto del Secretario Fedatario del Ayuntamiento, en los términos del presente ordenamiento;

II. Presidir y dirigir las sesiones de Cabildo;

III. Conceder el uso de la palabra a los integrantes del Ayuntamiento en los términos del presente Ordenamiento;

IV. Enunciar el orden en que deberán ser atendidos los asuntos en las Sesiones de Cabildo, sometiendo a consideración la propuesta de orden del día.

V. Determinar el desalojo del recinto oficial del Ayuntamiento, con el auxilio de la fuerza pública si resulta necesario, de las personas que no siendo miembros del mismo, alteren el orden de la sesión o incurran en actos ilícitos;

VI. Llamar al orden a los integrantes del Ayuntamiento, cuando en sus intervenciones se aparten del asunto en discusión o se profieran injurias o ataques personales;

VII. Suspender las sesiones por causa justificada;

VIII. Decretar los recesos que estime convenientes sin suspender la sesión;

IX. Emitir Voto de Calidad en caso de empate;

X. Resolver las mociones de procedimiento que se formulen por los integrantes del Ayuntamiento;

XI. Declarar el inicio y clausura formales de los trabajos de la sesión;

XII. Ejercer el derecho de previa observación a los acuerdos que pretendan someterse a consideración del Ayuntamiento, a efecto de solicitar la votación por mayoría calificada, en los términos de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y el presente reglamento;

XIII. Someter los asuntos a votación cuando a juicio del Presidente Municipal hayan sido suficientemente discutidos;

XIV. Suscribir, en unión con el Secretario Fedatario del Ayuntamiento, los acuerdos y resoluciones que emita el Ayuntamiento y que deban publicarse o enviarse al Congreso del Estado;

XV. Dar publicidad a los reglamentos y demás disposiciones de carácter general aprobados por el Ayuntamiento;

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTI DE
SUBSECRETARIA GE
SECCION DE TRAMIT
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

0074

FORMA B-1

356

XVI. Convocar y promover reuniones de consensos con el Síndico Procurador y los Regidores coordinadores que representen a los diferentes partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento, con el objeto de promover entendimientos y convergencias políticas que resulten necesarios para alcanzar acuerdos a fin de que el Ayuntamiento esté en mejores condiciones de adoptar las decisiones que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponden, y

XVII. En general, tomar las medidas necesarias, durante la celebración de las sesiones, para proveer al cumplimiento de la ley; del presente reglamento y de los Acuerdos del Cabildo.

De ahí la razón de la prevención formulada, pues se estima que, en litigios como el presente, a quien le corresponde la representación del Órgano de Gobierno del Municipio Ayuntamiento de acuerdo a las facultades previstas tanto en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California como en el señalado Reglamento, lo es al **Síndico Procurador**, integrante de dicho órgano de gobierno, quien solo en caso de encontrarse imposibilitado para ejercer tal representación el mismo Ayuntamiento, deberá resolver lo conducente a efecto de que se requiera la defensa del Municipio en el asunto de esta naturaleza.

Lo anterior en virtud de que la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para accionar el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 108, fracción I, de la ley de la materia, lo cual, no solo incumbe al peticionario y al juzgador de amparo, sino por el contrario, dado que trasciende a la litis constitucional, al ser uno de los requisitos de la instancia que nos ocupa, las demás partes tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante o apoderado de otro, tiene validez para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, lo que se logra a través del documento relativo.

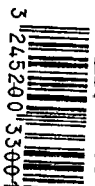
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



3 245200 33001

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 43/96 sustentada por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Julio de 1996, Novena Época, cuyos datos de rubro siguiente: **"PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO."**

No se pasa por alto para este órgano judicial, la documental que se acompañó al escrito inicial de demanda, consistente en el Bando Solemne que le otorga la XXII Legislatura de Baja California, pues dicha documental únicamente es apta para acreditar que efectivamente Mirna Cecilia Rincón Vargas, es Presidente Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, no así la autorización del Ayuntamiento de que se habla.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la tesis de rubro: **"PRESIDENTE MUNICIPAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL AMPARO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CUANDO SE OMITE JUSTIFICAR QUE EL SÍNDICO PROCURADOR ESTÁ IMPEDIDO O SE HAYA NEGADO A ASUMIR ESA REPRESENTACIÓN."**²

2. En concordancia con lo anterior, deberá en su caso ampliar la narración de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado,

² Tesis XVIII.2º.18K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, tomo XXVII, de junio de 2008, página 1271 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
INCOSTITI



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

0075

357

manifestando la imposibilidad que tuvo el Síndico Procurador para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, y la representación que le hubiese otorgado el Ayuntamiento, previo a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa.

Ello, ya que es necesario establecer de manera efectiva y clara la litis respecto de la cual versará el presente el juicio, blindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio y que constituye un requisito esencial en el escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo.

En el entendido que dicha aclaración deberá ser formulada por quien promueve la demanda de amparo, según lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro:

**"DEMANDA DE AMPARO: LA MANIFIESTA
"BAJO PROTESTA" DE DECIR "VERDAD"
REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO
116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN
ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO
PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVE LA
DEMANDA"**

3. De igual forma, deberá acompañar copias suficientes para el traslado a las partes, de los documentos con los que acredite su personalidad.

Lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2ª./J.124/2016 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, visible en la página 1449,

³ Visible en la página 348, Tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SALA DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
NACIONALIDAD



del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala lo siguiente:

"PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBER ECHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON LA QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES."

Cuarto. Finalmente, se requiere a la parte promovente para que exhiba las copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 36/2001, que a la letra dice en su rubro:

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO."

Apercibida que de no cumplir con lo ordenado dentro del término y en las condiciones antes indicadas, **se tendrá por no presentada la demanda de amparo**, acorde con lo establecido en la parte final del artículo 114, de la Ley de Amparo.

Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda; como autorizados de su parte, en término del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Guillermo Ruiz Hernández, Joel Pacheco González, Javier Avilés Beltrán, Ezequiel Pozos Zamora, Karla Espinoza Salazar, Margarita García Mata, Raúl Mauricio Atondo Zavala, Edgar Noé García Hernández y Hiram





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

0076

FORMA B-1

0076
35

Sánchez Zamora, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco.

Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita los días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto.

Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hagase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto, apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el



SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERACIÓN
JUZGADO DE DISTRICTO
DE AMPARO
CIVIL
MEXICO

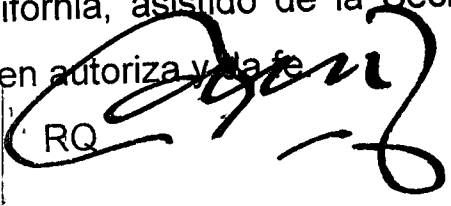


0201

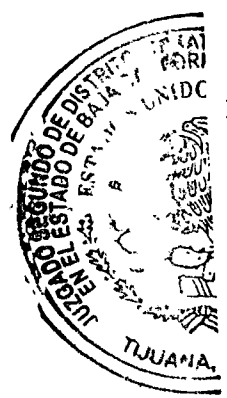
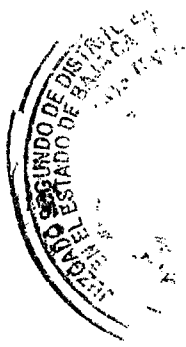
Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

Notifíquese personalmente.

Así lo proveyó y firma el **Juez Brando Arturo González Ramírez**, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria **Lorena Lugo Romero**, quien autoriza y da fe

RQ 





PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACION
SUBSECRETARIA DE LEY
SECCION DE TRAMITACION
CONSTITUCIONAL
INCOSTITUTIVO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1 I

10077

10077

359

Notificación por comparecencia

Tijuana, Baja California, diez horas con veintitrés minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve, la suscrita licenciada **Danairy Flores Crespo**, Actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, estando en el local que ocupa este órgano judicial, comparece **Karla Espinoza Salazar**, autorizada de la parte **quejosa**, quien se identifica con credencial para votar número 0876079510733 expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, misma que contiene el nombre y una fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente, la que en este momento le devuelvo por considerar innecesaria su retención.

Acto seguido, el compareciente manifiesta que el motivo de su presencia es que se le notifique personalmente la **resolución de once de marzo de dos mil diecinueve** dictada por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California.

Enseguida, le notifico la resolución de mérito dictada dentro de los autos del **juicio de amparo 367/2019** y le entrego copia simple de esta.

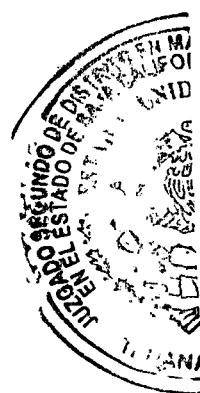
Hecho lo anterior, el compareciente se da por notificado y firma la presente acta en unión de la suscrita. **Doy fe.**

Danairy Flores Crespo.
Actuaria Judicial.

[Handwritten signature]

LA FEDERACIÓN
JUDICIAL DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES D
CONSTITUCIONALES

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUS
SUBSECRETARIA GENE
SECCION DE TRAMITE I
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCI

ORIGINAL
CINA DE CORRESPONDENCIA
COMÚN DE LOS JUZGADOS
DE DISTRITO EN MATERIA

0078
5189 0078
360
QUEJOSOS: MUNICIPIO AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

2019 MAR 14 PH 6:16

2019 MAR 15 AM 9:00

50 copias y 2 anexos
AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CON RESIDENCIA EN TIJUANA

JUICIO DE AMPARO 367/2019.

Baja California, con
sede en Tijuana

C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y
JUICIOS FEDERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
CON SEDE EN TIJUANA.
P R E S E N T E.

MIGUEL ÁNGEL VILA RUIZ, con el carácter de SÍNDICO PROCURADOR,
del AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA,
personalidad que acredito con la documental que en copia certificada se acompaña
a la presente; ante Usted respetuosamente comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito, en representación del MUNICIPIO Y DEL
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, en desahogo
de la prevención que se hizo mediante auto de fecha once de marzo del año en
curso, hago suya la demanda de amparo presentada por la Presidente Municipal
del mismo, ratificándola en todas y cada una de sus partes, solicitando se admita a
trámite en los términos propuestos en la misma.

Por lo antes expuesto:

A Usted C. Juez, atentamente pido:

ÚNICO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito,
desahogando la prevención hecha por su Señoría y ratificando la demanda de
amparo en mi carácter de SÍNDICO PROCURADOR del AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, solicitando se admita a trámite la
misma, en los términos propuestos en ésta.

Tijuana, Baja California, en la fecha de presentación.

PROTESTO LO NECESARIO

MIGUEL ÁNGEL VILA RUIZ

SÍNDICO PROCURADOR DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

SIN TEXTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECCIÓN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
COSTA



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

EL CIUDADANO, DIEGO ALFONSO RAMÍREZ ROBLES, SECRETARIO GENERAL DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA:

CERTIFICA:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA COMPULSADA DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA VISTA Y COTEJE, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL H. VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C. Y CONSTA DE (1) UNA FOJA UTIL ESCRITAS POR UN SOLO LADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 FRACCION III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, Y 9 FRACCION VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, A LOS (28) VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE:

UN HORIZONTE DE POSIBILIDADES"



SECRETARÍA GENERAL
DE LA FEDERACIÓN
JISTOR DE LA MEXICA
EDICIÓN DE ACUERDO
TE DE CONTROVERSIAS
ES Y REACCIONES
JUDICIALIA

DIEGO ALFONSO RAMÍREZ ROBLES
SECRETARIO GENERAL DEL
VII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.



XXII

LEGISLATURA
DE Baja California

#CongresoDeResultados

LA HONORABLE XXII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 36 DE LA LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EXPIDE EL SIGUIENTE:

BANDO SOLEMNE

Mediante el cual, a los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, se hace saber que los Municipales que resultaron electos para integrar el VII Ayuntamiento del **MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA**, para el Periodo Constitucional comprendido del día 1 de diciembre del año 2016 al 30 de septiembre del año 2019, son:

MIRNA CECILIA RINCÓN VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO

CLAUDIA VERÓNICA LEÓN RIVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

MIGUEL ÁNGEL VILA RUIZ

SÍNDICO PROCURADOR PROPIETARIO

DAVID ALFREDO RIVERA HERNÁNDEZ

SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE

BELÉM DEL CARMEN ABARCA MENDOZA
REGIDOR PROPIETARIO

ANA GLAUCIA ARAUJO LUEVANOS
REGIDOR PROPIETARIO

NANCY CORDERO CASILLAS
REGIDOR SUPLENTE

MIGHELLE HINOJO OCEGUERA
REGIDOR SUPLENTE

MIGUEL APOLINAR CALLES MUÑOZ
REGIDOR PROPIETARIO

JULIO CÉSAR GARCÍA SERNA
REGIDOR PROPIETARIO

FRCO GONZÁLEZ VILLENA
REGIDOR SUPLENTE

ORLANDO HERRERA RUELAS
REGIDOR SUPLENTE

NANCY VERÓNICA RAMÍREZ RAMÍREZ
REGIDOR PROPIETARIO

MANUEL SALAZAR MARTÍNEZ
REGIDOR PROPIETARIO

DIOSCELINA SALCEDA GARCÍA
REGIDOR SUPLENTE

MANUEL REAL BECERRA
REGIDOR SUPLENTE

LUIS RICARDO MARTÍNEZ CABRALES
REGIDOR PROPIETARIO

MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REGIDOR PROPIETARIO

JESÚS GONZÁLEZ LOMELI
REGIDOR SUPLENTE

RUBÉN OCHOA AYALA
REGIDOR SUPLENTE

ANA LUISA ESQUIVEL FIERRO
REGIDOR PROPIETARIO

ELÍAS MENDOZA ROJA
REGIDOR PROPIETARIO

HILDA ANAHI MACHADO SÁNCHEZ
REGIDOR SUPLENTE

FABIAN MAYORAL MAYORAL
REGIDOR SUPLENTE

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, B.C. a los veintinueve días del mes de noviembre de 2016.

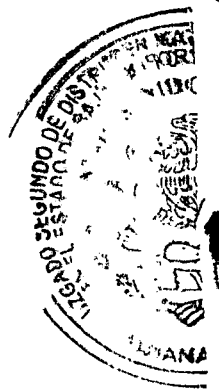
DIP. MTRO. RAÚL CASTAÑEDA POMPOS
Presidente

DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN
Prosecretaria

IDMEX1551077<752<1273035361673
5209255H2612817MEX<02<<S16627<7
VILA<RUIZ<<WIGUEL<ANGEL<<<<<<



SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

0081

FORMA B-1

363

Juicio de amparo 367/2019

Promoción: 5189

En diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez, con un escrito que suscribe Miguel Ángel Vila Ruiz, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California. Conste.

Tijuana, Baja California, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

Visto el escrito que suscribe Miguel Ángel Vila Ruiz, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California a través del cual y en representación de dicho Ayuntamiento, pretende desahogar la prevención que se formuló a la Presidenta de dicha municipalidad y manifiesta que hace suya la demanda de amparo interpuesta por esta última y que la ratifica en todas y cada una de sus partes.

Sin embargo no han lugar a acordar de conformidad la promoción que se atiende, en virtud que el promovente no fue quien suscribió la demanda de amparo de origen y en esa medida carece de legitimación para desahogar la prevención que se formuló a Mirna Cecilia Rincón Vargas, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, parte gestora del amparo, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley de Amparo, son partes el juicio la parte quejosa, la víctima u ofendido del delito, la autoridad responsable, el tercero interesado y el agente Ministerio Público Federal.

Dicha porción normativa es del contenido literal siguiente:

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:



3 245200 330022

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

(...)

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

(...)

III. El tercero interesado

(...)

IV. El Ministerio Público Federal..."

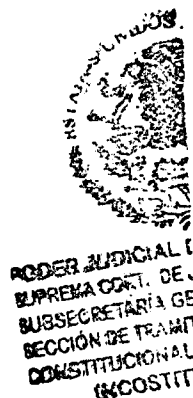
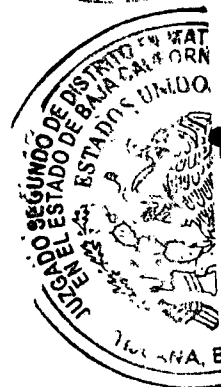
Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 6¹ de la Ley de la Materia, tratándose de personas morales, sean éstas públicas o privadas, **sólo pueden promover el juicio de amparo a través de su representante o apoderado legal.**

Cabe destacar que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el relativo al **de instancia de parte agraviada**, contenido en la fracción 1², del artículo

¹ "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita."

² "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

364

FORMA A-54

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019
PROMOVENTE: DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a diez de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Harreá, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el escrito y anexos de Héctor Ireneo Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, José Antonio Casas del Real, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocío López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos López quienes se ostentan como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, recibido el siete de junio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y registrado con el número **022045**. Conste.

Ciudad de México, a diez de junio de dos mil diecinueve.

Con el escrito y anexos de cuenta, **fórmese y registrése** el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad que hace valer Héctor Ireneo Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, José Antonio Casas del Real, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocío López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos López quienes se ostentan como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual promueven acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la declaración de invalidez de lo siguiente:

"(...) en contra del CONGRESO DEL ESTADO, por emitir y del EJECUTIVO DEL ESTADO, por promulgar, ambos de BAJA CALIFORNIA, el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL EJERCICIO DE LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS."

Com fundamento en los artículos 24¹ en relación con el 59² de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 81³ del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **turnése este expediente al Ministro Javier Laynez Potisek** para que instruya el procedimiento

Artículo 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibida la demanda, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un ministro instructor a fin de que promueva el proceso en estado de resolución.

Artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

Artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los asuntos de la competencia de la Suprema Corte se turnarán por su Presidente entre los demás Ministros, por conducto de la Subsecretaría General, siguiendo rigurosamente el orden de su designación y el cronológico de presentación de cada tipo de expedientes que se encuentren en condiciones de ser enviados a una Ponencia, tanto para formular proyecto de resolución como para instruir el procedimiento [...].

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

correspondiente, según el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.



EL 14 JUN 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

RECEBIÓ
SECRETARÍA DE TRÁMITE
DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES
Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
EL 14 JUN 2019 A LAS 14 HORAS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019
PROMOVENTE: DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek, instructor en el presente asunto**, con el expediente de la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada promovida por Héctor Ireneo Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, José Antonio Casas del Real, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocio López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños, Gacho y Blanca Patricia Ríos López, quienes se ostentan como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, turnada conforme al auto de radicación de diez de los mismos mes y año. Conste.

Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

Vistos el escrito de demanda y los anexos de Héctor Ireneo Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, José Antonio Casas del Real, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocio López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños, Gacho y Blanca Patricia Ríos López, quienes se ostentan como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual promueven acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la declaración de invalidez de lo siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL EJERCICIO DE LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SERÁ DE DOS AÑOS."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan¹, en consecuencia, se tienen por designados **delegados** y por señalado **domicilio** para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lo anterior, con fundamento en el artículo 11, párrafos primero y segundo², en relación con el 59³

¹ De conformidad con las constancias expedidas por la Secretaría de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

² **Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

³ **Artículo 59.** En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305⁴ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1⁵ de la citada ley. Asimismo, conforme al artículo 62, párrafos primero y segundo⁶, de la Ley reglamentaria, **se designa** como representantes comunes a Marco Antonio Corona Bolaños y a Blanca Patricia Ríos López, quienes pueden actuar conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste.

Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 25⁷ de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda de acción de inconstitucionalidad deberá desecharse si se encuentra un motivo **manifiesto e indudable** de improcedencia⁸, como en el presente caso, en el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII⁹, de la citada ley, toda vez que de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente asunto es **extemporáneo**, conforme a lo siguiente:

Del escrito inicial de demanda, se advierte que los promoventes impugnan el artículo octavo transitorio del Decreto 112, publicado el diecisiete de octubre de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual

⁴ Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁵ Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

⁶ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.

La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como representantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hará de oficio. Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

⁷ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

⁸ Tesis P.J.J. 128/2001. Jurisprudencia. Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, número de registro 188,643. Cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA."

⁹ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y (...)



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

se determinó que en las elecciones de dos mil diecinueve, el período del ejercicio de la gubernatura del estado de Baja California sería de dos años.

Conforme a lo anterior, el **plazo legal de treinta días hábiles** a que se refiere el artículo 60¹⁰ de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcurrió de la siguiente forma:

OCTUBRE 2014						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
NOVIEMBRE 2014						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

Lo anterior, toda vez que el artículo octavo transitorio del Decreto 112, se publicó en el Periódico Oficial de Baja California, el diecisiete de octubre de dos mil catorce¹¹, el plazo de treinta días naturales establecido en el artículo 60 de la Ley reglamentaria, **transcurrió del diecho de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil catorce**, por lo que si el escrito de cuenta se presentó el **siete de junio de dos mil diecinueve** en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta inconcuso que es **extemporánea** la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Alto Tribunal que los promoventes manifiestan que se encontraban en imposibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal, toda vez que conocieron los vicios del proceso legislativo del decreto impugnado hasta **el día ocho de mayo de dos mil diecinueve**, cuando obtuvieron las copias certificadas de las demandas de

¹⁰ Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
¹¹La publicación del Decreto impugnado se corroboró en la dirección electrónica <https://periodicooficial.eabajacalifornia.gob.mx>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

los juicios de amparo que promovieron tres Municipios de la entidad, al no haber sido legalmente notificados del proyecto de reformas a la Constitución de Baja California.

Sin embargo, la justificación de los promoventes para presentar fuera del plazo la acción de inconstitucionalidad de cuenta, carece de fundamentación alguna, puesto que la ley de la materia es clara al establecer que el plazo de treinta días naturales comenzará a correr a partir de la publicación de la norma impugnada en el medio oficial correspondiente, excluyendo cualquier otro supuesto para establecer el cómputo del plazo legal.

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 66/2000 y P./J. 65/2000, emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal, con rubro y texto siguiente:

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE LA MATERIA ELECTORAL. DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN O DE OTRAS SITUACIONES DIVERSAS. Del análisis de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal y en el diverso numeral 60 de su ley reglamentaria, en relación con el antepenúltimo párrafo del precepto constitucional citado, que establece que la única vía para impugnar de inconstitucionales las leyes electorales es la prevista en ese propio precepto, se advierte que el plazo de treinta días naturales que ahí se fija para ejercitar la acción, debe computarse a partir de la publicación de la norma general impugnada, sin que admita la posibilidad de que en este tipo especial de procedimiento constitucional se pueda combatir la norma con motivo de su aplicación; por tanto, resulta irrelevante que un partido político haya obtenido su registro con posterioridad a la entrada en vigor de la norma impugnada, pues el citado artículo 60 de la ley reglamentaria expresamente establece que la demanda deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes al de la publicación de la disposición combatida, sin que instituya algún otro supuesto o plazo para tal efecto.”¹² [Énfasis añadido].

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLICACIÓN EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES. La acción de inconstitucionalidad que se ejerce en aras del principio de supremacía constitucional, en virtud del cual toda norma debe ajustarse a los lineamientos establecidos en la Carta Magna, no es la vía

¹² Tesis P./J. 66/2000, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, registro 191386, página 483.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedente para impugnar actos concretos emitidos por autoridades electorales por violación a la Ley Fundamental. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, el citado medio de control constitucional únicamente procede en contra de normas generales, entre las que se encuentran las de carácter electoral, por lo que para combatir sus actos concretos de aplicación, las partes legitimadas deben agotar los medios legales conducentes conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, de no hacerlo así, los referidos actos adquirirán definitividad. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad debe promoverse para impugnar normas de carácter general con motivo de su publicación, y no a causa de su aplicación.¹³ [Énfasis añadido]

Conforme a lo anterior, la fecha en que los diputados promoventes tuvieron conocimiento de los vicios de la norma impugnada o en que se suscitó el primer acto de aplicación de la misma, resulta irrelevante para computar el plazo en que puede interponerse una acción de inconstitucionalidad.

Por consiguiente, en la presente acción de inconstitucionalidad se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el diverso 60, ambos de la Ley reglamentaria de forma manifiesta e indudable.

Por lo expuesto y fundado se

LA FEDERACIÓN
TICA DE LA NACIÓN
RAL DE ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES D
ONALIDAD

ACUERDA

PRIMERO. Se desecha de plano la acción de inconstitucionalidad presentada por los diversos Diputados integrantes de la Legislatura del Estado de Baja California.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEGUNDO. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente

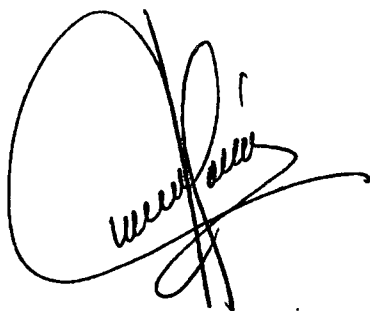
como asunto concluido.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Notifíquese. Por lista y por oficio a los promoventes.

¹³ Tesis P.J.J. 65/2000, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de dos mil, registro 191669, página 339.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.



EL 26 JUN 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS





ACUSE DE RECIBO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019
PROMOVENTE: DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

OFICIO 4922/2019 Diversos Diputados integrantes de la Legislatura del Estado de Baja California

En la acción de inconstitucionalidad indicada al rubro, el **Ministro instructor** **Javier Laynez Potisek**, dictó un acuerdo que es del tenor literal siguiente:

"Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil diecinueve.
Vistos el escrito de demanda y los anexos de Héctor Ireneo Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, José Antonio Casas del Real, Job Montoya Sxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocio López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos López quienes se ostentan como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual promueven acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la declaración de invalidez de lo siguiente:
(...) el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL GATORCE MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL EJERCICIO DE LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS.

El actor tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan¹, en consecuencia, se tienen por designados delegados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lo anterior, con fundamento en el artículo 11, párrafos primero y segundo², en relación con el 59³ de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305⁴ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 15 de la citada ley. Asimismo, conforme

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1 De conformidad con las constancias expedidas por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado de Baja California.

2 Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 11. El actor, el demandado y en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

3 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

4 Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

5 Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

al artículo 62, párrafos primero y segundo⁶, de la Ley reglamentaria, **se designa como representantes comunes a Marco Antonio Corona Bolaños y a Blanca Patricia Ríos López, quienes pueden actuar conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste.**

Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 25⁷ de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda de acción de inconstitucionalidad deberá desecharse si se encuentra un motivo **manifiesto e indudable** de improcedencia⁸, como en el presente caso, en el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII⁹, de la citada ley, toda vez que de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente asunto es **extemporáneo**, conforme a lo siguiente:

Del escrito inicial de demanda, se advierte que los promoventes impugnan el artículo octavo transitorio del Decreto 112, publicado el diecisiete de octubre de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual se determinó que en las elecciones de dos mil diecinueve, el período del ejercicio de la gubernatura del estado de Baja California sería de dos años.

Conforme a lo anterior, el **plazo legal de treinta días hábiles** a que se refiere el artículo 60¹⁰ de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcurrió de la siguiente forma:

OCTUBRE 2014						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
NOVIEMBRE 2014						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

Lo anterior, toda vez que el artículo octavo transitorio del Decreto 112, se publicó en el Periódico Oficial de Baja California, el diecisiete de octubre de dos mil

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que se interpongan en las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

⁶ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.

La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como representantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hará de oficio. Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

⁷ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.

⁸ Tesis P./J. 128/2001. Jurisprudencia. Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, página 803, número de registro 188,643. Cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA."

⁹ Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (...)

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y (...)

¹⁰ **Artículo 60.** El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

catorce¹¹, el plazo de treinta días naturales establecido en el artículo 60 de la Ley reglamentaria, **transcurrió del dieciocho de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil catorce**, por lo que si el escrito de cuenta se presentó el **siete de junio de dos mil diecinueve** en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta inconcuso que es **extemporánea** la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Alto Tribunal que los promoventes manifiestan que se encontraban en imposibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal, toda vez que conocieron los vicios del proceso legislativo del decreto impugnado hasta el día ocho de mayo de dos mil diecinueve, cuando obtuvieron las copias certificadas de las demandas de los juicios de amparo que promovieron tres Municipios de la entidad, al no haber sido legalmente notificados del proyecto de reformas a la Constitución de Baja California.

Sin embargo, la justificación de los promoventes para presentar fuera del plazo la acción de inconstitucionalidad de cuenta, carece de fundamentación alguna, puesto que la ley de la materia es clara al establecer que el plazo de treinta días naturales comenzará a correr a partir de la publicación de la norma impugnada en el medio oficial correspondiente, excluyendo cualquier otro supuesto para establecer el cómputo del plazo legal.

Sin embargo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias R./J. 66/2000 y P./J. 65/2000, emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal, con rubro y texto siguiente:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE LA MATERIA ELECTORAL, DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN O DE OTRAS SITUACIONES DIVERSAS. Del análisis de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal y en el diverso numeral 60 de su ley reglamentaria, en relación con el antepenúltimo párrafo del precepto constitucional citado, que establece que la única vía para impugnar de inconstitucionales las leyes electorales es la prevista en ese propio precepto, se advierte que el plazo de treinta días naturales que ahí se fija para ejercitar la acción, debe computarse a partir de la publicación de la norma general impugnada, en que admite la posibilidad de que en este tipo especial de procedimiento constitucional se pueda combatir la norma con motivo de su aplicación; por tanto, resulta irrelevante que un partido político haya obtenido su registro con posterioridad a la entrada en vigor de la norma impugnada, pues el citado artículo 60 de la ley reglamentaria expresamente establece que la demanda deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes al de la publicación de la disposición combatida, sin que instituya algún otro supuesto o plazo para tal efecto.¹² [Énfasis añadido].

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLICACIÓN EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES. La acción de inconstitucionalidad que se ejerce en aras del principio de supremacía constitucional, en virtud del cual toda norma debe ajustarse a los lineamientos establecidos en la Carta Magna, no es la vía procedente para impugnar actos concretos emitidos por autoridades electorales por violación a la Ley Fundamental. Ello es así porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, el citado medio de control constitucional únicamente procede en contra de normas generales, entre las que se encuentran las de carácter electoral, por lo que para combatir sus actos concretos de aplicación, las partes legitimadas deben utilizar los medios legales conducentes conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, de no hacerlo así, los referidos actos adquirirán definitividad. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad debe promoverse para impugnar normas de carácter general con motivo de su publicación, y no a causa

¹¹ La publicación del Decreto impugnado se corroboró en <https://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx>

¹² Tesis P./J. 66/2000, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, registro 191386, página 483.

de su aplicación.¹³ [Énfasis añadido].

Conforme a lo anterior, la fecha en que los diputados promoventes tuvieron conocimiento de los vicios de la norma impugnada o en que se suscitó el primer acto de aplicación de la misma, resulta irrelevante para computar el plazo en que puede interponerse una acción de inconstitucionalidad.

Por consiguiente, en la presente acción de inconstitucionalidad se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el diverso 60, ambos de la Ley reglamentaria de forma manifiesta e indudable. Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA

PRIMERO. Se desecha de plano la acción de inconstitucionalidad presentada por los diversos Diputados integrantes de la Legislatura del Estado de Baja California.

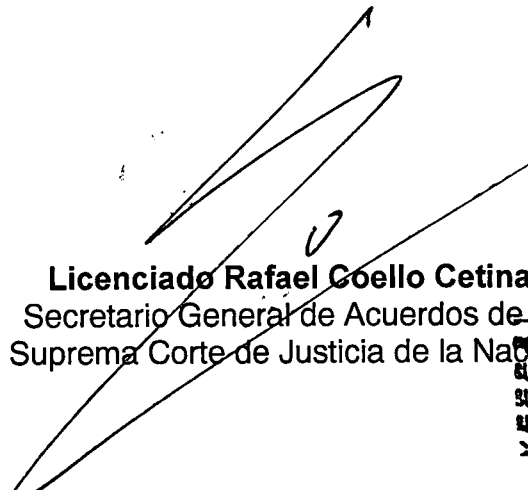
SEGUNDO. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese. Por lista y por oficio a los promoventes.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe." (Rúbricas).

Lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México, a uno de julio de dos mil diecinueve.


Licenciado Rafael Coello Cetina
Secretario General de Acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y DEL PODER JUDICIAL
SECCIÓN DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

ENC/EAM

¹³ Tesis P./J. 65/2000, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de dos mil, registro 191669, página 339.



CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Oficio 4922/2019

Acción de inconstitucionalidad 56/2019

Diversos Diputados integrantes de la
Legislatura del Estado de Baja California

Calle Atenor Sala, número 77, interior 4, Colonia
Atenor Sala, Alcaldía Benito Juárez, código
postal 03010, Ciudad de México

En la Ciudad de México, a las CATORCE horas con
VEINTE minutos, del TRES de

JULIO de dos mil diecinueve, el suscrito

Juan José Morgan Lizarraga, Actuario Judicial

adscrito a la Sección de Franque de Controversias Constitucionales y de Acciones de

Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, me constituí en el domicilio de la autoridad a rúbico citada y, una

vez cerciorado de coincidir nomenclatura de la calle, número y colonia, procedo a

notificar a la autoridad referida el oficio de que se trata.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECCIÓN DE FRANQUE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE

Anexo entregado: ninguno.

Persona que recibe, manifiesta llamarse: María Concepción Aviles Beltran

se identifica con QUE ATRIBUCIÓN DE 208084700

y refiere ser Empleada

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

3-Julio 2019. 2.20 pm.

El Actuario

01

1971 12 14

SIN TEXTO



GOBIERNO FEDERAL
SUPREMA GERENCIA
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE FISCALÍA
CONSTITUCIONAL
INFORME

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: 56/2019

MÁS DEL 33% DE LOS INTEGRANTES DE LA
DIPUTADOS DE LA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

VS

CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

NORMA IMPUGNADA: ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO
112, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE
EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL
EJERCICIO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE:

Los suscritos Diputados del Congreso del Estado de Baja California,
con la personalidad que tenemos debidamente acreditada y reconocida; ante
Ustedes con el debido respeto comparecemos para exponer:

Que por medio del presente escrito, sin revocar los anteriores
nombramientos, venimos a designar como nuevos autorizados para oír y recibir
notificaciones y con todas las facultades para representar a la parte actora, a los
licenciados en derecho JUAN GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, JOEL PACHECO
GONZÁLEZ, JAVIER AVILÉS BELTRÁN, EZEQUIEL POZOS ZAMORA, KARLA
ESPINOZA SALAZAR, MARGARITA GARCÍA MATA, RAÚL MAURICIO ATONDO
ZAVALA y EDGAR NOÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, respectivamente, con Cédulas
Profesionales Federales debidamente inscritas y registradas ante la Dirección
General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública; y autorizando en
términos simples para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las CC.
Carlos Alberto Cárdenas Serrano, Gabriela Valenzuela Sánchez y Paulina Lizbeth
Ruvalcaba Pérez.

Por lo antes expuesto:

A esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, atentamente solicitamos:

ÚNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

DIP. HÉCTOR IRENEO MARES COSSÍO (SUPLENTE)

DIP. MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS CACHO.

022998

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

2019 JUN 17 PM 1 28

OFICINA DE CERTIFICACION JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibida de enviada en 17 fecy con 4 copia del mismo

[Handwritten signature]



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE JURIS
CONSTITUCIONALES
INCOGNITO

SECCION DE JURIS
CONSTITUCIONALES
CORTE DE LA NACION
2019 JUN 17 PM 3 18
SECCION DE JURIS
CONSTITUCIONALES
CORTE DE LA NACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019
PROMOVENTE: DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek**, instructor en el presente asunto, con lo siguiente:

Constancias	Registro
Escrito de Marco Antonio Corona Bolaños Cache, Diputado del Congreso del Estado de Baja California.	22998

Documentales recibidas el diecisiete de junio del año en curso en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve.

Agréguese para que surta efectos legales, el escrito de Marco Antonio Corona Bolaños Cache representante de los diputados integrantes del Congreso del Estado de Baja California, a quien se tiene por presentado con la personalidad que tiene reconocida en autos, mediante el cual designa como delegados y autorizados a las personas que menciona.

Lo anterior, con fundamento en los artículos conforme al artículo 11, párrafos primero y segundo, de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Javier Laynez Potisek**, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la

Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EHC/EAM

1Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo, por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. (...).

EL 15 JUL 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE

PODER JUDICIAL
SUPLENTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
INCOSTE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

RECURRENTE: DIVERSOS DIPUTADOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA

MINISTRO PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCA
SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA
OMAR CRUZ CAMACHO
COLABORÓ: VÍCTOR ANTONIO SÁNCHEZ SEPULVEDA

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día cuatro de septiembre de dos mil diecinueve emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve el presente recurso de reclamación 128/2019-CA interpuesto por diversos diputados del Congreso del Estado de Baja California, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve por el que el Ministro instructor determinó desechar por extemporánea la acción de inconstitucionalidad 56/2019.¹

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
ANTECEDENTES

1. **Narrativa de los hechos que anteceden el caso.** Los hechos que constituyen los antecedentes de este recurso son los siguientes:

2. **Norma impugnada.** El diecisiete de octubre de dos mil catce publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el número 112, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos

¹ El Ministro Javier Laynez Potisek es el instructor en la acción de inconstitucionalidad 56/2019.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
REGIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIA
INSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

artículos de la Constitución local, específicamente, el Octavo Transitorio el cual establece que en las elecciones del dos mil diecinueve, el período de ejercicio del Gobernador del Estado de Baja California será de dos años.²

3. **Escrito de demanda.** Por escrito recibido en este Alto Tribunal el siete de junio de dos mil diecinueve, una minoría de once diputados del Congreso de Baja California promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez del artículo antes referido, sosteniendo que dicho precepto es inconstitucional al derivar de un procedimiento legislativo viciado, ya que no fueron legalmente notificados diversos municipios de la entidad del proyecto de reforma a la Constitución local.
4. **Radicación, turno y desechamiento.** El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad 56/2019 y turnarlo al Ministro instructor del procedimiento, mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve.
5. El Ministro instructor en auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve designó representante común de los promoventes; asimismo, desechó por notoriamente improcedente la acción de inconstitucionalidad, ya que consideró que su promoción se hizo de forma extemporánea.

² El artículo transitorio establece: "**OCTAVO.-** Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.

La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del Estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral de 2027. Por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2027, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027."



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

6. En contra de tal determinación, la parte promovente de la acción de inconstitucionalidad interpone el presente recurso de reclamación.

II. TRÁMITE DEL RECURSO

7. **Fecha de presentación del recurso.** El presente recurso de reclamación fue presentado el día de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

8. **Acuerdo de radicación, turno y admisión del recurso.** El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó admitir a trámite dicho recurso, al que le correspondió el número 128/2019-CA, correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera y turnar el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Garranca una vez concluido el trámite del recurso.³

LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

9. Radicado el expediente en la Primera Sala se turnó al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

10. **Auto impugnado.**⁴ El auto recurrido en el que se admitió la demanda de controversia constitucional es del tenor siguiente:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

[...] Vistos el escrito de demanda y los anexos de Héctor Ireneo Mares Cossío, Victoria Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, José Antonio Gasas del Real, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Rocío López Gorosave, Claudia Josefina Agatón Muñoz, Alejandro Arreguín Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho y Blanca Patricia Ríos López quienes se ostentan como Diputados del Congreso del Estado de Baja California, mediante el cual promueven acción de inconstitucionalidad en la que solicitan la declaración de invalidez de lo siguiente:

³ Visible en las páginas 20 a 21 del expediente en que se actúa.
⁴ Ibid. págs. 63-64.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

"(...) el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 112, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ QUE EN LAS ELECCIONES DE 2019, EL PERÍODO DEL EJERCICIO DE LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SERÍA DE DOS AÑOS."

Se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan , en consecuencia, se tienen por designados delegados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lo anterior, con fundamento en el artículo 11, párrafos primero y segundo , en relación con el 59 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1 de la citada ley. Asimismo, conforme al artículo 62, párrafos primero y segundo, de la Ley reglamentaria, se designa como representantes comunes a Marco Antonio Corona Bolaños y a Blanca Patricia Ríos López, quienes pueden actuar conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste.

Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 25 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda de acción de inconstitucionalidad deberá desecharse si se encuentra un motivo manifiesto e indudable de improcedencia , como en el presente caso, en el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII , de la citada ley, toda vez que de la revisión integral de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente asunto es extemporáneo, conforme a lo siguiente:

Del escrito inicial de demanda, se advierte que los promoventes impugnan el artículo octavo transitorio del Decreto 112, publicado el diecisiete de octubre de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, mediante el cual se determinó que en las elecciones de dos mil diecinueve, el período del ejercicio de la gubernatura del estado de Baja California sería de dos años.

Conforme a lo anterior, el plazo legal de treinta días hábiles a que se refiere el artículo 60 de la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcurrió de la siguiente forma:

OCTUBRE 2014						
Dom ingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viern es	Sábado
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
NOVIEMBRE 2014						
Dom ingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viern es	Sáb ado
						1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE TRÁMITE Y EJECUCIÓN DE ACUERDOS
INCONSTITUCIONAL



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

16	17	18	19	20	21	22
----	----	----	----	----	----	----

Lo anterior, toda vez que el artículo octavo transitorio del Decreto 112, se publicó en el Periódico Oficial de Baja California, el diecisiete de octubre de dos mil catorce, el plazo de treinta días naturales establecido en el artículo 60 de la Ley reglamentaria, transcurrió del dieciocho de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil catorce, por lo que si el escrito de cuenta se presentó el siete de junio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta inconcuso que es extemporánea la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Alto Tribunal que los promoventes manifiestan que se encontraban en imposibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo legal, toda vez que conocieron los vicios del proceso legislativo del decreto impugnado hasta el día ocho de mayo de dos mil diecinueve, cuando obtuvieron las copias certificadas de las demandas de los juicios de amparo que promovieron tres Municipios de la entidad, al no haber sido legalmente notificados del proyecto de reformas a la Constitución de Baja California.

Sin embargo, la justificación de los promoventes para presentar fuera del plazo la acción de inconstitucionalidad de cuenta, carece de fundamentación alguna, puesto que la ley de la materia es clara al establecer que el plazo de treinta días naturales comenzará a correr a partir de la publicación de la norma impugnada en el medio oficial correspondiente, excluyendo cualquier otro supuesto para establecer el cómputo del plazo legal.

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 66/2000 y P./J. 65/2000, emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal, con rubro y texto siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE LA MATERIA ELECTORAL DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN O DE OTRAS SITUACIONES DIVERSAS [...]

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLICACIÓN EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES. [...]

Conforme a lo anterior, la fecha en que los diputados promoventes tuvieron conocimiento de los vicios de la norma impugnada o en que se suscitó el primer acto de aplicación de la misma, resulta irrelevante para computar el plazo en que puede interponerse una acción de inconstitucionalidad.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

Por consiguiente, en la presente acción de inconstitucionalidad se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el diverso 60, ambos de la Ley reglamentaria de forma manifiesta e indudable.

Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA

PRIMERO. Se desecha de plano la acción de inconstitucionalidad presentada por los diversos Diputados integrantes de la Legislatura del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido. [...].

11. **Agravios.** La parte recurrente en sus agravios señala, en síntesis, lo siguiente.

- **Primero.** Sostiene que las consideraciones expuestas en el auto recurrido violan los derechos humanos tutelados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1º constitucional vigente. Aduce que la tutela jurisdiccional exige al juzgador flexibilidad en la etapa previa del juicio a fin de remover cualquier traba formal que no esté justificada e impida que las partes encuentren solución a sus problemas.⁵

- En este caso se requiere que la Suprema Corte obre con flexibilidad y sensibilidad al interpretar el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto establece que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir de que la ley impugnada sea publicada en el correspondiente medio oficial. Sin embargo no prohíbe

⁵ Se invoca la tesis de III.2o.C.33 K (10a.), de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. EXIGE TRES CUALIDADES ESPECÍFICAS DEL JUZGADOR EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN (FLEXIBILIDAD, SENSIBILIDAD Y SEVERIDAD)".

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

expresamente hacer el cómputo a partir de que quien ejerza dicha acción tenga conocimiento de los vicios que originaron la ley que se combate.

• Atendiendo al principio de flexibilidad, el artículo 60 citado debe interpretarse en un sentido amplio y no restrictivo, es decir, entendiendo que ese precepto en forma ejemplificativa citó uno de los supuestos para iniciar el cómputo de los treinta días, ya que contrario a lo considerado en el auto recurrido, no se emplea la frase "excluyendo cualquier otro supuesto para establecer el cómputo del plazo legal". El artículo 60 en mención tampoco dice que la "única" forma de computar el plazo sea a partir de la publicación de la ley impugnada en el medio oficial; tampoco dice que se excluya cualquier otro supuesto para hacer el cómputo. De ahí que el Ministro instructor se equivoque al haber afirmado algo que no se contiene en el precepto legal.

• El Pleno de la Suprema Corte también deberá aplicar la cualidad de sensibilidad consistente en comprender que es lo que quiere la parte promovente y cual será la mejor solución para resolver la conflictiva social.

• Las jurisprudencias P./J. 66/2000 y P./J. 65/2000, citadas en el auto recurrido, no son aplicables ya que han sido superadas por ser anteriores a la reforma al artículo 1° constitucional, lo cual significa que en ellas no se aplicaron los principios establecidos en dicho artículo. La interpretación que en esas jurisprudencias se hizo del artículo 60 contraviene derechos humanos y perjudica a los gobernados, pues no se estableció que el cómputo para promover acción de inconstitucionalidad pueda hacerse a partir de que se tenga conocimiento de los vicios que originaron la norma impugnada.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

- En ejercicio del control de convencionalidad, el Pleno de la Suprema Corte debe analizar que el derecho de tutela jurisdiccional, previsto en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no quede supeditado a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad. Entonces, debe considerarse oportuna la promoción de la acción de inconstitucionalidad ya que los promoventes tuvieron conocimiento de los vicios de la norma impugnada antes de vencerse el plazo de treinta días naturales a la fecha de su presentación. Esto último ocurrió el ocho de mayo de dos mil diecinueve, al obtener copia certificada de las demandas de amparo promovidas por tres municipios del Estado de Baja California, en las cuales reclamaron no haber sido notificados del proyecto de reformas de las que derivó el artículo transitorio impugnado en la acción de inconstitucionalidad.
- Partiendo del supuesto lógico jurídico de que "nadie está obligado a lo imposible", la interpretación restrictiva del artículo 60 que hizo el Instructor es violatorio de derechos humanos. Se insiste que las tesis invocadas en el auto recurrido contrarían las garantías del artículo 1º constitucional, a las que se integraron los derechos humanos de adecuada defensa y recurso efectivo, al limitar el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad únicamente al supuesto previsto en la norma.
- **Segundo.** El Decreto 112 del Congreso del Estado de Baja California es una ley general y abstracta de carácter heteroaplicativa, lo cual significa que tiene diversos momentos para poder ser impugnada, entre ellos el momento en que los accionantes tuvieron conocimiento de las irregularidades de la norma combatida. De acuerdo con el bloque de constitucionalidad y los principios pro persona y progresividad, los tribunales deben evidenciar el mejor de los casos para poder acceder a



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la tutela judicial efectiva, lo que implica analizar el caso concreto y las circunstancias particulares que se plantean.

- Después de hacer una explicación sobre tutela judicial efectiva, la parte recurrente aduce que el Ministro Instructor interpreta el artículo 60 de manera inflexible y rigorista al introducir cuestiones que dicho precepto no prevé y excluir cualquier otra forma de computar el plazo a la forma ahí establecida.

- **Tercero.** Existe falta de fundamentación y motivación, ya que la causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el artículo 19, fracción VII de la Ley Reglamentaria, misma que no es aplicable ya que no fue una controversia constitucional lo que se promovió, sino una acción de inconstitucional, la cual tiene sus propios rasgos distintivos en la Ley.

- Aun considerando que ese artículo fuera aplicable, el mismo frente al 21 de la Ley Reglamentaria, el cual establece dos supuestos de improcedencia y para ambos casos se establece un término común de treinta días, pero difieren en cuanto al momento a partir de cuándo se computa, esto es, se establece que es a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al que el actor se ostente sabedor de los mismos.

- No existe justificación jurídica que demuestre cuales fueron los motivos, razones particulares o circunstancias especiales por las cuales no se prevé la posibilidad de reclamar una norma general dentro del plazo de treinta días contados a partir de que el actor se ostente sabedor

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

de los vicios del proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada.

- Resulta procedente aplicar por analogía el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria en el cual se prevé el anterior supuesto, lo cual es acorde con los derechos humanos de defensa adecuada y de un recurso efectivo a que se refieren los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- **Cuarto.** No se puede considerar que exista de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se invoca en el auto recurrido, por el hecho de que exista jurisprudencia que en la actualidad resulta obsoleta al haber sido superada por la reforma al artículo 1º Constitucional, realizada en el año dos mil once. Máxime que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia no establece que no se admita una forma distinta de computar el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad, ni tampoco que deberá considerarse extemporánea la demanda que se presenta fuera de ese plazo, aduciendo que apenas se tuvo conocimiento de los vicios del proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA GE
SECCIÓN DE TRÁMIT
INSTITUCION
INCOST

12. **Opinión de la Fiscalía General de la República.** La Fiscalía General de la República no formuló opinión en este recurso de reclamación.

III. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 128/2019-CA derivado de la acción de inconstitucionalidad 56/2019, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10,
fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación en relación con los
Puntos Segundo, fracción I, *a contrario sensu*, y Tercero del Acuerdo
5/2013, por tratarse de un recurso de reclamación en el que resulta
innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PROCEDENCIA

14. El recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en los
artículos 51 fracción I y 70, de la Ley Reglamentaria aludida⁶, ya que se
interpuso en contra del auto del Ministro instructor de diecisiete de junio
de dos mil diecinueve por el que desechó por improcedente la acción
de inconstitucionalidad 56/2019.

V. OPORTUNIDAD

El recurso de reclamación se interpuso dentro del plazo de cinco días
para tal efecto prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional,⁷ toda vez que el acuerdo
recurrido se notificó a la parte recurrente el tres de julio de dos mil
diecinueve,⁸ por lo que el plazo aludido transcurrió del cinco al once del
mismo mes y año.⁹

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

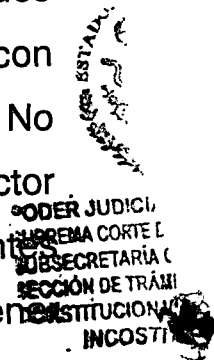
⁶ "Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus
respectivas ampliaciones; (...).
"Artículo 70.- El recurso de reclamación previsto en el artículo 51 únicamente procederá en contra
de los autos del ministro instructor que decreten la improcedencia o el sobreseimiento de la acción".
⁷ "Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en él
deberán expresarse agravios y acompañarse pruebas".
⁸ Mediante oficio 4922/2019, visible en la página 65 del cuaderno en que se actúa.
⁹ Al efecto debe tenerse en cuenta que la notificación surtió efectos el jueves cuatro de julio de dos
mil diecinueve y fueron inhábiles los días seis y siete del mismo mes y año por haber sido sábado y
domingo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019**

16. Luego, si el presente recurso de reclamación se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de julio de dos mil diecinueve, es claro que su interposición fue oportuna.¹⁰ Resulta aplicable, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro: "RECLAMACIÓN. ES OPORTUNA SU INTERPOSICIÓN AUN ANTES DE QUE COMIENZE A CORRER EL PLAZO PARA ELLO".¹¹

VI. LEGITIMACIÓN

17. El recurso de reclamación lo presentó Marco Antonio Corona Bolaños, a quien el Ministro instructor designó como representante común de los promoventes para actuar durante todo el procedimiento y aun después de concluido éste, por lo que el mencionado diputado local cuenta con la legitimación para interponer el presente recurso de reclamación. No pasa desapercibido que el recurso también fue signado por Héctor Ireneo Mares Cossío ostentándose como suplente del diputado antes precisado, sin embargo no se le reconoce legitimación por no tener ninguna personalidad reconocida en el procedimiento.



VII. ESTUDIO DE FONDO

18. Previo a estudiar el auto recurrido es necesario precisar que la materia de este recurso consiste en analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo recurrido para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad, el procedimiento se corrija. Por ello, los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia

¹⁰ Según se desprende del sobre de envío que obra a foja 22.

¹¹ Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII. Julio de 2005. Pág. 264. 1a./J. 79/2005.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

número P./J. 10/2007¹² sustentada por el Pleno de
este Alto Tribunal, de rubro: "RECLAMACIÓN EN
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE
EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO".

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

19. También es pertinente tener presente la facultad que tiene el Ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de controversia constitucional. Así, cuando a su juicio se actualice un motivo **manifiesto e indudable** de improcedencia, el Ministro instructor puede desechar la demanda, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.¹³

20. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por **manifiesto** debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, los escritos aclaratorios o de ampliación y en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones. Por su parte, lo **indudable** se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la substanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.¹⁴

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

¹² Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Página 1524, de texto: "El referido recurso constituye un medio de defensa que la ley otorga a las partes en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, para impugnar los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Ministros instructores. En este sentido, la materia de dicho medio de impugnación consiste únicamente en analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido para que se corrija el procedimiento en caso de que haya existido alguna irregularidad, por lo que los agravios ajenos a dicho acuerdo deben desestimarse".

¹³ "Artículo 25. El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano".

¹⁴ Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Novena

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

21. Además, es importante señalar que las causas de improcedencia son de orden público y deben analizarse de oficio. Por ello, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no deben inferirse con base en presunciones, ya que para efectos del desechamiento de una demanda, debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.
22. Ello, en atención a que el auto inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de mero trámite, en el que no pueden realizarse estudios exhaustivos que no son propios de este tipo de acuerdos, pues en este estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten. Por el contrario, emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de la materia.¹⁵
23. Una vez precisada la facultad del Ministro instructor para acordar lo relativo a la admisión o, en su caso, desechamiento de la demanda de acción de inconstitucionalidad, cuando a su juicio, se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo procedente ahora

Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV. Octubre de 2001. Página 803.

¹⁵ Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis de Jurisprudencia P./J. 42/2003. Tomo XVIII. Agosto de 2003. Página 1372, de rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL ACUERDO QUE ADMITE O DESECHA LA DEMANDA, POR SER DE MERO TRÁMITE, NO ES POSIBLE DETERMINAR CUESTIONES RELATIVAS AL FONDO DEL ASUNTO." Los artículos 22, 25, 26 y 28 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los requisitos que debe contener la demanda, así como la obligación del Ministro instructor de examinarla, debiendo desecharla si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y si no lo encontrare, admitirla y ordenar emplazar a la demandada para que dentro del plazo legal produzca su contestación; asimismo, en caso de que el escrito fuere irregular u oscuro, establecen que el instructor debe prevenir a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días subsanen las irregularidades o lo aclaren. Lo anterior pone de manifiesto que el acuerdo inicial que admite o desecha la demanda de controversia constitucional es de mero trámite, es decir, en él únicamente deben dictarse las medidas necesarias para la debida integración del expediente, por lo que no existe la posibilidad de que se determine alguna otra cuestión que implique el estudio de fondo del asunto".



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

es analizar los agravios de la parte recurrente, lo cual se hará en un orden distinto al seguido en el escrito respectivo.

24. Conviene recordar que en el auto recurrido el Ministro instructor consideró extemporánea la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados del Congreso local, por estimar que si la norma impugnada fue publicada desde el diecisiete de octubre de dos mil catorce y fue hasta el siete de junio de dos mil diecinueve cuando se presentó la acción, resulta evidente que se hizo después de los treinta días naturales que establece la ley para dicho efecto. Por su parte, el recurrente sostiene, en esencia, que apenas el ocho de mayo de dos mil diecinueve los promoventes de la acción conocieron los vicios al proceso legislativo de los que adolece la norma, y que por ello, a partir de esa fecha es cuando se debe hacer el cómputo de los treinta días, por las razones que expresa en sus agravios.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
GENERAL DE ACCIONES DE
CONTROVERSIA
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

25. Ahora bien, como se advierte de la síntesis de los agravios, en el tercero de ellos se señala una presunta falta de fundamentación y motivación del auto recurrido, por dos razones. En primer lugar, considera que la causa de improcedencia que se estimó actualizada es aplicable a la controversia constitucional y no a la acción de inconstitucionalidad, que fue lo que los accionantes ejercieron; en segundo, a su juicio debió aplicarse por analogía el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de la materia, a fin de considerar que el artículo 60 de esa legislación permite computar el plazo para promover acción de inconstitucionalidad a partir de que la parte promotora conozca los vicios del proceso legislativo de la norma que se impugne.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

26. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son **infundados** los argumentos del recurrente, por las siguientes consideraciones.
27. El artículo 59¹⁶ de la Ley Reglamentaria de la materia prevé que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en todo aquello que no se encuentre previsto en el Título III relativo a ese medio de control de constitucionalidad, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II, que regula el trámite y resolución de la controversia constitucional. Es decir, para poder aplicar en acción de inconstitucionalidad alguna de las reglas que rigen a las controversias constitucionales, se requiere que en el Título que rige a la primera no se disponga una regla aplicable al supuesto de que se trate.
28. Esa condición de aplicabilidad normativa se satisface en el caso en estudio, toda vez que el Título III de la Ley Reglamentaria de la materia no establece las causas de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad; en cambio el Título II sí establece las de la controversia constitucional. De ahí que atendiendo al artículo 57 de la legislación en mención, las causales de improcedencia de la controversia, también son aplicables a la acción de inconstitucionalidad.
29. De manera inversa, y a diferencia de lo sostenido por el recurrente, el precepto legal que establece el plazo para promover controversia constitucional no resulta aplicable por analogía a la acción de inconstitucionalidad, toda vez que el Título III de manera expresa

¹⁶ Título III

De las Acciones de inconstitucionalidad

Capítulo I

Disposiciones generales

ARTÍCULO 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

establece un plazo para su promoción y, en consecuencia, no se surte la condición de aplicabilidad referida con antelación. De ahí lo infundado del agravio identificado como "tercero" en el recurso de reclamación, en virtud de que el auto recurrido no está indebidamente fundado y motivado.

30. Resulta aplicable a lo anterior el criterio del Tribunal Pleno establecido en la tesis de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ÚNICAMENTE SON APLICABLES LAS NORMAS PREVISTAS EN EL TÍTULO II DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACSIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL EN AQUELLO QUE NO ESTÉ PREVISTO EN EL TÍTULO III DE DICHO ORDENAMIENTO".¹⁷

Por otro lado, en los agravios denominados **primero y cuarto**, el recurrente formula agravios vinculados que giran sobre las siguientes líneas argumentativas:

Que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia, bajo los principios de flexibilidad y sensibilidad, debe interpretarse en el sentido de que el artículo 60 de la esta Ley admite la posibilidad de que el cómputo del plazo para la promoción se haga a partir de que se tenga conocimiento de los vicios de los que adolece la norma cuya invalidez se solicite, ya que no se establece expresamente que ello esté prohibido.

- Las jurisprudencias invocadas en el auto recurrido no son aplicables, ya que se emitieron antes de la reforma al artículo 1° constitucional.

¹⁷ Novena Época. Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX. Febrero de 1999. Tesis: P./J. 3/99. Página: 289.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-GA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

- El derecho de tutela jurisdiccional efectivo, de fuente convencional, no debe quedar supeditado a requisitos excesivos, irrazonables o desproporcionados.

32. De entrada, cabe precisar que el plazo y el momento a partir del que inicia el cómputo para promover la acción de inconstitucionalidad, previstos en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia, es una reiteración de lo establecido en el artículo 105, fracción II, segundo párrafo¹⁸ de la Constitución Federal.
33. Ahora bien, a juicio de esta Primera Sala los agravios antes referidos son **infundados**. En principio, porque el hecho de que el texto del artículo 60 no establezca de manera literal que el inicio del cómputo para promover acción de inconstitucionalidad sea única y exclusivamente de la manera ahí prevista, no implica que se admitan más supuestos para hacer dicho cómputo, ya que al establecerse una forma específica para computar el plazo de mérito conlleva necesariamente una exclusión de otras posibilidades. Incluso, admitir otros supuestos distintos a que el cómputo se haga a partir de que la norma se publique en el medio oficial correspondiente, lejos de interpretar lo ya establecido en el artículo 60, implicaría agregar supuestos no previstos por el poder constituyente.
34. Lo anterior, de acuerdo con el criterio de este Alto Tribunal conforme al cual no existen excepciones respecto del momento en que nace la oportunidad para impugnar leyes por esta vía,¹⁹ y lo resuelto en la acción

¹⁸ [...]

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes de la publicación de la norma, por: [...]

¹⁹ Orienta lo anterior la tesis de la Segunda Sala, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL COMBATIDA". Época: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019****PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

de inconstitucionalidad 5/2000 en la que se sostuvo que para ejercer la acción de inconstitucionalidad únicamente debe atenderse a

la publicación de la norma impugnada y no a situaciones diversas, como por ejemplo los actos de aplicación de la norma o, como en este caso, al conocimiento por parte de los entes legitimados de las presuntas violaciones que hagan valer.

35. Además, entender el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia en los términos en que pretende el recurrente, es decir, en el sentido de que el plazo para la presentación de una acción de inconstitucionalidad debe computarse a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de los vicios que pudieran contener las disposiciones impugnadas, no es un requisito excesivo, irrazonable o desproporcionado que viole el derecho de tutela judicial efectiva.

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDO GENERAL DE ACUERDOS
DE LA CORTE SUPLENTE
DE CONTROVERSIAS
Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

36. Lo anterior, pues además de que dicha interpretación es contraria a lo establecido expresamente en ese artículo, llevaría en algunos casos a postergar en demasía la presentación de ese medio de control constitucional, pues asumir una postura como la que pretende el recurrente implicaría otorgar la posibilidad a todos los entes legitimados de promover la acción hasta que conozcan los vicios que, a su juicio, contiene la norma; todo ello sería incompatible con los principios de seguridad y certeza jurídica previstos en la Constitución Federal.

37. En cuanto a que las jurisprudencias que citan en el auto recurrido son inaplicables, cabe precisar que el solo hecho de que el artículo 1º constitucional haya sido reformado en dos mil once, no implica que esa sola circunstancia deje sin efectos toda la jurisprudencia emitida con anterioridad, máxime que fueron invocadas en el acuerdo impugnado

RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

como apoyo a la determinación tomada, de modo que, suponiendo sin conceder, fueran inaplicables dichos criterios, la decisión seguiría subsistiendo de conformidad con el artículo 105, fracción II de la Constitución Federal en relación con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la Materia.

38. En otro aspecto, también es **infundado** el **segundo** de los agravios mediante el cual se señala que el Decreto de reformas del que derivó el artículo transitorio es una norma de carácter heteroaplicativa, por lo cual tiene distintos momentos para poderse impugnar, entre los que se encuentra cuando los accionantes tengan conocimiento de las irregularidades que se combatan. Ello porque la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de regularidad constitucional cuya procedencia se encuentra acotada únicamente a impugnar normas generales con motivo de su publicación y no de su aplicación, pues como ya se señaló el párrafo segundo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal y el artículo 60 de su Ley Reglamentaria de la materia, son enfáticos en señalar que la acción de inconstitucionalidad debe promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, tiene su razón de ser en que la acción procede únicamente en contra de normas generales²⁰.

39. En ese sentido, el plazo debe computarse solo a partir de la publicación de la norma, ya que a diferencia de las controversias constitucionales a través de la acción de inconstitucionalidad no pueden impugnarse actos

²⁰ Sirve de apoyo la tesis P./J. 65/2000 y P./J. 22/1999 de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES Y NO CONTRA SUS ACTOS DE APLICACIÓN EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES ELECTORALES" y ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE LEYES O DE TRATADOS INTERNACIONALES", respectivamente.



RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

concretos en lo individual ni se prevé tampoco la impugnación de normas con motivo de su aplicación.

40. Por ello, contrario a lo afirmado por el recurrente, la impugnación de una norma vía acción de inconstitucionalidad no tiene distintos momentos a partir de los cuales corra el plazo para impugnarse, ya que al no requerir como presupuesto de procedibilidad el agravio directo de los legitimados para ejercerla, con la sola publicación de la norma en el medio oficial dichos sujetos están en posibilidad de impugnarla por su contenido material, o bien, como sucede en este caso, porque su aprobación no haya cumplido con los requisitos formales establecidos para su expedición.

En consecuencia, al resultar infundados los agravios hechos valer, lo procedente es confirmar el auto recurrido, por ello esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE

PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en la acción de inconstitucionalidad 56/2019.

Notifíquese, a los recurrentes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

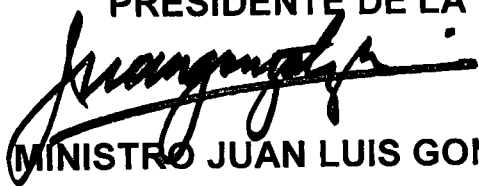
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por **unanimidad de cuatro votos** de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez

**RECURSO DE RECLAMACIÓN 128/2019-CA,
DERIVADO DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019**

Ortiz Mena y Presidente y Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ausente el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE



MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA

15 OCT 2019

**Por lista de la misma fecha, se
notificó la resolución anterior a los interesados. Conste!**

**PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL
INCA**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En la Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.-
Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA

Que la anterior es copia fiel y exacta de la sentencia de cuatro de
septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación
128/2019-GA, derivado de la acción de inconstitucionalidad 56/2019,
promovido por los Diversos Diputados del Congreso del Estado de Baja
California, y se expide en doce (12) fojas útiles, debidamente selladas,
cotejadas y rubricadas, para integrarse a la citada acción de
inconstitucionalidad.

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído quince de
octubre del año en curso, dictado por el Ministro Arturo Zaldívar, Lelo
de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSTE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIA
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIA
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2019
PROMOVENTE: DIVERSOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Javier Laynez Potisek**, instructor en el presente asunto con lo siguiente:

Constancia	Registro
Copia certificada de la resolución de cuatro de septiembre del año en curso, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 128/2019-CA.	Sin registro

Documental recibida en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de este Alto Tribunal, Goite.

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

Agréguese al expediente, para que surta efectos legales, la copia certificada de la resolución de cuenta dictada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en el recurso de reclamación 128/2019-CA en el que se confirmó el auto recurrido de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido en el presente asunto, por tanto, **se ordena archivar este expediente como asunto concluido.**

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro Javier Laynez Potisek**, instructor en el presente asunto, quien actúa con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal; que da fe.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EL 05 NOV 2019 ; SE NOTIFICÓ POR LISTA A LOS
INTERESADOS LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE. CONSTE

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA Y EN
VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS, SE TIENE
POR HECHA LA NOTIFICACIÓN, POR MEDIO DE LISTA. DOY FE.

